



**INFORME DE LA COMISION**  
**SOBRE LA**  
**UTILIZACION CON FINES PACIFICOS DE LOS**  
**FONDOS MARINOS Y OCEANICOS FUERA**  
**DE LOS LIMITES DE LA JURISDICCION NACIONAL**

**ASAMBLEA GENERAL**

**DOCUMENTOS OFICIALES: VIGESIMO SEPTIMO PERIODO DE SESIONES**

**SUPLEMENTO No. 21 (A/8721)**

**NACIONES UNIDAS**

**INFORME DE LA COMISION**  
**SOBRE LA**  
**UTILIZACION CON FINES PACIFICOS DE LOS**  
**FONDOS MARINOS Y OCEANICOS FUERA**  
**DE LOS LIMITES DE LA JURISDICCION NACIONAL**

**ASAMBLEA GENERAL**

**DOCUMENTOS OFICIALES: VIGESIMO SEPTIMO PERIODO DE SESIONES**

**SUPLEMENTO No. 21 (A/8721)**



**NACIONES UNIDAS**

**Nueva York, 1972**

#### NOTA

Las firmas de los documentos de las Naciones Unidas se componen de letras mayúsculas y cifras. La mención de una de tales firmas indica que se hace referencia a un documento de las Naciones Unidas.

## INDICE

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
INTRODUCCION . . . . .	1 - 18	1
I. LABOR DE LA COMISION EN 1972 . . . . .	19 - 46	4
II. CUESTIONES Y FUNCIONES ASIGNADAS A LA SUBCOMISION I . .	47 - 145	19
A. Introducción . . . . .	47 - 53	19
B. Tema 1 del programa de trabajo . . . . .	54 - 72	20
C. Grupo de Trabajo encargado de estudiar el régimen internacional . . . . .	73 - 77	24
D. Tema 2 del programa de trabajo . . . . .	78 - 129	26
a) Organos del mecanismo internacional, incluida la composición, los procedimientos y el arreglo de controversias . . . . .	82 - 97	26
b) Reglas y prácticas relativas a las actividades de exploración, explotación y ordenación de los recursos de la zona, así como a la preservación del medio marino y la investigación científica, incluida la asistencia técnica a los países en desarrollo. .	98 - 103	29
c) Participación equitativa en los beneficios que puedan derivarse de la zona teniendo presentes los intereses y las necesidades especiales de los países en desarrollo, tanto ribereños como sin litoral . . . . .	104 - 111	30
d) Consideraciones económicas relativas a la explotación de los recursos de la zona, incluida su elaboración y comercialización y repercusiones de la misma . . . . .	112 - 119	31
e) Necesidades y problemas particulares en los países sin litoral . . . . .	120 - 126	33
f) Relaciones entre el mecanismo internacional y el sistema de las Naciones Unidas . . . . .	127 - 129	34
E. Extracción de minerales en la zona de los fondos marinos . . . . .	130 - 141	35
F. Nuevo examen del tema 2 . . . . .	142 - 145	37
III. CUESTIONES Y FUNCIONES ASIGNADAS A LA SUBCOMISION II	146 - 198	38
A. Introducción . . . . .	146 - 157	38



# Indice (continuación)

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
B. Examen de las cuestiones remitidas a la Subcomisión en virtud del acuerdo sobre organización de los trabajos leído por el Presidente de la Comisión, en la 45a. sesión, celebrada el 12 de marzo de 1971	158 - 192	42
C. Aprobación de la lista de temas y cuestiones relacionadas con el derecho del mar . . . . .	193 - 196	51
D. Labor futura de la Subcomisión II . . . . .	197	52
E. Aprobación del informe de la Subcomisión . . . . .	198	52
IV. CUESTIONES Y FUNCIONES ASIGNADAS A LA SUBCOMISION III	199 - 276	53
A. Introducción . . . . .	199 - 207	53
B. Preservación del medio marino, incluida la prevención de la contaminación de los mares . . .	208 - 238	57
C. Investigación científica . . . . .	239 - 264	64
D. Proyecto de resolución relativo a los ensayos de armas nucleares en el Pacífico . . . . .	265 - 274	71
E. Proyecto de resolución sobre medidas preliminares para impedir y combatir la contaminación del medio marino . . . . .	275	72

## ANEXOS

I. DOCUMENTOS ANEXOS A LA PARTE I . . . . .	75
1. Proyecto de decisión presentado por Argelia, Brasil, Chile, China, Irak, Kenia, Kuwait, México, Perú, República Arabe Libia, Venezuela, Yemen y Yugoslavia (A/AC.138/L.11/Rev.1). . . . .	75
2. Texto de la Declaración de Santo Domingo aprobada por la Reunión de Ministros de la Conferencia Especializada de los Países del Caribe sobre los Problemas del Mar, celebrada el 7 de junio de 1972 (A/AC.138/80) . . . . .	76
3. Conclusiones formuladas en el informe general del Seminario regional de los Estados africanos sobre el derecho del mar, celebrado en Yaundé del 20 al 30 de junio de 1972 (A/AC.138/79) . . . . .	80
4. Petición para que se prepare un estudio sobre las distintas consecuencias económicas de las diversas propuestas relativas a los límites de la zona internacional de los fondos marinos (A/AC.138/81)	83
5. Declaración referente a los principios de una explotación racional de los recursos vivos de los mares y océanos del mundo en interés común de todos los pueblos, aprobada en la reunión de ministros celebrada en Moscú los días 6 y 7 de julio de 1972 (A/AC.138/85) . . . . .	84

	<u>Página</u>
II. DOCUMENTOS ANEXOS A LA PARTE II . . . . .	87
1. Grupo de Trabajo I - Textos que ilustran los puntos de acuerdo y de desacuerdo sobre el programa de trabajo, tema 1, "Estatuto jurídico, alcance y disposiciones básicas del régimen, sobre la base de la Declaración de principios" (A/AC.138/L.18/Add.3) . . . . .	87
2. Notas adicionales sobre las posibles consecuencias económicas de la extracción de minerales de la zona internacional de los fondos marinos: informe del Secretario General (A/AC.138/73) . . . . .	115
III. DOCUMENTOS ANEXOS A LA PARTE III . . . . .	154
1. Lista de temas y cuestiones relacionadas con el derecho del mar que se presentarán a la Conferencia sobre el derecho del mar patrocinada por Argelia, Argentina, Brasil, Camerún, Colombia, Congo, Costa de Marfil, Chile, China, Chipre, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, Etiopía, Fiji, Filipinas, Gabón, Ghana, Guatemala, Guyana, India, Indonesia, Irak, Irán, Islandia, Jamaica, Kenia, Kuwait, Liberia, Madagascar, Malasia, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Panamá, Perú, República Árabe Libia, República Unida de Tanzania, Rumania, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Trinidad y Tabago, Túnez, Uruguay, Venezuela, Yemen, Yugoslavia y Zaire (A/AC.138/66 y Corr.2) . . . . .	154
2. Enmiendas al documento A/AC.138/66 y Corr.2 presentadas por:	
1) Malta (A/AC.138/67) . . . . .	158
2) Estados Unidos de América (A/AC.138/68) . . . . .	160
3) Grecia e Italia (A/AC.138/69) . . . . .	161
4) Japón (A/AC.138/70) . . . . .	161
5) Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (A/AC.138/71) . . . . .	161
6) Afghanistan, Austria, Bélgica, Bolivia, Checoslovaquia, Hungría, Malí, Nepal y Zambia (A/AC.138/72 y Corr.1) . . . . .	162
7) Turquía (A/AC.138/74 y Corr.1) . . . . .	164
8) Francia, Países Bajos y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (A/AC.138/76) . . . . .	165
9) Polonia (A/AC.138/77) . . . . .	165
10) Japón (A/AC.138/78) . . . . .	166
3. Lista de temas y cuestiones relacionados con el derecho del mar que se ha de presentar a la Conferencia sobre el derecho del mar presentada por Malta (A/AC.138/75 y Corr.1) . . . . .	167

# Indice (continuación)

## Página

4.	Proyecto de artículo sobre pesca (disposiciones fundamentales y nota explicativa) presentado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (A/AC.138/SC.II/L.6) . . . . .	169
5.	Proyecto de artículos sobre los estrechos utilizados para la navegación internacional, presentado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (A/AC.138/SC.II/L.7). . . . .	173
6.	Documento de trabajo sobre la ordenación de los recursos vivos del mar presentado por el Canadá (A/AC.138/SC.II/L.8) . . . . .	175
7.	Estados Unidos de América: proyecto revisado de artículo sobre las pesquerías (A/AC.138/SC.II/L.9). . . . .	187
8.	Proyecto de artículos sobre el concepto de zona económica exclusiva presentado por Kenia (A/AC.138/SC.II/L.10) . . . . .	192
9.	Documento de trabajo presentado por Australia y Nueva Zelandia (A/AC.138/SC.II/L.11) . . . . .	194
10.	Propuestas sobre un régimen de la pesca en alta mar presentadas por el Japón (A/AC.138/SC.II/L.12) . . . . .	199
11.	Propuestas para la futura organización de los trabajos de la Subcomisión II presentadas por Australia y Canadá (A/AC.138/SC.II/L.14). . . . .	207
IV.	DOCUMENTOS ANEXOS A LA PARTE IV . . . . .	209
1.	Programa de trabajo de la Subcomisión III, aprobado en su 19a. sesión, celebrada el 27 de marzo de 1972 (A/AC.138/SC.III/L.14). . . . .	209
2.	Documento de trabajo presentado por Canadá (A/AC.138/SC.III/L.18) . . . . .	213
3.	Documento de trabajo presentado por Bulgaria, la República Socialista Soviética de Ucrania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (A/AC.138/SC.III/L.23) . . . . .	216
4.	Australia, Canadá, Colombia, Chile, Fiji, Filipinas, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Tailandia: proyecto de resolución (A/AC.138/SC.III/L.22) . . . . .	219
5.	Proyecto de resolución sobre medidas preliminares para impedir y combatir la contaminación de los mares presentado por Australia, Bulgaria, Canadá, Grecia, Islandia, Noruega, Países Bajos, República Socialista Soviética de Ucrania, Suecia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (A/AC.138/SC.III/L.25) . . . . .	220
6.	Enmiendas al documento A/AC.138/SC.III/L.25 presentadas por:	
1)	Kenia . . . . .	222
2)	Perú . . . . .	222

# Indice (continuación)

	<u>Página</u>
3) Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte . .	222
4) República Unida de Tanzania . . . . .	222
5) Estados Unidos de América . . . . .	222
7. Canadá: documento de trabajo sobre la preservación del medio marino (A/AC.138/SC.III/L.26) . . . . .	223
V. INDICES DE LAS ACTAS RESUMIDAS . . . . .	253
1. Indice de las actas resumidas de la Comisión . . . . .	253
2. Indice de las actas resumidas de la Subcomisión I . . .	256
3. Indice de las actas resumidas de la Subcomisión II . .	262
4. Indice de las actas resumidas de la Subcomisión III . .	266



## INTRODUCCION

1. En el párrafo 2 de su resolución 2750 C (XXV), de 17 de diciembre de 1970, la Asamblea General decidió convocar en 1973, de conformidad con las disposiciones del párrafo 3 de dicha resolución, reproducidas en el párrafo 2 del presente informe, una conferencia sobre el derecho del mar que se ocupara del establecimiento de un régimen internacional equitativo - que incluyera un mecanismo internacional - para la zona y los recursos de los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional, de la definición precisa de la zona y de una amplia gama de cuestiones conexas, en especial las relacionadas con los regímenes de la alta mar, la plataforma continental, el mar territorial (incluidas la cuestión de su anchura y la cuestión de los estrechos internacionales) y la zona contigua, de la pesca y la conservación de los recursos vivos de la alta mar (incluida la cuestión de los derechos preferenciales de los Estados ribereños), de la protección del medio marino (incluida, entre otras cosas, la prevención de la contaminación) y de la investigación científica.
2. En esa misma resolución, la Asamblea decidió examinar en sus períodos de sesiones vigésimo sexto y vigésimo séptimo los informes que la Comisión presentase sobre la marcha de su labor preparatoria para determinar el programa preciso de la conferencia sobre el derecho del mar, decidir definitivamente su duración, la fecha y el lugar de celebración y otros arreglos conexas, en el entendimiento de que, si en su vigésimo séptimo período de sesiones llegara a la conclusión de que el progreso de la labor preparatoria de la Comisión había sido insuficiente, la Asamblea General podría decidir aplazar la conferencia.
3. En la resolución 2881 (XXVI), de 21 de diciembre de 1971, la Asamblea General tomó nota con satisfacción del progreso alentador realizado por la Comisión en la labor preparatoria de una conferencia amplia sobre el derecho del mar, de conformidad con el mandato enunciado en la resolución 2750 C (XXV), en particular respecto de la elaboración del régimen y del mecanismo internacionales para los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional.
4. La Asamblea General tomó nota asimismo de que la Comisión había examinado los informes presentados por el Secretario General 1/, en cumplimiento de las resoluciones 2750 A y B (XXV), y el estudio de los criterios y métodos posibles para la distribución de los beneficios obtenidos de la explotación de los recursos de la zona (A/AC.138/38 y Corr.1), emprendido de conformidad con la solicitud hecha por la Comisión en marzo de 1970.
5. En el párrafo 4 de esa misma resolución, la Asamblea decidió agregar a la Comisión a China y a otros cuatro miembros que serían nombrados por el Presidente de la Primera Comisión en consulta con los grupos regionales, teniendo en cuenta los intereses de los grupos insuficientemente representados.
6. Por último, la Asamblea pidió a la Comisión que, en el desempeño de su mandato, contenido en la resolución 2750 C (XXV), celebrase dos reuniones, una en Nueva York, en marzo y abril, y otra en Ginebra, en julio y agosto de 1972.

---

1/ A/AC.138/36 y A/AC.138/37 y Corr.1 y 2, que se resumen en Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo sexto período de sesiones, Suplemento No. 21 (A/8421), anexo II, 1 y 3.

7. En la 2031a. sesión plenaria de la Asamblea General, celebrada el 22 de diciembre de 1971, el Presidente de la Primera Comisión anunció que, en cumplimiento de la decisión mencionada en el párrafo 5, había nombrado miembros de la Comisión a los siguientes Estados: Fiji, Finlandia, Nicaragua y Zambia. Por consiguiente, la Comisión estaba compuesta de los siguientes Estados miembros: Afganistán, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Camerún, Canadá, Colombia, Congo, Costa de Marfil, Checoslovaquia, Chile, China, Chipre, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Etiopía, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Guyana, Hungría, India, Indonesia, Irak, Irán, Islandia, Italia, Jamaica, Japón, Kenia, Kuwait, Líbano, Liberia, Madagascar, Malasia, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Perú, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Árabe Libia, República Socialista Soviética de Bielorrusia, República Socialista Soviética de Ucrania, República Unida de Tanzania, Rumania, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Tailandia, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela, Yemen, Yugoslavia, Zaire y Zambia 2/.

8. En su vigésimo sexto período de sesiones la Asamblea General decidió también, en la resolución 2846 (XXVI), remitir la cuestión de la creación de un servicio marítimo intergubernamental a la Comisión para que ésta prosiguiera su examen en el período de sesiones que había de celebrarse en julio y agosto de 1972, y pidió a la Comisión que informase sobre esta cuestión a la Asamblea General por conducto del Consejo Económico y Social.

9. Los siguientes Estados Miembros han participado en calidad de observadores con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 10 de la resolución 2750 C (XXV): Arabia Saudita, Barbados, Bhután, Birmania, Cuba, Haití, Honduras, Irlanda, Israel, Jordania, Malawi, Mongolia, Omán, Portugal, República Árabe Siria, República Dominicana, República Khmer, Sudáfrica y Yemen Democrático.

10. A las sesiones de la Comisión asistieron representantes del Organismo Internacional de Energía Atómica y de los organismos especializados - la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y su Comité de Pesca, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y su Comisión Oceanográfica Intergubernamental, la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental y la Organización Meteorológica Mundial, así como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

11. En la 75a. sesión de la Comisión, celebrada el 23 de marzo, el Secretario General de las Naciones Unidas hizo una declaración.

12. En diversas sesiones de la Comisión y de sus Subcomisiones estuvieron presentes el Sr. Constantin A. Stavropoulos, Secretario General Adjunto y Asesor Jurídico,

---

2/ Ibid., Suplemento No. 29 (A/8429). El total de miembros de la Comisión fue aumentado hasta 91, de los cuales sólo han sido nombrados 90. El puesto vacante fue asignado al grupo de la Europa oriental, en carta de 8 de enero de 1971 dirigida al Secretario General por el Presidente de la Primera Comisión (A/8273 y Corr. 1).

el Sr. L.N. Kutakov, Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos y de Asuntos del Consejo de Seguridad y el Sr. P. de Seynes, Secretario General de Asuntos Económicos y Sociales.

13. En la 74a. sesión, celebrada el 21 de marzo, hicieron declaraciones ante la Comisión el Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano y el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

14. En cumplimiento de la solicitud hecha por la Comisión, en la 66a. sesión, el 27 de agosto de 1971, la Secretaría preparó un Cuadro Comparativo de Proyectos de Tratado, Documentos de Trabajo y Proyectos de Artículos, con fecha 28 de enero de 1972 (A/AC.138/L.10).

15. De conformidad con los párrafos 2 y 3 de la resolución 2750 A (XXV), el Secretario General presentó unas notas adicionales sobre las posibles consecuencias económicas de la extracción de minerales de la zona internacional de los fondos marinos (A/AC.138/73) (Anexo II, 2).

16. Atendiendo a diversas solicitudes de la Comisión, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación preparó los siguientes documentos, que fueron distribuidos entre los miembros de la Comisión: Informe sobre los Organismos para la Regulación de la Pesca (A/AC.138/64), Problemas relativos a la Conservación con Referencia Especial a la Nueva Tecnología (A/AC.138/65), los Estudios de la Pesca por Países, el Atlas de los Recursos Vivos del Mar (Circular de Pesca de la FAO No. 126/Rev.1), un documento sobre los métodos de pesca que pueden tener efectos perjudiciales para la conservación de los recursos pesqueros (Circular de Pesca de la FAO No. 147) y otro sobre especies sedentarias, migratorias y mixtas: su hábitat y distribución (Circular de Pesca de la FAO No. 148).

17. También, a solicitud de la Comisión, la FAO distribuyó entre los miembros los dos informes siguientes: Informe de la Conferencia Técnica de la FAO sobre Contaminación de las Aguas del Mar y sus Efectos en los Recursos Vivos y la Pesca (Roma, 9 a 18 de diciembre de 1970) e informe del séptimo período de sesiones del Comité de Pesca (Roma, 6 a 13 de abril de 1972).

18. La OCMI distribuyó un documento titulado "The Activities of the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization pertaining to Ships' Routeing, Traffic Separation Schemes, Areas to be avoided by Certain Ships and Related Questions" (Misc(72)8).



## I. LABOR DE LA COMISION EN 1972

19. La Comisión celebró su primer período de sesiones en Nueva York del 28 de febrero al 30 de marzo de 1972. El segundo período de sesiones tuvo lugar en Ginebra del 17 de julio al 18 de agosto

20. La Comisión celebró 18 sesiones.

21. La Mesa de la Comisión durante 1972 estuvo integrada como sigue:<sup>3/</sup>

Presidente: Sr. Hamilton Shirley Amerasinghe (Sri Lanka)

<u>Vicepresidentes:</u>	Zaire	Sr. Kalonji-Tshilala
	Mauricio	Sr. R.K. Ramphul (primer período de sesiones)
	Kuwait	Sr. S. Khanechet (primer período de sesiones) Sr. S.N. Al-Sabah (segundo período de sesiones)
	Chile	Sr. D. Casanueva (primer período de sesiones) Sr. H. Santa Cruz (segundo período de sesiones)
	Trinidad y Tabago	Sr. K.T. Hudson-Phillips
	Noruega	Sr. J. Evensen
	Polonia	Sr. W. Natorf
	Yugoslavia	Sr. L. Mojsov (primer período de sesiones) Sr. Z. Perišić (segundo período de sesiones)

Relator: Sr. Charles V. Vella (Malta)

22. Al abrirse el 17 de julio de 1972 el segundo período de sesiones, la Comisión acordó dar máxima prioridad al asunto de los temas y cuestiones relacionados con el derecho del mar. También se convino, al iniciarse el período de sesiones, en que la Comisión se reuniera dos veces por semana a fin de examinar la labor realizada por las Subcomisiones.

---

<sup>3/</sup> La composición de las Mesas de las tres Subcomisiones y de los grupos de trabajo figura en las secciones pertinentes del presente informe.

23. El 18 de agosto de 1972 la Comisión aprobó oficialmente la siguiente lista que había sido recomendada por la Subcomisión II:

Esta lista de temas y cuestiones relacionados con el derecho del mar se ha preparado de conformidad con la resolución 2750 C (XXV) de la Asamblea General.

La lista no es necesariamente completa y no establece el orden de prioridad para el examen de los diversos temas y cuestiones.

Puesto que la lista ha sido preparada siguiendo un enfoque comprensivo e intenta abarcar una amplia gama de posibilidades, el patrocinio o la aceptación de esta lista no prejuzga la posición de Estado alguno respecto de los temas que ella contiene, ni respecto del orden, forma o clasificación en que están presentados.

En consecuencia, la lista debería servir como marco para el debate y la redacción de artículos necesarios.

Lista de temas y cuestiones relacionados con el derecho del mar

1. Régimen internacional para los fondos marinos y oceánicos fuera de la jurisdicción nacional
  - 1.1 Naturaleza y características
  - 1.2 Mecanismo internacional: estructura, funciones, facultades
  - 1.3 Repercusiones económicas
  - 1.4 Reparto equitativo de los beneficios teniendo en cuenta los intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo ribereños o sin litoral
  - 1.5 Definición y límites de la zona<sup>4/</sup>
  - 1.6 Su utilización exclusivamente con fines pacíficos
2. Mar territorial
  - 2.1 Naturaleza y características, incluida la cuestión de la unidad o pluralidad de regímenes en el mar territorial
  - 2.2 Aguas históricas
  - 2.3 Límites

---

<sup>4/</sup> Se han de examinar a la luz del acuerdo de procedimiento indicado en el párrafo 22 del informe de la Comisión (Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo sexto período de sesiones, Suplemento No. 21), (documento A/8421)).

- 2.3.1 Cuestión de la delimitación del mar territorial; diversos aspectos de la materia
- 2.3.2 Anchura del mar territorial. Criterios globales o regionales. Mares y océanos abiertos, mares semicerrados y mares cerrados
- 2.4 Paso inocente en el mar territorial
- 2.5 Libertad de navegación y sobrevuelo según resulta de la cuestión de la pluralidad de regímenes en el mar territorial
- 3. Zona contigua
  - 3.1 Naturaleza y características
  - 3.2 Límites
  - 3.3 Derechos de los Estados ribereños en relación con la seguridad nacional, el control fiscal y aduanero y la reglamentación sanitaria y de inmigración
- 4. Estrechos utilizados para la navegación internacional
  - 4.1 Paso inocente
  - 4.2 Otras materia conexas, incluida la cuestión del derecho de tránsito
- 5. Plataforma continental
  - 5.1 Naturaleza y alcance de los derechos soberanos de los Estados ribereños sobre la plataforma continental. Deberes de los Estados
  - 5.2 Límite exterior de la plataforma continental: criterios aplicables
  - 5.3 Cuestión de la delimitación entre Estados; diversos aspectos de la materia
  - 5.4 Recursos naturales de la plataforma continental
  - 5.5 Régimen de las aguas suprayacentes a la plataforma continental
  - 5.6 Investigación científica
- 6. Zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial
  - 6.1 Naturaleza y características, incluidos los derechos y la jurisdicción de los Estados ribereños en relación con los recursos, el control de la contaminación y la investigación científica en la zona. Deberes de los Estados
  - 6.2 Recursos de la zona
  - 6.3 Libertad de navegación y sobrevuelo

- 6.4 Acuerdos regionales
- 6.5 Límites: criterios aplicables
- 6.6 Pesquerías
  - 6.6.1 Zona exclusiva de pesca
  - 6.6.2 Derechos preferenciales del Estado ribereño
  - 6.6.3 Administración y conservación
  - 6.6.4 Protección de las pesquerías del Estado ribereño en mares cerrados y semicerrados
  - 6.6.5 Régimen de islas bajo dominación o control extranjero en relación con las zonas de jurisdicción exclusiva de pesca
- 6.7 Fondos marinos dentro de la jurisdicción nacional
  - 6.7.1 Naturaleza y características
  - 6.7.2 Delimitación entre Estados adyacentes y opuestos
  - 6.7.3 Derechos soberanos sobre los recursos naturales
  - 6.7.4 Límites: criterios aplicables
- 6.8 Prevención y control de la contaminación y otros peligros para el medio marino
  - 6.8.1 Derechos y deberes del Estado ribereño
- 6.9 Investigación científica
- 7. Derechos preferenciales u otra jurisdicción no exclusiva del Estado ribereño sobre recursos situados fuera del mar territorial
  - 7.1 Naturaleza, alcance y características
  - 7.2 Recursos de los fondos marinos
  - 7.3 Pesquerías
  - 7.4 Prevención y control de la contaminación y otros peligros para el medio marino
  - 7.5 Cooperación internacional en el estudio y en la explotación de los recursos marinos
  - 7.6 Solución de controversias
  - 7.7 Otros derechos y obligaciones

- 8. Alta mar
  - 8.1 Naturaleza y características
  - 8.2 Derechos y deberes de los Estados
  - 8.3 Cuestión de las libertades de la alta mar y su reglamentación
  - 8.4 Administración y conservación de los recursos vivos
  - 8.5 Esclavitud, piratería, drogas
  - 8.6 Derechos de persecución
- 9. Países sin litoral
  - 9.1 Principios generales del derecho del mar relativos a los países sin litoral
  - 9.2 Derechos e intereses de los países sin litoral
    - 9.2.1 Libre acceso al mar y desde el mar: libertad de tránsito, medios e instalaciones de transporte y de comunicaciones
    - 9.2.2 Igualdad de trato en los puertos de los Estados de tránsito
    - 9.2.3 Libre acceso a la zona internacional de los fondos marinos fuera de la jurisdicción nacional
    - 9.2.4 Participación en el régimen internacional, incluido el mecanismo, y reparto equitativo de los beneficios de la zona
  - 9.3 Intereses y necesidades particulares de los países en desarrollo sin litoral en el régimen internacional
  - 9.4 Derechos e intereses de los países sin litoral con respecto a los recursos vivos del mar
- 10. Derechos e intereses de los países de plataforma encerrada, plataforma estrecha o costa pequeña
  - 10.1 Régimen internacional
  - 10.2 Pesquerías
  - 10.3 Intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo de plataforma encerrada, plataforma estrecha o costa pequeña
  - 10.4 Libre acceso a la alta mar y desde la alta mar
- 11. Derechos e intereses de los Estados de plataforma amplia

12. Preservación del medio marino
  - 12.1 Fuentes de contaminación y otros peligros y medidas para combatirlos
  - 12.2 Medidas para preservar el equilibrio ecológico del medio marino
  - 12.3 Obligaciones y responsabilidad en relación con los daños al medio marino y al Estado ribereño
  - 12.4 Derechos y deberes del Estado ribereño
  - 12.5 Cooperación internacional
13. Investigación científica
  - 13.1 Naturaleza, características y objetivos de la investigación científica de los océanos
  - 13.2 Acceso a la información científica
  - 13.3 Cooperación internacional
14. Desarrollo y transmisión de tecnología
  - 14.1 Fomento de la capacidad tecnológica de los países en desarrollo
    - 14.1.1 Intercambio de conocimientos y tecnología entre países desarrollados y países en desarrollo
    - 14.1.2 Formación de personal de países en desarrollo
    - 14.1.3 Transmisión de tecnología a países en desarrollo
15. Acuerdos regionales
16. Archipiélagos
17. Mares cerrados y semicerrados
18. Islas artificiales e instalaciones
19. Régimen de las islas:
  - a) Islas bajo dependencia colonial o dominación o control extranjero;
  - b) Otras materias conexas
20. Obligaciones y responsabilidad en relación con los daños por el uso del medio marino
21. Solución de controversias

22. Utilización con fines pacíficos del espacio oceánico; zonas de paz y seguridad
23. Tesoros arqueológicos e históricos de los fondos marinos y oceánicos fuera de los límites de la jurisdicción nacional
24. Transmisiones desde alta mar
25. Fomento de la participación universal de los Estados en las convenciones multilaterales relativas al derecho del mar

24. La tarea de considerar las cuestiones planteadas por la Asamblea General en virtud de su resolución 2846 (XXVI) (véase el párrafo 8 supra) fue asignada a la Subcomisión III. La Comisión decidió informar al Consejo Económico y Social que por falta de tiempo no podría examinar la cuestión durante su segundo período de sesiones en julio y agosto de 1972, pero que sería considerada en la primera oportunidad que surgiera.

25. En sus sesiones 86a, 87a. y 88a. celebradas los días 17 y 18 de agosto, la Comisión aprobó los informes de las tres Subcomisiones y decidió que los mismos pasaran a constituir las partes II, III y IV del presente informe.

26. El 23 de marzo la Comisión aceptó la sugerencia del Presidente en el sentido de que, teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de la resolución 2750 C (XXV) de la Asamblea General, la Secretaría previese créditos para un período de sesiones de cinco semanas en la primavera y un período de sesiones de ocho semanas en el verano de 1973.

27. En la 73a. sesión, celebrada el 10 de marzo, el representante del Senegal señaló a la atención de la Comisión algunos puntos de desacuerdo entre su Gobierno y la Secretaría de las Naciones Unidas en relación con su denuncia de la Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua y de la Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta Mar. El 23 de marzo hicieron declaraciones al respecto el Asesor Jurídico y el representante del Senegal.

28. En su primer período de sesiones, celebrado en marzo, la Comisión oyó las declaraciones hechas por los cinco miembros nuevos que había designado la Asamblea General en su resolución 2881 (XXVI). Tales declaraciones versaron en su mayoría sobre varios puntos que se examinaban en el anterior informe de la Comisión a la Asamblea en su vigésimo sexto período de sesiones 5/. Uno de los nuevos miembros exouso el parecer de que la lucha internacional en curso sobre los derechos sobre los mares y océanos era en lo esencial una lucha entre la agresión y la resistencia, entre el pillaje y la conservación, y entre la hegemonía extranjera y la independencia y que la igualdad de los Estados, independientemente de su tamaño debía ser un principio básico al resolver las cuestiones relativas a los derechos sobre los océanos. Algunas delegaciones rechazaron tales acusaciones y señalaron que la Comisión debía dedicar sus energías a resolver las diferencias y a conciliar los intereses de los diversos países, a fin de preparar con éxito la conferencia sobre el derecho del mar.

---

5/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo sexto período de sesiones, Suplemento No. 21 (A/8421).

29. Otro nuevo miembro señaló las necesidades e intereses especiales de los estados archipelágicos y describió los principios que debían regular el régimen de las aguas archipelágicas, incluso la disposición del paso inocente por las rutas marítimas designadas para la navegación internacional a través de esas aguas.

30. En la 77a. sesión, celebrada el 30 de marzo, el representante de Kuwait introdujo un proyecto de decisión (A/AC.138/L.11), cuyo examen, por acuerdo de la Comisión, quedó aplazado hasta el segundo período de sesiones del verano. La propuesta, en una forma revisada (A/AC.138/L.11/Rev.1) (anexo I 1), fue presentada de nuevo por el representante de Kuwait el 14 de agosto de 1972. Al presentar el texto revisado, el representante de Kuwait declaró que su propuesta había sido motivada por el hecho de existir pruebas de que determinados Estados habían acometido diversas actividades operacionales en la zona internacional. Tales actividades eran contrarias a la resolución 2574 D (XXIV) de la Asamblea General y a la Declaración de principios que regulan los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional (resolución 2749 (XXV) de la Asamblea), así como a la resolución 52 (III) de la UNCTAD. El representante de Kuwait pidió que la propuesta se incluyera en el informe de la Comisión.

31. El proyecto de decisión y el criterio que reflejaba fueron apoyados por varios oradores antes y después de la presentación del texto revisado. Se citaron diversos hechos relativos a actividades económicas en la zona fuera de la jurisdicción nacional que se consideraba no era acorde con el principio del "patrimonio común". Se manifestó que el hecho de que el derecho existente no contuviera ninguna prohibición expresa de actividades unilaterales en la zona ni en general, normas sobre la explotación de la zona y sus recursos no significaba que tales actividades pudieran realizarse. El carácter internacional de la zona, se dijo, se desprendía no sólo de su naturaleza o situación mismas, sino también del consenso contenido en la Declaración de principios; la Declaración era la única manifestación jurídica auténtica de la voluntad de los Estados en la materia y, según se estimó, significaba denegar a las autoridades nacionales la facultad de reglamentar la explotación de la zona y de conceder licencias para tal explotación. Se expuso el parecer de que la "moratoria" contenida en la resolución 2574 D (XXIV) tenía fuerza jurídica, no por figurar en una resolución de la Asamblea como tal, sino por ser un corolario jurídico obligado del principio - que era indiscutido - de que existía una zona internacional de los fondos marinos y oceánicos. La Declaración de principios, se señaló, no constituía un régimen temporal para la zona, sino que, en virtud de ella, las actividades en tal zona quedaban sujetas al régimen internacional que había de establecerse. Se declaró también que la decisión propuesta reflejaba el derecho positivo existente, ya que el principio de la libertad de la alta mar no era una norma de derecho natural, sino que tenía su origen en el derecho consuetudinario, que nunca había tenido valor preceptivo. Según tal parecer, la Declaración de principios, que había sido adoptada sin oposición en la Asamblea General, órgano que representaba a la comunidad internacional, había eliminado uno de los elementos constitutivos del principio consuetudinario, a saber la opinio necessitatis y, con ello, había abrogado el principio consuetudinario propiamente dicho. Análogamente se expresó la opinión de que nunca había existido una costumbre internacional con respecto a la explotación del mar y sus recursos.

32. Otros oradores se opusieron, sin embargo, al proyecto de decisión. Se señaló que en esos momentos no se realizaba explotación comercial. Se declaró que ni la propuesta que se había hecho, ni tampoco la resolución 2574 D (XXIV), a la que se habían opuesto varios Estados Miembros, podían modificar el derecho internacional



ni privar a los Estados de sus derechos conforme al derecho internacional. Se señaló, además, que la Declaración de principios no constituía ningún régimen temporal ni tenía ningún efecto dispositivo hasta que el régimen internacional se hubiera acordado y hasta que se hubiera definido la zona a la que el mismo sería aplicable, y que el principio del patrimonio común no significaba, en todo caso, la propiedad común de la humanidad. Se recalcó que no había ninguna posibilidad de acuerdo sobre una moratoria y que todo intento de lograr la aprobación de la propuesta introduciría un elemento de división en las deliberaciones. Era preferible, según los que así opinaron, trabajar con la máxima rapidez en la elaboración de un régimen internacional concertado, antes de que comenzara realmente la explotación comercial. Se dijo que el proyecto de decisión representaba un intento de restringir el progreso tecnológico y de limitar las actividades experimentales, que no redundaría en beneficio de la comunidad internacional ni contribuiría a sus esfuerzos por sacar provecho de la existencia de recursos en los fondos marinos. Se adujo asimismo que la moratoria con respecto a la explotación de los recursos de los fondos marinos únicamente podía establecerse si se aplicaba simultáneamente una moratoria con respecto a la extensión del mar territorial, las zonas de pesca y las demás zonas económicas fuera del límite de las 12 millas. Se señaló también que la Comisión estaba facultada para preparar textos para la conferencia y no para adoptar de por sí resoluciones o proponerlas a la Asamblea General.

33. En su 78a. sesión, celebrada el 20 de julio de 1972, la Comisión acordó que el texto de la Declaración de Santo Domingo (A/AC.138/80) (anexo I, 2), facilitado por el representante de Venezuela, y el de las conclusiones formuladas en el informe general del Seminario regional de los Estados africanos sobre el derecho del mar, celebrado en Yaundé (A/AC.138/79) (anexo I, 3), facilitado por el representante de Kenia, se distribuyesen como documentos de la Comisión y agregado al informe. En la misma sesión se hicieron declaraciones en las que se presentaron y comentaron esos textos.

34. En las sesiones siguientes se hicieron diversas referencias a esos documentos y a las ideas en ellos formuladas, especialmente a la de una zona económica exclusiva o a la de un mar patrimonial. También se hizo referencia en ese contexto al proyecto de artículos sobre el concepto de una zona económica exclusiva presentado por Kenia en la Subcomisión II (A/AC.138/SC.II/L.10) (anexo III, 8) que varias delegaciones consideraron como un punto de partida para unas negociaciones serias. A juicio de tales delegaciones, el concepto permitía una revisión realista del derecho internacional en lo relativo a la utilización de los recursos marinos y podía garantizar una parte equitativa a los países en desarrollo sin interferir los intereses legítimos de otros Estados. En relación con esos temas se hicieron, entre otras, las observaciones siguientes: que la Declaración de Santo Domingo estaba basada en la idea de la necesidad de un desarrollo progresivo del derecho del mar que tuviera en cuenta el progreso científico y tecnológico y la nueva realidad política, en la idea de que el nuevo derecho del mar debía adoptar la forma de normas de aplicación universal, sin perjuicio de los acuerdos regionales o subregionales basados en tales normas, en la idea de que era indispensable tener presente la necesidad de eliminar la disparidad existente entre los países en desarrollo y los países desarrollados, en la idea de que el nuevo derecho del mar debía conciliar las necesidades y los intereses de los distintos Estados con los de la comunidad internacional, en la idea de que era necesario definir no sólo los derechos, sino también las obligaciones y responsabilidades de los Estados con respecto a las diversas zonas marítimas y en la idea de que las nuevas normas relativas a esta materia debían promover la cooperación internacional para la protección adecuada del medio marino y la apropiada

utilización de sus recursos; que según un punto de vista, la Declaración de Santo Domingo había reunido e interpretado las políticas de otros países latinoamericanos que procuraban hacer valer su derecho a explotar todos los recursos del mar adyacente a sus costas; que el Seminario de Yaundé había sido la primera medida adoptada por los países africanos para codificar sus puntos de vista sobre el futuro del mar; que la Declaración de Santo Domingo y las conclusiones de Yaundé presentaban muchos puntos comunes, lo que ponía de manifiesto la creciente semejanza entre los puntos de vista de las regiones en desarrollo del mundo; que se estaba a punto de llegar a una base de convergencia sobre los problemas del derecho del mar en virtud del criterio funcional con arreglo al cual el Estado ribereño podría ejercer determinadas formas de jurisdicción especializada en una zona o unas zonas que rebasaban los límites de su soberanía sobre su mar territorial, y que parecía que se estaba formando un consenso en torno al límite de 12 millas para el mar territorial junto a una amplia zona económica; que esas propuestas de mar patrimonial zona económica comprendían un criterio funcional que era indispensable para el éxito de toda conferencia sobre el derecho del mar; que el concepto de zona económica estaba en consonancia con el principio XI de la resolución 46 de la UNCTAD, en el que se afirmaban los derechos de los Estados ribereños con respecto a los recursos del mar dentro de los límites de la jurisdicción nacional; que los elementos básicos del concepto de zona económica habían sido sometidos a la Comisión en el proyecto de artículos de Kenia; que el empleo de la palabra "exclusiva" se refería a la jurisdicción y soberanía sobre los recursos de la zona económica y no entorpecería necesariamente el acuerdo sobre varias otras posibilidades, mediante acuerdos preferentes, sistemas de licencias y cooperación con las organizaciones internacionales existentes y futuras; que, en especial, se podían concertar acuerdos bilaterales, multilaterales o regionales con países sin litoral y otros países vecinos geográficamente desfavorecidos; que las divergencias con respecto a la anchura de la zona económica y a las formas de ejercicio de los derechos eran menos importantes que el principio mismo de la existencia de una zona de jurisdicción especial; y que no se tenía el propósito de atribuir a la zona económica el carácter de zona de soberanía, como era el mar territorial, y que la distinción entre ambos se debía a la necesidad de conciliar los diversos usos del mar. Se hicieron otras observaciones, a saber: que la Declaración de Santo Domingo, en cuanto resultado de una conferencia subregional, no podía considerarse aplicable a los Estados marítimos de la América Latina que no habían participado en la Conferencia; que según su punto de vista, se necesitaba más tiempo para estudiar lo que significaba el mar patrimonial; que una jurisdicción administrativa casi completa del Estado ribereño sobre los recursos de zonas de los fondos marinos adyacentes era aceptable si tal jurisdicción quedaba subordinada a unas pautas establecidas por tratado internacional para evitar un entorpecimiento excesivo de otros usos de los océanos, para proteger los océanos contra la contaminación, para proteger la integridad de la inversión, sobre distribución de beneficios para fines de la comunidad internacional y sobre solución obligatoria de controversias; que existían métodos razonables para conciliar los intereses de los Estados ribereños y los Estados pesqueros alejados y que la solución del problema de la pesca debía tener en cuenta los hábitos migratorios de los peces y la manera en que se practicaba su captura; que el régimen de los fondos marinos profundos, para ser eficaz y equitativo, debía proteger no sólo los intereses de los países en desarrollo, sino también los de los países desarrollados, mediante el establecimiento de condiciones de inversión razonables y seguras; que las repercusiones de una reivindicación tan general respecto de una extensa zona de mar patrimonial no podían aislarse de sus repercusiones sobre los fondos marinos fuera de la jurisdicción nacional, que de resultados de ello necesariamente tenían que sufrir menoscabo; que, a pesar de que esos textos se consideraban hitos importantes en el desarrollo progresivo del derecho del mar, la

Declaración de Santo Domingo trataba, al parecer, de perpetuar los criterios de "explotabilidad" de la Convención de 1958 con respecto a la delimitación de la plataforma continental, si bien al pedir que se estudiara el límite exterior exacto de la plataforma, también parecía que no adoptaba una actitud definitiva sobre ésta: que esa Declaración no incluía ninguna referencia a pautas internacionales y procedimientos de solución de controversias aplicables a la jurisdicción del Estado ribereño sobre los recursos ni establecía entre los recursos vivos ninguna diferencia de trato basada en las características migratorias de éstos, pero que esos documentos constituían indudablemente un punto de partida de negociaciones serias; que sólo una tercera parte de los miembros de la Organización gozarían de derechos económicos exclusivos hasta 200 millas de su territorio; que la equidad exigía en cambio el uso racional y la conservación de las poblaciones de peces y que se confiriese a los países en desarrollo que no tenían medios de explotación suficientes un derecho exclusivo a sus propias capturas; y que los recursos de la alta mar podían ser utilizados por todos los países. Se hizo observar también que el derecho internacional consuetudinario y convencional tomaba en consideración el criterio de explotabilidad hasta el borde del margen continental; que en los asuntos relativos a la plataforma continental del Mar del Norte se había afirmado que la plataforma continental comprendía la masa terrestre sumergida; y que la retención del criterio de explotabilidad, junto con los criterios de profundidad o distancia, era un elemento indispensable de cualquier avenencia global en materia de derecho del mar.

35. El 9 de agosto de 1972, los representantes del Afganistán, Austria, Bélgica, Bolivia, Checoslovaquia, Hungría, Nepal, los Países Bajos, Singapur, Zaire y Zambia sometieron una petición (A/AC.138/81) (anexo I, 4), que fue presentada por el delegado de Singapur, en la que se proponía que se pidiera al Secretario General que preparase un estudio sobre las diferentes consecuencias económicas de las diversas propuestas relativas a los límites de la zona internacional de los fondos marinos. Se dijo que la cuestión de los límites de la jurisdicción nacional era importante, no sólo para los Estados ribereños sino también en lo que se refería a la viabilidad del régimen y el mecanismo internacionales; la trascendencia económica del régimen y la posibilidad de obtener beneficios que pudieran ser compartidos variarían según los límites finalmente adoptados. Por otra parte, se alegó que el carácter y las funciones de los órganos del mecanismo internacional dependerían necesariamente del alcance y la naturaleza efectivos de la zona del régimen internacional que en fin de cuentas correspondiera a la humanidad en su conjunto. Dado que la Comisión no disponía todavía de datos sobre la trascendencia económica y el alcance de las diferentes propuestas relativas a los límites, los autores estimaban conveniente y útil disponer de un estudio del tipo solicitado al Secretario General, basado en los datos y conocimientos existentes, que complementase los informes existentes preparados por el Secretario General y contenidos en los documentos A/AC.138/36 6/ y A/AC.138/73 (anexo II, 2). Los países en desarrollo no disponían de los recursos técnicos, financieros ni humanos necesarios para realizar dicho estudio por sí mismos.

36. Varios oradores expresaron su firme oposición a la petición de que realizase el estudio el Secretario General. Se dijo que la lista de cinco límites especificada en la propuesta prejuzgaba una cuestión muy delicada y era totalmente inaceptable. Existían otros diversos límites o combinaciones de límites que podrían ser examinados

---

6/ Ibid., A/8421, anexo II, 1.

y que estaban interrelacionados con ideas sobre la naturaleza del régimen y el mecanismo internacionales para los fondos marinos. Según esta opinión, el estudio pedido debía considerarse de hecho como un argumento contra la amplia jurisdicción del Estado ribereño que habían propugnado repetidamente Estados de todos los continentes. Se dijo también que la obtención de la totalidad de los datos científicos necesarios para llevar a cabo el estudio rebasaría los recursos de la Secretaría y entrañaría un gran desembolso de fondos. Además se dijo que, en cualquier caso, no podría tratarse debidamente dicha materia sobre la base exclusiva de los límites. Se señaló que las consecuencias de la adopción de límites estrechos para los Estados ribereños exigían también un estudio. Se expresó la opinión de que los Estados deberían determinar por sí mismos las consecuencias de los diversos límites posibles en relación con su propia situación.

37. En la 86a. sesión, celebrada el 17 de agosto de 1972, el representante de la República Popular Polaca, en nombre de las delegaciones de Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y la URSS, presentó el texto de la Declaración de Moscú referente a los principios de una explotación racional de los recursos vivos de los mares y océanos en interés común de todos los pueblos del mundo (A/AC.138/85) (anexo I, 5). El Comité no pudo examinar esa Declaración por falta de tiempo.

38. En la Declaración de Moscú se subrayaba que el régimen de pesquerías en la alta mar debería basarse en el principio de la participación igual de todos los Estados en la pesca y la estricta observancia de medidas con base científica para la conservación del mar a un nivel máximo estable. Se decía que los sistemas actuales de reglamentación del mar a un nivel máximo estable. Se decía que los sistemas actuales de reglamentación internacional de la pesca deberían mejorarse constantemente, y a este respecto debería incrementarse y ampliarse la función de las organizaciones internacionales regionales de pesca; también debería preverse la posibilidad de que todos los Estados interesados participaran en ellas sin discriminación, sobre la base de su igualdad soberana. Se dijo que la Declaración de Moscú apoyaba la lucha de los países en desarrollo por establecer sus propias economías nacionales, incluidas las pesquerías; las partes en la Declaración prestaban asistencia a los países en desarrollo respecto del establecimiento de su industria pesquera y del suministro de equipo técnico para ella, y continuarían cooperando con esos países en la esfera de las pesquerías marinas. Se dijo también que deberían preverse para los países en desarrollo determinados derechos preferenciales que ofreciesen la posibilidad de desarrollar pesquerías nacionales y de superar el atraso técnico. Según esta opinión, la rápida solución del problema de la utilización plena y racional de los recursos vivos de los mares en interés común de los pueblos podía basarse en una combinación razonable de los intereses de los Estados ribereños y de los Estados que pescaban en aguas lejanas mediante una reglamentación internacional y no mediante la adopción de medidas unilaterales por los distintos Estados.

39. Los documentos aprobados por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo relativos al derecho del mar fueron presentados a la Comisión que decidió distribuirlos entre las delegaciones. La UNCTAD aprobó tres resoluciones sobre la cuestión: el principio IX relativo al derecho de los Estados ribereños a disponer de los recursos del mar dentro de los límites de su jurisdicción en beneficio de su población; la incorporación al programa permanente de la UNCTAD del tema sobre las consecuencias económicas que la explotación de los fondos marinos fuera de la jurisdicción nacional pueden tener para la economía de los países en desarrollo; y la reiteración de la resolución conocida como resolución de la "moratoria". Se destacó la importancia de esas resoluciones y el hecho de que hubieran recibido un

abrumador apoyo de los países en desarrollo. Una delegación señaló que varios países no participaron en la votación sobre la resolución 52 (III) de la UNCTAD, de 19 de mayo de 1972, y que podía considerarse que esa resolución no tenía fuerza legal en cuanto al establecimiento de una moratoria en la exploración y explotación de los recursos de los fondos marinos y oceánicos.

40. Durante los debates de la Comisión, al evaluar el ritmo de progreso alcanzado y la estimación por los oradores de la forma y la naturaleza general de la conferencia prevista en la resolución 2750 C (XXV) de la Asamblea General se hicieron, entre otras, las observaciones que figuran a continuación: se dijo que, aunque quedaban por resolver varias dificultades, éstas desaparecerían cuando se solucionaran las cuestiones fundamentales relativas a la jurisdicción nacional, y que, de hecho, de las deliberaciones de la Comisión y de la evolución, especialmente en los últimos años, de la práctica de los Estados habían surgido ya las líneas generales de un arreglo posible de las principales cuestiones pendientes del derecho del mar; que, si se llegaba a la conclusión de que era viable y conveniente la pronta celebración de una conferencia general sobre el derecho del mar, sería necesario que su programa y estructura de comisiones no hicieran difíciles las negociaciones e ilusoria la consecución de soluciones internacionales, y que era sumamente improbable que la Asamblea General decidiera celebrar una conferencia limitada a la cuestión de los fondos marinos fuera de la jurisdicción nacional y a algunas otras cuestiones de derecho del mar; que la preparación de proyectos de artículos debería ir precedida de un esfuerzo por llegar a un acuerdo político sobre las líneas generales de un derecho del mar nuevo y universal que pudiera servir de base para acuerdos regionales y subregionales; que en la actual fase de los trabajos lo que realmente importaba era llegar a un acuerdo sobre las bases fundamentales del sistema y que lo que se necesitaba era una solución global y no soluciones parciales que, en cualquier caso, dependerían de la ulterior solución de otros problemas del derecho del mar; que la eficacia de un tratado ampli. de carácter legislativo para los océanos dependería en gran parte de la medida en que representara un consenso, y no las opiniones de un grupo de Estados, y estuviera de acuerdo con los intereses nacionales e internacionales fundamentales, así como los intereses de los países en desarrollo; que la Conferencia sobre el derecho del mar no debería llevar simplemente a un acuerdo político entre las Potencias marítimas y los Estados ribereños en desarrollo, sino que al establecer un nuevo derecho del mar deberían tenerse en cuenta también las consecuencias del progreso tecnológico y consideraciones de equidad; que los países en desarrollo de Africa, Asia y América Latina habían adoptado, después de diversas reuniones regionales, opiniones ampliamente convergentes, y que había llegado el momento de un diálogo franco con las Potencias marítimas; que, como consecuencia de los progresos realizados, la próxima conferencia no se limitaría a los problemas que dejaron sin resolver las Conferencias de 1958 y 1960 o que se habían planteado como resultado de avances científicos y tecnológicos, sino que se ocuparía del desarrollo progresivo del derecho del mar; que las negociaciones realizadas hasta la fecha habían permitido a los distintos países ponderar diversos intereses y considerar sus posiciones; que se habían determinado los temas y cuestiones controvertidos y se habían armonizado y unificado criterios en grupos regionales y entre países con necesidades e intereses comunes, facilitando así las futuras negociaciones; que los proyectos de artículos presentados hasta la fecha se referían solamente a cuestiones aisladas, y que se debería establecer un grupo de trabajo para que estudiase los proyectos de artículos sobre la pesca a fin de acelerar los trabajos de la Comisión y que con la expansión de diversos intereses, los esfuerzos para llegar a una avenencia y a la conciliación, la presentación de proyectos de



artículos y documentos de trabajo sobre diferentes aspectos del derecho del mar y los debates generales se había puesto en marcha un proceso de cambio en el derecho del mar a través de convenios formales o una evolución efectiva.

41. Las opiniones expresadas sobre la fecha de celebración de la conferencia estaban relacionadas en muchos casos con las posiciones adoptadas sobre la etapa a que se había llegado en los trabajos preparatorios. Se afirmó que era necesaria una preparación adecuada y que sólo cuando se hubiese logrado ésta debería celebrarse la conferencia; que hasta la fecha la Comisión no había llevado a cabo la labor que le había encomendado la Asamblea General; que una conferencia que se celebrase en tales circunstancias podría fracasar y que había que evitar esto a toda costa; por otra parte, se mencionó también la conveniencia de que la conferencia se celebrase lo antes posible, a fin de acelerar los trabajos. En esencia, las principales sugerencias formuladas fueron las siguientes: que la conferencia se celebrase lo antes posible en 1973; que la conferencia se celebrase en 1973 y que la Comisión celebrase por lo menos otro período de sesiones antes de ella; que el período de sesiones inicial de la conferencia, dedicado en particular a las cuestiones de organización, se celebrase durante el vigésimo octavo período de sesiones de la Asamblea General, iniciándose los trabajos sustantivos de la Conferencia a principios de 1974, de ser posible, y si no en 1975; que la Comisión celebrase dos períodos de sesiones en 1973 y, si en el segundo se progresaba suficientemente, que la conferencia se reuniese a fines de 1973; que el problema de la fecha de celebración de la conferencia fuese resuelto por la Asamblea General conforme al párrafo 3 de la resolución 2750 C (XXV), a la vista de su opinión sobre la suficiencia de los preparativos: que para el éxito de la conferencia era de capital importancia que la preparación de todos los documentos necesarios fuese completa y que, en consecuencia, la marcha de los trabajos preparatorios era lo primero que había que tener en cuenta por lo que se refería a la fecha de celebración de la conferencia. Otra posibilidad mencionada fue que se fijase la fecha de la conferencia para fines de 1973, sustituyendo a la Comisión por una comisión especial que estaría compuesta por los Estados miembros de la Mesa de la Comisión y que tendría el mandato limitado de preparar exclusivamente los aspectos de organización y procedimiento de la conferencia.

42. En cuanto al lugar de celebración de la conferencia, el 10 de agosto de 1972 se informó a la Comisión de que el Gobierno de Chile había formulado oficialmente una invitación para que se celebrase en Santiago de Chile conforme a lo dispuesto en el párrafo 10 de la resolución 2609 (XXIV) de la Asamblea General. Se subrayaron las ventajas que tendría el celebrar la conferencia en un país en desarrollo que tenía buenas relaciones y había adoptado una clara posición en favor de la negociación internacional. Se declaró que la invitación chilena se refería a las reuniones que se celebrasen en el curso de un año. Si se rebasaba dicho período, otro país de cualquiera de las regiones del mundo podría ofrecerse como sede para el nuevo período.

43. La invitación chilena obtuvo una calurosa acogida y gozó de amplio apoyo entre los representantes de todos los grupos regionales. A este respecto, se recordó la feliz experiencia de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, recientemente celebrada, y la contribución de los países latinoamericanos a la labor de la Comisión.

44. Se recordó también a la Comisión la invitación formulada oficialmente por el Gobierno de Austria el 15 de diciembre de 1971, en el vigésimo sexto período de sesiones de la Asamblea General, para que la Conferencia se celebrase en Viena. Se señaló que, como la invitación chilena abarcaba un período de un año, era posible que se conciliaran las dos invitaciones pues se estimaba probable que la conferencia tuviese una duración mayor.

45. La invitación austríaca fue también acogida con beneplácito y considerada con ánimo favorable, y se señaló que, por lo que se refería a las dos invitaciones, era posible llegar a una solución de transacción.

46. Se hicieron otras referencias en cuanto al lugar de celebración de la conferencia. Se expresó la esperanza de que, si los gobiernos de otros países en desarrollo se ofrecían como anfitriones para la celebración de ulteriores períodos de sesiones, se tomaran en consideración también tales ofrecimientos. Por otra parte, se hizo observar que quizá no conviniera adoptar una posición definitiva en la fase actual de los trabajos de la Comisión, puesto que la decisión final correspondía a la Asamblea General. Otra opinión fue que una conferencia que tuviese varios períodos de sesiones sería contraria al enfoque previsto en la resolución 2750 (XXV) de la Asamblea General, por lo que debería celebrarse un único período de sesiones bien preparado. Asimismo se hizo referencia a posiciones generales sobre la cuestión de los lugares en que debían celebrarse las conferencias más importantes. Algunos representantes reservaron su posición en cuanto al lugar de celebración de la conferencia.

## II. CUESTIONES Y FUNCIONES ASIGNADAS A LA SUBCOMISION I

### A. Introducción

47. La Subcomisión I, que fue creada en marzo de 1971, continuó en 1972 sus actividades en virtud del acuerdo de 12 de marzo de 1971 relativo a la organización de los trabajos de la Comisión sobre la Utilización con Fines Pacíficos de los Fondos Marinos y Oceánicos fuera de los Límites de la Jurisdicción Nacional 7/.

48. Durante el año, la Subcomisión I celebró dos series de sesiones, la primera en Nueva York del 29 de febrero al 29 de marzo de 1972, y la segunda en Ginebra del 19 de julio al 15 de agosto de 1972. En marzo celebró 16 sesiones; en julio y agosto 14 sesiones. Asistieron a ellas representantes de los Estados miembros de la Comisión. Los siguientes Estados Miembros participaron como observadores: Arabia Saudita, Barbados, Bhután, Birmania, Cuba, Haití, Honduras, Irlanda, Israel, Jordania, Malawi, Mongolia, Omán, Portugal, República Arabe Siria, República Dominicana, República Khmer, Sudáfrica, Uganda y Yemen Democrático. También asistieron a las sesiones representantes de los organismos especializados, del OIEA y de la UNCTAD.

49. Al final del período de sesiones de marzo, el Presidente de la Subcomisión I comunicó al Presidente de la Comisión los progresos realizados en los trabajos de la Subcomisión (A/AC.138/SC.I/L.11). Al final del período de sesiones de julio y agosto, en la 61a. sesión, la Subcomisión aprobó su informe a la Comisión.

50. La Mesa de la Subcomisión I estuvo formada por los representantes siguientes:

Presidente:	Sr. Paul Bamela Engo (Camerún)
Vicepresidentes:	Sr. S.M. Thompson-Flores (Brasil) Sr. G. Fekete (Hungría) SR. C.V. Ranganathan (India)
Relator:	Sr. H.C. Mott (Australia)

51. En su 33a. sesión, celebrada el 6 de marzo de 1972, la Subcomisión aprobó su programa de trabajo para 1972. Este programa, que se basaba en un documento de trabajo presentado a la Subcomisión en agosto de 1971, fue aprobado oficialmente con algunas enmiendas. El programa de trabajo era el siguiente:

Tema 1: Estatuto jurídico, alcance y disposiciones básicas del régimen, sobre la base de la Declaración de Principios (resolución 2749 (XXV)).

Tema 2: Estatuto jurídico, alcance, funciones y facultades del mecanismo internacional en relación con:

a) Órganos del mecanismo internacional, incluso la composición, los procedimientos y la solución de controversias;

---

7/ Ibid., A/8421, párr. 19.



- b) normas y prácticas relacionadas con actividades relativas a la explotación, la explotación y la administración de los recursos de la zona, así como las relativas a la preservación del medio marino y la investigación científica, incluso la asistencia técnica a los países en desarrollo;
- c) la distribución equitativa de los beneficios que se deriven de la zona, teniendo presentes los intereses y las necesidades especiales de los países en desarrollo, ya sean ribereños o carentes de litoral;
- d) las consideraciones y consecuencias económicas relacionadas con la explotación de los recursos de la zona, incluso su elaboración y comercialización;
- e) las necesidades y los problemas particulares de los países sin litoral;
- f) la relación entre el mecanismo internacional y el sistema de las Naciones Unidas.

52. Además de varios documentos de información general, la Subcomisión tuvo a la vista el cuadro comparativo de proyectos de tratado, documentos de trabajo y proyectos de artículos compilado por la Secretaría (documento A/AC.138/L.10) y presentado a la Subcomisión por el representante del Secretario General en la 34a. sesión y un informe del Secretario General titulado "Notas adicionales sobre las posibles consecuencias económicas de la extracción de minerales de la zona internacional de los fondos marinos" (A/AC.138/73) (anexo II, 2) fue presentado por el Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales en la 48a. sesión. El Secretario General de la UNCTAD hizo una declaración en la misma sesión. A solicitud de la Subcomisión, ambas declaraciones fueron publicadas como documentos oficiales (A/AC.138/SC.I/L.12 y 13). La Subcomisión decidió pedir a la Secretaría que preparara una lista de las decisiones pertinentes tomadas en el tercer período de sesiones de la UNCTAD. Esa lista se distribuyó con la signatura A/AC.138/SC.I/L.14. También se distribuyeron las resoluciones aprobadas por la UNCTAD.

53. Se presentaron los siguientes documentos:

- a) Documento de trabajo relativo al concepto de una zona intermedia (presentado por los Países Bajos) (A/AC.138/SC.I/L.19);
- b) Problemas institucionales relativos al Organismo de los fondos marinos: el Consejo (presentado por la delegación de Italia) (A/AC.138/SC.I/L.15);
- c) Tesoros arqueológicos e históricos de los fondos marinos y oceánicos fuera de los límites de la jurisdicción nacional (presentado por la delegación de Grecia) (A/AC.138/SC.I/L.16).

#### B. Tema 1 del programa de trabajo

54. La Subcomisión examinó el tema 1 de su programa de trabajo, titulado Estatuto jurídico, alcance y disposiciones básicas del régimen, sobre la base de la Declaración de Principios (resolución 2749 (XXV)), en sus sesiones 33a. a 40a., celebradas en marzo. Participaron en los debates unas 42 delegaciones.

55. Una opinión común fue la de que la expresión "estatuto jurídico del régimen" denotaba la naturaleza jurídica del régimen. En este sentido, muchos oradores pusieron de relieve que el principio 9 de la Declaración de Principios determinaba que el régimen se establecería, "mediante la concertación de un tratado internacional de carácter universal, que cuente con el acuerdo general". Subrayaron el hecho de que el tratado debía tener carácter universal. Varias delegaciones expresaron la opinión de que, para cumplir lo dispuesto en el principio 9, el tratado debía estar abierto a la participación de todos los Estados, pero otras delegaciones estimaron que no era oportuno examinar la cuestión en esta fase.

56. En lo que toca al poder que debería otorgar el tratado a la autoridad internacional sobre la zona situada fuera de los límites de la jurisdicción nacional hubo discrepancia de opiniones. Algunas delegaciones se mostraron partidarias de que la autoridad internacional debía ejercitar soberanía sobre la zona y sus recursos en nombre de la comunidad internacional y como consecuencia de que la zona es patrimonio común de la humanidad. Otras delegaciones expresaron la opinión de que el tratado no debía conferir soberanía al mecanismo internacional sobre la zona situada fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Estimaron que sería más oportuno hablar en este caso de jurisdicción. También se expresó el punto de vista de que ni siquiera se debía conferir la jurisdicción al mecanismo internacional y que ninguna de las disposiciones del tratado debía dar al mecanismo fundamentos jurídicos para considerarse propietario o poseedor de los fondos marinos.

57. Muchos oradores consideraron que era indispensable hallar los medios de garantizar que los Estados que no fueran parte en el instrumento por el que se creara el régimen respetaran no obstante las disposiciones del tratado. Varios de ellos dijeron que era necesario dado el carácter objetivo del concepto de patrimonio común. Algunos oradores alegaron a este respecto que los instrumentos de derecho internacional sólo podían obligar a los Estados que fueran parte en ellos; en relación con este punto, se destacó la necesidad de lograr un tratado generalmente aceptable. Se indicó también que se habían presentado propuestas a la Comisión, basadas en la Declaración de principios. Con arreglo a las cuales no se reconocerían las reivindicaciones incompatibles con el tratado.

58. La expresión "alcance del régimen" se interpretó en el sentido de que indicaba su zona de aplicación y las actividades que debía comprender. Los debates sobre esta cuestión revelaron divergencias de opinión respecto de los tres problemas fundamentales:

- a) la zona a la que se aplicaría el régimen;
- b) los recursos a los que se aplicaría el régimen;
- c) las actividades relacionadas con la zona y sus recursos a las que se aplicaría el régimen.

59. Algunas delegaciones señalaron que la definición de la zona de aplicación del régimen planteaba dos cuestiones. Una era el problema de delimitar la zona de los fondos marinos situada fuera de la jurisdicción nacional. Se reiteró la opinión de que la zona internacional debía ser lo más extensa posible y que la cuestión de los límites de los fondos marinos debía examinarse lo antes posible. Se reafirmó además que, de conformidad con el séptimo párrafo del preámbulo de la resolución 2750 C (XXV), debía darse prioridad al régimen internacional y que la cuestión

de los límites debía examinarse en esta perspectiva. Algunas delegaciones afirmaron que existía una estrecha relación entre el límite que había de trazarse en su momento y la naturaleza del régimen que se trataba de establecer. Estas delegaciones estimaron que la zona internacional debía ser lo más extensa posible, en la inteligencia de que se conferirían al organismo facultades suficientemente amplias para alcanzar sus objetivos. Otras delegaciones se refirieron a la relación que existe entre el límite en el fondo marino y los límites en otros espacios marítimos y la consiguiente necesidad de tratarlos en conjunto, según lo acordó la Comisión al organizar sus trabajos; también destacaron la relación que existe entre todos los límites y regímenes aplicables al espacio oceánico.

60. La segunda cuestión consistía en decidir si el régimen debía aplicarse únicamente a los fondos marinos y sus recursos o bien debía aplicarse igualmente a todo el espacio oceánico situado fuera de la jurisdicción nacional. Muchas delegaciones expresaron la opinión de que el régimen debía aplicarse exclusivamente a los fondos marinos y sus recursos y sostuvieron que ello estaba en consonancia con la Declaración de Principios. También se expresó el punto de vista de que el régimen debía comprender facultades relativas a todo el espacio oceánico.

61. Varios oradores declararon que el régimen no debía afectar a las libertades reconocidas en la alta mar y al estatuto jurídico de alta mar de las aguas suprayacentes a la zona fuera de la jurisdicción nacional. Consideraron que ya existían normas de derecho internacional respecto de la alta mar y del espacio aéreo, que debían ser mantenidas. Se refirieron también en este sentido al Principio 13 a), con arreglo al cual ninguna de las disposiciones de la Declaración podría afectar al "estatuto jurídico de las aguas suprayacentes de la zona ni al del espacio aéreo situado sobre esas aguas". Varios oradores afirmaron que el régimen debía referirse a todos los aspectos necesarios de la administración de los fondos marinos y oceánicos y sus recursos, fuera de la jurisdicción nacional, sin afectar, tanto en lo que respecta a su naturaleza como a su ámbito de aplicabilidad, aquellas libertades de la alta mar no reguladas por las disposiciones de la futura convención. Algunos oradores señalaron que quizá fuera preciso encontrar algún medio de armonizar el ejercicio de los derechos de los Estados en la alta mar con las actividades en los fondos marinos autorizadas por el régimen, ya que podían surgir incompatibilidades entre unos y otras.

62. Ciertas delegaciones estimaron que el régimen debía aplicarse tanto a los recursos vivos como a los recursos no vivos de los fondos marinos. No obstante, algunas delegaciones consideraron que debía aplicarse únicamente a los recursos no vivos. Varios oradores recordaron la definición de los recursos naturales que se daba en el párrafo 4 del artículo 2 de la Convención sobre la Plataforma Continental que a su juicio debía tomarse en consideración. Se expresó también la opinión de que el régimen podía comprender los minerales en suspensión en el agua del mar y quizá los recursos vivos del mar. Otros muchos oradores consideraron que ello no era conveniente.

63. En cuanto a la tercera de las cuestiones anteriormente mencionadas, la de las actividades relacionadas con la zona y sus recursos a las que se aplicaría el régimen, se señaló que la Declaración de Principios disponía que todas las actividades relacionadas con la exploración y explotación de los recursos de la zona y demás actividades conexas estarían reguladas por el régimen internacional. Algunos oradores señalaron que este texto era impreciso y que sería necesario aclararlo más.

64. Se indicó que aun cuando la finalidad primordial del régimen se limitara a la exploración y explotación ordenada de los recursos minerales de la zona, este objetivo sólo podría alcanzarse efectivamente creando un mecanismo internacional dotado de competencia y poderes con respecto al mantenimiento de la integridad territorial y jurisdiccional y a la armonización de las distintas formas de utilización de la zona. Se afirmó que el régimen debía comprender facultades para controlar la investigación científica y la contaminación, y no simplemente en relación con las actividades que se desarrollaran en los fondos marinos, sino también en el espacio oceánico en su totalidad, así como para ocuparse del empleo de una tecnología potencialmente peligrosa para el medio marino. Además, varias delegaciones señalaron que las actividades comprendidas en el régimen debían limitarse a los fondos marinos y no constituir un obstáculo para las actividades de los Estados en las aguas suprayacentes o en los océanos en general. En relación con este asunto, muchos oradores opinaron que sería necesario prever en el régimen atribuciones apropiadas en lo que se refiere a la preservación del medio marino, la contaminación imputable a las actividades y las investigaciones científicas realizadas en los fondos marinos. Algunos oradores objetaron que no era procedente que el régimen reglamentase la investigación científica y actividades tales como el tendido de tuberías y cables, puesto que ya existían normas de derecho internacional aplicables a estas materias.

65. Varios oradores señalaron que las medidas de control de armamentos y de desarme no debían ser de la competencia del organismo, pues ya existían mecanismos que abarcaban esas actividades. Otros oradores expresaron la creencia de que tal vez conviniese dar competencia al organismo en lo relativo a las actividades de control de armamentos. Se expresó la opinión de que se debía prohibir la utilización de los fondos marinos y de su subsuelo para fines militares, y que en las conversaciones sobre el desarme, se habían de negociar medidas específicas a este respecto. El tratado sobre los fondos marinos no se habría de interpretar en perjuicio de cualesquiera medidas que se hubiesen acordado o que pudieran acordarse en el curso de tales negociaciones.

66. Ciertas delegaciones consideraron que, mientras no se alcanzara el objetivo de la prohibición total y la destrucción completa de las armas nucleares, el hecho de reclamar la prohibición de los ensayos nucleares sólo podía favorecer el propósito de consolidar el monopolio nuclear de las grandes Potencias nucleares. En la actualidad, lo que habría que prohibir en primer lugar eran las actividades de los submarinos nucleares en la zona internacional de los fondos marinos y en la zona de los fondos marinos de otros países; también debería prohibirse la instalación de armamentos nucleares y de cualquier otro tipo de armamentos en esa zona.

67. Por lo que respecta al tercero de los conceptos incluidos en el tema 1 del programa de trabajo, a saber, las disposiciones básicas del régimen, las delegaciones reconocieron en general la necesidad de identificar conceptos básicos inspirados en la Declaración de Principios que pudiesen convertirse en artículos de tratado que logran la más amplia aceptación posible. Se consideró, además, que algunos de los conceptos expresados en los principios debían enunciarse con mayor claridad y que otros debían ampliarse en determinados sentidos. A pesar de ciertas reservas, en términos generales se esperaba que por lo menos algunos de los principios podrían convertirse sin dificultad en textos de disposiciones convencionales.

68. Sin embargo, algunas delegaciones advirtieron que el objetivo de la Declaración de Principios no podría lograrse si no se hacía más que repetir éstos en el tratado.

Aun admitiendo que algunos de los principios podían servir de base para el futuro tratado, esas delegaciones consideraron que los términos en que estaban formulados otros principios les daban más bien el carácter de directrices para la redacción de artículos.

69. Entre otras cuestiones que se plantearon durante las deliberaciones figuraron las siguientes. Muchos oradores pidieron encarecidamente que, en las negociaciones sobre el régimen, se tuviese siempre presente la necesidad de eliminar la disparidad existente entre los países desarrollados y los países en desarrollo y que, para facilitar el logro de este objetivo, convenía hacer hincapié en la cuestión de la transmisión de tecnología. Se expresó la opinión de que, hasta que entrase en vigor el tratado que se estaba negociando, se debían establecer un régimen y un mecanismo internacionales transitorios, basados en la Declaración de Principios, que rigieran todas las actividades de investigación y experimentación comerciales relativas a la minería de los fondos marinos. Asimismo se manifestó la opinión de que no sería oportuno estudiar la cuestión de un régimen y un mecanismo transitorios antes de que se adoptaran las decisiones relativas a ciertos aspectos esenciales del régimen y el mecanismo definitivos, en la medida en que ello tendería a prejuzgar las decisiones que habían de adoptarse sobre esos aspectos. También se afirmó que, al redactar artículos de tratado, se debía tener presente la posibilidad de modificar la base que suministraba la Declaración de Principios. Se expresó la opinión de que, si resultase imposible negociar artículos convenidos sobre los aspectos del régimen, se podía seguir la práctica de incluir variantes de los textos.

70. En la 40a. sesión de la Subcomisión, el Presidente resumió las deliberaciones y su resumen, por decisión de la Subcomisión, se distribuyó como documento A/AC.138/SC.I/L.10.

71. La Subcomisión accedió a una propuesta del Presidente de establecer un Grupo de Trabajo sobre el régimen internacional con el mandato de preparar, en una primera etapa, un documento de trabajo en el que se consignasen las esferas de acuerdo y desacuerdo respecto de las diversas cuestiones. Luego, el Grupo de Trabajo intentaría negociar las cuestiones de fondo en torno a los puntos sobre los que no hubiese acuerdo. La finalidad sería, en la medida de lo posible, obtener un conjunto de ideas aceptadas. Se llegaría a la etapa de redacción tras un nuevo examen. El objetivo consistiría entonces en producir un proyecto de artículos de tratado.

72. Se acordó que el Grupo de Trabajo contaría con 33 miembros, pero permanecería abierto para que los no miembros pudiesen presentar propuestas o los que ya las hubiesen presentado pudiesen participar en el examen de las mismas. Fueron designados miembros del Grupo de Trabajo los Estados siguientes: Afganistán, Argelia, Australia, Canadá, Checoslovaquia, Estados Unidos de América, Etiopía, Finlandia, Francia, Indonesia, Irak, Irán, Japón, Kenia, Kuwait, Madagascar, Malí, Malta, Marruecos, México, Nigeria, Perú, Polonia, Rumania, Senegal, Sri Lanka, Trinidad y Tabago, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela, Zaire, Zambia.

#### C. Grupo de Trabajo encargado de estudiar el régimen internacional

73. Durante el período de sesiones de primavera de la Comisión el Grupo de Trabajo celebró dos sesiones, el 28 y el 29 de marzo de 1972, en la primera de las cuales eligió Presidente al Sr. C.W. Pinto (Sri Lanka). En julio y agosto celebró 20 sesiones, en cumplimiento del mandato que le había conferido la Subcomisión.

74. Al iniciar sus reuniones durante el período de sesiones de julio y agosto el Grupo tuvo a la vista un documento de trabajo oficioso que constituía un intento preliminar de recoger en un solo documento, mediante el empleo de corchetes y la inclusión de variantes, los puntos en que existía acuerdo o desacuerdo sobre cuestiones relativas al estatuto jurídico, el alcance y las disposiciones básicas del régimen, tal como se habían puesto de manifiesto en los debates de la Comisión y de la Subcomisión I. Ese documento contenía 21 textos sobre los siguientes aspectos del estatuto jurídico, el alcance y las disposiciones básicas del régimen, sobre la base de la Declaración de principios: límites de la zona; patrimonio común de la humanidad; actividades relacionadas con la exploración y la explotación de los recursos de la zona; no apropiación ni reivindicación o ejercicio de soberanía o derechos soberanos; no reivindicación ni adquisición de derechos incompatibles con el régimen; no reconocimiento de reivindicaciones incompatibles con la convención; utilización de la zona por todos los Estados sin discriminación; aplicabilidad de los principios y normas del derecho internacional; beneficio de toda la humanidad; reserva de la zona exclusivamente para fines pacíficos, quiénes pueden explotar la zona; normas generales relativas a la explotación; investigación científica; transmisión de tecnología; protección del medio marino; respeto de los derechos e intereses de los Estados ribereños; estatuto jurídico de las aguas suprayacentes; no entorpecimiento de otras actividades en la zona; responsabilidad de garantizar la observancia del régimen; y arreglo de controversias.

75. El Grupo de Trabajo terminó el 28 de julio de 1972 una primera lectura de los textos destinada a confirmar que éstos reflejaban cabal y exactamente las opiniones de los miembros. Como resultado de esa primera lectura, se revisó el documento de trabajo para tener en cuenta las opiniones expresadas. En una segunda lectura de los textos revisados se procuró reducir en lo posible los puntos de desacuerdo y refundir las variantes cuando no existían divergencias de planteamiento fundamentales. El resultado de la labor del Grupo figura en el anexo II, 1 del presente informe. Al incluir sus reuniones, el Grupo de Trabajo había terminado la segunda lectura de los textos siguientes: patrimonio común de la humanidad; actividades relacionadas con la exploración y la explotación; no apropiación ni reivindicación o ejercicio de soberanía o derechos soberanos, ni de derechos incompatibles con los artículos del tratado; no reconocimiento de ninguna de tales reivindicaciones o del ejercicio de ninguno de esos derechos; y utilización de la zona por todos los Estados sin discriminación.

76. Cabe señalar que: a) el Grupo no examinó la materia que se proponía incluir en el texto 1; b) el Grupo no consideró los títulos ni las notas marginales, ni tampoco la cuestión del lugar en que podrían figurar los textos; c) algunos miembros del Grupo formularon reservas en cuanto a la competencia de éste para tratar algunos de los temas a que se referían los textos; d) se siguió recurriendo a los corchetes y a las variantes para indicar los puntos en que no resultó posible reflejar los pareceres en un texto único; e) algunos miembros no consideraron que fuesen necesariamente exhaustivas las cuestiones tratadas en los textos.

77. Se señala a la atención de los miembros la nota de introducción relativa al enfoque unitario propuesto por la delegación de Malta, así como a las notas de pie de página en que algunas delegaciones aceptaron que se hicieran constar sus puntos de vista.



D. Tema 2 del programa de trabajo

78. El examen del tema 2 del programa de trabajo, relativo al estatuto jurídico, alcance, funciones y facultades del mecanismo internacional, se inició durante el período de sesiones de marzo, en el que la Subcomisión escuchó a 42 oradores, y concluyó en el período de sesiones de julio y agosto, en el que la Subcomisión dedicó cuatro sesiones a escuchar a otros 11 oradores.

79. Varias delegaciones señalaron que en general existía una estrecha relación entre los temas 1 y 2 del programa de trabajo, puesto que el estatuto jurídico, alcance y disposiciones básicas del régimen tendrían que reflejarse en el estatuto jurídico, alcance, funciones y facultades del mecanismo.

80. Una opinión bastante generalizada fue la de que habría que resolver varias cuestiones básicas antes de que la Subcomisión pudiera avanzar en sus trabajos. Entre esas cuestiones figuraban la delimitación de la zona en la que el mecanismo ejercería su autoridad, las facultades del mecanismo y los recursos de la zona.

81. Muchas delegaciones hablaron de la cuestión de los límites en relación con el régimen y el mecanismo exponiendo opiniones parecidas a las expresadas en el debate sobre el tema 1 del programa de trabajo, que se recogen en el párrafo 59 del presente informe.

a) Organos del mecanismo internacional, incluida la composición, los procedimientos y el arreglo de controversias

82. Muchos oradores estimaron que el mecanismo internacional debía ser el poder ejecutivo y administrativo del régimen y que tanto éste como el mecanismo debían establecerse mediante un tratado o varios tratados internacionales de carácter universal.

83. Muchos oradores sostuvieron que el mecanismo debía tener facultades amplias y claramente definidas que le permitiesen lograr el objetivo principal del régimen, consistente, según la Declaración de Principios, en prever el aprovechamiento ordenado y sin riesgos y la administración racional de la zona internacional de los fondos marinos y de sus recursos, así como la ampliación de las oportunidades de utilizarlos, y en garantizar la participación equitativa de los Estados en los beneficios que de ello se deriven, habida cuenta de los intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo, ya sean ribereños o sin litoral. Otras delegaciones opinaron que el mecanismo internacional debía tener las funciones necesarias para reglamentar la exploración y explotación industriales de los fondos marinos y de su subsuelo.

84. Algunos oradores consideraron que el mecanismo debía tener personalidad jurídica internacional y explicaron que entendían por ello que debía tener, entre otras cosas, facultades para concertar convenios, poseer o enajenar bienes y celebrar contratos.

85. En general se opinó que el mecanismo debía estar constituido por, al menos, dos clases de órganos:

Primero, una asamblea u órgano plenario, en el que estarían representados todos los Estados partes en el tratado. Muchos oradores expusieron su opinión sobre las facultades que debían conferirse a la asamblea, y a este respecto se

pudo advertir un acuerdo bastante amplio en la Subcomisión. Muchos oradores, por ejemplo, se mostraron partidarios de que se diera a cada miembro de la asamblea un voto en sus deliberaciones, pero todavía no parecía haber acuerdo sobre la manera en que deberían tomarse las decisiones.

Segundo, un consejo u órgano ejecutivo. Sólo se manifestó acuerdo respecto de la idea de que la composición del consejo debía ser tal que le permitiera ser representativo y funcionar eficazmente. En cambio, se registraron considerables diferencias con respecto a características fundamentales del consejo, como el número de miembros, los intereses que en él debían estar representados, la forma en que debía constituirse y el proceso de adopción de decisiones.

86. Se señaló que en las propuestas sometidas a la Subcomisión se preveía una representación de entre 18 y 35 Estados en el consejo. En cuanto a los procedimientos de votación, aunque muchos oradores consideraron que cada Estado debería tener un voto, no hubo acuerdo sobre si las decisiones debían adoptarse por mayoría simple, por una mayoría más amplia o por una mayoría calificada de otro modo. Se expresó la opinión de que las decisiones deberían adoptarse por consenso cuando se tratase de cuestiones de fondo. Se afirmó que la composición y los procedimientos habrían de proteger debidamente a los Estados que por su situación estuvieran más afectados. Esto suscitó objeciones de otros representantes, que estimaban que semejantes composiciones y procedimientos probablemente malograrían o dificultarían la labor del consejo.

87. Muchas delegaciones también afirmaron que sería necesario crear un servicio administrativo o secretaría y definir procedimientos para el arreglo de controversias. Unos consideraron que ese procedimiento debía consistir en la creación de un tribunal, que sería establecido por el tratado junto con el mecanismo. Otros pensaban que la Corte Internacional de Justicia podría desempeñar funciones a este respecto, estimando algunas delegaciones que sus normas de procedimiento deberían ser aligeradas; otros consideraban, al parecer, que en el proceso de arreglo de controversias podía haber lugar para un tribunal especial y para la Corte Internacional de Justicia. Varios oradores fueron partidarios de un procedimiento (que tal vez incluyese la conciliación y mediación) que llevara al arreglo obligatorio de las controversias, al que algunos atribuían la mayor importancia, mientras que otros oradores fueron partidarios de procedimientos no obligatorios.

88. Varias delegaciones consideraron que deberían crearse otros órganos, dando preeminencia a la empresa internacional de fondos marinos, que a su juicio sería el órgano fundamental del mecanismo encargado de todas las actividades técnicas, industriales y comerciales relacionadas con la exploración de la zona y la explotación de sus recursos.

89. Se hicieron otras sugerencias sobre la creación de órganos principales del mecanismo. Por ejemplo, se sugirió el establecimiento de una comisión económica y técnica o de algún órgano similar, que desempeñase funciones concretas en cuanto a la realización efectiva de las operaciones. Otra sugerencia se refirió a la creación de una comisión de operaciones, una comisión de normas y prácticas recomendadas y una comisión de revisión de límites. Se propuso asimismo el establecimiento de un organismo de distribución y una junta de estabilización que se encargasen, respectivamente, de la distribución de beneficios y la estabilización de los precios.



90. Se expresó una amplia gama de opiniones sobre la cuestión de si el mecanismo debía estar facultado para realizar por sí mismo actividades de exploración o explotación o si debía ser un órgano que extendiese licencias a tal fin.

91. Algunos representantes afirmaron que el mecanismo debía encargarse principalmente de extender a los Estados licencias de exploración y explotación así como licencias para ciertas actividades relacionadas con esta función.

92. Otros oradores sostuvieron que el mecanismo debía ser el único facultado para explorar y explotar la zona internacional de los fondos marinos, por ejemplo, a través de una sociedad o empresa que formaría parte del mecanismo y podría recurrir a contratistas o participar en empresas mixtas.

93. Otros aún pensaban que la solución residía en un sistema mixto mediante el cual el organismo extendiese licencias y, al mismo tiempo, estuviese facultado para explorar y explotar los recursos, directamente o por medio de agentes contratados a tal fin.

94. Varios oradores, entre ellos algunos cuyas delegaciones eran partidarias de conferir al mecanismo la facultad de realizar directamente operaciones, declararon que, por lo menos al principio, el otorgamiento de licencias sería, por necesidad, una de las funciones principales del mecanismo, ya que a éste le llevaría tiempo desarrollar la capacidad técnica y financiera de realizar operaciones por su cuenta. Consideraron, sin embargo, que esta cuestión de tiempo era un problema práctico, que podría resolverse oportunamente dentro del organismo.

95. Algunos oradores afirmaron que los Estados debían ser la entidad básica autorizada para participar en las operaciones de los fondos marinos y que los Estados, a su vez, podrían extender licencias a entidades que se encargasen de la exploración y la explotación o realizar esas actividades por su cuenta. En este contexto, algunas delegaciones bosquejaron las disposiciones que podrían adoptarse para garantizar una asignación equitativa de las licencias a los Estados participantes. Se expresó asimismo la opinión de que el mecanismo debía extender licencias directamente a personas naturales o jurídicas, sin que los Estados fuesen intermediarios entre él y las entidades. A este respecto, se indicó que esas personas naturales o jurídicas podrían ser patrocinadas y fiscalizadas por una parte contratante.

96. Una delegación se mostró partidaria de un planteamiento global de los problemas de espacio oceánico y esperaba que se crease, no ya una entidad u organismo, sino un sistema institucional. En el parecer de esa delegación, el sistema institucional debía tener competencia no sólo para aprovechar y administrar el espacio oceánico y sus recursos fuera de los límites de la jurisdicción nacional en interés de la humanidad, sino también para ocuparse de una amplia gama de cuestiones de interés internacional, incluida la conservación del medio marino y el mantenimiento del orden en el espacio oceánico. Esa delegación sugirió, a este respecto, que se creara un mecanismo compuesto de una asamblea, un consejo que tuviese bajo su autoridad tres comisiones principales, un tribunal marítimo internacional y una secretaría.

97. Se expresaron también algunas otras opiniones, a saber: que las operaciones realizadas en los fondos marinos no debían tener por resultado una intervención injustificada en otras actividades del medio marino; que la responsabilidad por

daños era un asunto importante que debía examinarse; que debían existir disposiciones para ampliar las facultades del mecanismo a medida que se expandiera su esfera de competencia; y que se necesitarían poderes para controlar las repercusiones económicas de la producción de los fondos marinos en las industrias situadas en tierra.

- b) Reglas y prácticas relativas a las actividades de exploración, explotación y ordenación de los recursos de la zona, así como a la preservación del medio marino y la investigación científica, incluida la asistencia técnica a los países en desarrollo

98. Varias delegaciones señalaron que el tratado debería ser flexible en cuanto a la formulación de las reglas y prácticas, a fin de que éstas pudieran ser modificadas paralelamente a la evolución de la tecnología. A este respecto se afirmó que en el tratado deberían especificarse los parámetros generales del sistema de control de la exploración y explotación y que dentro de esos parámetros se podrían promulgar las reglas y prácticas necesarias. Algunas delegaciones hicieron observar que esto planteaba la cuestión de alcance del régimen y del mecanismo, y que de la solución que se le diera dependerían hasta cierto punto las reglas y prácticas aplicables.

99. Algunos oradores expusieron sus opiniones sobre los tipos de licencias que podrían expedirse, sobre las zonas y clases de minerales que podrían abarcar y sobre la forma que debería darse a las normas relativas a la concesión de licencias.

100. Algunos oradores señalaron que, para que fuera satisfactorio, un sistema de reglas y prácticas habría de contener disposiciones relativas a la seguridad del título, con objeto de que las entidades explotadoras pudieran operar sobre una base sólida. Algunos consideraron asimismo que tal sistema tendría que ofrecer incentivos adecuados para que esas entidades emprendieran actividades de exploración y explotación.

101. Muchas delegaciones hicieron sugerencias acerca de las facultades adicionales o complementarias que a su juicio debería poseer el mecanismo y que podrían recogerse en las reglas y prácticas convenidas; por ejemplo, en materia de inspecciones y medidas de seguridad, preservación del medio humano, reglamentación de la investigación científica y difusión de información. Otras delegaciones expresaron la opinión de que la investigación científica no era materia propia de la competencia reglamentaria del mecanismo.

102. Por lo que respecta a la lucha contra la contaminación, se afirmó que las facultades del mecanismo no debían limitarse a la contaminación originada en las actividades realizadas en los fondos marinos, sino que debían extenderse más en general a la contaminación que pudiera afectar a los fondos marinos o a las actividades realizadas en ellos. Se expresó también la opinión de que, al estudiar la preservación del medio marino, un método práctico para establecer un sistema de responsabilidad conjunta de los Estados y la comunidad internacional consistiría en recurrir a la experiencia de los Estados en la formulación de medidas de lucha contra la contaminación a partir del control de la exploración y explotación de la plataforma continental.

103. Varios oradores se refirieron al concepto de zona intermedia, sobre el cual se había presentado un documento de trabajo en marzo (véase el párrafo 53 a) del presente informe). Se dijo que en tal zona la aplicación de ciertas normas internacionales de carácter general sería obligatoria. Dos ejemplos de estas normas serían la protección del medio marino y la prevención del entorpecimiento injustificable de otros usos de las aguas suprayacentes como, por ejemplo, la navegación.

- c) Participación equitativa en los beneficios que puedan derivarse de la zona teniendo presentes los intereses y las necesidades especiales de los países en desarrollo, tanto ribereños como sin litoral

104. Muchas delegaciones trataron de este tema en sus declaraciones. Refiriéndose a la Declaración de Principios, afirmaron que el régimen que se estableciera debería garantizar la participación equitativa de los Estados en los beneficios derivados de la exploración y explotación.

105. A este respecto, la Subcomisión tuvo a su disposición el estudio del Secretario General que figura en el documento A/AC.138/38 y Corr.1, titulado "Criterios y métodos posibles para que la comunidad internacional comparta los ingresos y demás beneficios obtenidos de la explotación de los recursos de la zona situada fuera de los límites de la jurisdicción nacional" <sup>8/</sup>. En este documento se estudiaba el problema de llegar a un método convenido de distribución de beneficios y se demostraba que habría que tomar ciertas decisiones básicas antes de poder cumplir esa tarea. Se expresaba la opinión de que era difícil formular opiniones significativas y detalladas sobre la distribución de beneficios sin disponer de datos más precisos acerca de la zona internacional y de sus recursos.

106. Una observación que se hizo repetidas veces durante el debate fue que el término "beneficio" no comprendía solamente los beneficios económicos o ingresos. Se expresó el parecer de que el concepto abarcaba entre otras cosas, el acceso a las materias primas y el acceso a la información científica. También se planteó bajo este epígrafe general la cuestión de la prestación de servicios de formación profesional y la transmisión de tecnología. Algunas delegaciones señalaron la conveniencia de que todos los Estados participantes, independientemente de su situación geográfica o económica, pudieran tomar parte directamente en la explotación y explotación de los recursos de la zona. Se afirmó además, que los ingresos no debían distribuirse en forma de ayuda, sino directamente a los Estados participantes, como la parte del patrimonio común que de derecho les correspondía, para que éstos hicieran de ellos el uso que estimaran conveniente.

107. En cuanto a los criterios para distribuir los beneficios, muchos oradores apoyaron la opinión de que los países en desarrollo merecían especial consideración. Se dijo que los ingresos debían distribuirse entre los Estados participantes con arreglo a sus necesidades. Se señaló también que el total de ingresos debía dividirse en dos partes, una para los países en desarrollo y la otra para los países desarrollados y que la parte correspondiente a los primeros debía ser considerable. Algunos oradores sugirieron que se utilizaran criterios combinados de población e ingreso por habitante; otra opinión fue que la distribución se hiciera en proporción inversa a las cuotas que los Estados aportaban a las propias Naciones Unidas. Se indicó que la base de la distribución de los beneficios adoptada para

---

<sup>8/</sup> Ibid., párr. 23.

un período determinado debía revisarse una vez cada cinco años a fin de hacer los ajustes que aconsejara cualquier cambio en las circunstancias. Se expresó la opinión de que los beneficios obtenidos en virtud del tratado, sólo debían ser percibidos por los Estados que los ratificaran o se adhirieran a él.

108. A este respecto se declaró que sería posible confiar en las organizaciones internacionales y regionales existentes a efectos de la distribución. Contrariamente a esta opinión se dijo que sería un error encauzar los beneficios económicos por conducto de cualesquiera organizaciones internacionales de asistencia económica y técnica. Por el contrario, debía idearse la manera de que los beneficios fuesen percibidos directamente por los Estados.

109. También se opinó que los intereses y necesidades particulares de los Estados sin litoral o de plataforma encerrada, que consideraban esta cuestión de gran importancia, debían tenerse muy en cuenta en relación con la distribución de los beneficios.

110. Por lo que respecta al concepto de zona intermedia, se expuso el parecer de que no podía existir un sistema de distribución realmente equitativo si no se adoptaban también disposiciones sobre la distribución de los ingresos procedentes de zonas importantes del margen continental, que contenían valiosos yacimientos de petróleo y gas. Por esa razón, sería necesario establecer una zona intermedia que incluyera al menos parte del margen continental. La fórmula exacta para determinar el volumen de los ingresos internacionales procedentes de una zona intermedia era negociable.

111. Una delegación opinaba que los Estados ribereños debían aportar a la comunidad internacional una proporción, que se determinaría en su momento, de los beneficios económicos obtenidos de la explotación del espacio oceánico dentro de su jurisdicción. Otra delegación recordó que su país estaba dispuesto a contribuir a la comunidad internacional con un porcentaje de los beneficios obtenidos no sólo de la zona intermedia sino también de todos los fondos marinos del mar territorial y la plataforma continental.

d) Consideraciones económicas relativas a la explotación de los recursos de la zona, incluida su elaboración y comercialización y repercusiones de la misma

112. El examen de la cuestión planteó aspectos claramente importantes para muchas delegaciones, cuyos representantes expresaron inquietud por el hecho de que la producción de los fondos marinos pudiera perturbar las condiciones del mercado y crear dificultades para los productores terrestres de los recursos de que se trataba. Algunos oradores insistieron en que el mecanismo debía tener facultades para controlar la producción, elaboración y comercialización de los recursos de la zona. Otras delegaciones señalaron que existía la posibilidad de que la imposición de controles restrictivos frenara el desarrollo de la minería de los fondos marinos, y que ello iría en detrimento de los intereses de la comunidad internacional. Algunos representantes parecían prever que cualquier mecanismo creado al efecto funcionaría teniendo presentes los intereses de los países en desarrollo y estimaron que las facultades del mecanismo al respecto debían ser amplias.

113. Se hizo la sugerencia de que, además de conferir tales facultades al mecanismo, debía crearse un pequeño servicio de estabilización de los precios. Se opinó también que el control de la producción de la zona fuera de los límites de la jurisdicción nacional podría lograrse limitando el número de concesiones hechas, reservando cierta parte de la producción, estableciendo un impuesto de estabilización o previendo algún medio de compensación. Algunas delegaciones sugirieron que se utilizaran convenios internacionales sobre productos básicos que abarcasen tanto la producción en los fondos marinos como la terrestre. Se sugirió también que se estableciese un límite máximo para la producción de minerales de los que hubiera excedentes en el mercado mundial. Se declaró que los métodos y procedimientos utilizados debían ser objeto de constante revisión a la luz de los acontecimientos.

114. Otros oradores hablaron del papel que podían desempeñar las organizaciones internacionales existentes, entre ellas la UNCTAD, para reducir al mínimo cualesquiera efectos perjudiciales de la producción de los fondos marinos. Algunas delegaciones señalaron que todavía no estaba demostrado que los minerales de los océanos pudieran competir a los actuales niveles de precios reales. A este respecto se expresó la opinión de que el mecanismo, previas las consultas necesarias y, en su caso, en colaboración con el órgano o los órganos competentes de las Naciones Unidas y los organismos especializados interesados, debía adoptar medidas destinadas a reducir al mínimo o eliminar las fluctuaciones de los precios de los recursos terrestres y cualesquiera efectos económicos desfavorables que esas fluctuaciones causarían. Se señaló a este respecto que probablemente se tropezaría con grandes dificultades para establecer un sistema internacional de control de la producción o de los precios.

115. También se expresó el parecer de que, con la posible excepción del cobalto, la expansión proyectada de la demanda mundial de los minerales de que se trataba era tal que no cabía pensar que las nuevas fuentes de suministro situadas en los fondos marinos tuvieran ninguna repercusión desfavorable importante en la producción terrestre. Las consecuencias de tratar de establecer un sistema internacional de controles de la producción o de los precios se harían sentir tanto que cualquier intento de hacerlo sólo se traduciría en efectos adversos para el logro de los objetivos de la Subcomisión. Además, las finalidades perseguidas por los partidarios de tal sistema no se lograrían mientras no se instituyese un régimen que abarcase también la producción en tierra. Un sistema de ese tipo era innecesario, y no se debía permitir que su examen entorpeciese otros trabajos. Se sostuvo que, por lo que se refería a la elaboración y comercialización, la tentativa de estudiar los complejos factores que intervenían en el problema podían mantener ocupada a la Subcomisión durante muchos años, ya que se trataba de cuestiones que rebasaban el cometido de la Subcomisión.

116. Se facilitó información sobre los trabajos que algunas compañías estaban realizando en la zona de los fondos marinos profundos. Se afirmó, entre otras cosas, que los procedimientos dirigidos a obtener metales partiendo de nódulos podrían ser económicamente rentables en un futuro próximo y, basándose en los progresos hechos, existían razones para confiar en que los minerales existentes en los fondos marinos pudieran ser explotados en gran escala entre 1975 y 1980. En ese momento, se dispondría gradualmente de considerables recursos nuevos para satisfacer las crecientes necesidades de la humanidad y para proporcionar ingresos

a la comunidad internacional. Varios oradores estimaron que estas perspectivas eran excesivamente optimistas y subrayaron que por el momento no se disponía de indicaciones concretas en cuanto a la posibilidad de una explotación económicamente factible y comercialmente rentable. No obstante las divergencias de opinión que se manifestaron en relación con el período de tiempo que se requeriría para obtener una producción importante de los fondos marinos, hubo acuerdo general acerca de la gran importancia y urgencia del establecimiento de un régimen que asegurase el desarrollo ordenado y racional de esos recursos.

117. Varias delegaciones sostuvieron que los Estados en los que había compañías que se dedicaban a actividades de exploración debían dar seguridades de que mientras no se estableciese el régimen no emprenderían la explotación comercial de los recursos de los fondos marinos en la zona situada fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Se señaló que algunos Estados quizá no dispusieran de la legislación interna apropiada para dar esas seguridades. Algunas delegaciones sugirieron en este contexto que la Comisión reafirmase unánimemente la resolución 2574 D (XXIV) de la Asamblea General. Otras delegaciones reiteraron sus reservas sobre tal resolución.

118. Se expresó la opinión de que, si resultaba imposible llegar sin demora a un acuerdo sobre el régimen y el mecanismo, tal vez conviniese crear un mecanismo de transición que estuviese encargado de regular las actividades de exploración y explotación de los fondos marinos fuera de los límites de la jurisdicción nacional hasta que entrase en vigor el propio régimen. Se criticó esta opinión, alegándose que no se debía tomar en consideración la cuestión hasta que se hubiesen adoptado ciertas decisiones sobre la naturaleza, el alcance y las facultades del mecanismo. Asimismo se declaró que si se establecía un mecanismo de transición se podría demorar el acuerdo final sobre el régimen y el mecanismo.

119. La Subcomisión pidió al Secretario General que reuniese y facilitase información de actualidad sobre las actividades que se estaban realizando en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Tal información figuraba en el documento A/AC.138/73, que el Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales presentó en la 48a. sesión de la Subcomisión (véase el párr. 52 del presente informe). Tal informe fue objeto de un debate distinto en las sesiones 49a. y 50a. de la Subcomisión (véanse los párrs. 130 a 141 del presente informe). La Subcomisión recomendó a la Comisión principal que agregara a su informe el texto del citado estudio del Secretario General (anexo II.2).

e) Necesidades y problemas particulares de los países sin litoral

120. Muchas delegaciones estimaron que las necesidades y los problemas particulares de los países sin litoral merecían ser objeto de consideración favorable. Algunos oradores pusieron de relieve que muchos de los Estados sin litoral eran también Estados en desarrollo y que, en este contexto, los Estados en desarrollo sin litoral merecían especial atención.

121. Algunos oradores relacionaron también los problemas de los Estados de plataforma encerrada con los de los Estados sin litoral. Alegaron que los Estados de plataforma encerrada, por compartir en cierto modo los problemas de los Estados sin litoral, también merecían especial y favorable atención.



122. Se hicieron varias sugerencias para resolver equitativamente los problemas de los Estados sin litoral y de los Estados de plataforma encerrada. Conforme a una de esas sugerencias, los Estados sin litoral merecían especial atención desde el punto de vista de la representación en los órganos del mecanismo: algunos oradores agregaron que los Estados de plataforma encerrada también merecían consideración especial al respecto. Se afirmó que debía establecerse una distinción entre Estados fundamentalmente ribereños y Estados fundamentalmente no ribereños y en que ambas categorías debían estar igualmente representadas en los órganos del mecanismo. Según otro punto de vista debía concederse a los Estados sin litoral, y quizás también a los Estados de plataforma encerrada algún tipo de preferencia en la distribución de los beneficios.

123. Algunos oradores hicieron sugerencias más concretas acerca de la manera de abordar y resolver los problemas de los países sin litoral. Se expresó la opinión de que el mecanismo internacional debía proporcionar a esos Estados la oportunidad de emprender actividades de exploración y explotación de la zona, individualmente, en asociación con otro Estado, como miembro de un grupo de Estados o en cooperación con el organismo de los fondos marinos. También se opinó que el mecanismo internacional debía ofrecer a los Estados sin litoral posibilidades de capacitación en materia de tecnología marina.

124. Se alegó también que el problema podía enfocarse desde una perspectiva regional y en el plano mundial, pero que este punto no podía ser objeto de una discusión provechosa hasta que se hubiera llegado a un acuerdo sobre los límites. En este contexto se manifestó la opinión de que las empresas conjuntas o regionales se subordinaban a acuerdos políticos que quizás no fueran viables en todas las regiones.

125. Algunos oradores, al examinar las dificultades especiales de los países sin litoral las clasificaron bajo varios epígrafes: primero, el derecho de acceso a la zona internacional de los fondos marinos, incluido el tránsito de personas, minerales y equipo desde y hacia la costa, y medios apropiados de transporte y comunicaciones; en segundo lugar, el tránsito por las aguas interiores y el mar territorial de los Estados ribereños y en tercer lugar, la necesidad de servicios en el litoral que permitieran las actividades de exploración y explotación.

126. Se manifestó la opinión de que el tratado propuesto debía declarar que, a los efectos de la exploración y la explotación, los Estados sin litoral tenían derecho de paso por el territorio, las aguas interiores y el mar territorial de los Estados ribereños hasta la zona internacional, y que la forma concreta de ejercer tal derecho se prescribiría en acuerdos bilaterales. Sin embargo, los Estados ribereños deberían estar obligados a celebrar tales acuerdos bilaterales sobre una base razonable. Según otra opinión, los principios de la Convención sobre el comercio de tránsito de los Estados sin litoral debían incorporarse en el derecho del mar que finalmente resultara de las negociaciones.

f) Relaciones entre el mecanismo internacional y el sistema de las Naciones Unidas

127. La mayoría de los oradores que hablaron sobre ese tema, si no todos, parecían pensar que el régimen y el mecanismo se establecerían mediante un tratado o unos tratados internacionales, que crearían una entidad separada en la esfera internacional.

128. Algunos oradores opinaron que el organismo debía formar parte del sistema de las Naciones Unidas, mientras que otros afirmaron que había de permanecer fuera de ese sistema. Estos últimos parecían pensar que el organismo no podía quedar subordinado a las Naciones Unidas ni formar parte del sistema de las Naciones Unidas según se concebía habitualmente, pero que debería existir algún vínculo formal. Se sugirió también que determinados reglamentos y procedimientos utilizados en la Asamblea General quizás se prestaran a su uso en el organismo.

\* \* \*

129. En la 55a. sesión de la Subcomisión, el Vicepresidente resumió los debates relativos al tema 2 del programa de trabajo y su resumen, por decisión de la Subcomisión, fue distribuido con la signatura A/AC.138/SC.I/L.17.

#### E. Extracción de minerales de la zona de los fondos marinos

130. La cuestión de la extracción de minerales de la zona de los fondos marinos situada fuera de la jurisdicción nacional fue examinada por la Subcomisión en sus sesiones 49a. y 50a. Esta cuestión había sido examinada anteriormente, durante el período de sesiones de marzo, en relación con el punto d) del tema 2 del programa de trabajo de la Subcomisión; el resumen del debate correspondiente figura en los párrafos 112 a 119 del presente informe.

131. En su resolución 2750 A (XXV), la Asamblea General había pedido al Secretario General que, en cooperación con la UNCTAD, estudiara los problemas derivados de la extracción de ciertos minerales procedentes de la zona situada fuera de la jurisdicción nacional, que presentara su informe a la Comisión de los Fondos Marinos y que mantuviese la cuestión en permanente estudio. El informe del Secretario General (A/AC.138/36 a/ fue examinado en el período de sesiones que celebró la Comisión en julio y agosto de 1971.

132. Cuando se examinó la cuestión en el período de sesiones de marzo de 1972 (véanse los párrafos 112 a 119 del presente informe) se pidió al Secretario General que incluyera en un informe posterior datos relativos a los últimos acontecimientos ocurridos en esa esfera. En consecuencia, el Secretario General preparó un informe titulado "Notas adicionales sobre las posibles consecuencias económicas de la extracción de minerales de la zona internacional de los fondos marinos" (A/AC.138/73) (anexo II,2). El Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales presentó dicho informe en la 48a. sesión de la Subcomisión (véase el párrafo 52 del presente informe).

133. Durante los debates celebrados en la Subcomisión se dio cuenta de ciertas actividades realizadas en la zona de los fondos marinos situada fuera de la jurisdicción nacional. Se hizo referencia a las medidas legislativas cuya adopción se había propuesto y que permitirían la concesión de licencias para realizar actividades en la zona internacional de los fondos marinos. También se mencionó un proyecto de decisión (A/AC.138/L.11) (véase al párrafo 30) presentado a la Comisión durante el período de sesiones de marzo. Muchas delegaciones sugirieron que los Estados no alentasen a sus nacionales a realizar actividades de exploración y explotación de los fondos marinos fuera de los límites de la jurisdicción nacional. La cuestión de la

---

a/ Ibid., A/8421, anexo II,1.



minería submarina debía mantenerse en permanente estudio en las Secretarías de las Naciones Unidas y de la UNCTAD, en la Comisión de los Fondos Marinos y en la propia UNCTAD.

134. Se señaló que el probable aumento de la oferta de minerales procedentes de yacimientos terrestres, unido a la producción de los fondos marinos, tendería inevitablemente a hacer descender los precios de esos minerales. Si se decidía explotar los fondos marinos en provecho de la humanidad era necesario prever los medios de evitar que el efecto adverso que sufrieran los países en desarrollo anulase los beneficios que obtuvieran. Se indicó que el organismo de los fondos marinos debía tener facultades suficientes para controlar y regular la extracción con objeto de impedir o mitigar las repercusiones desfavorables que pudiera tener en las economías de los países en desarrollo. Sería necesario continuar estudiando la cuestión.

135. Otras delegaciones, aún acogiendo favorablemente el informe del Secretario General, estimaron que convenía considerar con cierta precaución algunas de las opiniones en él expuestas. Indicaron que las estimaciones hipotéticas de producción utilizadas en el informe podían dar una impresión errónea de las posibles repercusiones de la extracción de minerales de la zona internacional de los fondos marinos - en los mercados mundiales y en las economías de los productores en tierra. Esas delegaciones creían que no era probable que la producción de los fondos marinos pudiera colocarse en el mercado a precios inferiores a los corrientes por lo que respecta a los metales que se obtuvieran de los nódulos de manganeso, que la inversión en extracción de nódulos no era justificable a niveles de precios inferiores a los corrientes para esos metales y que los minerales de los fondos marinos sólo cubrirían una parte del aumento previsto de la demanda mundial. Afirmaron que el informe contenía varios errores de hecho y de cifras y sostuvieron que en algunos casos los autores habían utilizado datos y recurrido a publicaciones de dudosa fiabilidad.

136. Esas mismas delegaciones adujeron que en el estado actual de la ciencia y la tecnología era difícil hacer predicciones bien fundadas. Señalaron que, si bien se estaban realizando bastantes experimentos, hasta ahora no se había descubierto ningún procedimiento de valor comercial probado para la explotación y elaboración metalúrgica. No obstante, estimaban que, en la medida en que era posible emitir un juicio en la fase actual, no era probable que la explotación de nódulos de manganeso hiciera bajar el precio de los metales afectados y que, por consiguiente, no tendría consecuencias perjudiciales para los actuales productores en tierra. Afirmaron que, por el contrario, a la larga, el descubrimiento de nuevas fuentes de suministro beneficiaría a todos los países del mundo, incluidos los consumidores de esos metales, pero que se requeriría un largo período de desarrollo, sin regulaciones excesivamente restrictivas, para que la humanidad obtuviera el máximo provecho de los ingresos procedentes de la extracción de minerales de los fondos marinos.

137. Varias delegaciones reiteraron su opinión, confirmada a su juicio por el informe y en particular por el capítulo preparado por la UNCTAD, con respecto a las repercusiones negativas que muy probablemente tendría la nueva producción en la economía de los países en desarrollo, que eran los principales productores en tierra, y la consiguiente necesidad de establecer un control global del proceso de producción en todas sus etapas. Se subrayó además que muchos países en desarrollo, que dependían en gran medida de la extracción y exportación de minerales, serían los más afectados por la ausencia de dicho control. Estas delegaciones afirmaron la validez de los datos facilitados por la Secretaría.

138. Se expresaron opiniones discrepantes sobre la posibilidad de que la escala actual de las actividades extractivas en los fondos marinos significara que la explotación, por contraposición a la investigación y la exploración, había empezado ya.

139. Se expuso la opinión de que todas las actividades comerciales de investigación y experimentación relacionadas con la minería de los fondos marinos debían estar reguladas por un régimen y un mecanismo internacionales de transición, basados en la Declaración de principios (resolución 2749 (XXV)), hasta que entrase en vigor la convención internacional de los fondos marinos que se estaba negociando. Se expresaron también opiniones contrarias a la adopción de dichas medidas de transición antes de que se hubiera examinado la cuestión a fondo y se hubieran adoptado decisiones sobre importantes aspectos, aduciendo que ello equivaldría a prejuzgar el régimen y mecanismo permanentes y retrasaría su establecimiento.

140. Algunas delegaciones recordaron que, como se había decidido ya, el Secretario General de las Naciones Unidas y el Secretario General de la UNCTAD seguirían estudiando esta cuestión y proporcionarían nuevos datos a la Comisión y declararon que esperaban con interés la presentación de nuevos informes. Se sugirió que en los futuros informes figurasen por separado los datos de fuentes fidedignas y los datos de carácter más especulativo. De modo análogo, la interpretación de los datos debía separarse de los propios datos.

141. El Presidente repitió el llamamiento que había formulado en el período de sesiones de marzo en el sentido de que la mejor contribución que podían aportar los gobiernos interesados al proceso de información consistía en proporcionar al Secretario General la información de que dispusiera sobre la cuestión. El Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales hizo suyo este llamamiento.

#### F. Nuevo examen del tema 2

142. En su 61a. sesión la Subcomisión aceptó una propuesta del Presidente, que se expone más adelante en forma resumida, referente a la marcha de los trabajos futuros sobre el tema 2 del programa de trabajo.

143. El Presidente dijo que, teniendo en cuenta, entre otras consideraciones, los estrechos vínculos existentes entre los dos temas del programa de trabajo de la Subcomisión - el régimen y el mecanismo -, los representantes de los distintos grupos regionales habían acordado encomendar al Grupo de Trabajo establecido en virtud de la decisión adoptada por la Subcomisión en su 44a. sesión, el 27 de marzo de 1972, y presidida por el Sr. C.W. Pinto, el estudio de las cuestiones incluidas en el tema 2 del programa de trabajo, de conformidad con los procedimientos del Grupo. A continuación el Presidente dio lectura al tema 2 del programa de trabajo (véase el párrafo 51 del presente informe).

144. El Presidente dijo que se daba por sentado que el Grupo podría decidir, en el momento oportuno, que no era necesario completar la tarea relativa al régimen antes de empezar los trabajos sobre el mecanismo internacional. El acuerdo relativo al número de miembros correspondiente a cada grupo regional permanecería inalterado, habiéndose convenido que los grupos regionales tendrían libertad para mantener o modificar su composición y que podrían formar parte del Grupo de Trabajo todos los miembros de la Comisión que lo desearan.

145. Varias delegaciones expusieron sus interpretaciones de la propuesta del Presidente que constan en las actas resumidas de la Subcomisión.

### III. CUESTIONES Y FUNCIONES ASIGNADAS A LA SUBCOMISION II

#### A. Introducción

146. La Subcomisión II, que fue una de las tres subcomisiones plenarias creadas en marzo de 1971, continuó sus labores en 1972. En virtud de lo dispuesto en el acuerdo de 12 de marzo de 1971 sobre la organización de los trabajos 10/ de la Comisión sobre la Utilización con Fines Pacíficos de los Fondos Marinos y Oceánicos fuera de los Límites de la Jurisdicción Nacional, los siguientes temas y cuestiones fueron asignados a la Subcomisión II:

"Preparar una amplia lista de temas y cuestiones relacionados con el derecho del mar, incluidos los relacionados con los regímenes de la alta mar, la plataforma continental, el mar territorial (incluidas la cuestión de la anchura y la cuestión de los estrechos internacionales) y la zona contigua, la pesca y la conservación de los recursos vivos de la alta mar (incluida la cuestión de los derechos preferenciales de los Estados ribereños) y preparar proyectos de artículos de tratado al respecto. Queda entendido que la Subcomisión podrá decidir redactar estos artículos antes de completar la amplia lista de temas y cuestiones relacionados con el derecho del mar."

147. En cuanto a las cuestiones pendientes, que, según el citado acuerdo, habrían de decidirse más adelante, el Presidente de la Comisión en su 66a. sesión, celebrada el 27 de agosto de 1971, dio lectura al siguiente acuerdo 11/:

"Debería darse cierta prioridad a la cuestión del régimen internacional, como explicaron los copatrocinadores del proyecto de resolución original, posteriormente aprobado como resolución 2750 C (XXV), y como se desprende de la propia resolución. Esto obligaría, en primer lugar, a asignar más tiempo a la Subcomisión I.

Aunque cada una de las Subcomisiones tendrá derecho a examinar la cuestión de los límites en la medida en que guarde relación con los temas que le hayan sido asignados y a dejar constancia de sus conclusiones al respecto, la Comisión no decidirá sobre la recomendación final acerca de los límites hasta que haya recibido las recomendaciones de la Subcomisión II sobre la definición exacta de la zona, las cuales deberían constituir las propuestas básicas que habrá de examinar la Comisión.

La cuestión de la utilización con fines pacíficos es asignada a la Comisión, en el entendimiento de que cada una de las Subcomisiones queda en libertad de estudiarla en la medida en que guarde relación con su mandato."

148. En 1972, durante los períodos de sesiones de la Comisión, la Subcomisión II celebró dos series de reuniones la primera en Nueva York, del 1.º al 30 de marzo, y la segunda en Ginebra, del 17 de julio al 17 de agosto. En marzo celebró nueve sesiones; en julio y agosto, 15.

---

10/ Ibid., A/8421, párr. 19.

11/ Ibid., párr. 22.

149. Por tratarse de una subcomisión plenaria, la Subcomisión II estuvo integrada por los Estados miembros de la Comisión, tal como había sido ampliada por la Asamblea General en sus resoluciones 2750 C (XXV) y 2881 (XXVI). También se encontraron presentes observadores de los Estados Miembros de las Naciones Unidas que aceptaron la invitación de participar en las deliberaciones de la Comisión. La FAO, el OIEA, la UNESCO y su COI, la OMM y la UNCTAD estuvieron también representadas en las sesiones.

150. En su 24a. sesión celebrada el 1.º de marzo de 1972, la Subcomisión acordó que los miembros de la Mesa que se encontraban temporalmente ausentes fueran reemplazados, en espera de su regreso, por miembros de sus respectivas delegaciones. En vista de ello, el Sr. Diggs (Liberia) y el Sr. Kostov (Bulgaria) actuaron como Vicepresidentes durante la ausencia temporal del Sr. Holder y del Sr. Yankov, respectivamente, y el Sr. Kassem (Egipto) actuó de Relator durante la ausencia temporal del Sr. Abdel-Hamid. En ausencia del Sr. Galindo Pohl, la Subcomisión, en su 33a. sesión, celebrada el 17 de julio de 1972, eligió Presidente al Sr. Martínez Moreno (El Salvador). La Mesa de la Subcomisión II estuvo integrada como sigue:

Presidente:	Sr. Reynaldo Galindo Pohl (El Salvador) (en las sesiones de marzo) Sr. Alfredo Martínez Moreno (El Salvador) (en las sesiones de julio y agosto)
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vicepresidentes:	Sr. M. Burleigh Holder (Liberia) Sr. Ezedine Kazemi (Irán) Sr. Alexander Yankov (Bulgaria) Sr. Necmettin Tuncel (Turquía)
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relator:	Sr. Shaffie Abdel-Hamid (Egipto)
----------	----------------------------------

151. Según quedó aprobado en 1971, el programa (A/AC.138/SC.II/L.1) de la Subcomisión, transcrito en el informe 12/, era el siguiente:

- "1. Apertura del período de sesiones
2. Elección de la Mesa
3. Aprobación del programa
4. Examen de las cuestiones remitidas a la Subcomisión por la Comisión de conformidad con el "Acuerdo sobre la organización de los trabajos", leído por el Presidente en la 45a. sesión de la Comisión, celebrada el 12 de marzo de 1971
5. Aprobación del informe."

---

12/ Ibid., párr. 92.

152. Las directrices relativas a la organización de los trabajos de la Subcomisión, que se habían convenido en 1971, figuraban en una nota y en una exposición del Presidente, contenidas en el informe 13/. La nota (A/AC.138/SC.II/L.2) decía, en parte, lo siguiente:

"...

2. Para llevar a cabo su mandato, la Subcomisión podrá seguir diversos procedimientos, pudiendo elegir entre todos los procedimientos que se siguen habitualmente en las Naciones Unidas.

3. La Subcomisión tal vez desee iniciar su labor con un intercambio de opiniones sobre los temas y funciones que le han sido adjudicados, incluyendo la preparación de una amplia lista de temas y cuestiones relacionados con el derecho del mar y la preparación de proyectos de artículos de tratado al respecto. En el momento oportuno, la Subcomisión podrá establecer, si lo estima pertinente, grupos de trabajo para que examinen en detalle determinados aspectos del programa de trabajo de la Subcomisión.

..."

y la declaración especificaba:

"Tengo entendido que, de acuerdo con la decisión procesal tomada ayer, las delegaciones están facultadas para presentar propuestas concretas, inclusive bajo la forma de proyectos de artículos, así como para justificar y motivar verbalmente esas propuestas. A este efecto, recuerdo el texto de mi nota del 18 de marzo de 1971 (documento A/AC.138/SC.II/L.2) que fue adoptado como guía de nuestras presentes sesiones y que en lo pertinente dice: /véase la primera frase del punto 3 de la nota transcrita en el presente párrafo/.

Desde luego, la Subcomisión se propone enfocar primordialmente sus esfuerzos hacia el establecimiento de la lista de temas y cuestiones dentro de su mandato. En consecuencia, y por esta razón de método de trabajo y de ordenamiento de nuestras sesiones, espero que los señores delegados se limiten a motivar sus propuestas y dejen para el momento oportuno la discusión de esos proyectos, para cuyo tratamiento la Subcomisión puede decidir los procedimientos apropiados, entre los cuales se ha sugerido la formación de grupos de trabajo."

153. El informe 14/ contenía las siguientes explicaciones en relación con el examen que se hizo en 1971 de las cuestiones remitidas a la Subcomisión:

---

13/ Ibid., párrs. 93 y 95.

14/ Ibid., párrs. 98 y 99.

"98. La Subcomisión examinó las cuestiones que le había remitido la Comisión en sus sesiones tercera y quinta a 20a., celebradas el 19 de julio y del 27 de julio al 23 de agosto. En los debates desarrollados en esas sesiones, varios representantes formularon declaraciones de carácter general, así como otras sobre determinados aspectos de las cuestiones remitidas a la Subcomisión. Hubo acuerdo general sobre la importancia de los trabajos de la Subcomisión en el contexto de la preparación de la futura Conferencia sobre el Derecho del Mar. La Subcomisión dio por terminada la primera etapa de su labor, o sea, el debate general sobre las cuestiones que se le habían encomendado, y comenzó la preparación de una amplia lista de temas y cuestiones relacionados con el derecho del mar.

99. Hubo acuerdo general en que la preparación, en la etapa actual, de una lista amplia de temas y cuestiones sobre el derecho del mar debería enfocarse con cierta flexibilidad, a fin de poder reajustar la lista a la luz de los progresos realizados en los trabajos, quedando entendido que la inclusión o exclusión de un tema o cuestión determinados no prejuzgaría la posición de ninguna delegación en lo relativo al valor o contenido intrínseco del tema o cuestión de que se tratara en lo relativo a la posible inclusión de tal tema o cuestión en el programa de la futura Conferencia sobre el Derecho del Mar o su exclusión de él. También se convino en que la lista no prejuzgaría el orden de prioridad del estudio de los temas y cuestiones. Durante el debate no se excluyó la posibilidad de que la Subcomisión decidiera crear grupos de trabajo encargados de estudiar los temas y funciones relacionados con el mandato de la Subcomisión."

154. Cuando la Subcomisión se reunió de nuevo el 1.<sup>o</sup> de marzo de 1972, el Presidente hizo en la 24a. sesión la siguiente sugerencia sobre el programa de trabajo, la que fue aceptada en la misma sesión por la Subcomisión:

"... la Subcomisión debe abstenerse de preparar un nuevo programa de trabajo. El programa anterior debe examinarse en relación con las explicaciones dadas en los párrafos 93, 98 y 99 del informe de la Comisión (A/8421), que fueron tomadas del informe de la Subcomisión. Queda entendido que el debate general ha finalizado y que la Subcomisión se ocupará ahora de la cuestión de la lista amplia de temas y cuestiones relacionados con el derecho del mar ... para ganar tiempo, la Subcomisión seguirá el programa de trabajo aprobado en Ginebra, tal como figura en el párrafo 92 del informe."

155. Según consta en el acta resumida correspondiente, al terminar la serie de sesiones de marzo de 1972, el Presidente de la Subcomisión comunicó verbalmente a la Comisión lo siguiente:

"La Subcomisión celebró varias sesiones en el transcurso de las cuales oyó declaraciones de diversas delegaciones sobre cuestiones de fondo. Al mismo tiempo, tal como lo decidiera a principios del período de sesiones, se celebraron consultas oficiosas entre los grupos de Africa, Asia y América Latina acerca de la lista de temas y cuestiones relacionados con el derecho del mar que se han de presentar a la tercera Conferencia sobre el Derecho del Mar. La lista presentada después de esas consultas (A/AC.138/66) fue examinada en sesión y fue objeto asimismo de consultas entre los diversos

grupos. Lamentablemente, las consultas no han sido fructíferas. /En vista de ello ,... deplora/ tener que informar a la Comisión de que la Subcomisión II no ha podido alcanzar el objetivo que se le había asignado, esto es, preparar una lista definitiva" (A/AC.138/SR.76).

156. Varios documentos informativos presentados a la Comisión fueron puestos a disposición de la Subcomisión, entre ellos un nuevo volumen de la United Nations Legislative Series (ST/LEG/SER.B/16) que contenía los textos que habían facilitado gobiernos de los Estados Miembros de leyes nacionales recientes y de disposiciones de tratados relativas al derecho del mar.

157. Además, atendiendo a peticiones hechas anteriormente, la FAO presentó información sobre los organismos para la regulación de la pesca (A/AC.138/64) y los problemas relativos a la conservación, con referencia especial a la nueva tecnología (A/AC.138/65), un atlas ampliado y revisado de los recursos vivos del mar (FID/C/126/Rev.1), los métodos de pesca que pueden resultar perjudiciales para la conservación de los recursos pesqueros (FID/C/147), las especies sedentarias, migratorias y mixtas y su hábitat y distribución (FID/C/148) y una serie de perfiles de pesquerías por países.

B. Examen de las cuestiones remitidas a la Subcomisión en virtud del acuerdo sobre organización de los trabajos leído por el Presidente de la Comisión, en la 45a. sesión, celebrada el 12 de marzo de 1971

158. La Subcomisión examinó las cuestiones que le remitió la Comisión en sus sesiones 25a., 27a. a 32a., y 34a. a 45a., celebradas los días 15 y 22 a 30 de marzo y 18 de julio a 16 de agosto de 1972 15/. Se celebraron asimismo una serie de reuniones oficiosas con miras a elaborar una lista amplia de temas y cuestiones relacionados con el derecho del mar, que fueron presididas por el Presidente de la Comisión (A/AC.138/SR.76 y 77), por el Presidente de la Subcomisión II, o por ambos conjuntamente. Las consultas y las negociaciones celebradas por las delegaciones se concentraron en la elaboración de la lista amplia que la Asamblea General encargó a la Comisión en su resolución 2750 C (XXV).

159. Se reconoció en general que la lista de temas y cuestiones relacionados con el derecho del mar, sin ser necesariamente completa, debía prepararse con un criterio amplio y tratar de abarcar una gran gama de posibilidades. Se dio por entendido asimismo que la lista no establecería el orden de prioridad en el estudio de los varios temas y cuestiones y que el hecho de proponer o aceptar la lista tampoco prejuzgaría la posición de ningún Estado ni comprometería a ningún Estado con respecto a los temas que en ella figurasen ni al orden, la forma o la clasificación en que se presentasen. Se estuvo de acuerdo en general en que la lista serviría de marco para la discusión y la redacción de los artículos necesarios.

160. Como en períodos de sesiones anteriores, se puso de relieve la necesidad de tener en cuenta los intereses de todos los Estados - en desarrollo y desarrollados, ribereños, sin litoral, Estados de costas pequeñas, Estados archipelágicos, Estados

---

15/ Un índice de las actas resumidas de la Subcomisión figura en el anexo V.3.



insulares, Estados de plataforma encerrada (shelf-locked), de plataforma estrecha, de plataforma ancha, etc. -, así como los intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo, ribereños o sin litoral, y todos los aspectos pertinentes de los problemas que habrían de estudiarse (jurídicos, políticos, estratégicos, económicos, sociales, técnicos, científicos, etc.) junto con las consideraciones de carácter geográfico. Se hizo además referencia a la necesidad de tener en cuenta, en relación con varias cuestiones, los intereses internacionales en general.

161. En relación con la preparación de una lista amplia de temas y cuestiones relacionados con el derecho del mar, la Subcomisión tuvo a su consideración, además de las propuestas presentadas en 1971 16/, una lista de temas para la Conferencia sobre el Derecho del Mar propuesta por Argelia, Argentina, Brasil, Camerún, Ceilán, Colombia, Congo, Costa de Marfil, Chile, China, Chipre, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, Etiopía, Fiji, Filipinas, Gabón, Ghana, Guatemala, Guyana, India, Indonesia, Irak, Irán, Islandia, Jamaica, Kenia, Kuwait, Liberia, Libia, Madagascar, Malasia, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Panamá, Perú, República Unida de Tanzania, Rumania, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Trinidad y Tabago, Túnez, Uruguay, Venezuela, Yemen, Yugoslavia y Zaire (A/AC.138/66 y Corr.2) (anexo III.1). Los siguientes países presentaron posteriormente enmiendas a esa lista de temas y cuestiones de las 56 Potencias: Malta (A/AC.138/67) (anexo III.2 (1)); los Estados Unidos de América (A/AC.138/68) (anexo III.2 (2)); Grecia e Italia (A/AC.138/69 y Add.1) (anexo III.2 (3)); el Japón (A/AC.138/70 y A/AC.138/78) (anexo III.2 (4) y (10), respectivamente); la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (A/AC.138/71) (anexo III.2 (5)); conjuntamente Afganistán, Austria, Bélgica, Bolivia, Checoslovaquia, Hungría, Malí, Nepal y Zambia (A/AC.138/72 y Corr.1) (anexo III.2 (6)); Turquía (A/AC.138/74 y Corr.1) (anexo III.2 (7)); conjuntamente Francia, Países Bajos y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (A/AC.138/76) (anexo III.2 (8)); y Polonia (A/AC.138/77) (anexo III.2 (9)). Malta también presentó una lista de temas y cuestiones relacionados con el derecho del mar (A/AC.138/75 y Corr.1) (anexo III.3). Estos documentos fueron objeto de consultas intensivas que llevaron a la aprobación de una lista convenida de temas y cuestiones, como se indica en el párrafo 23 supra.

162. De conformidad con las directrices convenidas sobre la organización de los trabajos mencionados en la introducción al presente informe, algunos representantes hicieron declaraciones acerca de determinados aspectos de las cuestiones y temas asignados a la Subcomisión. Al propio tiempo, la Comisión tuvo ante sí los siguientes documentos: proyecto de artículos sobre la anchura del mar territorial, los estrechos y las pesquerías, presentado en 1971 por los Estados Unidos de América (A/AC.138/SC.II/L.4 y Corr.1) 17/; un documento de trabajo que contenía un proyecto de tratado sobre los espacios oceánicos, que en parte se ocupaba de temas asignados a la Subcomisión II, presentado en 1971 por Malta (A/AC.138/53) 18/; un proyecto de artículos sobre pesca con una nota explicativa (A/AC.138/SC.II/L.6) (anexo III.4) y un proyecto de artículos sobre los estrechos utilizados para la navegación internacional (A/AC.138/SC.II/L.7) (anexo III.5), presentados en 1972 por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; un documento de trabajo sobre la ordenación

---

16/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo sexto período de sesiones, Suplemento No. 21 (A/8421), párr. 101 y anexos 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15 y 16.

17/ Ibid., A/8421, anexo IV.

18/ Ibid., anexo I, 11.



de los recursos vivos del mar (A/AC.138/SC.II/L.8), presentado en 1972 por el Canadá (anexo III.6); un proyecto revisado de artículo sobre las pesquerías (A/AC.138/SC.II/L.9), presentado en 1972 por los Estados Unidos de América (anexo III.7); un proyecto de artículos sobre concepto de zona económica exclusiva (A/AC.138/SC.II/L.10), presentado en 1972 por Kenia (anexo III.8) y un documento de trabajo sobre los principios aplicables a un régimen de pesquerías (A/AC.138/SC.II/L.11), presentado en 1972 por Australia y Nueva Zelanda (anexo III.9); así como propuestas relativas a un régimen de pesquerías en alta mar (A/AC.138/SC.II/L.12), presentadas en 1972 por el Japón (anexo III.10). Si bien tuvo lugar un intercambio preliminar de opiniones respecto de algunos aspectos de dichos documentos, la Subcomisión no procedió, sin embargo, a un examen detallado de ellos.

163. Durante el debate se hizo referencia a las cuestiones enumeradas en la resolución 2750 C (XXV) de la Asamblea General y a otras materias conexas, ya en documentos de trabajo presentados, ya en declaraciones hechas en la Subcomisión.

164. Los aspectos mencionados en relación con el mar territorial fueron su naturaleza y características, incluyendo la cuestión de la unidad o pluralidad de regímenes, la anchura del mar territorial, los criterios globales o regionales y los criterios geográficos (mares y océanos abiertos; mares semicerrados, mares cerrados) que debían utilizarse para definir dicha anchura, la cuestión de la delimitación del mar territorial y los diversos aspectos pertinentes, aguas históricas, estrechos utilizados para la navegación internacional (véanse los párrs. 166 a 168), la soberanía del Estado ribereño sobre su mar territorial, el paso inocente por el mar territorial mientras no sea perjudicial para la paz, el orden o la seguridad del Estado ribereño y la libertad de navegación y sobrevuelo según resulta de la cuestión de la pluralidad de regímenes en el mar territorial.

165. También se mencionaron la naturaleza, características y límites de la zona contigua y los derechos del Estado ribereño en dicha zona con relación a la seguridad nacional, el control fiscal y aduanero, la reglamentación sanitaria y la inmigración. A este respecto, se hizo referencia a la protección de los derechos e intereses internacionales en la zona.

166. En cuanto a los estrechos, se hizo referencia a las diferencias existentes en su importancia relativa para la navegación internacional, a los estrechos utilizados para la navegación internacional, a los estrechos situados en archipiélagos y a los actuales regímenes consuetudinario y convencional relativos a los estrechos.

167. Se señaló a este respecto que el paso inocente por los estrechos utilizados para la navegación internacional, reconocido y reglamentado actualmente en relación con diversas categorías de buques, armonizaba adecuadamente, por una parte, la soberanía y la protección de los intereses de los Estados ribereños (exigencias de la seguridad del Estado, prevención de riesgos, seguridad de la navegación, medidas para combatir la contaminación) y, por otra, los intereses de la navegación internacional. Se dijo también que la navegación en los estrechos situados en el mar territorial estaba sometida a la reglamentación del Estado ribereño sobre la misma base que la reglamentación de la navegación en cualquier otra parte de su mar territorial, y que el derecho del Estado ribereño a dictar normas era inherente al ejercicio de su soberanía sobre su mar territorial. Se mencionó que dicha promulgación de reglamentos y su aplicación no era jamás arbitrarias y que el derecho de

paso inocente, conforme estaba reconocido y reglamentado actualmente, no podía suspenderse en los estrechos utilizados para la navegación internacional. En los reglamentos vigentes sobre aviación civil se preveía ya el sobrevuelo de territorio extranjero, incluidos los estrechos situados en el mar territorial, por aeronaves civiles. Se subrayó que debía establecerse una distinción entre los auténticos intereses de la navegación internacional y el despliegue de fuerzas navales y aéreas en el mar. Por último, se dijo que, si bien en un régimen diferente para el paso por los estrechos parecería prever la seguridad de la navegación y las exigencias de la seguridad del Estado, en la práctica las sugerencias a este respecto eran superfluas, pues estaban ya comprendidas en el derecho internacional vigente, no conferían a los Estados ribereños verdaderos poderes de ejecución y perseguían fines distintos del fomento de los intereses de la navegación civil internacional.

168. Desde otro punto de vista, se declaró que los intereses de la navegación internacional exigían el libre tránsito por los estrechos utilizados para la navegación internacional y sobre ellos, porque el régimen de paso inocente se prestaba a diversas interpretaciones y podía no ofrecer todas las garantías necesarias. Se dijo también que el libre tránsito por los estrechos utilizados para la navegación internacional era paralelo a la libertad de la alta mar y facilitaba las comunicaciones entre los Estados. Se añadió que se debería mantener el libre tránsito por los estrechos utilizados para la navegación internacional que unían una parte de la alta mar con otra parte de la alta mar, así como sobre ellos. También se hizo referencia al libre tránsito por los estrechos que unían una parte de la alta mar con el mar territorial de otro Estado, así como sobre ellos, pero declaró asimismo que en tales estrechos debería prevalecer el régimen de paso inocente. Se afirmó que el libre tránsito debería someterse a ciertas reglamentaciones internacionalmente convenidas que serían aplicadas por el Estado ribereño y el Estado del pabellón. Asimismo se dijo que el Estado ribereño tenía derecho a designar corredores para el tránsito, pero no a interrumpir o detener el tránsito. Se añadió que la navegación debería cumplir estrictamente estas normas, que deberían tener por finalidad prevenir los accidentes y la contaminación y establecer la responsabilidad estricta del Estado del pabellón por los daños causados al Estado ribereño por los accidentes resultantes de las infracciones de las normas internacionalmente convenidas. También se dijo que el libre tránsito debería efectuarse conforme a normas estrictas dirigidas a evitar toda amenaza a la seguridad del Estado ribereño. Asimismo se declaró que el tratado sobre el derecho del mar debería exigir que las aeronaves de Estado, incluidas las militares, observasen normalmente las actuales reglamentaciones de la aviación civil, y también debería exigir que las aeronaves de Estado operasen en todo momento teniendo debidamente en cuenta la seguridad de la navegación de las aeronaves civiles. Las aeronaves de Estado que ejerciesen un derecho de libre tránsito serían estrictamente responsables de los accidentes causados por las infracciones de tales normas. Finalmente, se subrayó que no debían quedar afectados los acuerdos internacionales vigentes sobre los estrechos.

169. En cuanto a la plataforma continental, se expusieron opiniones en relación con la naturaleza y el alcance de los derechos de soberanía de los Estados ribereños sobre la plataforma continental, los deberes de los Estados con respecto a la plataforma continental, el límite exterior de la plataforma continental y los criterios aplicables o la combinación de criterios aplicables para definir tal límite, la cuestión de la delimitación de la plataforma continental entre los Estados y los diversos problemas planteados, por ejemplo, la delimitación entre los Estados adyacentes u opuestos, los recursos naturales de la plataforma continental y la investigación científica en la plataforma continental.

170. Se hizo referencia, por una parte, a la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y, por otra, a los derechos preferenciales u otra jurisdicción no exclusiva del Estado ribereño sobre los recursos situados fuera del mar territorial.

171. En cuanto a la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial, se mencionaron las cuestiones siguientes: la naturaleza y característica de la zona, incluso los derechos de los Estados ribereños a los recursos vivos y no vivos de la zona y a la lucha contra la contaminación y la investigación científica en la zona, así como la jurisdicción al respecto; los deberes de los Estados en la zona; los límites de la zona y los criterios aplicables al establecimiento de tales límites; la libertad de navegación y de sobrevuelo en la zona; las disposiciones regionales relativas a la zona; las pesquerías, incluso las zonas de pesca exclusiva, los derechos preferenciales de los Estados ribereños, la ordenación y conservación, la protección de las pesquerías de los Estados ribereños en los mares cerrados y semicerrados y el régimen de las islas bajo la dominación y el control extranjeros en relación con las zonas de jurisdicción pesquera exclusiva; los fondos marinos dentro de la jurisdicción nacional, incluso su naturaleza y características, los derechos soberanos del Estado ribereño sobre los recursos naturales, los límites y criterios aplicables para definirlos y la delimitación entre los Estados adyacentes y opuestos; la prevención de la contaminación y de otros peligros para el medio marino y la lucha contra ellos, incluso los derechos y las obligaciones de los Estados ribereños al respecto; y la investigación científica. Durante el debate se hizo referencia al proyecto de artículos sobre el concepto de zona económica exclusiva presentado por Kenia (anexo III.8), así como a la Declaración de Santo Domingo de 7 de junio de 1972 (anexo I.2).

172. En cuanto a los derechos preferenciales u otra jurisdicción no exclusiva del Estado ribereño sobre los recursos situados más allá del mar territorial, se mencionaron las siguientes cuestiones: la naturaleza, el alcance y características de tales derechos preferenciales u otra jurisdicción no exclusiva; los recursos de los fondos marinos; las pesquerías; la prevención de la contaminación y de otros peligros para el medio marino y la lucha contra ellos; la cooperación internacional en el estudio y la explotación racional de los recursos marinos; el arreglo de controversias; y otros derechos y obligaciones. Durante el debate se hizo referencia a los proyectos de artículos y documentos de trabajo presentados por Malta, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Canadá, los Estados Unidos de América, Australia y Nueva Zelandia, y el Japón.

173. En los párrafos 175 a 179 del presente informe se indican cuestiones más específicas mencionadas en relación con las pesquerías y la zona económica exclusiva o con los derechos preferenciales u otra jurisdicción no exclusiva del Estado ribereño. Asimismo se hizo referencia a los derechos e intereses de los Estados sin litoral con respecto a la zona económica exclusiva y a los derechos preferenciales u otra jurisdicción no exclusiva del Estado ribereño. También se hizo referencia a los intereses internacionales generales con respecto a las zonas marítimas mencionadas en los párrafos 171 y 172.

174. En cuanto al régimen de la alta mar, se mencionaron su naturaleza y características, los derechos y obligaciones de los Estados en la alta mar, la cuestión de las libertades de la alta mar y su reglamentación, la libertad de navegación y de sobrevuelo de la alta mar y otras libertades o utilizaciones, en particular la

pesca y la reglamentación, ordenación y conservación de los recursos vivos de la alta mar (véanse en los párrs. 175 a 179 las cuestiones específicas mencionadas al respecto), así como el tendido de cables y tuberías submarinos en el fondo de la alta mar. Asimismo se mencionó la prevención y represión de la esclavitud, de la piratería y del tráfico ilícito de drogas en la alta mar, así como el derecho de persecución en la alta mar y otras cuestiones. En cuanto al libre acceso de los países sin litoral al mar y otras cuestiones conexas, véanse los párrafos 181 y 182.

175. En relación con las pesquerías y con la conservación de los recursos vivos del mar más allá del mar territorial, se hizo referencia a la utilización racional de tales recursos, dada su importancia para la nutrición del hombre, a la situación de los Estados cuya subsistencia o desarrollo económico dependen de sus pesquerías costeras, a los intereses de los demás Estados, particularmente los Estados cuya situación geográfica era desventajosa, incluso los países sin litoral y de plataforma encerrada, y a los Estados desarrollados con poblaciones locales geográficamente aisladas que dependen en gran parte de pesquerías y los Estados que dependen de pesquerías en aguas distantes, a los diferentes tipos de pesquerías y de explotación pesquera, incluso las pesquerías costeras y las pesquerías tradicionales o históricas en aguas costeras, a los problemas originados por la explotación excesiva o la utilización insuficiente de los recursos, a los recursos pesqueros costeros como parte de los recursos naturales del Estado ribereño, a las medidas dirigidas a la conservación y aprovechamiento de los recursos vivos del mar y a su protección contra la contaminación y otros riesgos, a la relación entre la protección del medio marino en general y la conservación y ordenación de los recursos vivos del mar, y a la distinción y la relación entre la conservación y la utilización de los recursos vivos del mar.

176. Se hizo referencia a la necesidad de normas más precisas, de carácter universal o regional, sobre reglamentación, asignación, ordenación, control y conservación de la pesca más allá del mar territorial de conformidad con criterios para la utilización equitativa y racional de los recursos vivos y teniendo en cuenta los factores económicos, sociales y científicos (biológicos, ecológicos, geográficos y geológicos) pertinentes. No obstante, se expresaron opiniones diversas acerca del régimen o sistema que debía establecerse.

177. Varias delegaciones reconocieron que los Estados ribereños trataban de reservar para sus nacionales los recursos vivos del mar en las zonas adyacentes a sus costas. Obtuvo amplio apoyo la opinión de que ese interés acarrearía determinados derechos y deberes específicos para todos los Estados ribereños con respecto a la utilización, asignación, ordenación y conservación de tales recursos. Se hizo especial referencia a los Estados ribereños en desarrollo y se expresó ampliamente la opinión de que cualquier régimen que se adoptara debía salvaguardar los intereses y derechos especiales de esos Estados. Asimismo se hizo referencia a los Estados o zonas que dependían en gran medida de las pesquerías y cuyos intereses y necesidades deberían tenerse plenamente en cuenta en cualquier régimen futuro. En términos generales, los derechos de los Estados ribereños se expresaron en una de las dos formas siguientes: derechos soberanos exclusivos o derechos preferenciales de pesca. No obstante, varias delegaciones consideraron necesario tener en cuenta los intereses de las pesquerías en aguas distantes y las características migratorias de las especies.

178. Algunos representantes expusieron detalladamente el régimen especial de pesca y conservación de los recursos vivos del mar que a su juicio debía establecerse. El proyecto de artículos presentado por Kenia (anexo III.8) constituía un ejemplo del método basado en el concepto de "zona económica exclusiva", conforme al cual el Estado ribereño tendría derechos soberanos y el ejercicio de jurisdicción exclusiva, entre otros, sobre los recursos vivos de una zona económica que no excedería de 200 millas náuticas; el proyecto de artículo presentado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (anexo III.4) constituía un ejemplo del método basado en el principio de la libertad de pesca en la alta mar sin perjuicio de los derechos preferentes de los Estados ribereños en desarrollo en la zona inmediatamente adyacente a su mar territorial (que no excedería de 12 millas), incluido el derecho a reservarse anualmente un porcentaje determinado de la pesca permisible de conformidad con su capacidad de pesca; el documento de trabajo presentado por el Canadá (anexo III.6) constituía un ejemplo del método funcional con arreglo al cual el Estado ribereño tendría la administración exclusiva y la competencia para reglamentar las pesquerías costeras (especies costeras y anádromas) como guardián, de conformidad con principios y normas internacionalmente convenidos, y tendría derechos preferenciales, potencialmente exclusivos respecto de algunas especies, para la explotación de tales recursos; el proyecto revisado de artículo presentado por los Estados Unidos de América (anexo III.7) constituía un ejemplo del enfoque por especies, con arreglo al cual el Estado ribereño reglamentaría los recursos anádromos y costeros hasta los límites de su ámbito migratorio y tendría derechos preferenciales sobre ellos, incluido el derecho a reservarse la totalidad de la pesca de esos recursos que pudiese capturar, pero se reconocería que, debido a la naturaleza singular de las especies oceánicas de carácter muy migratorio, únicamente las organizaciones internacionales podían desempeñar adecuadamente la función administradora; el documento de trabajo presentado por Australia y Nueva Zelandia (anexo III.9) constituía un ejemplo del enfoque por zonas, con arreglo al cual el Estado ribereño tendría jurisdicción exclusiva sobre los recursos vivos del mar, con algunas excepciones, en una amplia zona adyacente a su mar territorial, que debería ejercer de conformidad con determinados principios básicos en los que se tuviesen en cuenta los derechos y las responsabilidades del Estado ribereño con respecto a los recursos; las propuestas presentadas por el Japón (anexo III.10) constituían un ejemplo del método relativo a los derechos preferentes para la protección de las pesquerías costeras, especialmente de los Estados ribereños en desarrollo, en relación con la pesca en aguas lejanas de otros Estados en zonas marítimas adyacentes al límite de las 12 millas, que daría al Estado ribereño en desarrollo derecho a una pesca preferente correspondiente a su capacidad de captura y al Estado ribereño desarrollado derecho a una captura preferente diferenciada cuando fuera necesaria la protección de su pesca costera en pequeña escala practicada localmente; y en el proyecto de tratado sobre el espacio oceánico presentado por Malta <sup>19/</sup> se adoptaba un sistema de zonas con arreglo al cual habría una ordenación internacional de las pesquerías oceánicas y una jurisdicción exclusiva del Estado ribereño sobre los recursos vivos dentro de una zona económica de 200 millas, que se ejercería conforme a principios definidos por tratado.

---

<sup>19/</sup> Ibid.

179. La eficacia y las realizaciones de las organizaciones o comisiones internacionales o regionales de pesca existentes, en su estructura actual, fueron objeto de diversas evaluaciones. Algunos representantes declararon que debían desarrollarse y consolidarse, especialmente en el plano regional, porque constituían el marco más adecuado para formular y concertar internacionalmente medidas de conservación y administración. Por lo que se refería a las especies muy migratorias, algunas delegaciones señalaron que las organizaciones internacionales de pesca constituían el mecanismo más apropiado para su conservación y administración. Otra opinión fue que lo mismo podía decirse también respecto de las especies anádromas. Asimismo se expresaron diversos puntos de vista acerca de la función y competencia futuras de las organizaciones o comisiones de pesca, según las características que se consideraban más apropiadas para el régimen de pesca y conservación de los recursos vivos del mar más allá del mar territorial que había de establecerse. Otra opinión expresada fue que las organizaciones internacionales de pesca deberían integrarse dentro de un marco más amplio. Se mencionaron también los poderes de aplicación del Estado ribereño en el marco de ese régimen y la necesidad de procedimientos para la solución pacífica de las controversias en materia de pesca, incluidos los procedimientos de arbitraje obligatorio. Se sugirió también que los poderes de control y de aplicación fuesen confiados primordialmente a las organizaciones regionales de pesca.

180. Se trató asimismo del régimen internacional de los fondos marinos y oceánicos fuera de la jurisdicción nacional, de su naturaleza y características, del mecanismo internacional para la zona y su estructura, funciones y poderes, de las consecuencias económicas de la explotación de los recursos de la zona, de la participación equitativa en los beneficios teniendo en cuenta los intereses y las necesidades especiales de los países en desarrollo, ribereños o sin litoral, de la definición y los límites de la zona, de la armonización de los usos de la zona y la utilización de la zona exclusivamente con fines pacíficos (en cuanto a los fondos marinos sometidos a la jurisdicción nacional, véase el párr. 171 del presente informe).

181. En relación con la alta mar, los fondos marinos fuera de la jurisdicción nacional y las zonas económicas exclusivas o zonas preferentes más allá del mar territorial se hicieron varias observaciones sobre los países sin litoral. Se convino en considerar los principios generales del derecho del mar relativos a esos países y, más concretamente, los siguientes puntos: el libre acceso al mar y desde el mar, incluida la libertad de tránsito, los medios e instalaciones de transporte y comunicaciones y la igualdad de trato en los puertos de los Estados de tránsito; el libre acceso a la zona internacional de los fondos marinos fuera de la jurisdicción nacional, la participación en el régimen internacional, incluido el mecanismo, y en la distribución equitativa de los beneficios de la zona; los recursos vivos del mar; y los recursos, control de la contaminación e investigación científica en zonas económicas exclusivas o zonas preferentes más allá del mar territorial. Se mencionaron también los intereses y necesidades particulares de los países en desarrollo sin litoral en el régimen internacional de los fondos marinos y con respecto a los recursos vivos del mar.

182. A este respecto también fue hecha referencia a los acuerdos (bilaterales o regionales) a ser acordados, aunque asimismo esta mención fue puesta en tela de juicio por países sin litoral quienes estimaron que sus intereses estarían mejor y más apropiadamente resguardados por acuerdos internacionales generales.



183. Se hizo referencia a los intereses y derechos de los Estados de plataforma encerrada, los Estados de plataforma estrecha y los Estados de costas pequeñas, especialmente con respecto al régimen internacional de los fondos marinos fuera de la jurisdicción nacional, la pesca y el libre acceso a la alta mar y desde la alta mar. También se mencionaron los intereses y las necesidades especiales de los países en desarrollo pertenecientes a esas categorías. Se mencionaron los intereses y derechos de los Estados de plataformas amplias, incluidos los que hubieran ejercido sus derechos soberanos sobre ella durante algún tiempo.

184. Se hizo referencia a los distintos tipos de archipiélagos y a los criterios aplicables a ellos. Se mencionaron también las características especiales de los Estados archipelágicos y, a este respecto, se indicó que esos Estados necesitarían un trato especial por ser algo más que un grupo de islas. Se agregó asimismo que los intereses y las necesidades especiales de esos Estados en materia de desarrollo económico, estabilidad política y seguridad nacional requerirían un régimen especial que tuviese en cuenta otros intereses previendo el paso inocente de buques extranjeros por rutas establecidas en las aguas del archipiélago.

185. Se hizo referencia a los distintos tipos de islas y a los criterios aplicables a las mismas, como su extensión, situación, población, el espacio marítimo con ellas relacionado, con el fin de hacer un estudio a fondo de las diferentes situaciones que podían darse. Del régimen de las islas se habló en particular en relación con las islas en situación de dependencia colonial o bajo la dominación o el control extranjeros o bajo la soberanía de un Estado y situadas en la plataforma continental de otro Estado en un continente distinto. Se habló también de las islas en términos generales y en determinados contextos, tales como el mar territorial, la plataforma continental y su delimitación, la zona económica exclusiva fuera de la jurisdicción nacional y otras cuestiones afines.

186. Algunas delegaciones expusieron opiniones en que se destacaban la indivisibilidad de la soberanía y la jurisdicción territoriales y se refirieron a los peligros que entrañaba el hacer distinciones entre las islas atendiendo a su extensión, situación o población y entre Estados insulares por una parte e islas sometidas a la jurisdicción de un Estado, por otra. Además, se hizo hincapié en la inexistencia de un concepto generalmente admitido de continente o de plataforma continental, en la imposibilidad de aceptar la enunciación de conceptos que se aplicaran a unos continentes y no a otros. También se hizo referencia al régimen aplicable a los mares cerrados y semicerrados y a las islas e instalaciones artificiales.

187. Se subrayó que las precedentes referencias a las islas no se extendían en modo alguno a los Estados insulares. En particular, por lo que respecta al derecho del mar no cabía hacer distinciones entre Estados ribereños y Estados insulares en cuanto a la aplicación de las normas.

188. Se señaló también que las islas dependientes mantenían, al alcanzar la independencia, su derecho innato a reivindicar en pie de igualdad todos los derechos de que gozaban los Estados ribereños independientes.

189. En lo que respecta a la preservación del medio marino, los aspectos mencionados fueron las fuentes de contaminación y otros peligros y medidas para combatirlos, las medidas para preservar la calidad y el equilibrio ecológico del medio marino, obligaciones y responsabilidad en relación con los daños al medio marino

y al Estado ribereño, obligaciones y responsabilidad en relación con daños por el uso de ese medio, los derechos y deberes de los Estados ribereños y la cooperación internacional para preservar el medio marino.

190. En relación con la investigación científica, se hizo referencia a la naturaleza, las características y los objetivos de la investigación científica de los océanos, la reglamentación de la investigación científica, el acceso a la información científica y la cooperación internacional. Se expresaron diferentes opiniones sobre la cuestión de la libertad de investigación científica, especialmente en relación con los espacios marítimos distintos de la alta mar.

191. En lo relativo al desarrollo y transmisión de tecnología, se mencionaron los siguientes aspectos: el fomento de la capacidad tecnológica de los países en desarrollo, intercambio de conocimientos y tecnología entre los países desarrollados y países en desarrollo, la formación de personal de países en desarrollo y la transmisión de tecnología a países en desarrollo. Se reiteró que la Subcomisión, por conducto de la Comisión, recomendará a la Asamblea General que pidiera a los organismos especializados competentes y a los Estados industriales y desarrollados que intensificaran o aceleraran la formación de personal de los Estados en desarrollo en todos los aspectos de la ciencia y la tecnología marinas. Otro de los aspectos a que se hizo referencia fue el control de la aplicación de esta tecnología en la medida en que pudiera tener graves repercusiones en el medio marino.

192. Se hizo referencia igualmente a cuestiones tales como los acuerdos regionales y mundiales, la utilización de los espacios oceánicos con fines pacíficos, las zonas de paz y seguridad, las transmisiones desde alta mar, los tesoros arqueológicos e históricos en los fondos marinos y oceánicos fuera de los límites de la jurisdicción nacional, el fomento de la participación universal de los Estados en las convenciones multilaterales relativas al derecho del mar y la solución pacífica de las controversias.

#### C. Aprobación de la lista de temas y cuestiones relacionadas con el derecho del mar

193. En su 45a. sesión, celebrada el 16 de agosto de 1972, la Subcomisión aprobó la lista de temas y cuestiones relacionados con el derecho del mar, según se había ultimado en las consultas y negociaciones oficiosas. Por el presente documento se transmite a la Comisión la lista aprobada (para su texto, véase el párr. 23 del presente documento).

194. Se admitió que los temas 6 y 7 podrían tratarse simultáneamente.

195. Ciertas delegaciones, al expresar y explicar su aceptación de la lista, reafirmaron la importancia que atribuían al entendimiento mencionado en la nota explicativa. En particular, insistieron en que tenían entendido que la lista no podía de ninguna manera cercenar el derecho de las delegaciones a exponer sus ideas o puntos de vista ni prejuzgar su posición en cuanto al fondo de ningún tema.



196. Algunas delegaciones reservaron su posición sobre ciertos temas de la lista. Las declaraciones pertinentes hechas al respecto por tales delegaciones figuran en las actas resumidas A/AC.138/SC.II/SR.44 y 45 de la Subcomisión II. Otras delegaciones señalaron que las reservas no afectaban en manera alguna el contenido del tercer párrafo de la nota explicativa de la lista.

#### D. Labor futura de la Subcomisión II

197. El 16 de agosto, a raíz del acuerdo logrado en la Subcomisión sobre la lista de temas y cuestiones, las delegaciones de Australia y del Canadá presentaron un documento que contenía propuestas sobre la organización futura de la labor de la Subcomisión II. Esas propuestas se hallan en el documento A/AC.138/SC.II/L.14 (anexo III.11). No hubo tiempo para examinarlo detalladamente. Ello no obstante, se expresó la esperanza de que se llegaría pronto a un acuerdo sobre la organización de la labor futura de la Subcomisión II.

#### E. Aprobación del informe de la Subcomisión

198. En su 47a. sesión, celebrada el 17 de agosto de 1972, la Subcomisión aprobó el presente informe y decidió transmitirlo a la Comisión.

#### IV. CUESTIONES Y FUNCIONES ASIGNADAS A LA SUBCOMISION III

##### A. Introducción

199. La Subcomisión III de la Comisión sobre la Utilización con Fines Pacíficos de los Fondos Marinos y Oceánicos fuera de los Límites de la Jurisdicción Nacional continuó en 1972 la labor que la Comisión le había confiado en virtud del acuerdo sobre la organización de los trabajos al que se había llegado el 12 de marzo de 1971, en virtud del cual se asignaron a la Subcomisión III los siguientes temas y funciones 20/: "Considerar la preservación del medio marino (incluyendo, entre otras cosas, la prevención de la contaminación) y la investigación científica, y preparar proyectos de artículos de tratado al respecto".

200. En 1972, la Subcomisión III celebró dos períodos de sesiones. El primero tuvo lugar en Nueva York, del 28 de febrero al 31 de marzo, y consistió en cinco sesiones (15a. y 19a.). El segundo período de sesiones se celebró en Ginebra del 17 de julio al 18 de agosto de 1972 e incluyó 13 sesiones (20a. a 32a.).

201. Por ser plenaria, la Subcomisión III estaba compuesta por los Estados miembros de la Comisión. Los cinco Estados que habían pasado a formar parte de la Comisión en virtud de la resolución 2881 (XXVI) de la Asamblea General, de 21 de diciembre de 1971 (China, Fiji, Finlandia, Nicaragua y Zambia), también participaron en los trabajos de la Subcomisión desde el comienzo del período de sesiones de marzo. Asimismo asistieron a las sesiones, los siguientes Estados Miembros de las Naciones Unidas, que aceptaron la invitación a participar como observadores: Arabia Saudita, Barbados, Bhután, Birmania, Cuba, Haití, Honduras, Irlanda, Israel, Jordania, Malawi, Mongolia, Omán, Portugal, República Arabe Siria, República Dominicana, República Khmer, Sudáfrica y Yemen Democrático. También estuvieron representadas la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Organismo Internacional de Energía Atómica, la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y su Comisión Oceanográfica Intergubernamental, la Organización Meteorológica Mundial, la Organización Mundial de la Salud y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

202. Al igual que en 1971, la Mesa de la Subcomisión III estuvo compuesta como sigue:

Presidente:	Sr. M. Alfred Van der Essen (Bélgica)
Vicepresidentes:	Sr. Mebratu Gebre Kidan (Etiopía) Sr. Augusto Espinosa Valderrama (Colombia)
Relator:	Sr. Takeo Iguchi (Japón)

203. Durante parte del período de sesiones de marzo se estudió el programa de trabajo basado en una propuesta del Canadá, programa que, con las revisiones y modificaciones introducidas en el curso de los trabajos de la Subcomisión, fue finalmente aprobado como documento A/AC.138/SC.III/L.14, en la 19a. sesión, el 29 de marzo de 1972. El programa de trabajo, que figura en el anexo IV, 1 del presente informe, contiene los cinco epígrafes principales siguientes:

---

20/ Ibid., A/8421, párr. 19.

- A. Preservación del medio marino (incluidos los fondos marinos)
- B. Eliminación y prevención de la contaminación del medio marino (incluidos los fondos marinos)
- C. Investigación científica sobre el medio marino (incluidos los fondos marinos)
- D. Desarrollo y transmisión de tecnología
- E. Otros asuntos.

En el programa se prevé tanto la celebración de un debate general como la formulación de principios jurídicos y de proyectos de artículos de tratado. Asimismo se prevé la coordinación con los esfuerzos conexos de otros foros, mediante la cual la Subcomisión III podrá conseguir, en relación con las cuestiones pertinentes, el apoyo adecuado de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental, de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental y de otros organismos especializados u órganos o conferencias intergubernamentales que se ocupan también de cuestiones comprendidas en la esfera de la competencia de la Subcomisión. Asimismo quedó entendido que el programa de trabajo podría ser objeto de modificaciones y que el orden en que aparecían los temas dentro de él no prejuzgaba el orden de prioridad que debía seguirse para su examen en la Subcomisión.

204. Como parte integrante del proceso de coordinación y comunicación, la Subcomisión aceptó una sugerencia de Australia en el sentido de que el Presidente comunicase los resultados de los debates celebrados en el período de sesiones de marzo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. En consecuencia, el Presidente, Sr. van der Essen, dirigió al Presidente de la Comisión, Sr. H.S. Amerasinghe, una carta en la que se reseñaban las deliberaciones de la Subcomisión III, reflejadas en las actas resumidas. El Presidente de la Comisión transmitió a su vez a la Conferencia, con la aprobación de la Comisión, dicha carta y las actas resumidas del período de sesiones de marzo, que contenían valiosas sugerencias sobre principios para su adopción por la Conferencia.

205. Como parte de la estrecha cooperación solicitada en la resolución 2750 C (XXV) de la Asamblea General, la Subcomisión III escuchó informes o recibió información sobre los trabajos pertinentes de los siguientes órganos y conferencias: el segundo período de sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre contaminación de los mares, celebrado en Ottawa, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, la Conferencia preliminar de expertos gubernamentales para formular un proyecto de convención sobre la condición jurídica de los Sistemas de Adquisición de Datos Oceánicos (SADO), celebrada con los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Conferencia Técnica de la FAO sobre la contaminación de las aguas del mar y sus efectos sobre los recursos vivos y la pesca, celebrada en Roma en diciembre de 1970, y la Conferencia regional de Oslo sobre el vertido de desechos en el océano que aprobó

el Convenio para la prevención de la contaminación marina provocada por vertidos desde buques y aeronaves, firmado en Oslo el 15 de febrero de 1972. Los documentos presentados a la Subcomisión en 1972 eran los siguientes 21/:

Convenio para la prevención de la contaminación marina provocada por vertidos de buques y aeronaves. Firmado en Oslo, Noruega, el 15 de febrero de 1972 (A/AC.138/SC.III/L.9).

Informe acerca de los preparativos para la Conferencia Internacional sobre contaminación del mar que será convocada por la OCMI en 1973 (A/C.138/SC.III/L.15).

Informe del representante del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, presentado en la 20a. sesión de la Subcomisión III, celebrada el 20 de julio de 1972, acerca de las medidas adoptadas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano respecto de la contaminación de los mares y la preservación del medio marino (A/AC.138/SC.III/L.16).

Decisiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (5 a 16 de junio de 1972) relativas a la preservación del medio marino y a la contaminación de los mares (A/AC.138/SC.III/L.17).

Documento de trabajo presentado por la delegación del Canadá: Principios relativos a la investigación científica de los mares (A/AC.138/SC.III/L.18) (anexo IV, 2).

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas: proyecto de resolución sobre medidas para impedir la contaminación del medio marino (A/AC.138/SC.III/L.19).

Perú: Cambios propuestos en la definición de contaminación y en los principios generales para la evaluación y el control de la contaminación de los mares, que fueron objeto de la recomendación 92 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (A/AC.138/SC.III/L.17, recomendación 92, y A/CONF.48/8, párr. 197) (A/AC.138/SC.III/L.20).

Declaración del representante de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental acerca de las actividades de la Organización en materia de rutas marítimas, sistemas de separación del tráfico, zonas por las que no deben pasar ciertos buques y cuestiones conexas, formulada en la 22a. sesión de la Subcomisión III, celebrada el 26 de julio de 1972 (A/AC.138/SC.III/L.21).

Australia, Canadá, Colombia, Chile, Fiji, Filipinas, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Tailandia: proyecto de resolución (A/AC.138/SC.III/L.22) (anexo IV, 4).

Documento de trabajo presentado por la República Popular de Bulgaria; la República Socialista Soviética de Ucrania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas: Disposiciones fundamentales relativas a la cooperación internacional en la investigación científica de los océanos del mundo (A/AC.138/SC.III/L.23) (anexo IV, 3).

---

21/ En la 87a. sesión, la Comisión acordó que el documento de trabajo del Canadá sobre la preservación del medio marino (A/AC.138/SC.III/L.26) fuera incluido en un anexo (anexo IV, 7) y considerado como tal.

Proyecto de resolución sobre medidas preliminares para impedir y combatir la contaminación de los mares, presentado por Australia, Bulgaria, Canadá, Grecia, Islandia, Noruega, Países Bajos, República Socialista Soviética de Ucrania, Suecia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (A/AC.138/SC.III/L.25) (anexo IV, 5).

206. La Subcomisión estudió tanto la preservación del medio marino, incluida la prevención de la contaminación, como la investigación científica y la transmisión de tecnología. Se consideró que quedaba concluido el debate general sobre la contaminación marina, y la Subcomisión decidió en su 23a. sesión, el 28 de julio de 1972, crear un grupo de trabajo sobre la contaminación de los mares basándose en la misma fórmula que el grupo de trabajo sobre el régimen de la Subcomisión I, cuyos miembros serían designados por los diversos grupos regionales, en la inteligencia de que cualquier miembro de la Subcomisión III podría participar en las deliberaciones del grupo. Se sugirió que la Subcomisión acordase, como mandato de su grupo de trabajo, la preparación de una lista de cuestiones específicas que sirviese de base para formular propuestas concretas sobre los proyectos de artículos, y que tal lista incluyese el examen de los proyectos de resolución sobre la prevención de la contaminación de los mares. El Grupo de Trabajo, denominado Grupo de Trabajo 2 22/, celebró dos sesiones en las que eligió como Presidente al Sr. J.L. Vallarta de México. Su mandato consistía en redactar textos que llevasen a la formulación de proyectos de artículos de tratado sobre la preservación del medio marino y la prevención de la contaminación de los mares. El Grupo de Trabajo invitó a los miembros de la Subcomisión a que presentasen, a su discreción y para uso del Grupo de Trabajo, observaciones escritas, y en particular proyectos de artículos de tratado, sobre la cuestión de la preservación del medio marino y la prevención de la contaminación. Tales observaciones deberían presentarse lo antes posible, preferiblemente antes de que finalizase el vigésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea General y en todo caso antes del 15 de enero de 1973, suponiendo que la Asamblea General mantuviese en funciones a la Comisión.

207. En el curso de las deliberaciones se expresaron opiniones sobre algunos aspectos del mandato de la Subcomisión, por ejemplo la relación y la coordinación con otras organizaciones interesadas tales como la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, y la definición del alcance y del campo del proyecto de artículos de tratado que la Subcomisión tenía que formular y presentar a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Los problemas planteados y otras cuestiones conexas se exponen a continuación, con referencia tanto a la preservación del medio marino, incluida la prevención de la contaminación, como a la investigación científica.

---

22/ Los miembros del Grupo de Trabajo eran los siguientes: Argelia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Costa de Marfil, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Filipinas, India, Indonesia, Irán, Japón, Kenia, Liberia, Madagascar, Marruecos, Mauricio, México, Nigeria, Nueva Zelandia, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Socialista Soviética de Ucrania, Rumania, Somalia, Sudán, Suecia, Tailandia, Trinidad y Tabago, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Venezuela. Hay una vacante en el Grupo asiático, que será cubierta oportunamente por el grupo.

B. Preservación del medio marino, incluida la prevención de la contaminación de los mares

208. Se dijo, en general, que la Subcomisión tenía el deber de elaborar el marco jurídico internacional general y de redactar los principios jurídicos por los que se rigiese la protección del medio marino. Se subrayó que la elaboración de dicho marco jurídico debía basarse en los 23 principios y la exposición de objetivos relativos a la contaminación de los mares, redactados en Ottawa y aprobados por la Conferencia sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo, y en la Declaración sobre el Medio Humano se subrayó también que la Subcomisión no debía tratar de redactar un reglamento técnico. Se dijo que la Subcomisión debía examinar asimismo los tres principios sobre la contaminación de los mares, redactados también en la reunión de Ottawa, que no habían sido aceptados ni rechazados por la Conferencia sobre el Medio Humano, sino que habían sido remitidos a la Conferencia sobre el Derecho del Mar para que adoptara las medidas que juzgase apropiadas. Asimismo, quedó en claro que podrían considerarse otras propuestas. Quedó entendido que algunos gobiernos que no habían participado en la Conferencia de Estocolmo y que consideraban que en la Conferencia no hubo representación universal se reservaban el derecho de definir en una fecha ulterior su posición respecto de los documentos y las decisiones de esa Conferencia, y que la participación de sus delegaciones en las sesiones de la Subcomisión III no implicaba un cambio en su actitud.

209. También se declaró que la Subcomisión debía abstenerse de dar por sentado que la Comisión de los Fondos Marinos tuviese el derecho o el deber de coordinar las actividades de otras, si bien ello no significaba que la Subcomisión no debiese tomar en consideración la labor que se realizaba en otros órganos. Mas no debía inmiscuirse en los trabajos detallados y a menudo sumamente técnicos que realizaban otros organismos ni tampoco debía duplicar dichos trabajos. Era importante que la Subcomisión tuviese en cuenta la experiencia adquirida por tales organizaciones. Se manifestó que, en virtud de su mandato, la Subcomisión no estaba facultada para hacer recomendaciones de ninguna clase a otros órganos internacionales, pero que podría expresar opiniones acerca de la labor de tales órganos.

210. Por otra parte, se declaró que la Comisión tenía poderes de coordinación, pues el derecho del mar era una unidad y ella debería ser asegurada por la Conferencia sobre el Derecho del Mar y su fase preparatoria. Se dijo que, si bien eran necesarias la cooperación y la coordinación entre los diferentes órganos, ello no significaba que la Subcomisión hubiese de aceptar una función subordinada o pasiva y limitarse simplemente a examinar la labor que realizaban otras organizaciones. La Subcomisión tenía su propia esfera de competencia y un mandato explícito de la Asamblea General para formular principios jurídicos y redactar artículos de tratado, y, por consiguiente, no debía necesariamente esperar a que otros órganos le hiciesen sugerencias o tomaran decisiones. Se señaló que la Subcomisión III tenía competencia exclusiva para preparar principios jurídicos generales por los que se rigiesen todas las demás organizaciones que intervenían en este campo. También se dijo que los demás órganos de las Naciones Unidas que estudiaban los problemas del mar debían estar informados del mandato de la Comisión de los Fondos Marinos y de la Subcomisión III, y que correspondía a la Asamblea General aclarar la situación.

211. Se acordó en general que la Subcomisión concentrase la atención en los principios jurídicos fundamentales que formarían la base de un proyecto de artículos de tratado de carácter general. Cuando procediese, la Subcomisión estudiaría

también problemas más concretos. Se sugirió que los documentos básicos para la labor de la Subcomisión fuesen la Declaración sobre el medio humano, los 23 principios relativos a la contaminación de los mares y la exposición de objetivos, documentos todos aprobados en la Conferencia y remitidos a la Comisión de los Fondos Marinos, así como los tres principios redactados en Ottawa que se mencionan anteriormente y las **propuestas** hechas en las sesiones de la Subcomisión. Se sugirió que se concediese especial atención a los mejores medios de desarrollar esos principios dentro del concepto más amplio del derecho del mar.

212. Se dijo que, como la Declaración sobre el medio humano y los principios generales no estaban redactados en el léxico de los tratados internacionales, aunque algunos de ellos reflejaban normas de derecho internacional, era necesario complementarlos con disposiciones más concretas y había que esforzarse por definir y elaborar normas y medidas para llevar a la práctica esos principios dentro del contexto más amplio del derecho marítimo. El grupo de trabajo podía estudiar si debía celebrarse un solo convenio completo o varios convenios relativos a diversos aspectos de la preservación del medio marino.

213. Se insistió en que podía combatirse eficazmente la contaminación del mar mediante una combinación de normas y reglamentos mundiales, regionales y nacionales: en los de alcance mundial se fijarían las medidas mínimas que habrían de tomarse para la preservación del medio marino, y en los regionales y nacionales se prescribirían las medidas particulares y más estrictas que se necesitaran para hacer frente a situaciones especiales en una región o en un país. Se observó que la fijación de pautas generales mejoraría los esfuerzos regionales y podría también evitar la celebración de una serie de convenciones fragmentarias. La proliferación de acuerdos regionales independientes podría suscitar ulteriormente dificultades de coordinación.

214. Se manifestó que, como parte de su labor, la Subcomisión debía examinar si era factible redactar, para la Conferencia sobre el Derecho del Mar de 1973, artículos de tratado de carácter general acerca de la contaminación de todas las fuentes en el espacio oceánico en conjunto, para sustituir los artículos 24 y 25 de la Convención sobre la Alta Mar, aprobada en Ginebra en 1958. También se señaló que las convenciones técnicas existentes, ya celebradas o en estudio, sobre diversos aspectos de la contaminación de los mares o sobre la contaminación en determinadas regiones del mundo podrían tener cabida en el marco de dichos artículos de tratado de carácter general. La Subcomisión debería examinar igualmente la posibilidad de redactar artículos de tratado de carácter general acerca de la conservación del medio marino tanto dentro de la jurisdicción nacional como fuera de ella. Se sugirió que, al redactar artículos de tratado de carácter general sobre ese tema, la Subcomisión tuviese en cuenta las convenciones pertinentes y la labor actual y futura de los organismos especializados. En razón de la indivisibilidad del medio marino, también se sugirió que el proyecto de artículos de tratado abarcase tanto la contaminación en las aguas territoriales como la contaminación en alta mar. Sin embargo, se declaró que, en lo referente a la cuestión de la contaminación del medio marino dentro del mar territorial y dentro de los límites de la jurisdicción nacional, incumbía a los Estados ribereños adoptar medidas eficaces para preservar, de modo práctico, el medio marino de tales zonas. La Comisión sólo podía hacer recomendaciones en relación con esas zonas, pues estaban sometidas a la soberanía nacional.



215. Aunque la Conferencia de Estocolmo había reconocido que, en su mayor parte, la contaminación de los mares procedía de actividades terrestres, se sugirió que el examen de esta cuestión por la Comisión girase principalmente en torno a las formas de contaminación de fuente marítima. Se sugirió también que esta Subcomisión concentrase la atención en la contaminación causada por buques. No obstante, se opinó asimismo que los reglamentos y las normas que se adoptaran debían aplicarse de modo universal para controlar todas las fuentes de contaminación independientemente de su ubicación, puesto que el océano debía ser considerado como un todo. Muchas medidas sobre la contaminación de fuente terrestre se adoptarían principalmente en el plano nacional, pero convendría llegar a un acuerdo sobre unos principios muy básicos para reducir la falta de uniformidad de las legislaciones nacionales. Se señaló que la existencia de normas universalmente aplicables para impedir la contaminación de las zonas situadas fuera de los límites de la jurisdicción nacional era la necesidad más apremiante. A este respecto, sin embargo, se indicó que las cuestiones de contaminación resultantes de la exploración y la explotación de la zona de los fondos marinos debían ser resueltas por la Subcomisión I, puesto que no podían tratarse independientemente de otros elementos del régimen de los fondos marinos.

216. Se advirtió que, cualquiera que fuese el carácter definitivo de los artículos que habían de redactarse, debía atribuirse la importancia adecuada a las necesidades y los intereses de los países en desarrollo. Se indicó que sería necesario adoptar disposiciones para proporcionar a los países en desarrollo formación y asistencia técnica y financiera a fin de que estuvieran en condiciones de cumplir los futuros reglamentos y normas relativos a la prevención y el control de la contaminación de los mares. Se señaló a este respecto que la mayor parte de la carga que suponía la tarea de preservar el medio debía recaer sobre los países industrialmente desarrollados, por cuanto eran los principales responsables de la contaminación; era importante reconocer que los futuros reglamentos relativos a la prevención de la contaminación no debían aplicarse uniformemente a todos los Estados y que era indispensable que no se entorpeciese la marcha de los países en desarrollo hacia el progreso.

217. El principio 21 de la Declaración sobre el Medio Humano debía considerarse como punto de partida en la labor de elaboración de un régimen para la preservación del medio marino, puesto que establecía el equilibrio adecuado entre los derechos y las obligaciones de los Estados ribereños. Había que llegar a una transacción no sólo entre los intereses nacionales, sino también entre los intereses nacionales y los de la comunidad internacional.

218. Se manifestó que la cuestión de si un Estado ribereño tenía el derecho de jurisdicción sobre una zona determinada adyacente a su mar territorial, para evitar daños dentro de su territorio que pudieran resultar de la contaminación, debía examinarse con cierto detenimiento en la Subcomisión. Se opinó, por una parte, que los Estados ribereños, por ser las víctimas directas de la contaminación de los mares, tenían pleno derecho a aplicar las medidas necesarias en zonas, dentro de determinados límites, que eran adyacentes a su mar territorial, para evitar, controlar y eliminar todo daño a esas zonas o a su territorio resultante de la contaminación extrínseca a tales zonas o a su territorio. Se estimó también que los Estados ribereños tenían derecho a pedir indemnización a los autores de la contaminación. Por otra parte, se señaló que la división del espacio oceánico era incompatible con el marco jurídico fundamental previsto en los principios para aplicar reglamentos y normas universales a todas las regiones marítimas. Se



sugirió, además, que el enfoque por zonas no era eficaz e introduciría una dicotomía en el modo de control, y que la aplicación de varias legislaciones nacionales, por fuerza diferentes, podría suscitar confusión en la alta mar. Se adujo también que la jurisdicción del Estado de pabellón en materia de aplicación constituía una especie de método unilateral y que la jurisdicción de los Estados ribereños no sería necesariamente incompatible con normas universales.

219. Se sugirió que la Subcomisión reconociera que los tres principios sobre derechos de los Estados ribereños formulados en Ottawa planteaban cuestiones muy fundamentales en el derecho del mar. Se sugirió asimismo que el primero de dichos principios representaba una extensión lógica de los intereses especiales de los Estados ribereños en la administración de los recursos tal como se reconocía en la exposición de objetivos aprobada por la Conferencia sobre el Medio Humano en Estocolmo, así como el corolario lógico de la importancia que se daba a las obligaciones de los Estados ribereños en la mayoría de los 23 principios sobre la contaminación de los mares. Se insistió en que las responsabilidades debían estar equilibradas con los derechos y los poderes necesarios y en que, en los casos en que no hubiera normas internacionales, los Estados ribereños deberían estar en condiciones de imponer sus propias normas razonables en las zonas adyacentes a su mar territorial. Por otra parte, se afirmó que la concesión de amplios poderes a los Estados ribereños no favorecería el equilibrio adecuado de intereses entre los Estados marítimos, los que tenían flotas mercantes y los ribereños ni impediría la contaminación del mar abierto.

220. Se sugirió que el concepto de administración del espacio oceánico que se enunciaba en la exposición de objetivos era fundamental no sólo para los problemas de la contaminación de los mares, sino también para otros aspectos del derecho del mar como las pesquerías y la investigación científica, y por tanto tenía importancia para la Comisión en general. Se sugirió que varios principios sobre contaminación del medio marino podían considerarse como deberes existentes en virtud del derecho internacional consuetudinario, por ejemplo los principios 1, 7 y 17. El principio 1, que conciliaba los intereses nacionales y los de la comunidad, podría constituir el criterio básico de la Subcomisión. Se consideró que era importante definir con más claridad las responsabilidades de los Estados respecto del control de la contaminación de la alta mar proveniente de su propio territorio incluido su mar territorial, así como su derecho de impedir que la contaminación de los mares procedente de zonas situadas fuera de sus aguas territoriales causara daños en sus costas. Se sugirió además que podía considerarse este principio desde el punto de vista de la responsabilidad de un Estado por los daños causados por particulares dentro de su jurisdicción o bajo su control, y que tal deber podría incluir el impedir que los particulares causaran daños.

221. Se indicó que esta cuestión de la responsabilidad, objeto también del principio 22 de la Declaración, entrañaba el examen de la teoría del riesgo creado. Se señaló que, como era posible causar daños accidentalmente, debería tomarse en consideración el requisito del seguro obligatorio para los usos del océano que fueran lo bastante peligrosos como para justificar la aplicación de la teoría del riesgo creado, y que como los sistemas de seguros variaban, debería estudiarse esta cuestión con mayor detalle. El principio 18 de los principios generales para la evaluación y el control de la contaminación de los mares, aprobados en Estocolmo, debería estudiarse en este contexto.

222. Se consideró que el Convenio Internacional de 1969 de responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, y el Convenio suplementario de 1971 podían servir de punto de partida para la ulterior elaboración de normas jurídicas en la esfera de la responsabilidad y la indemnización por daños. También se sugirió que la formulación contenida en la resolución 2749 (XXV) de la Asamblea General podría constituir una orientación, pero que en relación con las reclamaciones por responsabilidad civil debería estudiarse un sistema objetivo de seguro independientemente de la culpa.

223. Se dijo que el principio 6 no era sino un primer enfoque del problema de elaborar disposiciones especiales para atender a las necesidades de los países en desarrollo, y que la Subcomisión tendría que ir más allá al elaborar ese principio.

224. Se sugirió que el principio 7 debería desarrollarse cuidadosamente, a fin de idear medios de determinar la responsabilidad de los Estados o las organizaciones internacionales por los daños que pudieran causar y que habría consecuencias graves y de fondo. Se opinó que este principio también reconocía el deber de pagar una indemnización por daños a las víctimas.

225. Se opinó que en el principio 13 se trataban varias cuestiones importantes, especialmente, la necesidad de adoptar medidas de carácter nacional y regional coherentes con las de carácter mundial, y que esa misma coherencia debería aplicarse también al proyecto de artículos sobre vertimiento de desechos en los océanos. Se sugirió, por tanto, que se prestara mayor atención al proyecto de artículos y anexos sobre vertimiento de desechos en los océanos dado que, en muchos casos, la eliminación de desechos en tierra era un procedimiento mucho más seguro. Se consideró que la necesidad de evitar el traspaso de la contaminación de una zona del medio humano a otra, tal como se expresaba en ese principio, tenía especial importancia al respecto.

226. Se propuso que las medidas adoptadas para la zona internacional de los fondos marinos, especialmente en lo referente al principio 19, representaran las medidas mínimas que debían adoptar los Estados en las zonas de su jurisdicción.

227. Se señaló que el principio 21 se atenía a la Declaración de Santo Domingo (A/AC.138/80) (anexo I, 2) que reconocía el derecho de los Estados ribereños a adoptar medidas para evitar la contaminación del mar patrimonial, y a las conclusiones del Seminario Africano de Yaundé (A/AC.138/79) (anexo I, 3) que contenía disposiciones análogas. Asimismo se señaló que ese principio no prejuzgaba los derechos de un Estado ribereño a proteger su territorio contra daños causados por actividades de otros Estados en zonas adyacentes.

228. Respecto del vertimiento de desechos en los océanos, se dijo, por una parte, que sería muy de celebrar la adopción de medidas urgentes, dado que era necesario controlar esa actividad de los Estados industrializados. No se consideró que esas medidas urgentes, entre ellas la conferencia que se proyectaba celebrar en Londres en noviembre de 1972 a fin de redactar una convención internacional especializada, habrían de prejuzgar el desarrollo ulterior de un cuerpo más amplio de derecho del mar ni la posición de ningún Estado en cuanto al desarrollo de tal derecho. Se estimó que también se añadirían oportunamente al cuerpo más amplio del derecho del mar otras muchas convenciones especializadas de ese género, existentes o todavía por negociar. Se señaló que la cantidad de contaminantes que

entraba en los océanos aumentaba todos los años y que de continuar esta entrada incontrolada podría amenazar la productividad de los océanos del mundo y el bienestar de toda la humanidad. Se señaló además que el vertimiento directo de desechos se realizaba por lo general en alta mar y en gran medida sin control alguno. Por esos motivos, entre otros, era necesaria una acción urgente.

229. Por otra parte, se señaló que era absolutamente imprescindible estudiar la cuestión de la contaminación de los mares de un modo consecuente, amplio y coordinado, con objeto de evitar la adopción de disposiciones diferentes por distintos órganos o incluso por distintos gobiernos. Se puso de relieve que todos los compromisos futuros debían concertarse dentro del marco de unos principios básicos, universalmente aceptados, y con el debido respeto a los derechos de todos los Estados. Además, la fragmentación de los problemas pertenecientes al derecho del mar podría provocar gran confusión, y por tanto la convención no debía adoptar su forma definitiva sino en el contexto de la conferencia sobre el derecho del mar. En relación directa con la proyectada conferencia de Londres, se señaló que las reuniones preparatorias, celebradas en Reykjavik y en Londres, no habían sido lo bastante representativas, especialmente de los Estados del mundo en desarrollo, y que dichas reuniones se habían celebrado fuera del sistema de las Naciones Unidas y sin tener muy en cuenta las opiniones expresadas en la Subcomisión por algunos de esos Estados. Sin embargo, se señaló también que varios Estados en desarrollo habían asistido a las reuniones preparatorias, y que se había informado a todos los Estados de su celebración. También se mantendría plenamente informadas a las Naciones Unidas de la organización de la propuesta conferencia de Londres.

230. Respecto del proyecto de artículos y sus anexos, reproducidos en el documento A/CONF.48/8/Add.1, se dijo que podían servir de base para preparar una convención eficaz. Se señaló que se habían dejado a la conferencia sobre el derecho del mar todas las cuestiones de jurisdicción para que las decidiera. Se dijo también que los Estados ribereños harían aplicar los artículos no sólo contra los buques sujetos a su jurisdicción, sino también contra los que se encontraran en zonas de su jurisdicción. Se indicó que esta excepción a la modalidad de convenciones basadas en el principio del Estado de pabellón podía ser muy importante desde el punto de vista del medio.

231. Sin embargo, se indicó que los artículos no establecían una distinción entre países desarrollados y países en desarrollo respecto de su capacidad relativa para contaminar el océano, expresándose el temor de que con ello se impusiera una carga injusta a los países en desarrollo en caso de que entrara en vigor tal convención. Se señaló que una convención internacional para combatir el vertimiento de desechos debía sobre todo evitar el legalizar las prácticas actuales de vertimiento de los países industrializados, posibilidad contra la cual había protestado la gran mayoría de los Estados. Se estimó que el principio del patrimonio común de la humanidad ofrecía fundamentos jurídicos para sostener que el vertimiento de desechos en los fondos marinos violaría el derecho internacional.

232. Se puso de manifiesto que la prohibición de verter desechos debía constituir la base de la convención y que, por tanto, las excepciones de esa prohibición debían formularse con mucho cuidado. En consecuencia, se hizo hincapié en la excepción contenida en la nota a) del anexo I, ya que todavía no se conocían suficientemente los efectos del agua del mar sobre los contenedores, y se estimó que la excepción formulada en el artículo V del proyecto debía precisarse más. Se dijo que las vidas humanas que se trataba de proteger en ese artículo del proyecto

debían limitarse a las de personas a bordo de buques, plataformas y aeronaves. Se opinó además que el párrafo reproducido entre corchetes en el apartado d) del artículo IX del proyecto era inaceptable, pues la inmunidad soberana no eximiría del cumplimiento las obligaciones a que estaban sujetos los buques y las aeronaves. Se propuso asimismo que se incluyeran en el anexo I los desechos de alto contenido radiactivo y los agentes de guerra química y biológica y se eliminaran los corchetes del texto actual. Respecto del anexo III, se propuso que se prohibiera el vertimiento de desechos en zonas marinas sujetas a jurisdicción nacional. Se pidió que el Grupo de Trabajo mencionado en el párrafo 206 examinara el proyecto de artículos con sus anexos, de conformidad con la decisión de la Conferencia sobre el Medio Humano de remitir esos textos a la Comisión de los Fondos Marinos para que informara e hiciera observaciones sobre ellos.

233. El representante de la OCMI informó acerca de los importantes progresos que se habían hecho en recientes reuniones de los subcomités de la OCMI que se ocupaban de preparar los proyectos de la convención o las convenciones que se presentarían a la Conferencia de la OCMI sobre Contaminación del Mar. Los trabajos preparatorios se habían centrado en el perfeccionamiento del Convenio de 1954 para prevenir la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, modificado en 1962, 1969 y 1971, incluida la ampliación de sus requisitos para que abarcaran las sustancias nocivas o perjudiciales distintas de los hidrocarburos. El proyecto de convención no incluía las actividades relacionadas con la exploración y explotación de los recursos minerales de los fondos marinos ni el vertimiento de desechos en el océano. Dijo también que la Conferencia de la OCMI de 1973 examinaría la ampliación del Convenio de 1969 relativo a la intervención. El nuevo instrumento que se preparaba daría a los Estados ribereños el derecho a intervenir o a adoptar medidas preventivas para proteger sus costas contra la contaminación provocada por accidentes sufridos por buques que transportasen sustancias distintas de los hidrocarburos.

234. Se pidió que se diera un firme apoyo a los trabajos de la OCMI relativos a la contaminación provocada por buques porque no cabía esperar que la conferencia sobre el derecho del mar se ocupara de todos los complejos problemas de la contaminación del mar; por lo tanto, esa Conferencia debía tratar de completar y apoyar otras actividades en curso; se pidió además que todos los países que no se hubieran adherido a los Convenios de la OCMI o no los hubieran ratificado lo hicieran y refrendaran la ampliación de los conceptos de responsabilidad e indemnización a fin de incluir las sustancias nocivas o perjudiciales distintas de los hidrocarburos. Se estimó que debía prestarse mayor atención a las necesidades y propuestas de los Estados ribereños, sin perjuicio de mantener en todo momento el equilibrio entre los intereses, los derechos y las obligaciones de los Estados marítimos, los que poseían flotas mercantes y los ribereños.

235. Se sugirió que todos los nuevos buques-cisterna comerciales llevaran un certificado internacional de construcción de buques-cisterna (prevención de la contaminación) y que debía incluirse esa propuesta en la convención de 1973. Se sugirió además que se declarase obligatoria la denegación de entrada a los buques que no poseyeran ese certificado. Se estimó que todo el problema de la prevención de la contaminación era una cuestión importante para la Subcomisión puesto que ésta tenía que ocuparse de los problemas generales de la contaminación del mar.

236. Sin embargo, se estimó también que la OCMI era únicamente un órgano técnico y que la convención de la OCMI que se concertara en 1973 tendría que ser examinada luego por la conferencia sobre el derecho del mar y revisada, en caso necesario,

teniendo en cuenta el cuerpo más amplio de las normas del derecho marítimo. Se declaró que, puesto que la Subcomisión tenía competencia exclusiva en los problemas jurídicos y políticos, debían comunicársele todos los documentos técnicos e instrumentos pertinentes para que los utilizara en la preparación de un proyecto de artículos de tratado. En relación con esto, se señaló que la OCMI, como órgano técnico, sólo podía ocuparse de la contaminación de los mares en cuanto afectaba a la seguridad de la navegación. No obstante, se señaló también que las tareas respectivas de la OCMI y de la conferencia sobre el derecho del mar estaban definidas con suficiente claridad: la conferencia sobre el derecho del mar prepararía los artículos de un tratado en el que se establecerían las políticas básicas, en tanto que la OCMI proporcionaría su asesoramiento técnico y se encargaría de dictar reglamentos detallados y de elaborar acuerdos multilaterales dentro de su esfera de competencia.

237. Se propuso que la OCMI estudiara la posibilidad de ampliar algunos conceptos como el de "accidente marítimo" a fin de dar más alcance a los criterios del Convenio de 1969 relativo a la intervención que regulaban los casos en que podían intervenir los Estados. Se informó asimismo a la Subcomisión acerca de los sistemas de separación del tráfico internacional y se sugirió que la conferencia sobre el derecho del mar incluyera en su tratado una cláusula en virtud de la cual todos los buques que navegasen por zonas a las que se aplicaran sistemas internacionales de separación del tráfico estuvieran obligados a respetar esos sistemas de conformidad con las normas y los procedimientos establecidos por la OCMI. Se declaró que el tratado debería prescribir la responsabilidad estricta de todos los buques por accidentes ocasionados al desviarse de esos sistemas. El representante de la OCMI señaló que, aunque esos sistemas tenían actualmente el carácter de recomendaciones, urgía que todos los Estados los adoptaran. La Subcomisión acordó que también se debía señalar este problema a la atención de la Subcomisión II por estar relacionado con los estrechos y las zonas cercanas a éstos.

238. Se hizo notar que los problemas de la contaminación de los mares no podían resolverse mediante el desarrollo del derecho internacional únicamente, sino que requerían la cooperación activa entre los Estados y las organizaciones internacionales en la esfera técnica y científica. Se señaló que era indispensable una amplia cooperación internacional para tener una idea clara y completa de lo que implicaba la prevención de la contaminación de los mares a escala mundial. Se subrayó la necesidad de coordinación entre los trabajos de la Subcomisión y los de otros órganos interesados con el fin de evitar la duplicación.

### C. Investigación científica

239. Se destacó la necesidad de establecer una estrecha conexión entre los principios referentes a la investigación científica y los referentes a la preservación del medio marino. Sin duda alguna, la solución de los problemas de la contaminación de los mares guardaba relación directa con los resultados de la investigación científica, de manera que las medidas adoptadas para asegurar la responsabilidad conjunta de los Estados con respecto a la preservación del medio marino debían promover también la cooperación y la transmisión de tecnología en la investigación científica.

240. Se señaló que la investigación científica de los mares facilitaba la previsión en la esfera del medio, la prevención de la contaminación de los mares y el desarrollo, conservación y administración de los recursos vivos del mar, así como el

desarrollo de la ciencia de la Tierra en su conjunto y de otras ciencias conexas. La formulación de técnicas de gestión adecuadas sería importante para la pesca comercial, ya que las cifras de captura mundial se aproximaban al máximo rendimiento sostenible, y se indicó que conociendo mejor la metodología de la clasificación de los recursos vivos del mar se dispondría de una importante base para preparar el proyecto de artículos de tratado. Se dijo que la Subcomisión debería recibir información técnica complementaria de los organismos especializados, particularmente la FAO.

241. Se hizo observar que en la recomendación 87 del Plan de Acción, la Conferencia sobre el Medio Humano había destacado la importancia de la investigación y de la vigilancia en el plano nacional e internacional y que sería necesario idear un sistema coordinado bilateral, regional y global que sirviera de base para la asistencia mutua en la adquisición de datos y el intercambio de información.

242. Se dijo que era necesario formular principios generales que regularan la investigación oceánica, en los que, sin dejar de reconocer la unidad del medio marino, no debía ignorarse la diversidad de los regímenes existentes en diferentes zonas marinas. Se señaló que el desarrollo de la ciencia y la tecnología había planteado nuevos y graves problemas en el derecho del mar en general y había dado considerable importancia a la naturaleza de los artículos que había que preparar sobre investigación científica. Parte de los debates celebrados en la Subcomisión sobre el tema de la investigación científica se basó en los principios propuestos por la delegación del Canadá (A/AC.138/SC.III/L.28) (anexo IV, 2) y por las delegaciones de Bulgaria, República Socialista Soviética de Ucrania y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (A/AC.138/SC.III/L.23) (anexo IV, 3). Se dijo que los principios jurídicos relativos a la investigación científica, su definición y sus características deberían ser preparados por la Subcomisión y que deberían redactarse artículos de tratado basados en ellos de conformidad con el programa de trabajo (anexo IV, 1). Se declaró también que era importante garantizar la necesaria unidad de las materias relativas a la conferencia sobre el derecho del mar y su fase preparatoria y, en consecuencia, se consideró que la Subcomisión, al igual que en lo referente a la cuestión del medio marino, debería desempeñar una función coordinadora respecto de la investigación científica en los océanos.

243. Se afirmó que la libertad de investigación científica era una de las libertades reconocidas de la alta mar, confirmada por una larga práctica, y que las disposiciones de la Convención de 1958 sobre la Plataforma Continental relativas a la investigación científica seguían siendo satisfactorias si se cumplían con arreglo a su espíritu. Por otra parte, se declaró que entre las libertades de la alta mar no figuraba tal libertad en relación con la investigación científica, y que esa libertad no podía deducirse en modo alguno de las disposiciones del artículo 2 de la Convención sobre la Alta Mar o de los trabajos preparatorios del proyecto de la Comisión de Derecho Internacional. Sin embargo, se observó también que la libertad de investigación científica se mencionaba en ese documento de la Comisión de Derecho Internacional. Se dijo también que la libertad de investigación científica no se mencionaba expresamente en el artículo 2 de la Convención sobre la Alta Mar y que la existencia de esta libertad se había reconocido sobre la base de la interpretación de las disposiciones de esos artículos, que hacían referencia, en términos generales, a otras libertades de la alta mar reconocidas en virtud de los principios generales de derecho internacional. Al propio tiempo se hizo observar que, con la única excepción de la plataforma continental, la investigación científica se hallaba en una especie de vacío jurídico, pues el derecho internacional no se había desarrollado al mismo ritmo que la creciente investigación científica de los océanos.



244. A los efectos de la elaboración de principios generales se dijo que debía hacerse un intento de distinguir entre investigación oceanográfica fundamental o investigación científica de buena fe y los aspectos de investigación aplicada, de carácter más práctico, en particular los referidos a la explotación comercial y usos militares. Se dijo que la investigación abierta o de buena fe debía ajustarse a los siguientes criterios: se realizaría en beneficio de toda la humanidad e implicaría la participación abierta en la planificación de los programas, la disponibilidad inmediata y la publicación de los resultados; se llevaría a cabo de manera que no causara daños de consideración al medio; no incluiría la utilización de recursos en cantidades comerciales; no conferiría derecho alguno de exploración o explotación comercial de los recursos.

245. Se hizo observar que existía acuerdo general sobre ciertos principios fundamentales aplicables a determinadas esferas, como el principio 10 de la resolución 2749 (XXV) de la Asamblea General que se aplicaba a los fondos marinos fuera de la jurisdicción nacional. Habida cuenta de este principio, y de la posibilidad de que la información derivada de la investigación científica se hiciera pública, se sugirió que de nada servía trazar una distinción entre investigación pura e investigación relacionada más directamente con la prospección comercial. Puesto que en definitiva el resultado sería posiblemente, restringir la investigación en detrimento de la comunidad internacional. Se indicó también que en todo caso sería sumamente difícil hacer estas distinciones ya que se estimaba que en realidad la mayor parte de la investigación científica podía utilizarse con fines comerciales o militares. Se declaró que lo que había que diferenciar era la investigación oceánica, sea cual fuere su finalidad o la forma en que se lleve a cabo, por una parte, y la exploración de los recursos marinos, por otra.

246. Se señaló que el estudio sísmico de los fondos marinos proporcionaba datos básicos con respecto a la posibilidad de hallar recursos pero que la prospección comercial requería operaciones en escala muy superior. Por ejemplo, para que una compañía petrolera decidiera hacer grandes inversiones con el fin de explotar un yacimiento había de disponer de una información mucho más detallada que la que le podía ofrecer la investigación científica.

247. Se indicó que sería necesario formular una definición que enunciara la naturaleza, las características y los objetivos fundamentales de la investigación científica de los mares. Esta definición debía recoger las aspiraciones de los países en desarrollo y su formulación debía estar en consonancia con las mismas. Se declaró que debía realizarse la investigación científica pertinente en los países en desarrollo con el fin de facilitar el desarrollo socioeconómico de esos países.

248. Se propuso también que la Subcomisión trabajara sobre la definición amplia y completa de la investigación científica de los mares (contenida en el documento A/AC.138/SC.III/18) (anexo IV, 2), sin tratar de distinguir entre los fines y propósitos con que se efectuara. Se sugirió que, en consecuencia, los Estados ribereños tendrían el derecho de reglamentar todas las actividades realizadas en zonas de su jurisdicción y aunque no hubiera que aplicar forzosamente los mismos criterios a toda clase de investigaciones científicas y de prospecciones de tipo comercial. Por una parte, se expresó la opinión de que la negativa del Estado ribereño a dar su consentimiento a la investigación científica no debería ser arbitraria y, por otra, que el Estado ribereño, en ejercicio de su soberanía, podía retirar su consentimiento sin expresar sus razones.

249. Se declaró que el aumento y el perfeccionamiento de los conocimientos relativos al medio marino eran de vital importancia para toda nación, ribereña o sin litoral, desarrollada o en desarrollo. Se señaló que esta búsqueda de conocimientos no sólo era una necesidad sino que en la zona situada fuera del mar territorial era también un derecho que no debía verse reducido o menoscabado por medidas restrictivas de los Estados, ribereños o no, excepto en los casos reconocidos por el derecho internacional. Igualmente se sugirió que se fomentare y facilitare la investigación para incrementar los beneficios que debía compartir toda la humanidad y que, por consiguiente, existía un interés común en aceptar normas que establecieran la máxima libertad para realizar investigaciones científicas en los océanos. Por otra parte, se dijo que debía reglamentarse la investigación científica en la zona fuera de la jurisdicción nacional.

250. Se señaló que el régimen jurídico de que se trataba regularía la investigación con arreglo a las diferentes zonas marinas y que las actividades de investigación de los mares no constituirían fundamento legal para hacer reclamaciones sobre los océanos o sus recursos fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Por consiguiente, se propuso que la Subcomisión definiera con mayor precisión los límites de la libertad de investigación en el mar en relación con los intereses legítimos de los Estados ribereños, por una parte, y con el nuevo régimen de la zona de los fondos marinos fuera de la jurisdicción nacional, por otra.

251. Se afirmó que la realización de investigaciones científicas en zonas en las que ejerciera su soberanía un Estado ribereño debería estar sujeta al consentimiento previo de ese Estado y a sus medidas reglamentarias. En virtud de esa soberanía, se afirmó que el Estado ribereño tenía un derecho exclusivo con respecto a toda clase de investigaciones científicas realizadas en su mar territorial y en sus aguas internas. Esto implicaría que sólo podrían realizarse investigaciones científicas dentro de estas zonas con el consentimiento del Estado ribereño y de conformidad con sus leyes y reglamentos. Se hizo observar también que el derecho de paso inocente por esas aguas no podía interpretarse en el sentido de que incluyera o implicara el derecho de terceros de hacer investigaciones científicas con plena libertad. Se señaló que ni la Subcomisión ni ningún otro órgano internacional estaban facultados para formular normas o directrices para la realización de actividades en las zonas sometidas a la soberanía de cualquier Estado. Por otra parte, se expresó la esperanza de que el Estado ribereño considerara la realización de esas actividades dentro de su mar territorial de conformidad con directrices generales aceptables en relación, entre otras cosas, con la notificación, participación, acceso a muestras y datos y publicaciones.

252. Se declaró que el control del Estado ribereño sobre sus zonas jurisdiccionales debería ser aplicable a la investigación científica en sí, independientemente de los medios utilizados para la reunión de datos. En consecuencia, la instalación de Sistemas de Adquisición de Datos Oceánicos (SADO) o el empleo de satélites debían estar sometidos a control, y en particular al requisito de la obtención del consentimiento del Estado ribereño para efectuar investigaciones en zonas sujetas a la jurisdicción nacional de éste. Con respecto a las zonas fuera del mar territorial, en que el Estado ribereño ejercía jurisdicción exclusiva, se declaró que ese Estado tenía derecho a controlar la investigación científica. Se dijo asimismo que todos los datos, muestras y conclusiones obtenidos de la investigación deberían ponerse a disposición del Estado ribereño. También se dijo que debía permitirse que los Estados distintos del Estado ribereño llevaran a cabo investigaciones, siempre que observaran los requisitos estipulados por este último. Por otra parte,



se dijo que debían imponerse restricciones mínimas a la investigación científica en las zonas de jurisdicción nacional limitada, y que la Subcomisión debía estudiar los criterios que podrían aplicarse a las investigaciones efectuadas en esas zonas.

253. Se observó que hacía falta aclarar el alcance del párrafo 8 del artículo 5 de la Convención de 1958 sobre la Plataforma Continental, y que debía elaborarse un procedimiento de notificación para determinadas formas de investigación científica, a fin de tener a los Estados ribereños plenamente informados de esas actividades realizadas en sus plataformas continentales y también para permitir que participasen o estuvieran representados en ellas. Además de la notificación y la participación, debería existir la obligación de comunicar los resultados de tales investigaciones científicas, previa la correspondiente solicitud, a las organizaciones internacionales y de poner a disposición de los Estados ribereños todos los datos de la investigación en su fase primaria, incluso antes de ser elaborados.

254. Se indicó que los conocimientos y la información resultantes de la investigación científica formaban parte del patrimonio común de la humanidad y que ello presuponía la publicación de los principales programas de investigación y de sus resultados. Por una parte, se afirmó que no debería introducirse en este contexto el concepto de patrimonio común. Respecto de los programas, se dijo que la publicación significaba la descripción de su naturaleza y sus objetivos, de la zona por estudiar y de las técnicas que se emplearían. Dicha publicación podría efectuarse transmitiendo información a los Estados directamente o por conductos internacionales. Respecto de los resultados, se dijo que la palabra "publicar" debía entenderse en el sentido de hacer asequibles al público los datos por medios de publicación reconocidos y permitir el acceso a las muestras. Se señaló asimismo que los requisitos de publicación no debían ser tan gravosos que desalentasen la iniciación de investigaciones científicas sobre el mar. Se hizo observar que este procedimiento podía seguirse sin perjuicio de una mayor publicidad y difusión de los resultados concretos, cuando ello fuese posible sin excesivo costo. Por otra parte, se declaró que la investigación científica de carácter exclusivo o militar no debía estar sujeta al principio de la libertad de acceso para todos.

255. Se expresó el convencimiento de que las normas internacionales destinadas a facilitar la investigación emprendida en las zonas de jurisdicción nacional, incluido el requisito de que el Estado ribereño conteste rápidamente a las solicitudes relativas a la iniciación de investigaciones científicas, reducirían en grado considerable toda demora innecesaria. También se sugirió que se estudiaran procedimientos de conciliación que contribuyeran a evitar litigios. Se expresó la opinión de que, en interés de la cooperación internacional, los Estados debían facilitar, de conformidad con sus leyes y reglamentos nacionales, la entrada en sus puertos de los barcos que realizasen investigaciones científicas en el mar, simplificando los procedimientos correspondientes.

256. Se declaró que la libertad de la investigación debía protegerse y sólo debía limitarse en los casos en que no se ejerciese con el razonable respeto de los intereses de los demás Estados y no observase las normas fundamentales destinadas a proteger el medio contra la contaminación causada por las actividades realizadas en los fondos marinos. Se dijo, sin embargo, que no existía dicha libertad. Se sugirió también que la Subcomisión estudiase detenidamente qué tipo de régimen internacional contribuiría a fomentar el intercambio y la difusión de conocimientos y datos científicos. A este respecto, se señaló que las obligaciones jurídicas impuestas a la comunidad científica no debían ser demasiado estrictas en cuanto a

la libre y rápida publicación de los resultados. Se opinó que las organizaciones intergubernamentales existentes y las organizaciones científicas independientes, como el Consejo Internacional de Uniones Científicas, ya proporcionaban disposiciones adecuadas a tal efecto y que el futuro mecanismo internacional debía pedir asesoramiento a la COI sobre todas las cuestiones relacionadas con la investigación científica.

257. Se sugirió que, al abordar los principios que habrían de regir la investigación científica fuera de la jurisdicción nacional, la Subcomisión desarrollase la declaración contenida en el principio 1 del documento de trabajo presentado por la delegación del Canadá (A/AC.138/SC.III/L.18) (anexo IV, 2), según la cual los conocimientos resultantes de la investigación científica del mar formaban parte del patrimonio común de toda la humanidad. Se dijo que, sobre la base de ese principio, la libertad de realizar investigaciones científicas fuera de los límites de la jurisdicción nacional se vería facilitada por la publicación y difusión de los resultados. Sin embargo, se señaló que el concepto del patrimonio común no se había definido definitivamente y que la transposición mecánica de este concepto al dominio científico no era factible.

258. Se dijo que un organismo internacional en el que estuviesen representados adecuadamente todos los Estados sería la tribuna apropiada para la formulación de políticas mundiales sobre la investigación científica de los océanos de conformidad con los principios jurídicos y los artículos de tratado que se preparasen. Al mismo tiempo, se consideró que toda la investigación científica en zonas fuera de la jurisdicción nacional limitada debía continuar desarrollándose sin injerencias, excepto en casos tales como las perforaciones en alta mar que podían ocasionar considerable daño al medio marino y, por consiguiente, debían estar sujetas a normas internacionales. Como se esperaba que el tratado de los fondos marinos contuviese normas relativas a la investigación científica, se observó que la Subcomisión debía estar dispuesta a prestar asistencia a la Subcomisión I en la preparación de las reglas pertinentes que se incluyeran en el régimen.

259. Se dijo, no obstante, que se plantearían diversas dificultades prácticas si se incluyera entre las funciones del futuro organismo internacional la supervisión de los programas de investigación. Por ejemplo, no sería práctico tomar en consideración una aportación internacional desordenada de datos marinos, ya que se trataba en muchos casos de observaciones experimentales, como se reconocía en la última edición del manual de la COI sobre intercambio intergubernamental de datos oceanográficos, más aún los sistemas de intercambio de datos eran confusos y precisaban personal sumamente calificado. Por esa razón, se sugirió que se continuase considerando a los organismos existentes como órganos competentes de las Naciones Unidas para garantizar que los resultados de la investigación se pusieran a disposición de todos.

260. Se opinó que la Subcomisión podría tomar útilmente como guía la resolución VI-13 de la COI titulada "Promoción de la investigación científica fundamental" y aprobada en 1969, en la que se enunciaban principios para facilitar procedimientos en cuanto a la obtención del consentimiento de un Estado ribereño, con especial referencia a los países en desarrollo. Se propuso, en consecuencia, que se simplificaran e hicieran eficaces dichos procedimientos y que la COI actuara como intermediaria ayudando a los científicos a obtener tal consentimiento, conforme se enunciaba en la resolución.

261. En relación con la labor de la COI, se observó que se habían tomado medidas recientemente para mejorar la base constitucional, financiera y operacional de la Comisión. El representante de la COI examinó dicha evolución en la declaración que hizo ante la Subcomisión, así como algunas de las actividades concretas de la COI, incluidos la Investigación Global de la Contaminación del Medio Marino, el Sistema Global Integrado de Estaciones Oceánicas, los Sistemas de Adquisición de Datos Oceánicos y los esfuerzos de la Comisión para desarrollar programas de formación, educación y asistencia y servicios de información. Se hizo observar que la labor de la Comisión presentaba especial pertinencia para la preparación de la Convención del SADO. Se observó que la conferencia preparatoria de expertos gubernamentales para formular un proyecto de convención sobre la condición jurídica del SADO (enero/febrero de 1972) había decidido aplazar toda nueva medida en relación con dicho proyecto, ya que los aspectos jurídicos de la investigación científica debían ser definidos en la Comisión de los Fondos Marinos.

262. Se expresó la opinión de que la investigación científica era al mismo tiempo una actividad vitalmente importante y eminentemente internacional. Se subrayó que era necesario promover la investigación científica y al mismo tiempo evitar que se cometieran abusos; que todos los países pudieran participar activamente en ella y que los frutos de la investigación científica, que eran parte del patrimonio común de la humanidad, se pusieran a disposición de todos sin discriminación. Se dijo también que la reglamentación de la investigación científica debería ser llevada a cabo por instituciones internacionales nuevas sobre la base de principios establecidos en un tratado generalmente convenido y que los Estados, en su reglamentación de la investigación científica en el espacio oceánico comprendido dentro de su jurisdicción, deberían observar el espíritu de las normas elaboradas a nivel internacional. Se instó a que las futuras instituciones internacionales adoptaran medidas mucho más eficaces que las de las actuales instituciones intergubernamentales en cuanto a la difusión de los resultados de la investigación científica, la formación de científicos de países pobres y el establecimiento de instalaciones modernas de investigación marina en ellos.

263. Se requerían mayores esfuerzos para incrementar el número de centros de formación e investigación en los países en desarrollo, y para elaborar programas de formación; a este último respecto, la COI tendría que desempeñar una función considerable. Se subrayó a este respecto que todas las cuestiones relativas a la investigación científica y el acceso libre y sin restricciones a los resultados de dicha investigación no tendrían sentido en la práctica para los países en desarrollo a menos que éstos dispusieran de personal preparado y de capacidad técnica para participar en la investigación científica y utilizar la información que se pusiera a su disposición. Se recordó que ya se había formulado una sugerencia para la creación de un grupo de expertos, con el auspicio de las Naciones Unidas, que asesorase sobre la evaluación de los resultados de la investigación a los países que carecían de la capacidad necesaria. Se observó asimismo que debía establecerse alguna disposición semejante y otras de distinta naturaleza para reformar la capacidad científica y técnica de los países en desarrollo, a fin de que aprovecharan los programas de investigación, especialmente cuando guardaran relación con sus propios recursos ribereños. Por consiguiente, se sugirió que la Subcomisión se ocupara con la cuestión de la formación en todos los aspectos de la investigación marina y formulara disposiciones adecuadas sobre esta cuestión en el proyecto de artículos de tratado.

264. Se dijo también que, en principio, los Estados estaban dispuestos a asignar fondos para apoyar esfuerzos multilaterales en todos los organismos internacionales competentes con miras a crear y ampliar la capacidad de los Estados en desarrollo de interpretar y utilizar datos científicos en beneficio económico suyo y para sus propios fines, de aumentar su conocimiento especializado en la esfera de la investigación científica del medio marino, y de disponer de equipo científico de investigación, incluida la capacidad de mantenerlo y utilizarlo. Se subrayó que dicho compromiso sería complementario de los esfuerzos del organismo internacional de los fondos marinos, una vez que se estableciese y adquiriese capacidad financiera para dedicar fondos a ese mismo objeto. Se indicó que los Estados estaban también dispuestos a tomar parte activa en programas de asistencia mutua, así como a recibir en sus laboratorios y a bordo de sus buques a los científicos e investigadores de los países en desarrollo.

D. Proyecto de resolución relativo a los ensayos de armas nucleares en el Pacífico

265. Las delegaciones de Australia, Canadá, Colombia, Chile, Fiji, Filipinas, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Tailandia presentaron el 31 de julio de 1972 un proyecto de resolución A/AC.138/SC.III/L.22 (anexo IV, 4), en el que se declaraba que no debían llevarse a cabo nuevos ensayos de armas nucleares que pudieran contribuir a la contaminación del medio marino. Además se pedía al Presidente de la Subcomisión III que transmitiese la resolución al Secretario General de las Naciones Unidas para que fuese remitida a los órganos competentes de las Naciones Unidas, incluida la Conferencia del Comité de Desarme.

266. Varios de los países del Pacífico y de Asia patrocinadores del proyecto de resolución hablaron en apoyo del mismo y expresaron su preocupación común ante la realización de ensayos de armas nucleares que pudieran causar daños al medio marino y a sus recursos vivos. Se hizo referencia al principio 26 de la Declaración sobre el Medio Humano, a la resolución sobre los ensayos nucleares presentada por Nueva Zelandia y Perú en Estocolmo y aprobada por la Conferencia por una amplia mayoría, al llamamiento conjunto relativo a los ensayos nucleares presentado a la Conferencia por nueve países del Pacífico y al Tratado de prohibición parcial de los ensayos nucleares.

267. Algunos de los autores del proyecto, después de precisar que se oponían a los ensayos de armas nucleares en cualquier medio, se refirieron especialmente a los ensayos de armas nucleares en la atmósfera que estaba realizando Francia en el Pacífico meridional. Se declaró que esos ensayos representaban un riesgo potencial para la salud de los pueblos del Pacífico meridional, sin que éstos recibieran beneficio alguno como compensación. Esos ensayos tenían asimismo como resultado una nueva contaminación del medio marino y podían amenazar los recursos vivos del mar, elemento vital para la subsistencia y la economía de las islas del Pacífico.

268. Se recordó que en declaraciones de la Asociación de Productores de las Islas del Pacífico, los primeros ministros de Nueva Zelandia y Australia, los ministros de relaciones exteriores del grupo de países andino, el Consejo del Anzus, los ministros de relaciones exteriores de Nueva Zelandia y Australia y los ministros de relaciones exteriores de los países del ASEAN se había manifestado oposición a los ensayos nucleares en el Pacífico meridional. Esas declaraciones eran reflejo de un movimiento espontáneo de oposición a los ensayos entre los pueblos de la región.

269. La delegación francesa respondió que ningún país había sometido hasta entonces los ensayos nucleares a condiciones tan estrictas como Francia, tanto en lo que se refería a la prevención de los efectos como a su control. Con dicho control, efectuado con el máximo cuidado y con instrumentos muy perfeccionados, se había podido comprobar que los ensayos franceses no habían producido ninguna contaminación apreciable del mar. Esas conclusiones, consignadas en los informes presentados periódicamente al Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas no habían sido objeto hasta el momento de ninguna observación por parte de ese organismo.

270. Frente a esas conclusiones de carácter científico, sólo se han hecho en la Subcomisión afirmaciones sin alcance científico según las cuales las experiencias francesas podrían quizá tener consecuencias desfavorables sobre el medio. Se podía, pues, afirmar que, no habiendo quedado demostrada la contaminación del mar, la Subcomisión no era competente para adoptar una resolución de la índole de la que se proponía.

271. El representante de Francia añadió que el mandato de la Comisión sobre los Fondos Marinos le encomendaba la labor precisa de preparar una Conferencia sobre el Derecho del Mar y de establecer con ese objeto proyectos de texto. No mencionaba en ninguna parte la aprobación de resoluciones de carácter general aun cuando la Comisión fuera competente ratione materiae, lo cual no era el caso.

272. La presentación de semejantes textos no podía sino retrasar aún más los trabajos de la Comisión en un momento en que éstos acababan de entrar en una fase constructiva. Por esas razones, la delegación de Francia se veía obligada a oponerse a la aprobación del proyecto de resolución en examen.

273. El representante de la República Popular de China declaró que China había propugnado siempre la prohibición completa y la destrucción total de las armas nucleares y que, antes de que se materializase ese objetivo, pedir la prohibición de los ensayos nucleares favorecería precisamente la consolidación del monopolio de las Potencias nucleares. Señaló que China producía armas nucleares enteramente con fines defensivos, que los ensayos nucleares realizados habían sido muy pocos y se habían efectuado en la atmósfera, en zonas interiores de su propio territorio y adoptando toda medida posible para evitar la contaminación nuclear perjudicial para su población y para la población de otros países y que por consiguiente hasta la fecha no se había causado ningún daño.

274. Las delegaciones de Francia y de la República Popular de China se opusieron a la aprobación de esa resolución y no se pudo llegar en la Subcomisión a un consenso sobre su aprobación.

E. Proyecto de resolución sobre medidas preliminares para impedir y combatir la contaminación del medio marino

275. La URSS presentó un proyecto de resolución sobre medidas para impedir la contaminación del medio marino (A/AC.138/SC.III/L.19). Basándose en dicho documento y en el proyecto de resolución presentado por el Canadá y Noruega el pasado año (A/AC.138/SC.III/L.5 y Add.1) 23/, Australia, Bulgaria, el Canadá, Grecia, Islandia,

---

23/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo sexto período de sesiones, Suplemento No. 21 (A/8421), anexo V,2.

Noruega, los Países Bajos, la República Socialista Soviética de Ucrania, Suecia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas presentaron un texto amalgamado, contenido en el documento A/AC.138/SC.III/L.25, sobre medidas preliminares para impedir la contaminación de los mares. Dicho texto de transacción y las enmiendas al mismo presentadas por los Estados Unidos, Kenia, el Perú, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Unida de Tanzania figuran como anexo al presente informe (anexo IV, 5 y 6 1), 2), 3), 4) y 5), respectivamente). Una delegación afirmó que la Subcomisión carecía de competencia para adoptar resoluciones sobre la contaminación de los mares.





## ANEXOS

### I. DOCUMENTOS ANEXOS A LA PARTE I

1. Proyecto de decisión presentado por Argelia, Brasil, Chile, China, Irak, Kenia, Kuwait, México, Perú, República Árabe Libia, Venezuela, Yemen y Yugoslavia\*

La Comisión sobre la Utilización con Fines Pacíficos de los Fondos Marinos y Oceánicos fuera de los Límites de la Jurisdicción Nacional,

Recordando la resolución 2574 D (XXIV) de la Asamblea General, de 15 de diciembre de 1969, en la que la Asamblea declara que, hasta tanto se establezca un régimen internacional para los fondos marinos y oceánicos, los Estados y las personas, físicas o jurídicas, están obligados a abstenerse de cualesquiera actividades de explotación de los recursos de la zona,

Teniendo presentes las disposiciones de la Declaración de principios que regulan los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional, contenida en la resolución 2749 (XXV) de la Asamblea General, de 17 de diciembre de 1970, que declara que la zona no estará sujeta a apropiación por medio alguno por Estados ni personas, naturales o jurídicas, y que ningún Estado reivindicará ni ejercerá soberanía ni derechos soberanos sobre parte alguna de ella; y que ningún Estado ni persona, natural o jurídica, reivindicará, ejercerá o adquirirá derechos con respecto a la zona o sus recursos que sean incompatibles con el régimen internacional que ha de establecerse y los principios de la Declaración,

Gravemente preocupada por las pruebas de que varios Estados, organizaciones y consorcios ya están realizando actividades operacionales en la zona,

Exhorta a todos los Estados que realizan actividades en la zona de los fondos marinos, fuera de los límites de la jurisdicción nacional, de conformidad con las disposiciones de las dos resoluciones citadas, a que pongan fin a toda actividad dirigida a la explotación comercial de la zona de los fondos marinos y se abstengan de emprender, directamente o por conducto de sus nacionales, cualesquiera operaciones dirigidas a la explotación de la zona antes del establecimiento del régimen internacional,

Reafirma que antes del establecimiento del régimen internacional, no se aceptará reivindicación alguna respecto de ninguna parte de la zona ni de sus recursos basada en actividades pasadas, presentes o futuras.

---

\* Publicado inicialmente como documento A/AC.138/L.11/Rev.1.

2. Texto de la Declaración de Santo Domingo aprobada por la Reunión de Ministros de la Conferencia Especializada de los Países del Caribe sobre los Problemas del Mar, celebrada el 7 de junio de 1972\*

(Distribuido como documento de la Comisión en virtud de la decisión adoptada por ésta en su 78a. sesión, celebrada el 20 de julio de 1972)

LA CONFERENCIA ESPECIALIZADA DE LOS PAISES DEL CARIBE  
SOBRE LOS PROBLEMAS DEL MAR,

RECORDANDO:

Que las Conferencias Internacionales Americanas reunidas en Bogotá, en 1948, y en Caracas, en 1954 reconocieron que los pueblos de las Américas dependen de los recursos naturales como medio de subsistencia y proclamaron el derecho a proteger, conservar y fomentar tales riquezas, así como el de asegurar el uso y aprovechamiento de las mismas.

Que en 1956 se adoptaron los "Principios de México sobre Régimen Jurídico del Mar", que fueron reconocidos "como expresión de la conciencia jurídica del continente y como aplicables por los Estados americanos", con los cuales se sentaron las bases para la evolución del Derecho del Mar que culminó, ese mismo año, en la Conferencia Especializada de la capital dominicana con la enunciación de conceptos que merecieron acogida en la Conferencia de las Naciones Unidas que sobre este tema se celebró en Ginebra en 1958.

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 2750 C (XXV), decidió convocar para 1973 una Conferencia sobre el Derecho del Mar, y reconoció "la necesidad de desarrollar en breve y progresivamente el derecho del mar";

Que es deseable definir, por medio de normas de ámbito universal, la naturaleza y el alcance de los derechos de los Estados, así como de sus deberes y responsabilidades en relación con los distintos espacios marinos, sin perjuicio de acuerdos regionales o subregionales, basados en tales normas;

Que los países del Caribe, por sus condiciones peculiares, requieren criterios especiales de aplicación del Derecho del Mar y al propio tiempo es necesaria la coordinación de América Latina para buscar una acción conjunta en el futuro;

Que el desarrollo económico y social de todos los pueblos y la garantía de iguales oportunidades para todos los hombres son condiciones esenciales para la paz;

Que los recursos renovables y no renovables del mar contribuyen a elevar el nivel de vida de los países en desarrollo y a estimular y acelerar su progreso;

---

\* Publicado inicialmente como documento A/AC.138/80.

Que estos recursos no son inagotables, pues aun las especies vivas pueden disminuir e incluso extinguirse como consecuencia de una explotación irracional o de la contaminación;

Que el Derecho del Mar debe armonizar las necesidades e intereses de los Estados y de la comunidad internacional;

Que la cooperación internacional es indispensable para asegurar la protección del medio humano y su mejor aprovechamiento;

Que por ser Santo Domingo el punto de partida de la civilización americana y sede de la Primera Conferencia sobre Derecho del Mar en América Latina, en 1956, tiene significación histórica que en esta ciudad se proclamen nuevos principios que impulsen la evolución progresiva del Derecho del Mar;

Formula la siguiente declaración de principios:

MAR TERRITORIAL

1. La soberanía del Estado se extiende, fuera de su territorio y de sus aguas interiores, a una zona de mar adyacente a sus costas, designada con el nombre de mar territorial, así como al espacio aéreo sobre el mar territorial, al lecho y al subsuelo de ese mar.
2. La anchura de esta zona y la manera de su delimitación deben ser objeto de un acuerdo internacional, preferentemente de ámbito mundial. Todo Estado tiene, entretanto, el derecho de fijar la anchura de su mar territorial hasta un límite de 12 millas náuticas medidas a partir de la línea de base aplicable.
3. Los buques de cualquier Estado, con litoral marítimo o sin él, gozan del derecho de paso inocente a través de esta zona, de conformidad con el Derecho Internacional.

MAR PATRIMONIAL

1. El Estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, que se encuentran en las aguas, en el lecho y en el subsuelo de una zona adyacente al mar territorial, denominada mar patrimonial.
2. El Estado ribereño tiene el deber de promover y el derecho de reglamentar las investigaciones científicas que se adelanten en el mar patrimonial, así como el de adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación del medio marino y asegurar su soberanía sobre los recursos.
3. La anchura del mar patrimonial debe ser objeto de acuerdo internacional, preferentemente de ámbito mundial. La suma de esta zona y la del mar territorial, teniendo en cuenta las circunstancias geográficas, no deberá exceder en total de 200 millas náuticas.
4. La delimitación de esta zona entre dos o más Estados se hará con arreglo a los procedimientos pacíficos previstos en la Carta de las Naciones Unidas.

5. En el mar patrimonial las naves y aeronaves de todos los Estados, con litoral marítimo o sin él, tienen derecho de libre navegación y sobrevuelo, sin otras restricciones que las que puedan resultar del ejercicio, por parte del Estado ribereño, de sus derechos en el mismo mar. Con estas únicas limitaciones, habrá también libertad para tender cables y tuberías submarinos.

#### PLATAFORMA CONTINENTAL

1. El Estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre la plataforma continental a los efectos de su exploración y de la explotación de los recursos naturales allí existentes.
2. La plataforma continental comprende el lecho del mar y el subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a las costas pero situadas fuera del mar territorial, hasta una profundidad de 200 metros o más allá de ese límite, hasta donde la profundidad de las aguas suprayacentes permita la explotación de los recursos naturales de dichas zonas.
3. Además, los Estados que toman parte en esta Conferencia, consignan su opinión en favor de que las delegaciones latinoamericanas en la Comisión de los Fondos Marinos y Oceánicos de las Naciones Unidas promuevan un estudio acerca de la conveniencia y de la oportunidad de establecer límites exteriores precisos para la plataforma, teniendo en cuenta el borde exterior de la emersión continental.
4. En la parte de la plataforma continental cubierta por el mar patrimonial, se aplicará el régimen jurídico previsto para dicho mar. En lo que respecta a la parte que exceda del mar patrimonial se aplicará el régimen establecido para la plataforma continental por el Derecho Internacional.

#### FONDOS MARINOS INTERNACIONALES

1. Los fondos marinos y sus recursos, más allá del mar patrimonial y de la plataforma continental no cubierta por éste, son patrimonio común de la humanidad, de acuerdo con la Declaración adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su resolución 2749 (XXV) del 17 de diciembre de 1970.
2. Esta zona será sometida al régimen que se establezca por acuerdo internacional, el cual debe crear una autoridad internacional con poderes para realizar todas las actividades en el área, señaladamente la exploración, explotación, protección del medio marino e investigación científica, por sí misma o mediante terceras personas, todo ello en la forma y condiciones que se establezcan de común acuerdo.

#### ALTA MAR

Las aguas situadas más allá del límite exterior del mar patrimonial constituyen un área internacional denominada alta mar en la cual existe libertad de navegación, de sobrevuelo y de tendido de cables y tuberías submarinos. La libertad de pesca en esta zona no debe ser ilimitada ni ejercida en forma indiscriminada y debe ser objeto de una adecuada reglamentación internacional, preferentemente de ámbito mundial y aceptación general.

## CONTAMINACION DE LOS MARES

1. Es deber de todo Estado el abstenerse de realizar actos que puedan contaminar los mares y sus fondos marinos, tanto dentro como fuera de sus respectivas jurisdicciones.
2. Se reconoce la responsabilidad internacional de las personas físicas o jurídicas que causen daño al medio marino. Sobre esta materia, es deseable la concertación de un acuerdo internacional preferentemente de ámbito mundial.

## COOPERACION REGIONAL

1. Reconocen la necesidad de que los países del área aúnen sus esfuerzos y adopten una política común ante los problemas peculiares del Mar Caribe relacionados principalmente con la investigación científica, la contaminación del medio marino y la conservación, exploración, defensa y explotación de los recursos del mar.
2. Deciden celebrar reuniones periódicas, de ser posible una vez al año, de funcionarios gubernamentales a un alto nivel, con el fin de coordinar y concertar sus esfuerzos y políticas nacionales en todos los aspectos del espacio oceánico, con miras a asegurar el máximo aprovechamiento de los recursos por parte de todos los pueblos de la región.
3. La primera reunión podrá ser convocada por cualquiera de los Estados participantes en esta Conferencia.

-O-O-O-O-O-O-

Finalmente, renuevan la vocación de paz y de respeto al derecho internacional que ha animado siempre a los países latinoamericanos. Es dentro de ese mismo espíritu de armonía, solidaridad y fortalecimiento de las normas del sistema interamericano como se harán realidad los principios que contiene este documento.

La presente Declaración llevará el nombre de "Declaración de Santo Domingo".

Hecha en Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana, en los idiomas español, inglés y francés, el día nueve de junio del año mil novecientos setenta y dos.

3. Conclusiones formuladas en el informe general del Seminario regional de los Estados africanos sobre el derecho del mar, celebrado en Yaundé del 20 al 30 de junio de 1972\*

(Distribuidas como documento de la Comisión de conformidad con la decisión adoptada por ésta en su 78a. sesión, celebrada el 20 de julio)

Después de examinar los informes, conclusiones y recomendaciones de los distintos grupos de trabajo, que fueron objeto de debate y modificados, el Seminario aprobó las recomendaciones siguientes:

- I. a) Sobre el mar territorial, la zona contigua y el alta mar:
- 1) Los Estados africanos tienen derecho a determinar los límites de su jurisdicción sobre los mares adyacentes a sus costas según criterios razonables que tengan en cuenta especialmente sus factores geográficos, geológicos, biológicos y de seguridad nacional;
  - 2) El mar territorial no debería extenderse más allá de un límite de 12 millas marítimas;
  - 3) Los Estados africanos tienen derecho asimismo a establecer fuera del mar territorial una zona económica sobre la que ejercerán jurisdicción exclusiva para los efectos del control, la reglamentación y la explotación nacional de los recursos vivos del mar y para reservarlos en provecho principalmente de sus pueblos y sus economías respectivas, así como para la prevención y control de la contaminación.

El establecimiento de dicha zona se efectuará sin perjuicio de las libertades siguientes: libertad de navegación, libertad de sobrevuelo y libertad para tender cables y tuberías submarinos.

- 4) La explotación de los recursos vivos dentro de la zona económica debería estar abierta a todos los Estados africanos sin litoral y casi sin litoral, a condición de que las empresas de tales Estados que desearan explotar esos recursos se hallaran efectivamente bajo el control de capital y personal africanos.

Para su efectividad, los derechos de los Estados sin litoral serán complementados por el derecho de tránsito.

Tales derechos se consignarán en acuerdos multilaterales, regionales o bilaterales;

- 5) El límite de la zona económica se fijará en millas marítimas según las consideraciones regionales, teniendo debidamente en cuenta los recursos de la región y los derechos e intereses de los Estados sin litoral y casi sin litoral, sin perjuicio de los límites ya adoptados por algunos Estados de la región;

---

\* Publicado inicialmente como documento A/AC.138/79.

- 6) Los límites entre dos o más Estados se fijarán de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y la de la Organización de la Unidad Africana;
- 7) Los Estados africanos reconocerán recíprocamente sus derechos históricos existentes.

Sin embargo, algunos participantes formularon reservas con respecto al límite de 12 millas del mar territorial y a la fijación de un límite preciso.

Otros consideraron, en relación con la recomendación No. 5, que para fijar límites marítimos debía remitirse a los principios generales del derecho internacional.

b) Sobre los "derechos históricos" y las "bahías históricas":

- 1) Deberían reconocerse y protegerse los "derechos históricos" adquiridos por determinados Estados africanos vecinos en una parte del mar que estuviese sometida a la jurisdicción exclusiva de otro Estado;
- 2) La imposibilidad en que se hallase un Estado africano para aportar pruebas de una reivindicación ininterrumpida sobre una bahía histórica no debería ser obstáculo para el reconocimiento de los derechos de ese Estado sobre dicha bahía.

Aprobadas sin reserva.

II. Sobre los recursos biológicos del mar, la pesca y la contaminación de los mares:

Recomendaciones

Los participantes

Recomiendan a los Estados africanos que extiendan su soberanía a todos los recursos de la alta mar contigua a su mar territorial dentro de una zona económica que se ha de establecer y que comprenderá, por lo menos, la plataforma continental;

Encarecen a todos los Estados africanos que mantengan el principio de esta extensión en la próxima Conferencia Internacional sobre el Derecho del Mar;

Sugieren que los Estados africanos fomenten una nueva política de cooperación para el desarrollo de las pesquerías, con objeto de aumentar su participación en la explotación de los recursos del mar;

Recomiendan a los Estados africanos que adopten todas las medidas para luchar contra la contaminación, en particular:

- promulgando leyes nacionales para proteger de la contaminación a sus países;
- propugnando en las organizaciones internacionales la celebración de acuerdos adecuados sobre medidas de lucha contra la contaminación.

Aprobadas sin reserva.



### III. Sobre la plataforma continental y los fondos marinos:

#### Recomendaciones

- 1) La zona económica abarca todos los recursos económicos, los cuales comprenden los recursos vivientes y los no vivientes, como el petróleo, el gas natural y otros recursos minerales;
- 2) Se examinaron los aspectos políticos y estratégicos de los fondos marinos. La necesidad de utilizar los fondos marinos para fines pacíficos exclusivamente presupone la definición de un régimen jurídico para garantizar una mayor seguridad del mar, garantizando al mismo tiempo el respeto de los derechos de los Estados ribereños;
- 3) Los participantes consideraron que los recursos naturales situados fuera de la zona económica deberían ser administrados por el organismo internacional;
- 4) Los participantes subrayaron la necesidad de que el Organismo funcionase democráticamente y de que hubiese en él una representación continental adecuada. La representación no debería basarse en el criterio único del poderío marítimo, y debería tenerse en cuenta el desequilibrio existente entre los países desarrollados y los países en desarrollo;
- 5) El Seminario rechazó categóricamente el sistema de veto y consideró que el sistema de la votación ponderada no era democrático.

### IV. Sobre el arreglo de los litigios que surjan entre los Estados ribereños y la comunidad internacional:

#### Recomendaciones

A la luz de sus deliberaciones, el Seminario aprueba el principio del establecimiento de un órgano rector internacional que administre el patrimonio común situado fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Considera que ese órgano se debe ajustar al espíritu de la resolución por la que se dispone su creación, y por este motivo debe estar estructurado y funcionar de tal modo que los países en desarrollo sean sus principales directores y beneficiarios.

El Seminario recomienda que el órgano internacional realice sus deseos en los fondos marinos y su subsuelo en beneficio de la comunidad internacional.

Por consiguiente, considera que su acción dependerá del deseo de los Estados de ampliar los límites de su jurisdicción. El Seminario señaló que era importante que dicho órgano no fuese un simple aparato administrativo para la expedición de licencias y la distribución de regalías.

El Seminario considera que el órgano internacional, para ser eficaz, tiene que buscar los mejores medios de interesar a las empresas comerciales de los países en desarrollo en la explotación de los recursos existentes en su zona, utilizando esos recursos para fomentar el progreso de la humanidad en los países en desarrollo a fin de rectificar el grave desequilibrio que existe entre las naciones.

El Seminario considera que todos estos objetivos podrán lograrse si se asegura la participación sin restricciones de los países en desarrollo en la planificación, el establecimiento y el funcionamiento de dicho órgano.

Aprobada por unanimidad.

Los participantes expresaron el deseo unánime de que estas recomendaciones se notificasen a todos los Estados africanos y a la OUA.

4. Petición para que se prepare un estudio sobre las distintas consecuencias económicas de las diversas propuestas relativas a los límites de la zona internacional de los fondos marinos

Presentada por Afganistán, Austria, Bélgica, Bolivia, Checoslovaquia, Hungría, Nepal, Países Bajos, Singapur, Zaire y Zambia\*

Se hace la propuesta de que se pida al Secretario General la preparación de un estudio sobre las consecuencias económicas que, en la zona sometida a la autoridad del mecanismo internacional, resulten de cada uno de los diversos límites que se sugieren para la jurisdicción nacional. Los límites sugeridos son:

- a) la isóbata de 200 m;
- b) la isóbata de 500 m;
- c) 40 millas náuticas;
- d) 200 millas náuticas;
- e) borde del margen continental.

#### Exposición explicativa

La cuestión de los límites de la jurisdicción nacional, que es importante para los Estados ribereños, tiene igual importancia para el régimen internacional, cuyo alcance habría de depender de los límites establecidos. Además, el carácter y las funciones de los órganos del mecanismo internacional han de depender necesariamente del alcance y la naturaleza efectivos de la zona del régimen internacional que en fin de cuentas corresponda a la humanidad en su conjunto.

Varias delegaciones han presentado propuestas, formalmente y de modo verbal, sobre la cuestión de los límites de la jurisdicción nacional. La trascendencia económica y el alcance del régimen internacional variarán según los límites finalmente adoptados.

Para un debate y una evaluación fructíferos de la cuestión es necesario comprender y reconocer la trascendencia y las consecuencias económicas de las distintas propuestas relativas a los límites. La Comisión no dispone todavía de

---

\* Publicada inicialmente como documento A/AC.138/81.

información al respecto y, por ello, los autores de la presente petición consideran sumamente conveniente y útil disponer de un estudio del tipo solicitado al Secretario General. Tal estudio tendría que basarse naturalmente en los datos y conocimientos existentes. Complementaría al propio tiempo los siguientes informes preparados por el Secretario General: "Posibles repercusiones en los mercados mundiales de la extracción de minerales de los fondos marinos en la zona fuera de la jurisdicción nacional, con referencia especial a los problemas de los países en desarrollo: evaluación preliminar" (A/AC.138/36) a/ y "Notas adicionales sobre las posibles consecuencias económicas de la extracción de minerales de la zona internacional de los fondos marinos" (A/AC.138/73) (anexo II, 2). En tales informes se ha señalado que esas repercusiones, de producirse, dependerían de la delimitación definitiva de la zona.

Las propuestas relativas a los límites mencionados en esta petición para su estudio no son necesariamente exhaustivas. Los autores estarían dispuestos a aceptar cualesquiera adiciones que se sugieren a las ya mencionadas.

Los autores desean también hacer constar que la presente petición se formula de conformidad con la resolución 2750 C (XXV) de la Asamblea General, en cuyo párrafo 11 se pide al Secretario General que "preste a la Comisión toda la asistencia que necesite en cuestiones jurídicas, económicas, técnicas y científicas".

5. Declaración referente a los principios de una explotación racional de los recursos vivos de los mares y océanos del mundo en interés común de todos los pueblos, aprobada en la reunión de ministros celebrada en Moscú los días 6 y 7 de julio de 1972

(Distribuida a petición de las delegaciones de Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)\*

Los Ministros responsables de los problemas de pesca de la República Democrática Alemana, la República Popular de Bulgaria, la República Socialista Checoslovaca, la República Popular Húngara, la República Popular Polaca y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,

Habiendo examinado en la reunión celebrada los días 6 y 7 de julio de 1972 en Moscú, los problemas relacionados con el estudio y la explotación racional de los recursos vivos de los mares y océanos del mundo,

Advirtiendo que los mares y océanos constituyen una de las fuentes más importantes de alimentos para el hombre y de materias primas para los diversos sectores de la industria moderna,

Considerando que, según los datos de la gestión científica de los recursos pesqueros hay la posibilidad de incrementar el volumen de las capturas de peces y de otros muchos animales marinos, sin perjudicar la reconstitución de sus reservas,

---

\* Publicada inicialmente como documento A/AC.138/85.

a/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo sexto período de sesiones, Suplemento No. 21 (A/8421), anexo II,1.

Convencidos de que el régimen de la pesca en alta mar debe fundarse en el principio de una participación igual en derechos de todos los Estados en las actividades pesqueras, así como en el estricto respeto de medidas científicamente fundadas que tengan por objeto conservar los recursos vivos del mar a un nivel máximo estable,

Estimando que uno de los medios posibles de resolver el problema planteado por el aumento de la productividad de los mares y océanos en recursos alimentarios consiste en conjugar los esfuerzos de todos los Estados interesados con miras al estudio y la reconstitución de los recursos vivos del mar,

Han decidido exponer en la presente Declaración sus ideas sobre los principios de una utilización racional de los recursos vivos de los mares y océanos.

1. La cooperación de todos los Estados interesados con miras al estudio y a la reglamentación de los recursos vivos del mar representa una condición indispensable para su utilización racional y para el incremento de la productividad de la pesca en los mares y océanos. Tal tarea podría llegar a ser irrealizable si una parte considerable de zonas biológicamente interdependientes de la alta mar fuera repartida entre los Estados como resultado del establecimiento por los Estados ribereños de zonas especiales de gran anchura (más de 12 millas, por ejemplo), en las cuales esos Estados reivindicaran derechos exclusivos sobre los cardúmenes en migración permanente.

2. Los Estados socialistas, signatarios de la presente Declaración se pronuncian en favor de una reglamentación racional y científicamente fundada de la pesca y apoyan las propuestas encaminadas a una ejecución más eficaz de estudios científicos por organizaciones internacionales interesadas en la pesca así como a una reglamentación de la pesca en la alta mar.

Hay que mejorar constantemente los actuales sistemas de reglamentación internacional de la pesca. Hay que reforzar el papel de las organizaciones internacionales regionales interesadas en la pesca, ampliar sus atribuciones y mejorar el intercambio de datos científicos, técnicos y profesionales a fin de evaluar objetivamente los recursos pesqueros y dar a todos los Estados interesados, sin excepción, la posibilidad de participar en esas organizaciones sobre la base del principio de la igualdad soberana. Hay que conferir a las organizaciones internacionales funciones de control internacional del cumplimiento de los reglamentos de gestión de la industria de la pesca, teniendo en cuenta que tal medida contribuiría a una mejor conservación de los recursos pesqueros y al mantenimiento de los mismos en un nivel máximo estable.

3. En el mundo moderno, el desarrollo de la pesca marina de los diferentes países se caracteriza por ser muy desigual.

Tal situación no sólo se debe a diferencias en los factores naturales que determinan la productividad biológica de las zonas marinas que constituyen el hábitat de los cardúmenes. La utilización racional y metódica de los recursos pesqueros en interés común se ve obstaculizada por las graves secuelas de la dominación colonial y la opresión sufrida por muchos países de Asia, Africa y América Latina, y de ello son responsables las Potencias coloniales.

4. Los Estados socialistas partes en la Declaración apoyan la lucha de los países en desarrollo en pro de la creación de una economía nacional independiente, particularmente en lo relativo a la pesca. Comprenden muy bien el deseo que impulsa a esos países a crear una industria pesquera basada en los recientes adelantos de la gestión científica de los recursos pesqueros y de la técnica de la pesca marina, y les prestan ayuda en la creación y dotación técnica de su industria pesquera. Seguirán colaborando con los países en desarrollo en la esfera de las actividades pesqueras marinas y, teniendo en cuenta sus posibilidades y las de sus copartícipes, continuarán prestándoles ayuda en la creación de una moderna industria pesquera y de las correspondientes instalaciones costeras; asimismo intensificarán su concurso en la formación de personal nacional calificado para la industria y la flota pesquera de esos países

5. Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre las posibilidades económicas y técnicas de los Estados en desarrollo ribereños o no, y de los países que organizan expediciones de pesca en mares distantes en las mismas regiones que aquéllos, convendría otorgar a los países en desarrollo determinados derechos preferenciales que les permitiesen desarrollar su industria pesquera nacional y superar su atraso técnico.

6. Firmemente convencido de la necesidad de resolver lo antes posible el problema de la plena utilización de los recursos vivos de los mares y océanos sobre una base racional y en interés común de todos los pueblos, los países socialistas signatarios de la presente Declaración consideran que se podría encontrar una solución a este problema conciliando juiciosamente los intereses de los Estados ribereños y los de los países que organizan expediciones de pesca en mares distantes mediante una reglamentación internacional de la pesca y no mediante la adopción de medidas unilaterales al respecto por los distintos países.

7. Los recursos vivos de los mares y océanos deben ser una fuente inagotable de aumento del bienestar y del nivel de vida de los pueblos de nuestro planeta y servir a los intereses de toda la humanidad.

Moscú, 7 de julio de 1972

## II. DOCUMENTOS ANEXOS A LA PARTE II

### 1. Grupo de Trabajo I

/CONVENCION /DE LAS NACIONES UNIDAS/ SOBRE LOS FONDOS MARINOS  
Y OCEANICOS FUERA DE LOS LIMITES DE LA JURISDICCION NACIONAL/

Textos que ilustran los puntos de acuerdo y de desacuerdo sobre  
el programa de trabajo, tema 1, "Estatuto jurídico,  
alcance y disposiciones básicas del régimen, sobre  
la base de la Declaración de principios"

#### Parte I a/

PRINCIPIOS /BASICOS/ /FUNDAMENTALES/ /GENERALES/

---

Nota: El Grupo de Trabajo no ha estudiado los epígrafes, las notas marginales ni la posición de los textos.

a/ Publicado inicialmente como documento A/AC.138/L.18/Add.3.

## NOTA EXPLICATIVA

Terminada la primera lectura, el Grupo de Trabajo empezó la segunda lectura de los textos, en el transcurso de la cual se procuró reducir en lo posible los puntos de desacuerdo y refundir las variantes. Pero el Grupo de Trabajo no tuvo tiempo de terminar la segunda lectura de todos los textos. Los textos objeto de esta segunda lectura fueron los correspondientes a estos cuatro epígrafes: patrimonio común de la humanidad; actividades relacionadas con la exploración y la explotación, etc.; no apropiación ni reivindicación o ejercicio de soberanía o derechos soberanos, ni de derechos incompatibles con los artículos del tratado, y no reconocimiento de reivindicaciones, etc.; y utilización de la zona por todos los Estados sin discriminación. El segundo de los textos mencionados, el referente a las actividades relacionadas con la exploración y la explotación, reemplaza a los textos III y VII del documento de trabajo, y el tercero, relativo a la no apropiación, a los textos IV, V y VI de ese documento. En vista de este examen de diferentes textos en la segunda lectura, y para distinguir los que han sido objeto de ella, se les han dado números arábigos, en tanto que los textos que no fueron examinados en segunda lectura conservan los números romanos utilizados originalmente en el documento de trabajo. Así, los textos 2, 3, 4 y 5 son el resultado de la segunda lectura de los textos II, III, IV, V, VI, VII y VIII por el Grupo de Trabajo; los textos IX a XXI son los resultantes de la primera lectura que no fueron objeto de una segunda.



Nota introductoria relativa al proyecto de tratado sobre el espacio oceánico presentado por Malta (A/AC.138/53) b/

La delegación de Malta ha presentado unos principios jurídicos específicos y completos, incorporados en su proyecto de tratado sobre el espacio oceánico, en relación con cada uno de los aspectos a que se refiere el presente documento de trabajo. El proyecto del tratado de Malta se basa en un enfoque unitario de los problemas del espacio oceánico en su conjunto y, en consecuencia, responde a la idea de que se debe construir un nuevo orden internacional para el espacio oceánico. La "Zona" de que trata el presente documento de trabajo forma parte del espacio oceánico internacional concebido por la delegación de Malta y definido en su proyecto de tratado sobre el espacio oceánico.

Para mayor brevedad y habida cuenta del enfoque conceptual de la delegación de Malta, en el presente documento de trabajo no se reproduce la formulación que aparece en el proyecto de tratado sobre el espacio oceánico de Malta, sino que se hace referencia a ella en cada caso mediante un asterisco que remite a la nota introductoria.

---

b/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo sexto período de sesiones, Suplemento No. 21 (A/8421), anexo I, 11.

I<sup>1/</sup>

LIMITES DE LA ZONA (CC<sup>2/</sup>, Sec.1)\*

- /1. Delimitación de la jurisdicción nacional.7
- /2. Procedimientos para la notificación, el registro y la publicación de los límites efectivos de la jurisdicción nacional.7

---

\* Véase la nota introductoria.

1/ El Grupo de Trabajo no ha estudiado este texto.

2/ CC: Cuadro comparativo (A/AC.138/L.10).

## PATRIMONIO COMUN DE LA HUMANIDAD (CC, Sec.2)\*

## A

Patrimonio  
común; límites  
(D.1) 4/

1.3/

Los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional<sup>5/</sup>, definidos en el artículo ..., que en adelante se denominarán la "Zona", así como los recursos de la Zona, son patrimonio común de la humanidad<sup>6/</sup>.

Interpretación  
del término  
"recursos"

[2. Los recursos a que se refieren los presentes artículos [son] [incluyen] los recursos minerales y otros recursos no vivos de la Zona [y de la columna de agua] [, así como los organismos vivos pertenecientes a especies sedentarias, es decir, los organismos que, en la fase de su captura, estén inmóviles en los fondos marinos o bajo los fondos marinos o no puedan moverse salvo en contacto físico constante con los fondos marinos o con su subsuelo]<sup>7/</sup>.

## 0

[Los recursos a que se refieren los presentes artículos constituyen el contenido orgánico e inorgánico que compone la Zona]<sup>7</sup>

---

\* Véase la nota introductoria.

3/ Nota explicativa: las palabras subrayadas figuran en la Declaración de Principios (resolución 2749 (XXV)).

4/ D = Declaración de Principios.

5/ El uso de la expresión "jurisdicción nacional" no prejuzga la naturaleza ni el contenido de tal jurisdicción.

6/ Se expresó la opinión de que, según el tenor de los textos ulteriores, habría que considerar la posibilidad de insertar la frase: "y como tales son administrados en nombre y beneficio de la comunidad internacional por el Organismo creado en virtud del artículo ...", después de la palabra "humanidad".

O B)

1. (Todo el texto del párrafo 1 de A), seguido por:)

Los artículos contenidos en la presente sección determinan el significado del concepto de patrimonio común.

O C) (para el Preámbulo)

TENIENDO PRESENTE QUE los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo dentro de la zona definida en el artículo ... son patrimonio común de la humanidad de conformidad con lo dispuesto en los presentes artículos.

## ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPLORACION Y EXPLOTACION, ETC. (CC, Sec.5)\*

Actividades  
comprendidas  
(D.4)

A

1. Todas las actividades realizadas en la Zona, incluidas la investigación científica<sup>7/</sup> y la exploración y explotación de los recursos de la Zona, y demás actividades conexas se regirán por lo dispuesto en los presentes artículos y, salvo que en ellos se disponga otra cosa, serán reglamentadas por el Organismo establecido en virtud del artículo ...

Interpretación  
del término  
"actividades"

2. Para los efectos del presente artículo, por "actividades" se entenderá la investigación científica, la preservación del medio marino, la prevención de la contaminación, la elaboración y comercialización de los productos obtenidos de la Zona, la conciliación de las utilizaciones de la Zona, la conservación de los recursos vivos y la protección de los tesoros arqueológicos e históricos.<sup>7/</sup>

Q B)

Lo dispuesto en los presentes artículos se aplicará a la exploración y explotación de los recursos de la Zona y a las demás actividades conexas que en ellos se determinen. Respecto de esas actividades, el Organismo desempeñará las funciones que se le confieren en los presentes artículos.

Q C)

1. Todas las actividades realizadas en la Zona se regirán por el régimen internacional establecido en los presentes artículos. El Organismo Internacional establecido en virtud del artículo ... tendrá con respecto a esas actividades las facultades que le confieren los presentes artículos.  
2. Con este texto queda la posibilidad de incluir un párrafo sobre la interpretación del término "actividades".<sup>7/</sup>

---

\* Véase la nota introductoria.

<sup>7/</sup> Se expresó la opinión de que, al hacer referencia en este texto a la investigación científica, se rebasaban las atribuciones del Grupo de Trabajo.

NO APROPIACION NI REIVINDICACION O EJERCICIO DE SOBERANIA  
O DERECHOS SOBERANOS; NO REIVINDICACION, ETC. DE DERECHOS  
INCOMPATIBLES CON LOS ARTICULOS DEL TRATADO;  
NO RECONOCIMIENTO DE REIVINDICACIONES, ETC.  
(CC, Secs.3 y 4)\*

## A

(D.2 y 3)

Ni la Zona [ni sus recursos] ni parte alguna de ella podrán ser objeto de apropiación, cualesquiera que sean los medios, por ningún Estado ni persona natural o jurídica, y ningún Estado podrá reivindicar o ejercer soberanía o derechos soberanos sobre la Zona o [sus recursos] o cualquier parte de ella; ni, salvo lo de otro modo especificado más adelante en estos artículos, ningún Estado o persona natural o jurídica reivindicará, adquirirá o ejercerá derechos sobre los recursos de la Zona o de alguna parte de ella. Salvo la excepción anterior, no se reconocerán tales reivindicaciones ni el ejercicio de tales derechos.

O B)

1. Ningún Estado reivindicará ni ejercerá soberanía o derechos soberanos sobre parte alguna de los fondos marinos o de su subsuelo. Los Estados Partes en el presente tratado no reconocerán ninguna reivindicación de ese tipo ni ningún caso de ejercicio de soberanía o de derechos soberanos.
2. Del mismo modo, los fondos marinos y su subsuelo no estarán sujetos a apropiación por medio alguno por parte de Estados o de personas naturales o jurídicas.

---

\* Véase la nota introductoria.

UTILIZACION DE LA ZONA POR TODOS LOS ESTADOS SIN  
DISCRIMINACION (CC, Sec.6)\* 8/

No discrimina-  
ción (D.5)

La Zona estará abierta a la utilización exclusivamente para fines pacíficos por todos los Estados, ya se trate de países ribereños o sin litoral, sin discriminación [, conforme a lo dispuesto en los presentes artículos<sup>9/</sup>.]

---

\* Véase la nota introductoria.

8/ Una delegación sugirió que se combinasen 5 y X. La variante propuesta figura en XI A.

9/ Una delegación expresó la opinión de que el texto debería terminar después de la palabra "discriminación", quedando suprimido el resto. Otra delegación sugirió que se agregase al final del texto existente la siguiente frase: "Todos los Estados, sin litoral o ribereños, tendrán acceso a la Zona de conformidad con lo dispuesto en los presentes artículos".



APLICABILIDAD DE LOS PRINCIPIOS Y NORMAS DEL DERECHO  
INTERNACIONAL (CC, Sec.7)\* 10/

Actuación  
general de  
los Estados  
(D.6)

/En relación con la Zona/, las actividades de los Estados en la  
/Zona/ /y respecto de ella/ so ajustarán a /La utilización de la Zona  
se regirá de acuerdo a/ lo dispuesto en los presentes artículos, los  
principios y normas aplicables del derecho internacional, incluida  
/incluidos los enunciados en/ la Carta de las Naciones Unidas, /y teniendo  
en cuenta/ /en/ /la Declaración sobre los principios de derecho interna-  
cional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los  
Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, aprobada por  
la Asamblea General el 24 de octubre de 1970, /y en general todas las  
declaraciones aplicables de las Naciones Unidas/ /y /en/ /la Declaración  
sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales,  
aprobada por la Asamblea General el 14 de diciembre de 1960, en interés  
del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales /y en interés  
de la coexistencia pacífica de los Estados con sistemas sociales  
diferentes/ y el fomento de la cooperación y la comprensión mutua entre  
las naciones.

---

\* Véase la nota introductoria.

10/ El Grupo de Trabajo empezó la segunda lectura de este texto, pero no la terminó.

X

BENEFICIO DE TODA LA HUMANIDAD (CC, Sec.8)\*

Objetivo general:  
beneficio de toda  
la humanidad  
(D.7)

La investigación científica y La exploración industrial  
de la Zona y la explotación de sus recursos se realizarán en  
beneficio de toda la humanidad, independientemente de la ubicación  
geográfica de los Estados, ya se trate de países ribereños o sin  
litoral, y prestando consideración especial a los intereses y  
necesidades de los países en desarrollo.

A los efectos del presente artículo, por "exploración  
industrial" se entenderá...

Grupos con inte-  
reses especiales

Se prestará la debida atención a la necesidad de proteger  
los intereses de los Estados ribereños, los países sin litoral  
y los países de plataforma encerrada países con un litoral de  
menos de ... millas, y países cuya plataforma continental a una  
profundidad de 200 metros o menos es inferior a ... millas cuadradas  
en el aprovechamiento de los recursos de los fondos marinos.

Interpretación de  
la expresión  
"países de plata-  
forma encerrada"

A los efectos del presente artículo, por "país de plataforma  
encerrada" se entenderá...

---

\* Véase la nota introductoria.

XI

RESERVA DE LA ZONA EXCLUSIVAMENTE PARA FINES PACIFICOS (CC, Sec.9)\*

Fines pacíficos  
(D.8)

La Zona se reservará exclusivamente para fines pacíficos

/y se hará todo lo posible por excluirla de la carrera de armamentos/  
/y queda prohibida su utilización con fines militares/.

/Las Partes Contratantes se comprometen a concertar lo antes posible ulteriores acuerdos internacionales con miras a la aplicación efectiva del presente artículo./

/Queda prohibido el emplazamiento de armas nucleares y de otras armas de destrucción masiva en la Zona./

/Quedan prohibidas las explosiones de ensayo de armas nucleares y termonucleares en la Zona./

Texto propuesto para sustituir a los párrafos tercero y cuarto.

/Quedarán prohibidas las actividades de todos los submarinos nucleares en la Zona y en la zona de los fondos marinos de otros Estados. Quedará prohibido el emplazamiento de armas nucleares y de todo otro tipo de armas en la Zona y en la zona de los fondos marinos de otros Estados./

---

\* Véase la nota introductoria.

## XI A

### COMBINACION DE LOS TEXTOS 5 Y X PROPUESTA

La Zona estará abierta a la utilización exclusivamente para fines pacíficos por todos los Estados sin discriminación. La investigación científica, la exploración y la explotación de sus recursos se realizarán en beneficio de toda la humanidad, independientemente de la ubicación geográfica de los Estados, ya se trate de países ribereños o sin litoral, y prestando consideración especial a los intereses y necesidades de los países en desarrollo.<sup>7</sup>

## XII

### ENTIDADES QUE PUEDEN EXPLOTAR LOS FONDOS MARINOS (véase CC, Sec.11)\*

Las Todas las actividades de exploración y explotación de la Zona serán realizadas por una Parte Contratante o un grupo de Partes Contratantes o por personas naturales o jurídicas autorizadas o patrocinadas por ella o por ellas con arreglo a la reglamentación establecida por el Organismo y conforme a las normas sobre la exploración y la explotación establecidas en los presentes artículos.

Las Todas las actividades de exploración y explotación de los recursos de la Zona y demás actividades conexas serán realizadas por el Organismo o en su nombre, o por una Parte Contratante o un grupo de Partes Contratantes, o por personas naturales o jurídicas patrocinadas por ella o por ellas, todo ello bajo la supervisión y control generales del Organismo, y conforme a las normas sobre la exploración y la explotación establecidas en los presentes artículos.

O A)

Sin perjuicio de las facultades del Organismo expuestas en el párrafo siguiente, todas las actividades de exploración y explotación de los recursos de la Zona serán realizadas en virtud de una licencia expedida por el Organismo a una Parte Contratante o a un grupo de Partes Contratantes. La Parte Contratante o el grupo de Partes Contratantes a los que se haya expedido una licencia podrán autorizar a una o varias personas naturales o jurídicas para que realicen las actividades comprendidas en la licencia. No obstante, la Parte Contratante o las Partes Contratantes seguirán teniendo la responsabilidad, ante el Organismo y las demás Partes Contratantes, de hacer que las actividades así autorizadas se realicen conforme a lo dispuesto en los presentes artículos.

---

\* Véase la nota introductoria.

Además de expedir licencias para las actividades de las Partes Contratantes, el Organismo podrá realizar actividades de exploración y explotación de los recursos de la Zona cuando esté en condiciones de financiarlas.7

\*\*\*\*\*

NOTA: El Grupo tendrá que estudiar si, como se hace en algunas propuestas, procede incluir aquí las normas generales relativas a la explotación de los fondos marinos. Entre ellas podrían figurar normas sobre la concesión de licencias, los derechos que habrían de pagarse, las zonas que se asignarían, los requisitos de trabajo, los planes de trabajo, la inspección, la revocación de las licencias, la integridad de las inversiones y los avisos a los navegantes y demás procedimientos de seguridad. El Grupo podría, por el contrario, omitir estas normas de la parte I de los presentes artículos.

### XIII

#### NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EXPLOTACION (CC, Secs.12 y 13)\*

Como metas o directrices de la gestión  
(D.9)

/El Organismo establecido en virtud del artículo .../  
/tendrá jurisdicción exclusiva /para administrar/ /sobre/  
la Zona y sus recursos en beneficio de toda la humanidad y/ /tomará  
las medidas necesarias para/ /, entre otras cosas,/ el aprovecha-  
miento ordenado y sin riesgos y la administración racional de la  
Zona y de sus recursos, así como la ampliación de las oportunidades  
de utilizarlos, y deberá garantizar la participación equitativa de  
los Estados /las Partes Contratantes/ en los beneficios que de  
ello se deriven, prestando especial atención a los intereses y nece-  
sidades de los países en desarrollo, ya se trate de países ribereños  
o sin litoral./

/En el ejercicio de sus facultades, el Organismo tendrá en  
todo momento debidamente en cuenta la finalidad primordial de fomen-  
tar el desarrollo de los países en desarrollo, entre otras cosas  
a) evitando o compensando, cuando sea necesario, los efectos perju-  
diciales que la explotación de cualquier parte de la Zona pueda  
tener sobre tal desarrollo, b) contribuyendo con una parte apropia-  
da de sus ingresos a tal desarrollo, y c) fomentando la participación  
de los países en desarrollo en las actividades emprendidas por el  
Organismo o en su nombre. La distribución de los beneficios será  
equitativa y se hará, en principio, en función de las necesidades,  
teniendo en cuenta /la fase de desarrollo económico de cada Estado  
miembro/ /los niveles existentes y el potencial de desarrollo de  
los países en desarrollo./

/El Organismo y las Partes Contratantes tendrán debidamente en  
cuenta la necesidad de reducir al mínimo los efectos perjudiciales  
que el aprovechamiento de los recursos de los fondos marinos pueda  
tener sobre los precios de los minerales terrestres./<sup>11/</sup>

---

\* Véase la nota introductoria.

<sup>11/</sup> En relación con los tres párrafos precedentes, el representante de la URSS se remitió a la nota explicativa referente al artículo 9 del proyecto de artículos provisional presentado por su delegación, nota reproducida en la sección 11 del cuadro comparativo (pág. 34).



Como objetivos u obligaciones con respecto a la exploración y explotación (D.9)

/La exploración de la Zona/ y /el aprovechamiento y/ la explotación de sus recursos se realizarán de manera ordenada, segura y racional, a fin de lograr la ampliación de las oportunidades de utilizarlos y garantizar la participación equitativa de los Estados /las Partes/ en los beneficios que de ello se deriven, prestando especial atención a los intereses y necesidades de los países en desarrollo, ya se trate de países ribereños o sin litoral.

/La explotación de los recursos de la Zona se realizará de manera racional, para asegurar su conservación y reducir al mínimo cualquier fluctuación de los precios de los minerales y las materias primas de procedencia terrestre que pueda resultar de tal explotación y que pueda perjudicar a las exportaciones de los países en desarrollo.

/Los beneficios obtenidos de la explotación de los recursos de la Zona serán distribuidos equitativamente entre todos los Estados /todas las Partes/, independientemente de su situación geográfica, teniendo en cuenta especialmente los intereses y necesidades de los países en desarrollo, sean ribereños o sin litoral.

NOTA: El Grupo podría estudiar si procede exponer aquí los principios básicos de la distribución de beneficios, como se hace, por ejemplo, en el párrafo 1 del artículo 5 del proyecto de los Estados Unidos, o si conviene tratar esta cuestión en otro capítulo de los artículos.

/El producto de todo gravamen fiscal recaudado por un Estado con motivo de actividades relativas a la explotación de la Zona, ya por concepto de beneficios realizados, de servicios prestado o de suministros de equipo y de materiales, ya por concepto de salarios cobrados o de intereses percibidos por personas físicas o morales sometidas a su jurisdicción, será entregado por ese Estado al Organismo para su distribución entre los países en desarrollo.

XIV

INVESTIGACION CIENTIFICA

(CC. Sec.14)\*

Derecho a emprender investigaciones científicas

/1. Todo Estado, sea o no ribereño, tendrá derecho a emprender investigaciones científicas en /el espacio oceánico/ /la Zona./ Este derecho estará sujeto a la reglamentación, de carácter general y no discriminatorio, que establezca /la autoridad competente/ /el Organismo/.

No entorpecimiento de las investigaciones científicas

/1. Toda Parte Contratante conviene en fomentar e impedir que se entorpezcan las investigaciones científicas.

/1. Ni los presentes artículos ni ningún derecho concedido en virtud de ellos afectarán a la libertad de investigación en los fondos marinos y su subsuelo.

Fomento de la investigación científica; difusión de los resultados; capacitación (D.10)

/Las Partes Contratantes/ /Los Estados/ fomentarán la cooperación internacional en la investigación científica /relativa a la Zona/ /con fines exclusivamente pacíficos/:

a) Participando en programas internacionales y fomentando la colaboración en investigaciones científicas de personas de distintos países;

b) Dando publicidad de manera eficaz a los programas de investigación y difundiendo los resultados de la investigación por conductos internacionales;

c) Colaborando en medidas encaminadas a reforzar la capacidad de investigación de los países en desarrollo, incluida la participación de sus nacionales en programas de investigación.

Las investigaciones no servirán de fundamento a ninguna reclamación

Ninguna de estas actividades /investigaciones/ constituirá el fundamento jurídico de reclamaciones respecto de ninguna parte de la Zona o sus recursos.

/A los efectos del presente artículo, por "investigación científica" se entenderá...

---

\* Véase la nota introductoria.

## TRANSMISION DE CONOCIMIENTOS TECNOLOGICOS\*

/Las Partes Contratantes se comprometen a establecer lo antes posible, en consulta con el Organismo, programas para facilitar la transmisión de conocimientos tecnológicos relativos a la exploración de la Zona y a la explotación de sus recursos, incluso, siempre que sea factible, los conocimientos tecnológicos que estén protegidos por patentes, y a cooperar en tales programas. El Organismo podrá servir de intermediario para facilitar esa transmisión con el carácter más amplio posible y ayudará a las Partes Contratantes a preparar programas para tal fin.<sup>7</sup>

/Los ingresos obtenidos de la exploración y explotación de los fondos marinos se utilizarán, por conducto de otras organizaciones internacionales o regionales o en cooperación con ellas, para fomentar la explotación eficiente, segura y económica de los recursos minerales de los fondos marinos, para promover las investigaciones sobre las formas de proteger el medio marino, para estimular otros trabajos internacionales encaminados a promover la utilización segura y eficiente del medio marino, para profundizar los conocimientos sobre la Zona y para prestar asistencia técnica a las Partes Contratantes o a sus nacionales para tales fines, sin discriminación.<sup>7<sup>12/</sup></sup>

/El Organismo establecerá servicios permanentes para la transmisión de la tecnología y los conocimientos de las ciencias marinas a los países en desarrollo y brindará oportunidades a personal de esos países para participar en todo lo posible en empresas acometidas por el Organismo o por entidades que actúen bajo su supervisión.<sup>7</sup>

---

\* Véase la nota introductoria.

<sup>12/</sup> En relación con este párrafo, el representante de la URSS se remitió a la nota explicativa referente al artículo 9 del proyecto de artículos provisional presentado por su delegación, nota reproducida en la sección 11 del cuadro comparativo (pág. 34 del texto inglés).

XVI

PROTECCION DEL MEDIO MARINO, ETC.  
(CC, Sec.15)\*

Protección del  
medio marino;  
seguridad de la  
vida humana  
(D.11)

Con respecto a /todas/ las actividades /de exploración y explotación industriales/ /que realicen los Estados/ /en la Zona/, /y actuando de conformidad con /lo dispuesto en los presentes artículos/7. /Los Estados/ /el Organismo/ /tomarán /tomará/ las medidas apropiadas para la adopción y aplicación de /cumplirán/ /cumplirá/ lo dispuesto en los presentes artículos con respecto a/ normas, reglas y procedimientos internacionales/ y colaborarán al efecto /entre sí y con el Organismo/, a fin de procurar, entre otras cosas:

a) Impedir la contaminación, impurificación y otros peligros para el medio marino, incluidas las costas, y la perturbación del equilibrio ecológico del medio marino;

b) Proteger y conservar los recursos naturales de la Zona y prevenir daños a la flora y fauna del medio marino;

/c) Proteger la vida humana en el mar.7

/Todas las actividades que se realicen en la Zona se efectuarán con precauciones estrictas y adecuadas para la protección de la vida humana y /la seguridad/ /y la/ /preservación/ del medio marino.7

/Todas las operaciones que se realicen en la Zona se efectuarán de manera tal que se protejan y conserven los recursos naturales de la Zona y se impidan daños a la flora y la fauna del medio marino.7

/Los Estados/ /El Organismo/ establecerán /establecerá/ normas para la seguridad operacional de las instalaciones de exploración y explotación de la Zona y cooperarán entre sí al respecto.7

NOTA: El Grupo quizás considere pertinente estudiar si procede regular más en detalle la contaminación marina en la parte I de los artículos, como se hace, por ejemplo, en los artículos 80 a 83 del proyecto de Malta (véase también el artículo 23 del proyecto de los Estados Unidos).

---

\* Véase la nota introductoria.

XVII

DEBIDO RESPETO DE LOS DERECHOS, ETC., DE LOS ESTADOS RIBEREÑOS  
(CC, Sec.16)\*

Derechos de  
los Estados  
riberenos  
(D.12)

1. En sus actividades en la Zona, incluidas las relacionadas con sus recursos, los Estados /y el Organismo/ respetarán debidamente los derechos e intereses legítimos /con arreglo a los presentes artículos y al derecho internacional/ de los Estados ribereños en la región de dichas actividades, al igual que los de todos los demás Estados, que puedan verse afectados por esas actividades. Se celebrarán consultas /cuando proceda/ /que comprenderán un sistema de notificación previa, /por conducto del Organismo/ con los Estados /riberenos/ interesados respecto a /todas esas/ /las/ actividades /relacionadas con la exploración de la Zona y la explotación de sus recursos/ con miras a evitar la vulneración de tales derechos e intereses./

O A)

Redáctese la primera frase del párrafo precedente como sigue:

/Todas las actividades en la Zona, incluidas las relacionadas con sus recursos, se realizarán respetando debidamente los derechos e intereses legítimos de los Estados ribereños en la región de tales actividades./

Medidas de  
emergencia  
(D.13 b))

2. Los Estados ribereños tendrán /, sin perjuicio de lo dispuesto en los presentes artículos, /derecho a adoptar las medidas necesarias a fin de prevenir, mitigar o eliminar un peligro grave e inminente para sus costas o intereses conexos derivado de la contaminación, la amenaza de contaminación u otras contingencias azarosas resultantes de cualesquiera /de tales/ actividades /en la Zona/ o causadas por tales actividades./

---

\* Véase la nota introductoria.

Recursos situados  
cerca de los lí-  
mites de la ju-  
risdicción  
nacional

3. Los recursos de la Zona que se encuentran a ambos  
lados de los límites de la jurisdicción nacional no podrán  
ser explorados ni explotados salvo de acuerdo con el Estado  
o los Estados ribereños interesados. Cuando tales recursos  
estén situados cerca de los límites de la jurisdicción  
nacional, su exploración y explotación se realizarán en  
consulta con el Estado o los Estados ribereños interesados,  
y siempre que sea posible por conducto de tal Estado o  
Estados.

ESTATUTO JURIDICO DE LAS AGUAS SUPRAYACENTES DE LA ZONA, ETC.  
(CC, Sec.17)\*

Estatuto de la  
columna de agua  
y del espacio  
aéreo (D.13 a))  
Derechos recono-  
cidos por el de-  
recho interna-  
cional vigente

/Salvo lo estipulado en los presentes artículos, ninguna de sus disposiciones /Ninguna de las disposiciones de los presentes artículos /Ni los presentes artículos ni ningún derecho concedido o ejercido en virtud de ellos afectarán:

a) al estatuto jurídico de las aguas suprayacentes de la /Zona /como alta mar ni al del espacio aéreo situado sobre esas aguas;

b) a los derechos del Estado ribereño con respecto a medidas /que, adoptadas de conformidad con convenciones internacionales, estén encaminadas a prevenir, mitigar o eliminar un peligro grave e inminente para sus costas o intereses conexos derivado de la contaminación, la amenaza de contaminación u otras contingencias azarosas que resulten de cualesquiera actividades /en la Zona o sean causadas por ellas;

c) a los derechos que estén claramente reconocidos por el derecho internacional vigente, entre otros el derecho a tender y mantener cables y tuberías submarinas.

/Salvo lo estipulado en los presentes artículos /La utilización de los fondos marinos y de su subsuelo con fines de exploración y explotación de sus recursos no podrá hacerse en menoscabo de los principios de la libertad de navegación, pesca, investigación y otras actividades en alta mar.

/Salvo lo estipulado en los presentes artículos, ninguna de sus disposiciones /Ninguna de las disposiciones enunciadas en los presentes artículos afectará a la libertad de tender y mantener cables y tuberías submarinos ni a las demás libertades de la alta mar reconocidas por los principios generales del derecho internacional.

---

\* Véase la nota introductoria.



## XIX

### NO ENTORPECIMIENTO DE OTRAS ACTIVIDADES Y PROTECCION DE LAS ACTIVIDADES EN LA ZONA (CC, Sec.18)\*

No entorpecimiento de las actividades en los fondos marinos

/1. Todas las actividades que se realicen en el medio marino se efectuarán con precauciones razonables para la exploración y explotación de los recursos naturales de la Zona.<sup>7</sup>

No entorpecimiento de otras actividades marinas por las actividades en los fondos marinos

/2. La exploración y explotación de los recursos naturales de la Zona no deberán entorpecer injustificadamente en modo alguno la realización de otras actividades en el medio marino.<sup>7</sup>

No entorpecimiento de la navegación

/3. No se permitirá la exploración y explotación de los recursos naturales en zonas donde puedan entorpecer la utilización de rutas marítimas ordinarias que sean indispensables para la navegación internacional ni cuando los estudios científicos indiquen que es probable que la explotación cause una extensa contaminación del medio marino.<sup>7</sup>

NOTA: El Grupo quizás estime oportuno estudiar si procede o no incluir aquí disposiciones más detalladas acerca de las normas sobre no entorpecimiento, como las que figuran en los artículos 4, 10 y 12 del proyecto de la URSS, el artículo 21 del proyecto de los Estados Unidos y otros textos pertinentes.

---

\* Véase la nota introductoria,

RESPONSABILIDAD DE GARANTIZAR LA OBSERVANCIA DEL REGIMEN INTERNACIONAL  
Y RESPONSABILIDAD POR DAÑOS (CC, Sec.19)\*

Responsabilidad  
internacional  
(D.14)

Todo Estado será responsable de garantizar que las actividades en la Zona, incluidas las relacionadas con la exploración y explotación industriales de sus recursos, ya sean llevadas a cabo por organismos gubernamentales o por entidades no gubernamentales o personas que actúen bajo su jurisdicción o en su nombre, se desarrollen de conformidad con lo dispuesto en los presentes artículos. La misma responsabilidad incumbe a las organizaciones internacionales y a sus miembros con respecto a las actividades realizadas por dichas organizaciones o en su nombre. Los daños causados por esas actividades entrañarán responsabilidad<sup>13/</sup> por parte del Estado o la organización internacional de que se trate respecto de las actividades que autorice o realice por su cuenta. Todo Estado parte en los presentes artículos será responsable de cualquier daño causado a otro Estado parte en ellos por las actividades que realice en los fondos marinos.

2. Los Estados que actúen conjuntamente serán solidariamente responsables en virtud de los presentes artículos.

3. Cada Parte Contratante:

- i) Tomará las medidas pertinentes para que las actividades realizadas con su autorización o patrocinio se ajusten a los presentes artículos.
- ii) Definirá como infracción la violación de lo dispuesto en los presentes artículos por quienes realicen actividades con su autorización o patrocinio en la Zona. Tales infracciones serán punibles conforme a los procedimientos administrativos o judiciales establecidos por la Parte autorizante o patrocinadora.

---

\* Véase la nota introductoria.

13/ El Grupo de Trabajo acaso estime oportuno estudiar si procede o no incluir aquí una referencia a los límites de la responsabilidad y a otras cuestiones relacionadas con ésta.

- iii) Será responsable del mantenimiento del orden público en las instalaciones y el equipo a cargo de personas autorizadas o patrocinadas por ella.
- iv) Será responsable de los daños causados a cualquier otra Parte Contratante o a sus nacionales por las actividades que autorice o patrocine.
- v) Será responsable de ejecutar todas las medidas necesarias para restaurar cualesquiera bienes o zona dañados en el estado en que se encontraban inmediatamente antes de tales daños.

4. Toda Parte Contratante Todo Estado tomará las medidas pertinentes para que la responsabilidad establecida en el párrafo 1 del presente artículo se aplique mutatis mutandis a las organizaciones internacionales de que sea miembro.

## ARREGLO DE CONTROVERSIAS (CC, Sec.20)\*

/Todas las controversias que susciten la interpretación o la aplicación de los presentes artículos serán resueltas conforme a lo dispuesto en el artículo ...7

NOTA: En la parte I de estos artículos quizás baste con incluir un artículo de este tipo, que no hace más que remitir a disposiciones más detalladas para el arreglo de las controversias. Para todo nuevo examen detallado que el Grupo desee hacer de esta cuestión se puede tomar como punto de partida el párrafo 15 de la Declaración de Principios 14/.

---

\* Véase la nota introductoria.

14/ Se ha manifestado la opinión de que el texto XXI es aceptable sólo si se le añaden ulteriormente procedimientos para el arreglo obligatorio de controversias.



2. Notas adicionales sobre las posibles consecuencias económicas de la extracción de minerales de la zona internacional de los fondos marinos: informe del Secretario General\*

---

\* Publicado inicialmente como documento A/AC.138/73.

# INDICE

	<u>Párrafos</u>
PREFACIO . . . . .	1 - 2
I. TENDENCIAS DEL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS MARINOS . . . . .	3
A. Petróleo . . . . .	4 - 5
B. Fangos metalíferos e incrustaciones de manganeso . . .	6 - 7
C. Nódulos de manganeso . . . . .	8 - 21
a) Actividades de exploración . . . . .	8 - 10
b) Sistemas de extracción . . . . .	11 - 16
c) Elaboración metalúrgica . . . . .	17 - 20
d) Perspectivas de la explotabilidad de los nódulos .	21
II. CONSECUENCIAS ECONOMICAS DE LA EXTRACCION DE MINERALES DE LOS FONDOS MARINOS . . . . .	22 - 36
A. Cobalto . . . . .	25 - 27
B. Manganeso . . . . .	28 - 30
C. Níquel . . . . .	31 - 32
D. Cobre . . . . .	33 - 36
III. FOMENTO DEL APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS MARINOS . . . . .	37 - 79
A. Planificación del aprovechamiento de los recursos de los fondos marinos . . . . .	40 - 50
a) Cuestiones que podrían planificarse . . . . .	40
b) Disponibilidad de datos y planificación . . . . .	41 - 43
c) Objetivos que se han de perseguir. . . . .	44 - 46
d) Algunos problemas especiales . . . . .	47 - 48
e) El principio de la carga fiscal equivalente . . .	49 - 50
B. Posible estrategia para controlar las repercusiones de la extracción de minerales de los fondos marinos. .	51 - 79
a) La política de explotación . . . . .	57 - 64
b) El gravamen del mecanismo internacional . . . . .	65 - 75
c) Medidas compensatorias . . . . .	76 - 77
d) Otros arreglos . . . . .	78 - 79



# INDICE (continuación)

	<u>Párrafos</u>
IV. ALGUNAS CUESTIONES DE POLITICA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS . . . . .	80 - 100
A. Carácter general de las consecuencias . . . . .	83
B. Consecuencias para los países consumidores . . . . .	84
C. Consecuencias para los productores en tierra . . . . .	85 - 90
D. Algunas consecuencias en la política aplicable . . . . .	91 - 98
a) Método preventivo . . . . .	93 - 94
b) Método compensatorio . . . . .	95 - 98
E. Otras consideraciones . . . . .	99 - 100
NOTA FINAL . . . . .	101

## PREFACIO

1. Al considerar en su período de sesiones de verano de 1971 las consecuencias económicas de la utilización de los recursos de los fondos marinos internacionales, la Comisión sobre la Utilización con Fines Pacíficos de los Fondos Marinos y Oceánicos fuera de los Límites de la Jurisdicción Nacional dispuso del informe del Secretario General titulado: "Posibles repercusiones en los mercados mundiales de la extracción de minerales de los fondos marinos en la zona fuera de la jurisdicción nacional, con referencia especial a los problemas de los países en desarrollo: estudio preliminar" (A/AC.138/36). Este informe sugería que el rápido avance de los conocimientos y la tecnología de la minería oceánica requería que el tema se examinase periódicamente. Además, durante el período de sesiones de marzo de 1972, algunos miembros de la Comisión solicitaron a la Secretaría que examinase los acontecimientos recientes en materia de minería oceánica. A este respecto, se sugirió que los países en que los ensayos de sistemas de extracción de nódulos estuviesen adelantados presentasen datos a la Secretaría antes del 30 de abril de 1972 para facilitar el examen de esos acontecimientos.

2. El presente informe está dividido en cuatro secciones: 1) una breve descripción de los acontecimientos en la esfera de la minería oceánica; 2) consideraciones adicionales sobre las posibles consecuencias económicas de estos acontecimientos; 3) una mayor elaboración de algunos conceptos del aprovechamiento de los recursos de los fondos marinos que podrían aplicarse para reducir al mínimo los posibles efectos adversos de la minería marina sobre los mercados mundiales en general, y sobre los ingresos por concepto de exportación de los países en desarrollo en particular; y 4) algunos asuntos de política internacional de productos básicos 1/. Este informe sobre los recursos minerales de los fondos marinos presta especial atención a los posibles medios para promover la explotación racional de dichos recursos.

---

1/ Presentada a la UNCTAD III, Santiago, Chile, el 13 de abril de 1972, como documento TD/113/Supp.4.

## I. TENDENCIAS DEL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS MARINOS

3. Los adelantos tecnológicos y las actividades de exploración efectuados en 1971 han aumentado el optimismo con respecto a las perspectivas de la minería marina. A continuación se exponen los más descollantes entre los acontecimientos que afectan a la industria petrolera marina y a la extracción de minerales duros frente a las costas.

### A. Petróleo

4. En la industria petrolera marina la tendencia actual es a avanzar hacia aguas más profundas para encontrar y extraer el petróleo que los geólogos han predicho que se hallará allí. Se están realizando estudios sísmicos detallados a 1.000 metros de agua en varias localidades y trabajos sísmicos preliminares a profundidades hasta de 2.000 metros. Se han terminado los diseños para plataformas fijas de producción en 210 metros de agua en el Canal de Santa Bárbara (en la costa occidental de los Estados Unidos). Se han efectuado también algunos progresos en relación con sistemas de terminación de pozos submarinos sin empleo de buzos que pueden usarse con torres de perforación flotantes y se proyectan otras plataformas para profundidades de 300 metros. Se están construyendo varias nuevas y complejas torres semisumergibles de perforación y embarcaciones de perforación, que podrán operar en aguas más profundas y agitadas que hasta ahora. Estas torres y embarcaciones de perforación más modernas cuestan más de 15 millones de dólares por unidad, y en un caso el costo estimado es de más de 23 millones de dólares 2/.

5. Entre los adelantos conexos se cuenta un sistema de reingreso en el pozo, de alta precisión y fiabilidad, que se ha ensayado con éxito a profundidades de 200 metros 3/. Se ha informado sobre continuos adelantos en las técnicas de tendido de tuberías en aguas más agitadas y profundas. También se ha adelantado en el diseño de tanques de almacenamiento para instalarlos frente a las costas. En el futuro, estos tanques mejorarán considerablemente la economía de la producción petrolera en aguas más profundas y a grandes distancias de la costa, mediante la eliminación de la necesidad de costosas tuberías que vayan desde las zonas de producción hasta los tanques de almacenamiento en tierra 4/. También se están realizando adelantos importantes en las técnicas de trabajo submarino, a medida

---

2/ K. Edmiston, "What is new in deep ocean drilling", en Oceanology, enero de 1972, pág. 28; y Ocean Industry, febrero de 1972, pág. 41.

3/ Ocean Industry, febrero de 1972, págs. 31 a 33, "Hole Re-Entry System passes tests in 580 foot water".

4/ "Largest floating storage barge", Ocean Industry, noviembre de 1971, pág. 25.

que se perfeccionan los procedimientos de buceo y el equipo auxiliar y se comienzan a utilizar vehículos no tripulados y dispositivos automáticos de control remoto. El progreso constante en todas las esferas de la tecnología petrolera en aguas profundas - exploración, producción, almacenamiento y transporte - indica que, con el tiempo, la producción petrolera tal vez sea viable en la plataforma continental exterior y en el talud superior 5/.

#### B. Fangos metalíferos e incrustaciones de manganeso

6. El muestreo realizado durante una investigación geofísica de los fondos marinos a través de todo el Océano Atlántico septentrional indicó la asistencia de abundantes incrustaciones de mineral de manganeso, que contenían níquel, cobre y cobalto, en rocas descubiertas de regiones en que los movimientos telúricos habían causado fracturas del fondo marino. Los datos disponibles han dado lugar a algunas especulaciones en el sentido de que estas incrustaciones ubicadas en las crestas en mitad del Océano tal vez sean más gruesas y más extensas que los nódulos de manganeso descubiertos en vastas zonas de los fondos marinos en los últimos años 6/. Actualmente no se dispone de tecnología que permita la explotación económica de estas incrustaciones de manganeso. Será muy difícil desprender estas costras, que están firmemente adheridas a la roca subyacente del fondo marino.

7. Continúan los ensayos de exploración y de ingeniería en relación con los fangos metalíferos del Mar Rojo. Con el patrocinio del Gobierno de la República Federal de Alemania, la nave Valdivia realizó una extensa prospección del Mar Rojo de marzo a julio de 1971. Se descubrió un yacimiento de légamo de cobre y zinc a una profundidad de 2.200 metros. Se necesitarán nuevas tecnologías para extraer estos lodos de los fondos marinos y explotar los metales que contienen. Se informa que su contenido de metal es variable, pero que en un lugar de la parte central del Mar Rojo, el légamo rindió un contenido medio del 5% de cobre y zinc. El légamo se encuentra en yacimientos de 30 metros de espesor, como promedio. Se recolectaron alrededor de 30 toneladas de muestras para ensayos posteriores. Se informó que el Gobierno del Sudán había concedido a la firma Preussag A.G. derechos de explotación frente a las costas en una zona que abarcaba estos yacimientos 7/. Los científicos sugieren que tal vez en otras localidades donde haya grietas en los fondos marinos también se encuentren fangos metalíferos y salmueras calientes como los descubiertos en el Mar Rojo.

---

5/ Así como en el informe anterior (A/AC.138/36), las perspectivas de los hidrocarburos marinos se examinan sobre la base de una supuesta profundidad máxima a la cual se pueden encontrar yacimientos submarinos. Generalmente, se sostiene que dichos yacimientos están asociados con gruesas capas sedimentarias que se presentan en su mayor parte en las proximidades de las masas de tierra, más bien que lejos de las costas en cuencas oceánicas profundas. Sin embargo, cabe observar que la explotación de hidrocarburos en la zona fuera de la jurisdicción nacional debe contemplarse en cualquier caso como una posibilidad real en el futuro, pese a que los datos actuales no proporcionan una base para calcular los efectos económicos de dicha explotación.

6/ "Trans-Atlantic survey finds manganese", Oceanology, octubre de 1971, págs. 22 y 23.

7/ "Red Sea Exploration", en Mining Magazine, noviembre de 1971, págs. 401 a 403.

## C. Nódulos de manganeso

### a) Actividades de exploración

8. En 1971 se intensificaron las actividades de exploración, tanto de expediciones científicas que publican los resultados de su labor como de empresas cuyas conclusiones están sujetas al derecho de propiedad.

9. La Unión Soviética y varios países de Europa oriental han establecido un centro internacional destinado a coordinar sus esfuerzos en materia de exploración marina. Según algunas fuentes, durante una conferencia celebrada en Riga en 1971, la URSS indicó que se estaban proyectando expediciones conjuntas en los Océanos Atlántico, Índico y Pacífico a fin de seleccionar posibles lugares para la explotación de minerales 8/.

10. Un gran número de empresas comerciales de muchas naciones industriales han realizado exploraciones de los yacimientos de nódulos del Pacífico. Una compañía estadounidense, la Deepsea Ventures, ha estado realizando estudios de exploración de yacimientos en una zona al sur de Hawaii. El Centre National pour l'Exploitation des Océans (CNEXO), organismo oceanográfico francés que trabaja en asociación con Le Nickel, ha efectuado trabajos de exploración a unas 200 millas al este de Tahití, donde se han encontrado nódulos ricos en cobalto y níquel. La firma Metallgesellschaft A.G., de la República Federal de Alemania, ha estado también realizando estudios de los nódulos del Océano Pacífico. La Kennecott Corp. ha desarrollado su propio equipo y técnicas de muestreo y exploración, y en varios cruceros realizados desde 1967 ha muestreado más de 3.000 lugares donde hay nódulos de manganeso 9/. Varias instituciones académicas de los Estados Unidos, tales como Scripps en San Diego (California), Woods Hole, (Massachusetts) y el Observatorio Lamont-Doherty de la Universidad de Columbia, en Nueva York, han realizado también amplios estudios sobre yacimientos de nódulos.

### b) Sistemas de extracción

#### i) Por inyección de aire e hidráulico

11. Prosiguen los trabajos para desarrollar el sistema por inyección de aire de Deepsea Ventures. Varias empresas del Japón, América del Norte y Europa occidental se encuentran en diferentes etapas del proceso de diseño y ensayo de sistemas de extracción de nódulos. La Demag Company de Alemania Occidental ha diseñado un sistema hidráulico de extracción que puede operar a profundidades de hasta 15.000 pies. Este sistema consistiría en una estación de bombeo, una sala de máquinas e

---

8/ "Soviet block plans big sea-bed study", The New York Times, 24 de abril de 1971.

9/ T.N. Walthier, "The current status of ocean mining", en Mining Engineering, octubre de 1971, págs. 51 a 53.

instalaciones de elaboración primaria de nódulos contenidas en un compartimiento sumergido de 22 metros de largo. Los nódulos serían recogidos del fondo marino por medio de equipo especial instalado en orugas y luego serían bombeados a una estación sumergida intermedia de elaboración, desde donde serían izados al barco extractor 10/.

12. La Hughes Tool Company ha asignado una importante suma, tal vez más de 50 millones de dólares, al desarrollo de un sistema de extracción de nódulos de manganeso. La Global Marine de Los Angeles es contratista general para el proyecto de la Hughes Tool Co., que actualmente tiene dos barcos extractores en construcción. En el Sun Shipping Yard de Pensilvania se está construyendo un barco de 600 pies y 35.000 toneladas, que se estima costará 40 millones de dólares. Un segundo barco (de 320 x 107 pies) se está construyendo en el National Steel and Ship Building Yard en San Diego (California), según un plano de la Lockheed Missiles and Space Company. Se informa que la avanzada tecnología de bombeo desarrollada por la Hughes Tool Co. y las singulares dimensiones de este segundo barco tal vez indiquen que la extracción se llevará a cabo por medios hidráulicos de inyección por aire, con la estación de bombeo sumergida a 250 pies o más bajo la superficie del mar.

#### ii) El sistema de Cangilones en Línea Continua (CLB)

13. Este sistema fue concebido y desarrollado por la compañía Commander Yoshio Masuda del Japón. Consiste de un cable sin fin al que se fija una serie de cangilones de dragado. El cable tiene longitud suficiente como para que alcance desde un barco de superficie hasta el fondo del mar. Se ensayó durante el verano de 1970 a diversas profundidades (hasta 3.500 metros) en localidades cercanas a Tahití, donde se han encontrado yacimientos de nódulos.

14. La capacidad de producción del sistema CLB es función del tamaño de los cangilones, el espaciamiento de los mismos en el cable de dragado, la velocidad a la cual funciona el cable sin fin y la eficiencia de llenado de los cangilones. La eficiencia de llenado de los cangilones depende de su diseño y de las condiciones operacionales, a saber, de la velocidad lateral del barco en relación con la velocidad vertical del cable y de la longitud de la sección del cable con cangilones que se arrastra en el fondo marino. La práctica operacional apropiada (es decir, la sincronización de la velocidad del cable, la velocidad lateral del barco y el arrastre de los cangilones en el fondo marino), tiene por objeto evitar que los cangilones pasen continuamente sobre la misma zona del fondo marino. Los resultados de los ensayos de 1970 parecen indicar que la eficiencia de llenado puede mantenerse en más del 50% de la capacidad de los cangilones con una práctica operacional apropiada 11/.

---

10/ "Mining system will process ore in under-water station", en Ocean Industry, octubre de 1971, pág. 18.

11/ John L. Mero "Will ocean mining prove commercial?", en Offshore Technology, abril de 1971, pág. 131. Véase también "The Future Promise of Mining in the Ocean", en Canadian Mining and Metallurgical Bulletin, abril de 1972, págs. 21 a 27, y "Continuous Bucket-Line Dredging at 12,000 feet", en pretirada de Offshore Technology Conference (preparada para la Tercera Conferencia Anual de Tecnología Marina, Houston, Texas, 19 a 21 de abril de 1971).

15. Los factores limitantes básicos de la capacidad de producción del sistema son: energía eléctrica, tamaño de los cangilones y resistencia del cable. En el ensayo que se realizará en el verano de 1972 se emplearán 16.000 metros de cuerda de polipropileno de 120 mm. de diámetro con una resistencia a la rotura por tracción de 150 toneladas. Los dos tamaños de cangilones que se ensayarán tendrán una capacidad de 0,5 m<sup>3</sup> y 0,3 m<sup>3</sup> 12/, y serán fijados al cable a intervalos de 25 a 50 metros. En el barco que se empleará para los ensayos este verano se dispondrá de alrededor de 900 kw de energía eléctrica para la tracción del sistema CLB. La energía eléctrica disponible y el tamaño de los cangilones limitará la producción máxima de este sistema CLB a 650 toneladas de nódulos al día. Aumentando la potencia de salida de los motores de tracción y aumentando la dimensión de los cangilones, la capacidad de producción podría aumentarse, en principio, hasta alrededor de 3.800 toneladas de nódulos al día, punto que se aproximaría a la resistencia del cable a la rotura por tracción (150 toneladas). En el Japón ya se están fabricando cables de polipropileno trenzado con resistencia a la rotura por tracción de 500 toneladas. Empleando este tipo de cable y motores más potentes, la capacidad de producción del sistema podría aumentarse a alrededor de 7.600 toneladas de nódulos al día 13/.

16. La prueba del sistema CLB que se realizará este verano se hará bajo la dirección general del Sr. Masuda, con la ayuda del Dr. Mero, y será financiada por un consorcio de más de 20 firmas. Este consorcio se estableció sólo para financiar y supervisar el ensayo, después del cual cada compañía participante podrá decidir si le conviene alquilar el uso del sistema del propietario de su patente, el Sr. Masuda. Los objetivos principales de la prueba son:

- 1) ensayar el sistema CLB en el mar en diferentes condiciones de operación en yacimientos reales de nódulos que podrían considerarse susceptibles de explotarse económicamente;
- 2) obtener datos técnicos relativos a todos los aspectos del funcionamiento de este sistema;
- 3) efectuar operaciones rutinarias de producción durante un período de por lo menos diez días;
- 4) determinar las posibles tendencias del equipo a fallar, y el consiguiente tiempo improductivo;
- 5) extraer unas 3.000 toneladas de nódulos de por lo menos tres yacimientos diferentes, para ser distribuidas a los participantes en el ensayo; y
- 6) preparar informes técnicos completos que indiquen el diseño óptimo del sistema y su funcionamiento, incluso todos los datos de ingeniería y de costos originados en el ensayo.

---

12/ La densidad media de los nódulos es de alrededor de 1.000 kilos por metro cúbico; por lo tanto si los cangilones se llenan al 50% de su capacidad pueden recoger alrededor de 250 y 150 kilos de nódulos cada uno.

13/ Fuente: Ocean Resources Inc., La Jolla, California.

c) Elaboración metalúrgica

17. Durante algún tiempo se pensó que la elaboración de los nódulos presentaba un problema aún más difícil de resolver que la extracción de los nódulos del fondo marino. Sin embargo, en los últimos dos años se han hecho anuncios en el sentido de que se han ensayado con éxito varios procedimientos diferentes para la extracción económica de metales a partir de los nódulos.

18. La Deepsea Ventures continúa trabajando en el desarrollo de un proceso hidro-metalúrgico que se ensayó en 1971 en una planta experimental de una tonelada diaria. Se informa que la compañía está preparando ensayos adicionales del proceso en una planta experimental de 10 toneladas diarias. El proceso comienza con la trituración y secado de los nódulos a fin de dejar al descubierto una mayor superficie y promover su reactividad. Luego, se hace reaccionar a los nódulos triturados con ácido clorhídrico en hornos, y los cloruros metálicos solubles son posteriormente lixiviados con agua. Después, el líquido de lixiviación se trata con solventes de extracción para separar el cobre, el cobalto y el níquel, que luego son extraídos por precipitación electrolítica. Se retiran los metales residuales, tales como cadmio, zinc y cromo, de la solución restante de cloruro de manganeso, y ésta se convierte entonces en manganeso metálico <sup>14/</sup>. Se dice que con este proceso se logran altas tasas de extracción de metales, superiores al 95%.

19. La Estación Experimental de la Dirección de Minas de los Estados Unidos en Salt Lake City ha anunciado que ha logrado elaborar nódulos experimentalmente por medio de un sistema de lixiviación con ácido y amoníaco. Se consiguieron altas tasas de obtención de todos los metales que se encontraban en los nódulos mediante este método más bien tradicional de elaboración de nódulos. La Kennecott Cooper Co., después de 10 años de investigaciones sobre todos los aspectos de la extracción y elaboración de nódulos, comunicó el desarrollo de una técnica pirometalúrgica de elaboración. Pese a que generalmente los procesos pirometalúrgicos implican gastos más bien elevados de inversión y explotación, se informa que la obtención de níquel, cobalto y cobre en el proceso Kennecott es superior al 90%.

20. En la Universidad de California, en Berkeley, se están efectuando trabajos experimentales para desarrollar una técnica de lixiviación diferencial de los metales a partir de los nódulos. Este proceso de lixiviación en montones por oxidación permite la separación del níquel, cobre y cobalto sin que entren en la solución el manganeso o el hierro. Así, este proceso permitiría la elaboración de nódulos con una inversión inicial relativamente baja para instalaciones y gastos de explotación. Hasta la fecha, estos experimentos han permitido la extracción de sólo el 60% a 80% del metal de los nódulos, pero se espera que con nuevas investigaciones se pueda aumentar la eficiencia de la elaboración.

---

<sup>14/</sup> A.B. Caldwell, "Deepsea Ventures Readyng its Attack on Pacific Nodules", en Mining Engineering, octubre de 1971, págs. 54 y 55.



d) Perspectivas de la explotabilidad de los nódulos

21. La naturaleza de la explotación de los nódulos de manganeso, que entraña nuevas tecnologías tanto para la etapa de extracción como para la de elaboración, hace difícil predecir la fecha en que entrará en funcionamiento la primera empresa explotadora. Algunos representantes han indicado en la Comisión de los Fondos Marinos que la extracción comercial tal vez será posible a fines del presente decenio. Los círculos industriales tienden a ser más optimistas. La Deepsea Ventures sostiene que para 1976 podría estar extrayendo y elaborando nódulos si se resuelve satisfactoriamente la cuestión de los derechos exclusivos sobre lugares en los fondos marinos <sup>15/</sup>. Los promotores del sistema de cangilones en línea continua han indicado que la explotación comercial de nódulos podría comenzar antes de 1975. Además, se espera que la gran embarcación y el sistema de extracción que se construyen para la Hughes Tool Co. entren a la fase operacional en 1973, con lo que se plantea la posibilidad de que puedan dedicarse a la producción comercial a fines de 1973 o en 1974.

---

<sup>15/</sup> El American Mining Congress (Congreso de Minería de los Estados Unidos de América) redactó un proyecto de disposiciones legislativas sobre los fondos marinos, que fue presentado en el Senado de los Estados Unidos como proyecto de ley S.2801 por los Senadores Metcalf, Allott, Bellmon, Jackson y Stevens. El proyecto de ley se remitió conjuntamente a los Comités de Asuntos Interiores e Insulares y de Relaciones Exteriores. También se han presentado proyectos semejantes en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. En una exposición ante el Subcomité I de la Comisión de los Fondos Marinos, hecha el 14 de marzo de 1972, el Dr. Vincent E. McKelvey indicó que el Poder Ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos no había adoptado ninguna posición sobre este proyecto de ley.

## II. CONSECUENCIAS ECONOMICAS DE LA EXTRACCION DE MINERALES DE LOS FONDOS MARINOS

22. El rápido progreso alcanzado en los últimos años por la tecnología de la extracción de minerales de los fondos marinos y su elaboración metalúrgica abre la posibilidad de obtener una producción sustancial de minerales de los fondos oceánicos profundos. Se plantea ahora la cuestión de saber cuánto se tardará en lograrlo. Resulta difícil calcular las consecuencias económicas a largo plazo de la extracción de minerales de los fondos marinos, debido al rápido desarrollo de la tecnología minera marina, que tal vez llegue a permitir la producción de níquel, cobre, cobalto - y quizás manganeso - no solamente a partir de los nódulos sino también a partir de fangos metalíferos. En el futuro más distante, cuando se haya perfeccionado la tecnología necesaria, quizás sea posible explotar incluso las incrustaciones de manganeso de las crestas oceánicas, que también contienen níquel, cobre y otros metales.

23. El volumen de los trabajos de investigación y desarrollo a la explotación de los nódulos de manganeso hace probable que la extracción de metal de los nódulos alcance la etapa comercial antes que la producción a partir de los fangos metalíferos o las incrustaciones de manganeso. En realidad, es posible que la explotación comercial de los nódulos de manganeso comience dentro de cinco años. Siendo inciertos los futuros adelantos tecnológicos en lo que se refiere a la explotación de los fangos metalíferos y las incrustaciones de manganeso, en la siguiente evaluación de las consecuencias económicas de la extracción de minerales de los fondos marinos sólo se considera la explotación de los nódulos.

24. Los acontecimientos ocurridos desde la preparación del último informe del Secretario General sobre las posibles repercusiones económicas de la extracción de minerales de los fondos marinos (A/AC.138/36) no parecen haber afectado las conclusiones preliminares que figuran en dicho informe. No obstante, las nuevas informaciones de que se dispone ahora han permitido aclarar algunos puntos. El ritmo de extracción de metal dependerá tanto del sitio explotado como del método de elaboración metalúrgica adoptado. A pesar de las incertidumbres inherentes a los cálculos basados en nuevas tecnologías, se cree que aún son válidas las cifras indicadas en el informe anterior (A/AC.138/36) para la producción hipotética de una operación única de explotación minera con una producción de 1 millón de toneladas de nódulos secos por año. Sin embargo, sobre la base de varias muestras conocidas de nódulos sumamente ricos, parece probable ahora que la producción de níquel pueda ser por lo menos un 15% superior y quizás hasta un 50% superior a la producción de cobre 16/. La posible repercusión de la explotación de los nódulos en los mercados de minerales se calcula provisionalmente en los párrafos que siguen:

---

16/ La producción anual de una operación de 1 millón de toneladas por año sería aproximadamente de 16.000 toneladas de níquel, 13.000 toneladas de cobre, 2.800 toneladas de cobalto y 270.000 toneladas de manganeso, en el caso de obtenerse también a este mineral.

## A. Cobalto

25. El alto volumen probable de producción de cobalto a partir de nódulos, en relación con la demanda mundial de este metal, sugiere que este mercado podría ser el primero afectado por la explotación de los fondos marinos. Una sola operación de extracción podría satisfacer aproximadamente el 8% de las necesidades de cobalto en 1980 17/. No obstante, dos factores tenderían a moderar las repercusiones de este aumento de la producción en el mercado. El primero es la posibilidad de que la demanda de cobalto aumente más rápidamente si los precios bajan. La elasticidad de la demanda de cobalto ha sido más bien baja; pero los precios rara vez han permanecido en niveles correspondientemente bajos por períodos de tiempo suficientemente largos como para alentar al empleo de este metal en nuevas aplicaciones. Cabría esperar que esta situación cambiase si la industria de los nódulos proporcionase suministros abundantes y constantes de cobalto. El segundo factor dimana de la naturaleza del mercado existente: un productor importante único en un país en desarrollo está en condiciones de restringir la oferta para contrarrestar una reducción de los precios. Este comportamiento del productor que determina los precios podría cambiar si la producción de cobalto a partir de nódulos llegara a ser la fuente principal del metal.

26. La repercusión de la producción de cobalto de los fondos marinos en el mercado de este metal podría ser marcadísima si se explotaran los nódulos de elevado contenido de cobalto de la elevación del Océano Pacífico central 18/. En esta zona, al oeste de Hawai, una operación única de explotación minera que dragara un millón de toneladas de nódulos por año con un 2% de contenido de cobalto podría suministrar aproximadamente 19.200 toneladas de cobalto. Esta cifra equivale a casi el total de la producción mundial de 1969, y sería la mitad de la posible demanda mundial de 1980 (basada en una extrapolación de la utilización actual del metal).

27. En resumen, se espera que la producción de cobalto a partir de los nódulos tienda a bajar los precios, pero es imposible predecir en la etapa actual cuándo sobrevendrá la reducción de los precios y de qué magnitud será. Existe, sin embargo, un posible límite a la disminución del precio del cobalto, a saber el nivel del precio del níquel 19/. Puesto que el cobalto puede sustituir al níquel en varios usos, es posible que si los precios del cobalto bajaran el nivel de los del níquel, los elaboradores de nódulos suministrarán estos metales juntos en lugar de separarlos.

---

17/ A/AC.138/36.

18/ Recursos Minerales del Mar (Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 70.II.B.4).

19/ El precio del cobalto en la actualidad es de aproximadamente 2,20 dólares de los EE.UU. por libra; el del níquel, 1,30 dólares por libra.

## B. Manganeso

28. El mercado del manganeso también podría verse afectado por la producción marina, pues la demanda es bastante inelástica y no se prevén nuevos usos de importancia que puedan absorber un aumento de la oferta a precios menores. Sin embargo, no hay ninguna certeza de que la extracción de manganeso llegue a ser comercialmente atrayente. Según el proceso metalúrgico que se adopte, la elaboración de nódulos dará, además de níquel, cobre y cobalto: 1) una escoria inútil que habrá que eliminar; 2) el equivalente de un mineral de manganeso de baja ley (óxido de manganeso); 3) ferromanganeso; 4) manganeso metálico puro. No se puede aún predecir cuál será en el futuro el procedimiento metalúrgico más económico. Parece probable, no obstante, que la obtención de manganeso sea la etapa más costosa de la elaboración de los nódulos; la mayor parte de los procesos que se están estudiando no la prevén. Los cálculos preliminares de los costos de diversos métodos de elaboración parecen indicar que la producción de óxido de manganeso a partir de nódulos no sería competitiva con el mineral de manganeso de yacimientos terrestres a los precios actuales (aproximadamente 60 dólares de los EE.UU. por tonelada de mineral de manganeso, CIF en puertos de la costa oriental de los Estados Unidos o puertos del Golfo de México).

29. Aunque aún no se puede predecir, entonces, si se obtendrá manganeso en forma de óxido, las perspectivas para este procedimiento no son favorables. Pero si el contenido de hierro y manganeso de los nódulos no puede venderse, el elaborador tendrá que efectuar gastos para eliminar la escoria inservible (de 1 a 5 dólares por tonelada de nódulos). Puesto que el costo de extracción y obtención de los otros metales ya se habrá pagado y habida cuenta de los gastos que entrañaría la eliminación de los desechos es concebible que se encuentren algunas aplicaciones para el residuo de hierro y manganeso si se vende a precios muy bajos.

30. Por otra parte, es posible que la producción de ferromanganeso y manganeso metálico a partir de los nódulos sea comercialmente viable. El precio del ferromanganeso 20/ en los Estados Unidos es de aproximadamente 182 dólares por tonelada, y el del manganeso metálico (alrededor de 650 dólares por tonelada) es más de diez veces superior el precio del mineral de manganeso. Esto significa que, a pesar del elevado costo de elaboración del manganeso (que quizás varíe de 20 a más de 100 dólares por tonelada), es posible que las empresas dedicadas a la extracción de nódulos encuentren interesante la producción de ferromanganeso y manganeso metálico. No obstante, los mercados actuales de estos dos productos son bastante limitados, y es seguro que la oferta adicional bajará los precios, por lo menos en los primeros momentos. A medida que aumentase la producción de manganeso metálico y ferromanganeso, la estructura general de los mercados de manganeso podría cambiar. Podría aumentar el porcentaje de manganeso utilizado en forma de metal y de ferromanganeso, a expensas del mineral. Lo importante es que los tres mercados (de mineral, de ferromanganeso y de metal) están vinculados entre sí y que, independientemente de los cambios de la estructura de la oferta, la demanda total de manganeso en todas sus formas probablemente no se verá muy afectada. Es probable que continúe siendo esencialmente función de la producción de acero, que consume aproximadamente el 94% de la producción total de manganeso.

---

20/ Calidad normal con 74% a 76% de manganeso.

### C. Níquel

31. Se espera que la extracción de níquel sea el puntal de la industria de los nódulos y proporcione más del 50% de los ingresos brutos 21/. Se espera que la demanda de níquel crezca con bastante rapidez durante los próximos dos o tres decenios, aun si se mantienen los precios actuales, que son bastante elevados. Este aumento de la demanda podría ser mayor si bajaran los precios. En vista de estas perspectivas dinámicas, no parece probable que la extracción de minerales de los fondos marinos pueda tener graves efectos desfavorables en el mercado del níquel.

32. El mercado favorable de la segunda mitad del decenio de 1960, en que los precios se elevaron constantemente, indujo a los productores de níquel de fuentes terrestres a aumentar su capacidad. Si todos los planes de ampliación dados a conocer en 1970 llegaran a concretarse, la capacidad mundial de producción de níquel aumentaría en un 88% para 1975 22/. Aún aceptando un criterio relativamente moderado, la capacidad de producción aumentará de 650.000 toneladas por un año en 1970 a aproximadamente 1.050.000 de toneladas por año en 1975. Este aumento sería, con todo, considerable, y equivaldría a un aumento anual acumulativo del 10%.

---

21/ Todo cálculo de los ingresos futuros de las operaciones de extracción de nódulos se enfrenta con la dificultad de determinar los precios que se han de utilizar puesto que éstos podrían ser afectados por la misma producción marina. Suponiendo que la primera empresa pudiera vender su producción a los precios actuales del mercado, y que se elaborara un producto equivalente al mineral de manganeso, el ingreso bruto anual de la venta de minerales podría calcularse como sigue:

<u>Producto</u>	<u>Producción anual* en toneladas métricas</u>	<u>Precio aproximado del mercado</u>	<u>Ingreso bruto anual</u>
(En dólares de los EE.UU.)			
Mineral de manganeso	270 000	50/ton	13 500 000
Níquel	16 000	1,30/libra	45 750 000
Cobre	13 000	0,50/libra	14 300 000
Cobalto	2 800	2,20/libra	13 550 000
		Total	87 100 000

\* Véase la nota 13.

22/ E. Boudet, M. Janjou y C. Deschamps, "Perspective de développement de la production mondiale de nickel", en Annales des Mines, marzo de 1971, págs. 23 a 42.

#### D. Cobre

33. Es probable que, entre los cuatro metales obtenidos de los nódulos, sea el cobre el que cause menores repercusiones inmediatas. En primer lugar, la demanda de cobre es aproximadamente diez veces mayor que la de níquel; en segundo término, la producción de cobre de nódulos será de aproximadamente cuatro toneladas por cada cinco toneladas de níquel, aunque, como ya se ha observado, esta relación podría incluso llegar a ser de 1 a 2; y, en tercer lugar, la economía de la extracción de nódulos depende principalmente de la producción de níquel. En las actuales condiciones, los efectos de la explotación minera de los fondos marinos en el mercado del cobre equivaldrían probablemente a una décima parte de las repercusiones en los mercados del níquel.

34. La situación cambiaría, por supuesto, si la demanda de níquel aumentara a un ritmo mucho mayor que la demanda de cobre. Si, por ejemplo, la demanda creciera a un ritmo de un 10% anual para el níquel y de un 4% para el cobre, al cabo de tres decenios la demanda de cobre duplicaría el volumen de la demanda de níquel. En estas condiciones, las posibilidades de que la extracción de nódulos afectara los mercados de cobre aumentaría notablemente. Es obvio que la materialización de esta situación hipotética implicaría un cambio importante en la estructura del consumo de los dos metales, que en los últimos años ha aumentado a aproximadamente la misma tasa para ambos.

35. Si se supone que el principal aumento de la oferta de níquel se deberá a la producción a partir de nódulos (y ya se ha mencionado el aumento pronosticado de la producción terrestre), la expansión de la industria minera marina tendrá que ser enorme. Si como caso extremo suponemos que el aumento total de la demanda de níquel de 1975 a 1990 - con una tasa de crecimiento anual del 10% - ha de ser atendido por la extracción de nódulos, será necesario que para dicho período haya aproximadamente 260 empresas de minería de nódulos en funcionamiento. Se deduce también que para satisfacer este crecimiento anual del 10% de la demanda será necesario que para 1990 se pongan en funcionamiento otras 31 operaciones nuevas de minería de nódulos de manganeso tan sólo para atender el aumento de ese año 23/.

36. Aunque este ejemplo constituye un caso extremo, sirve no obstante para hacer resaltar las incertidumbres inherentes al pronóstico de las repercusiones económicas de la futura extracción de minerales de los fondos marinos internacionales, y apunta a la necesidad de seguir trabajando continuamente en las esferas de la planificación y la administración.

---

23/ Basándose en una producción de un millón de toneladas de nódulos secos anuales, con un contenido de níquel de 1,5% y una obtención de metal del 96%.

### III. FOMENTO DEL APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS MARINOS

37. El aprovechamiento de los recursos de la zona internacional plantea retos nuevos a la comunidad internacional. La explotación de los recursos de los fondos oceánicos ampliaría substancialmente la base mundial de recursos en momentos en que en algunos círculos se expresa preocupación respecto de la suficiencia de los recursos mundiales para mantener a largo plazo los niveles crecientes de producción. Por otra parte, es bien posible que el aprovechamiento en gran escala de los recursos de los fondos marinos afecte, en grado diverso, a algunos productores tradicionales de tierra firme. Además, la avanzada tecnología necesaria para explorar y explotar estos recursos está siendo desarrollada por los países industriales más adelantados, lo que plantea la posibilidad de que se ensanche aún más la brecha tecnológica que separa a los países industriales y en desarrollo.

38. Como se ha observado, todavía no se puede prever con certeza cuándo será factible aprovechar estos recursos, aunque hay razones suficientes para suponer que la explotación de nódulos podría comenzar dentro de cinco años. Tan pronto comience esta explotación, los mercados del manganeso y el cobalto tal vez sientan los efectos del aumento de la competencia, pero es probable que las repercusiones de la explotación en gran escala se sientan con más intensidad en el decenio de 1980.

39. Estas consideraciones apuntan a la conveniencia de realizar pronto un estudio esmerado de lo que implica el aprovechamiento racional de la zona internacional y sus recursos. Es evidente, por supuesto, que existen muchas maneras de fomentar este aprovechamiento racional, especialmente a la luz de los diversos criterios adoptados con respecto a la naturaleza y atribuciones de los tipos de mecanismos internacionales que se han propuesto o sugerido. También es evidente que a los fines mencionados será preciso contar con mucha más información, así como con la organización necesaria para obtenerla. En las secciones que siguen se reseñan brevemente algunas de las consideraciones especiales que tendrían que tenerse en cuenta al evaluar la materia central de este informe, es decir, las repercusiones económicas del aprovechamiento de los recursos de los fondos marinos y los medios para reducir al mínimo los efectos económicos adversos causados por la fluctuación de los precios de las materias primas como consecuencia de este aprovechamiento. En las páginas siguientes se presentan algunas consideraciones teóricas y provisionales relativas a posibles métodos para fomentar el aprovechamiento racional de los recursos de los fondos marinos, y se examinan unas pocas de las muchas variantes posibles.

#### A. Planificación del aprovechamiento de los recursos de los fondos marinos

##### a) Cuestiones que podrían planificarse

40. Este informe trata principalmente de las repercusiones económicas del aprovechamiento de los recursos de los fondos marinos. No obstante, el interés por fomentar la utilización racional de los recursos de los fondos marinos no debe oscurecer una cuestión mucho más amplia, a saber, que el aprovechamiento de estos

recursos puede afectar a otros usos del océano o ser afectado por ellos. Así por ejemplo, la pesca, el transporte marítimo, la comunicación por cable y la utilización del océano como vaciadero de desechos son factores variables dentro del cuadro global de usos posibles y antagónicos que pueden darse al océano 24/. Cabe esperar que con el continuo desarrollo de las actividades en el mar aumenten los conflictos sobre la utilización del espacio oceánico y sus recursos. A la luz de los objetivos formulados en la Declaración de Principios /resolución 2749 (XXV) de la Asamblea General/, la comunidad internacional deberá hacer frente al problema de la utilización coordinada del espacio oceánico y sus recursos, de manera tal que los conflictos se reduzcan a un mínimo y se proteja el medio marino.

b) Disponibilidad de datos y planificación

41. No cabe duda de que se requerirá información cada vez más detallada cuando se pase a la etapa de las deliberaciones sobre las diversas características concretas del régimen internacional en la Conferencia sobre el derecho del mar. Es de suponer que, una vez creado el mecanismo internacional, una de sus primeras tareas será organizar la red de información necesaria para proporcionar los datos que se requerirán para orientar la adopción de decisiones.

42. La creación de un sistema eficiente de información exige dos realizaciones: 1) que se asegure el acceso a los datos existentes sobre cuestiones marinas, y 2) que se colmen los vacíos en la red. Ya existen varios bancos de datos. Lo que se necesita ahora no es forzosamente un depósito centralizado de todos los datos relativos al mar, sino un inventario de los bancos de datos existentes y los medios para tener rápido acceso a lo que contienen 25/. Especialmente importante para la ordenación de los recursos de los fondos marinos será la información sobre la geología de los fondos marinos, la topografía del fondo de los mares, las corrientes marinas y las condiciones de la superficie.

43. A pesar de la reciente intensificación de las actividades de investigación, hay aún vastas lagunas en los conocimientos de estas materias 26/. Los sectores de información más importantes para la ordenación de los recursos marinos son los

---

24/ El Consejo Económico y Social ha manifestado su preocupación por esta cuestión al pedir, en su resolución 1537 (XLIX) un estudio de antecedentes sobre las utilidades tradicionales y previsibles de los mares y los conflictos entre distintos usos. El informe se ha presentado a los Estados Miembros para que formulen observaciones, y el Secretario General ha pedido que se hagan sugerencias sobre medios para fortalecer la cooperación internacional en relación con el medio marino.

25/ La Comisión Preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano ha formulado una propuesta similar al pedir la creación de un sistema de referencias para la información.

26/ La comunidad internacional tiene conciencia de estas limitaciones y está fomentando varios programas de investigaciones marinas, entre los que debe mencionarse el Programa Ampliado y a Largo Plazo de Investigación Oceanográfica (LEPOR).



siguientes: 1) la distribución de los recursos minerales en los fondos marinos y su subsuelo con indicación de su ubicación e importancia económica; 2) los adelantos tecnológicos relacionados con la exploración, explotación y elaboración de los recursos de los fondos marinos; y 3) los peligros para el medio resultantes de la explotación de los minerales de los fondos marinos.

c) Objetivos que se han de perseguir

44. La Declaración de Principios (resolución 2749 (XXV) de la Asamblea General) establece los objetivos que debe perseguir en general, un régimen internacional. Sobre la base de las decisiones de la Conferencia sobre el derecho del mar acerca de la naturaleza del régimen y el mecanismo internacional, los objetivos que han de preverse serán, presumiblemente, los que dimanen de la Declaración y de las propuestas y sugerencias formuladas en la Comisión y en otros órganos. Por lo que se refiere al aprovechamiento de los recursos de los fondos marinos, esos objetivos quizás podrían resumirse en las siguientes directrices para la planificación:

- 1) Alentar la utilización de la zona y sus recursos de modo que se promueva un desarrollo saludable de la economía mundial y un crecimiento equilibrado del comercio internacional, y se reduzcan al mínimo cualesquier efectos económicos adversos causados por la fluctuación de los precios de materias primas resultante de dichas actividades.
- 2) Obtener los máximos beneficios netos para la comunidad mundial, incluso beneficios financieros, que se compartirían teniendo en cuenta los intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo, con o sin litoral.
- 3) Procurar un aprovechamiento y una utilización ordenados, eficientes y equilibrados de los recursos marinos biológicos y no biológicos (conservación).
- 4) Preservar la calidad del medio marino.

45. Una cuestión central a que se refirió la resolución 2750 A (XXV) es la posibilidad de que la extracción futura de minerales de los fondos marinos pueda tener repercusiones considerables en los precios del mercado de esos minerales. Esta preocupación se subrayó en la Declaración de Principios, en la que se postuló que el aprovechamiento de esta zona y sus recursos debe llevarse a cabo de manera de "reducir al mínimo los efectos económicos adversos ocasionados por la fluctuación de los precios de las materias primas resultante de tales actividades". Esta consideración merece ser analizada en mayor detalle.

46. Cuando se producen fluctuaciones de precios, lo que uno pierde otro lo gana. Si los precios aumentan bruscamente por una escasez transitoria, se perjudican los consumidores pero se benefician los productores. Si, por otra parte, el desequilibrio entre oferta y demanda a corto plazo provoca la reducción de los precios, se benefician los consumidores a costa de los productores. Aunque ambos casos tienen efectos perturbadores, parece que uno de los principales objetivos en

El desarrollo de la producción de minerales marinos será evitar todo efecto perjudicial para los proveedores tradicionales en países en desarrollo. Es obvio que una reducción de los precios de materias primas afectaría adversamente la economía de varios países en desarrollo que exportan esos minerales. Debe recordarse también que muchos más países en desarrollo son importadores de estos minerales (como materia prima o elaborados) y que una reducción de los precios los beneficiaría. No obstante, los principales beneficiarios de una baja de los precios serían los países desarrollados, puesto que son los principales importadores.

d) Algunos problemas especiales

47. Dos consideraciones tecnicoeconómicas influirán en el diseño de los mecanismos adecuados para controlar el aprovechamiento de los recursos de los fondos marinos. La primera es la perspectiva cronológica. El período medio de gestación de una empresa de minería marina puede ser de 6 a 10 años; antes de iniciarse las operaciones es necesario negociar sobre el lugar de la extracción, diseñar y construir el sistema de minería marina, y completar la planta de elaboración. Esto significa que la planificación de la utilización de los recursos marinos que habría de llevar a cabo el mecanismo internacional tendría que apuntar a una época futura distante por lo menos diez años. Aun si se hubieran logrado considerables progresos en la evaluación de la localidad y el diseño del sistema para la fecha en que se otorgase el permiso de explotación o el contrato, pasarían otros dos a cuatro años antes de que la producción llegara a los mercados. Empero, antes de que la parte interesada tome la decisión de iniciar una empresa, necesitará conocer las normas que rijan la explotación de minerales de los fondos marinos. Las disposiciones jurídicas generales relativas a las partes que intervengan en empresas mineras marinas serán definidas, por supuesto, por el régimen internacional. Dentro de este marco, será preciso que toda medida reglamentaria y "fiscal" que haya de determinar el mecanismo se establezca con considerable antelación.

48. La otra consideración tecnicoeconómica es que la elaboración de algunos de los minerales de los fondos marinos, como los nódulos de manganeso, proporcionará simultáneamente varios metales en proporciones que no corresponden a las de su demanda mundial. Por cada tonelada de cobalto producida, podrían obtenerse también aproximadamente 97 toneladas de manganeso, 5 de níquel y 4,9 de cobre. En cambio, la demanda mundial actual es del orden de 381 toneladas de manganeso, 27 de níquel y 279 de cobre por cada tonelada de cobalto 27/. En consecuencia, para 1980 una sola empresa de extracción de nódulos podría abastecer al 7,9% de la demanda mundial probable de cobalto, el 2,0% de la de manganeso, el 1,3% de la de níquel y sólo el 0,13% de la de cobre. Es posible que ulteriormente las plantas de elaboración puedan también extraer varios otros metales de los que se encuentran trazas en los nódulos. En el momento actual es imposible calcular en forma razonable el volumen probable de producción de estos oligometales y de su posible repercusión en los mercados mundiales.

---

27/ Véase el documento A/AC.138/36.

e) El principio de la carga fiscal equivalente

49. En teoría, y en ausencia de mecanismos reguladores, el aprovechamiento de los recursos de los fondos marinos ocurrirá cuando la tecnología disponible para la minería marina permita a tales empresas competir económicamente con las de extracción terrestre, y mientras así sea. No obstante, el empleo de indicadores de mercado con objeto de asignar en forma "eficiente" los recursos presupone que estos indicadores no han sido deformados, lo que evidentemente ocurriría si se concedieran subsidios de importancia para el desarrollo de los recursos de los fondos marinos, o se le impusiesen desincentivos, en comparación con la explotación de las fuentes tradicionales de minerales.

50. La aplicación del principio de la carga fiscal equivalente y de otras medidas reglamentarias a todas las fuentes de suministro, independientemente de su origen, tropezaría con enormes dificultades debido a las diferencias que existen actualmente entre los sistemas económicos y sociales. Por ejemplo, algunos países conceden incentivos especiales a las nuevas industrias que desean fomentar, argumentando que se trata de industrias nacientes. Otros, que se encuentran en una situación competitiva muy ventajosa, obtienen cuantiosos ingresos fiscales de industrias similares. En algunos casos, consideraciones estratégicas o proteccionistas han inducido a los gobiernos a conceder subsidios directos a la producción nacional de algunos minerales determinados. Esta diversidad de prácticas indica que en realidad la "carga fiscal" de las operaciones terrestres varía desde un impuesto negativo (subsidio) hasta un impuesto muy elevado de casi el 50% del valor de mercado en el caso de algunos minerales. Ante esta amplia variación en las posibilidades, la "carga fiscal media" sería de muy limitada utilidad para establecer un "gravamen equivalente" para las operaciones mineras en los fondos marinos. Por lo tanto, la determinación de un gravamen "fiscal" adecuado para la explotación de los recursos de la zona internacional habrá de ser una decisión político-económica en que se tengan en cuenta: 1) la situación financiera y técnica de las operaciones de minería en los fondos marinos; 2) el objetivo de la política, esto es, generar a largo plazo los máximos beneficios posibles para el mecanismo y la comunidad internacional; y 3) los objetivos de estabilización respecto de los minerales del caso.

B. Posible estrategia para controlar las repercusiones de la extracción de minerales de los fondos marinos

51. La naturaleza de la industria de los nódulos, que producirá los cuatro metales principales en cantidades muy diferentes a los volúmenes reales de la demanda de estos metales, hará excesivamente compleja la tarea de controlar las posibles repercusiones de la explotación minera de los fondos marinos en los mercados mundiales. El control de los posibles efectos económicos adversos de la extracción de minerales de los fondos marinos deberá conciliarse con los objetivos de generar ingresos máximos para el mecanismo internacional y fomentar activamente la expansión de la base mundial de recursos. Por lo tanto, tal vez se necesite un sistema más bien complejo para lograr una transacción aceptable entre estos objetivos opuestos. Ningún instrumento único de política sería suficiente para producir todos los resultados deseados. Se precisarán varios dispositivos de control para

proporcionar al mecanismo la flexibilidad necesaria para atender a los problemas que se presenten en el mercado, de cada mineral, sin impedir forzosamente el aprovechamiento de los otros minerales. Es posible que puedan idearse diversas soluciones para atender a estas necesidades; en la etapa actual, y en lo que sigue de esta sección, se explora sólo una posible estrategia para ilustrar los factores principales que podrían afectar la explotación de los nódulos de manganeso. Se espera que este trabajo preliminar estimule las deliberaciones sobre el tema. En futuros informes, la Secretaría examinará otros enfoques posibles que puedan surgir de nuevas consideraciones de este problema.

52. La estrategia examinada en este informe requerirá el uso coordinado de una política de explotación con medidas "fiscales" y compensatorias adoptadas por el mecanismo. También podrían contemplarse arreglos sobre productos básicos para complementar estos instrumentos. Cada instrumento de política en sí proporcionaría resultados limitados en relación con los varios objetivos perseguidos, pero una combinación apropiada de esos instrumentos de política al vez lograría el efecto deseado.

53. La política de explotación estaría diseñada para controlar el ritmo de producción. Se ha demostrado que la elaboración de nódulos afectará el mercado de cada mineral de manera sustancialmente diferente. Los mercados del manganeso y del cobalto podrían verse afectados por la primera operación de nódulos en gran escala, el mercado del níquel tal vez sólo sufriría efectos sustanciales luego de que la industria de los nódulos se hubiese ampliado considerablemente; y en el caso del mercado del cobre, la grave repercusión se produciría mucho más tarde, siempre y cuando se produjesen cambios sustanciales en la industria de los nódulos y los mercados de metales. Así, cualquiera que sea el ritmo de explotación que se decida, se verán afectados algunos mercados de minerales. En vista de que el cobre es el mineral de exportación más importante de los países en desarrollo 28/, la política de explotación tal vez deba orientarse de tal modo que se evite una repercusión importante en el mercado de este metal.

54. La política "fiscal" tendría el objetivo primordial de proporcionar al mecanismo el máximo ingreso posible compatible con la creación de las condiciones previas necesarias para el desarrollo de la industria de los nódulos. Al mismo tiempo, la "participación" de la Autoridad podría actuar como un estabilizador inherente de precios.

55. Podrían aplicarse disposiciones compensatorias en la medida en que la política de explotación y el gravamen propuesto por tonelada de mineral producido fueran incapaces de impedir una repercusión perjudicial sobre las exportaciones de algunos países en desarrollo (tal vez para algunos productores de manganeso y cobalto). Dichas medidas estarían de acuerdo con las disposiciones del párrafo 2 de la resolución 2750 (XXV) de la Asamblea General por las que se pide que se reduzcan

---

28/ Para un cálculo de la importancia del cobre para los países en desarrollo, véase el documento A/AC.138/36, págs. 34 y 35.

"al mínimo los efectos económicos adversos ocasionados por la fluctuación de los precios de las materias primas". Los planes compensatorios podrían también complementarse con acuerdos sobre productos básicos que podrían negociarse para los minerales que hiciesen frente a graves fluctuaciones de mercado 29/.

56. Una política amplia estaría dirigida en parte a promover un grado conveniente de equilibrio a largo plazo para los minerales extraídos de los fondos marinos. Por lo tanto, las decisiones sobre medidas concretas de política requerirían la ayuda de técnicas de planificación a largo plazo. En esencia, las directrices para la acción podrían derivarse de los estudios de las condiciones del mercado basados en los pronósticos de demanda y suministro de fuentes tradicionales, para 5, 10 y 20 años, de acuerdo con varios posibles volúmenes de producción marina para los diversos minerales.

a) La política de explotación

57. Una vez que se dispusiese de los pronósticos a largo plazo de oferta y demanda, el mecanismo estaría en condiciones de decidir acerca de una política apropiada de explotación. Debe observarse que en cualquier política de explotación posible intervienen dos cuestiones diferentes: 1) el método de asignación de permisos de explotación; y 2) el número y tamaño real de las empresas mineras que iniciarían sus operaciones cada año 30/.

58. La manera en que se realizará la explotación de los recursos de los fondos marinos será definida por el régimen. La Comisión está examinando varias propuestas referentes al posible otorgamiento de concesiones sobre recursos de los fondos marinos a partes interesadas, o, a la inversa, a la reserva de la explotación de recursos directamente para el mecanismo, por medio de contratos o de empresas mixtas. En un plan de asignación podrían incluirse procedimientos adecuados relativos a la responsabilidad financiera y técnica, y el calendario convenido para la explotación de un lugar determinado. Una característica que habría que alentar en los arreglos de explotación sería la participación, en diversas formas, de los países en desarrollo, con lo que se divulgarían los conocimientos tecnológicos especializados.

59. Sigue en pie la cuestión crucial de cómo hacer que la política de explotación conduzca a una administración eficaz de la extracción de minerales de los fondos marinos, de modo que se obtengan los máximos beneficios netos para la comunidad mundial con la mínima perturbación de los precios del mercado de minerales. Tal vez un ejemplo hipotético sea útil a este respecto. En el supuesto de que los pronósticos a corto y a largo plazo de varias condiciones diferentes de oferta y demanda hayan dado al mecanismo las directrices necesarias para una explotación conveniente de cada mineral de los fondos marinos, el mecanismo estará en condiciones

---

29/ Véase la sección IV.

30/ Para otros posibles métodos a este respecto, véase también la sección IV.

de estimar el máximo incremento en la producción de nódulos, por ejemplo, a lo largo del próximo decenio, compatible con los objetivos establecidos de estabilización del mercado.

60. Si tres explotaciones mineras estuvieran en marcha para 1980 <sup>31/</sup> y dada la naturaleza mixta de los productos de la industria de los nódulos los mercados del cobalto, y posiblemente del manganeso, experimentarían notables bajas de precios, mientras que el mercado del níquel se vería muy poco afectado y el del cobre permanecería prácticamente inalterado. Si estuvieran en marcha diez operaciones de explotación minera, las repercusiones sobre el manganeso (si hubiese producción) y sobre el cobalto probablemente serían graves <sup>32/</sup>, los mercados del níquel experimentarían una repercusión más apreciable (los nódulos proporcionarían alrededor del 13% de la demanda total calculada), mientras que el cobre, procedente de nódulos representaría todavía sólo el 1,3% de la demanda mundial calculada. La determinación del nivel de producción exigiría que se decidiese, entre otras cosas, acerca del número máximo de nuevas operaciones de explotación minera de los fondos marinos que se permitiría cada año, y esto requeriría una estrecha coordinación con el empleo de otros instrumentos reguladores de política. Se supone, a los efectos del análisis, que un objetivo básico de la política de explotación será impedir una grave repercusión en los mercados del cobre.

61. Una vez que se haya decidido acerca de los objetivos de política del mecanismo, será posible determinar el número máximo de nuevas operaciones de explotación minera para el período que se examina. Si el número de solicitudes de permisos o de contratos de explotación es mayor que el establecido por las directrices, podrían emplearse algunos dispositivos indirectos (mayores pagos iniciales en efectivo y mayores impuestos por tonelada de metal producido) o, en caso necesario, métodos directos (limitación del número de permisos) para desalentar la producción que rebase en mucho los niveles convenientes.

62. Este procedimiento funcionaría sólo si fuera posible establecer una correlación suficiente entre el número de permisos de explotación concedidos y la futura producción proveniente de esos lugares, tomando en cuenta el probable período de gestación. Si se asignan "sectores" muy grandes de los fondos marinos a las partes interesadas, sin alguna forma de control sobre el número de permisos de explotación, habría un escaso margen para elaborar una política de explotación apropiada para lograr la estabilidad del mercado. Dicho objetivo de estabilización podría lograrse si se concediesen los permisos para una zona del fondo marino suficiente para sostener la plena operación de, por ejemplo, una empresa minera durante el supuesto período de vida útil del equipo (que podría ser 20 años).

---

<sup>31/</sup> Suponiendo una operación normalizada hipotética de 1 millón de toneladas de nódulos al año. Véase el documento A/AC.138/36, págs. 55 y siguientes.

<sup>32/</sup> Si todas estas operaciones deciden extraer manganeso y cobalto, pese a las bajas de precio que se prevén.

63. El mecanismo deberá poseer considerables conocimientos de la distribución de los nódulos y de los procedimientos de minería oceánica para la administración de esta política. Se sabe que en algunas localidades la densidad de los nódulos puede llegar hasta 120.000 ton/km<sup>2</sup>, si bien algunos lugares con una densidad de sólo 6.000 ton/km<sup>2</sup> pueden ser económicamente interesantes. Por supuesto, la densidad puede variar considerablemente dentro de distancias relativamente cortas. Además, el hecho de que en un lugar haya una elevada población de nódulos no significa necesariamente que esos nódulos tengan un alto contenido de metal, que es sin duda el factor más importante para que la explotación del lugar sea económicamente interesante. En beneficio de la simplicidad, se supone que los lugares inicialmente elegidos para explotarse tendrán una densidad aproximada de 20.000 ton/km<sup>2</sup>. Esto quiere decir que un lugar tendría que cubrir una superficie de sólo 3.000 km<sup>2</sup> para sostener durante 20 años el funcionamiento de una torre de extracción que recogiese 5.000 toneladas de nódulos al día (300 días/año, suponiendo una extracción de nódulos del 50%).

64. Pero si el objetivo de la política de explotación es garantizar el control de la producción, la simple asignación de un número  $x$  de sectores de explotación, de por ejemplo, 3.000 km<sup>2</sup>, no será suficiente. Teóricamente, las empresas mineras podrían producir 2, 3 o aun 4 veces el volumen de nódulos contemplado originalmente, poniendo en funcionamiento 2, 3 ó 4 torres en ese lugar. A esto podría responderse con el argumento de que con una utilización más extensiva que la prevista originalmente (por ejemplo, con 4 torres), el lugar quedaría agotado en unos cinco años, al cabo de los cuales se excluiría a la empresa de nuevas actividades en la zona internacional. Esta amenaza no disuadiría necesariamente a la empresa de seguir adelante con el empleo de más de una torre de extracción en el lugar. Con las disposiciones actuales para la depreciación acelerada en la mayor parte de los países industriales, tal empresa probablemente habría amortizado toda la inversión inicial en equipo minero, que entonces podría venderse o alquilarse a otras empresas. Por lo tanto, es importante que la política de explotación tenga en cuenta no sólo el número de los nuevos lugares que se pongan a disposición de las empresas, sino también el tamaño y número de las torres de extracción que se hayan de emplear en el lugar (en otras palabras, el nivel conveniente de producción). Por lo tanto, se podría otorgar otro tipo de concesión sobre la base del volumen total de producción anual de minerales determinados (metales) y no sobre la base de derechos exclusivos en una zona determinada.

Otro método para controlar el nivel de producción, distinto del de las concesiones (sea por zona o por producción fija), sería que el propio mecanismo se encargase de la explotación o ejerciese control por medio de empresas conjuntas o de contratos.

b) El gravamen del mecanismo internacional

65. La "participación" del mecanismo internacional podría convertirse en un eficaz instrumento de control para complementar la política de explotación. Si los ingresos del mecanismo han de obtenerse por medio de un gravamen por tonelada de mineral (o metal) producido, este gravamen funcionaría como un estabilizador "inherente". Este dispositivo podría desalentar automáticamente toda nueva producción, a partir



de nódulos, de los minerales que se enfrentan con evidentes situaciones de oferta excesiva, reduciendo así la necesidad de que el mecanismo intervenga con medidas discrecionales de control. El gravamen por tonelada complementaría la política de explotación en el logro del deseado equilibrio a largo plazo del mercado y también contribuiría a promover los reajustes deseados en los casos de fluctuaciones inesperadas del mercado a corto plazo.

66. La manera en que el gravamen por tonelada de metal producido funcionaría como estabilizador inherente es bastante simple. Las empresas de minería oceánica tendrían la siguiente función operacional para cada metal extraído:

Ingreso neto = precio de mercado - (costo de producción/tonelada + gravamen/tonelada).

En beneficio de la simplicidad, se supone que el costo de producción de cada tonelada de metal producido es constante. Como el gravamen por tonelada sería una cantidad fija (o un porcentaje del precio de mercado) que se agregaría a los costos de la empresa, en el caso de una baja en el precio de un metal el ingreso neto proveniente de la extracción de ese metal podría a la larga desaparecer o aun convertirse en pérdida 33/. Por lo tanto, se desalentaría una mayor producción de ese metal. Una vez que se hayan hecho inversiones en instalaciones físicas para la extracción de un metal determinado, la producción no se detendrá inmediatamente por una baja en el precio de mercado por debajo del nivel requerido para cubrir los costos de producción, gastos generales, depreciación y rendimiento de las inversiones. La producción del metal "no económico" continuará mientras el precio (descontado el gravamen) sea suficiente para cubrir los gastos de operación particulares de la elaboración de ese metal. El gravamen por tonelada, al incrementar el costo real de extracción de cada tonelada de metal (costo de producción + gravamen) o, a la inversa al reducir el precio neto (precio de mercado - gravamen), haría a las empresas de minería oceánica más sensibles a las fluctuaciones de precios que las empresas mineras tradicionales 34/.

67. Como ejemplo, puede tomarse el caso hipotético del manganeso, que durante los últimos 15 años ha sido esencialmente un mercado de compradores, con precios que han descendido desde un alto nivel de 145 dólares por tonelada de contenido de manganeso en el mineral (c.i.f. puertos de la costa oriental de los Estados Unidos) en 1957 hasta 54 dólares por tonelada en 1970 35/. Dada la naturaleza

---

33/ A este respecto, puede observarse que un gravamen que represente un porcentaje invariable del precio de mercado afectaría el precio de venta de la producción de manera diferente que un gravamen fijado en términos monetarios.

34/ Muchas operaciones mineras de tierra están, por supuesto, sujetas al pago de regalías además de los impuestos sobre las utilidades. El gravamen por tonelada que se contempla para las operaciones en los fondos marinos sería el equivalente de la suma total de las regalías, los impuestos sobre las sociedades y otras cargas fiscales que pagan las empresas mineras tradicionales.

35/ UNCTAD, TD/B/C.1/105, Problemas del mercado mundial del mineral de manganeso, cuadro A.14.



rígida de la demanda de manganeso, y la tendencia actual a la oferta excesiva, éste es uno de los minerales que se vería más afectado si llegase a producirse a partir de los nódulos. Además, varios países en desarrollo son exportadores de mineral de manganeso; de ahí el especial interés en estabilizar este mercado.

68. Al actual precio de mercado del mineral de manganeso (60 dólares por tonelada, 48% Mn), no es probable que la producción del equivalente de mineral de manganeso a partir de los nódulos pueda competir con la producción de tierra, si se le sometiera a un gravamen por tonelada equivalente.

69. Se sabe que la obtención de manganeso de los nódulos es la etapa más compleja y costosa de la elaboración metalúrgica. Por ejemplo, un cálculo 36/ arroja la cifra de 15 dólares por tonelada para el costo de obtención del equivalente de un mineral de manganeso de baja ley. El mismo autor estima que el manganeso y el hierro de los nódulos podría tener un valor de 35 dólares por tonelada. Pese a las muchas incógnitas de la ecuación, es consenso general de los expertos que la obtención de un equivalente de mineral de manganeso a partir de los nódulos sería en el mejor de los casos de interés marginal (véase la sección II). En efecto, varios planes de elaboración metalúrgica que se consideran actualmente no contemplan la obtención de manganeso.

70. Una de las ventajas del gravamen por tonelada como dispositivo de control indirecto es que podría adaptarse a fin de desalentar la oferta adicional cuando los precios bajasen al mínimo aceptable. Sobre la base del costo estimado de la obtención de manganeso de los nódulos, el gravamen por tonelada podría fijarse de manera que hiciese que la obtención de manganeso fuese claramente antieconómica si los precios cayesen por debajo del nivel mínimo deseable.

71. No obstante el considerable desincentivo involucrado en las consideraciones anteriores, todavía podría ser posible la obtención de manganeso en cierta medida. En primer lugar, los gobiernos de algunos de los principales países industriales que dependen de importaciones de manganeso tal vez deseen subvencionar la obtención de manganeso, a fin de diversificar las fuentes de suministro. En segundo lugar, es muy probable que la mayor parte del manganeso que a la larga proporcione la industria de los nódulos venga en forma de un producto básico diferente, superior para ciertos propósitos al proporcionado por las minas de tierra. Esto quiere decir que las instalaciones que podrían extraer manganeso probablemente producirían ferromanganeso o manganeso metálico puro. El mercado del ferromanganeso es, por supuesto, mucho más pequeño que el del mineral. Actualmente, sólo unas pocas industrias requieren manganeso metálico puro y se calcula que la producción de una sola operación de explotación de nódulos sería suficiente para abastecer la demanda mundial actual. Sin embargo, sería concebible que una constante

---

36/ John Mero, "Potential Economic Value of Ocean Floor Manganese Nodule Deposits", documento presentado a la Conferencia/Curso práctico sobre depósitos oceánicos de manganeso, en el Observatorio Geológico Lamont-Doherty, Nueva York, 21 de enero de 1972.

disponibilidad en gran escala de este producto básico indujese a la larga a un número creciente de industrias a emplear el metal puro, incluso si fuese mucho más costoso que el mineral de alta ley 37/.

72. La posibilidad de cambios en la estructura de los mercados de manganeso, con un incremento de la participación del ferromanganeso y del metal puro, aunque hipotética, indica las complejidades de la aplicación efectiva de los objetivos de estabilización que pudiera desear la comunidad mundial.

73. Otra característica interesante del gravamen por tonelada es su eficiencia como instrumento recolector de ingresos. Si la "participación" del mecanismo estuviera basada en los ingresos netos de las empresas mineras marinas, es posible que los rendimientos fueran a la larga decepcionantes. A falta de controles, los precios de algunos minerales podrían bajar por efecto de la expansión de la industria de los nódulos, reduciendo así el ingreso neto de las empresas mineras marinas, hasta el punto en que la explotación de nódulos sería sólo marginalmente rentable. En esta etapa, la industria de los nódulos sería el principal abastecedor de cobalto, níquel y tal vez manganeso, y un importante productor de cobre, pero los ingresos netos serían bastante reducidos, con lo que también sería pequeña la "participación" del mecanismo si se basase en los ingresos netos. En cambio, si se impusiese un gravamen por tonelada de mineral obtenido de los nódulos, los ingresos del mecanismo aumentarían al mismo ritmo que la expansión de la producción de minerales de los fondos marinos. Por lo tanto, la comunidad internacional dispondría de ingresos considerablemente mayores.

74. El gravamen por tonelada tendría también la ventaja de la simplicidad. Pueden preverse grandes dificultades en cualquier intento de adaptar las actuales estructuras fiscales aplicables a la industria petrolera y a la minería para imponerlas ulteriormente en la zona fuera de la jurisdicción nacional. Se necesitaría un mecanismo más bien grande y engorroso para administrar tal sistema "fiscal" y podrían esperarse repetidas disputas en torno a la determinación de las "utilidades" imponibles o los ingresos netos. Estas dificultades podrían superarse estableciendo un gravamen único por tonelada de mineral (o metal) producido en la zona.

75. Pese a que cabría esperar que el funcionamiento efectivo del sistema de gravámenes fuese simple y directo, la determinación inicial de la estructura de estos gravámenes no sería de ningún modo simple. Tendrían que tenerse en cuenta varios factores determinantes de la economía de cada operación y, en especial, las consecuencias de la producción simultánea de varios productos compuestos.

---

37/ Se ha indicado en círculos industriales que el manganeso metálico puro electrolítico podría venderse a alrededor de 0,30 dólares de los EE.UU. por libra, esto es, diez veces más que el precio del mineral de manganeso. El precio del ferromanganeso oscila entre 3,5 y 4 veces el del mineral (180 a 220 dólares por tonelada).

c) Medidas compensatorias

76. El tercer componente de una estrategia amplia para reducir al mínimo las posibles repercusiones adversas de la explotación de los fondos marinos sería algún tipo de medidas compensatorias. Como se ha señalado anteriormente, la naturaleza de la industria de los nódulos y las políticas "fiscales" y de explotación del mecanismo indican que en las primeras etapas de la explotación minera de los fondos marinos sólo los exportadores de cobalto, y tal vez los de manganeso, podrían verse afectados, planteándose así el asunto de la asistencia compensatoria.

77. El diseño y administración de los planes compensatorios entrañarían algunos asuntos complejos (véase la sección IV de este informe). Se necesitarán estudios detallados de los posibles planes y sus consecuencias para los países en desarrollo que son exportadores tradicionales de los minerales afectados.

d) Otros arreglos

78. En el futuro, tal vez sea también conveniente adoptar medidas adicionales para la estabilización del mercado de algunos minerales. Como se observó en el informe anterior (A/AC.138/36), los acuerdos sobre productos básicos están generalmente destinados a mantener el status quo entre los abastecedores, y por ello tendrían pertinencia limitada en las etapas iniciales de la explotación minera de los fondos marinos.

79. Estos arreglos son generalmente difíciles de administrar. La sección IV se ocupa del posible alcance de los arreglos sobre productos básicos para los mercados de minerales que pudieran ser afectados por la explotación minera de los fondos marinos.

#### IV. ALGUNAS CUESTIONES DE POLITICA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS 38/

80. Las siguientes notas tienen por objeto aclarar el carácter de los efectos económicos, particularmente en los mercados mundiales, de la extracción de minerales de los fondos marino, y la índole de los posibles arreglos para evitar, remediar o reducir al mínimo toda repercusión perjudicial de tal extracción en los países en desarrollo que son productores tradicionales de los mismos minerales.

81. Los recursos minerales de los fondos marinos que, a la luz de los conocimientos actuales, tienen mayor probabilidad de explotarse comercialmente en un futuro previsible son los nódulos de "manganeso" - que contienen cobre, cobalto, manganeso

---

38/ Esta sección contiene la parte principal de un informe (TD/113/Supp.4) preparado por la secretaría de la UNCTAD para el tercer período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en el que se examina brevemente, a la luz de la información disponible a la fecha sobre la materia, los principales problemas que plantea para la política internacional de productos básicos la posible extracción de minerales de la zona de los fondos marinos fuera de los límites de la jurisdicción nacional.

En el sexto período de sesiones de la Comisión de Productos Básicos de la UNCTAD, la secretaría de la UNCTAD informó sobre su cooperación con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas en la preparación de los estudios pertinentes que habían de hacerse en virtud de lo dispuesto en la resolución 2750 (XXV) de la Asamblea General. Al examinar esta cuestión en el sexto período de sesiones de la Comisión, los representantes de países en desarrollo manifestaron que atribuían gran importancia al tema de la resolución 2750 A (XXV) de la Asamblea General; que debía considerarse que la cooperación prevista en la resolución se refería a la UNCTAD, tanto a nivel intergubernamental como a nivel de la secretaría; que debían tomarse disposiciones para que la Comisión de Productos Básicos estuviera informada permanentemente sobre cualesquier acontecimientos en esa esfera y examinara dichos acontecimientos; y que debía preverse la posibilidad de examinar esa cuestión en el tercer período de sesiones de la Conferencia (TD/B/370, párrs. 234 a 236). En el 11.<sup>o</sup> período de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo se expresaron opiniones análogas. (Véase el informe de la Junta sobre el 11.<sup>o</sup> período de sesiones, Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo sexto período de sesiones, Suplemento No. 15, tercera parte, párrs. 152 y 153.)

y níquel - y, menos inmediatamente, el petróleo y el gas natural 39/ 40/. Ya se ha llevado a cabo la explotación experimental de nódulos de manganeso y, según las informaciones que se poseen, un consorcio se propone iniciar la explotación de determinados yacimientos de nódulos en el Océano Pacífico dentro de pocos años 41/. Se sabe que existe un gran volumen de nódulos de manganeso y se calcula que estos nódulos se forman a una tasa anual que rebasa el actual consumo por año de los metales que contienen 42/. Las proporciones de los diversos metales contenidos en los nódulos de manganeso no coinciden con la demanda mundial actual de esos metales, como puede verse por la composición de la producción mundial en 1968 indicada a continuación:

	Metal en los nódulos de los fondos marinos	Metal en la producción mundial
		(%)
Manganeso	90,0	56
Cobre	4,5	40
Níquel	4,6	4
Cobalto	0,9	(0,15)
	<hr/> 100,0	<hr/> 100,0

A los países en desarrollo les corresponde actualmente la mayor parte del comercio internacional de mineral de manganeso, cobalto y cobre, pero sólo una pequeña proporción del comercio de níquel.

82. Al considerar las repercusiones de la extracción de minerales de los fondos marinos, debe tenerse presente la posibilidad de que ulteriormente se descubran nuevos yacimientos importantes en los fondos marinos, así como los perfeccionamientos que puedan introducirse en las técnicas de extracción en los fondos marinos y, por tanto, la posibilidad de que exista una producción en mayor escala y que abarque una mayor gama de minerales de lo que cabe prever actualmente.

39/ Para un resumen útil de la información disponible en la actualidad sobre las posibilidades de explotación de los recursos minerales de los fondos marinos, véase el documento A/AC.138/36.

40/ Ibid., párr. 10.

41/ Ibid., párr. 139.

42/ Ibid., párr. 152.

#### A. Carácter general de las consecuencias

83. Como los fondos marinos constituirían una fuente completamente nueva de suministro de cualquier mineral de los que se producen en la actualidad, y como cabe presumir razonablemente que tal producción no se llevaría a cabo si no pudiera competir con la de las fuentes terrestres, la extracción de los fondos marinos tendería a hacer bajar los precios de mercado de los minerales correspondientes. La importancia de la repercusión en la oferta y los precios dependería de las calidades técnicas del mineral de los fondos marinos, de las circunstancias particulares de la extracción en dichos fondos - el volumen de los suministros adicionales en comparación con la producción en tierra, los costos de producción y comercialización y las tasas de imposición - así como de las condiciones de la oferta y la demanda, incluida la reacción de los precios frente a un aumento dado de la oferta. Si la situación preexistente respecto del mineral de que se trate se caracterizará por una tendencia al alza del precio de dicho mineral, la producción de los fondos marinos tendría por efecto aminorar o detener, e incluso invertir, la tendencia al alza; si, por otra parte, el precio del mercado fuera constante o estuviera bajando, se produciría una disminución o una acentuación de la disminución preexistente. Por consiguiente, aunque no es posible proceder a una cuantificación fidedigna - tanto porque se carece de informaciones seguras sobre las circunstancias de la producción de los fondos marinos como porque la estimación de los efectos en el mercado reviste dificultades intrínsecas - cabe prever que la explotación de los minerales de los fondos marinos dé lugar a que el precio de mercado del mineral o minerales de que se trate sea menor del que hubiera sido en caso contrario.

#### B. Consecuencias para los países consumidores

84. De lo expuesto se desprende que el aumento de las disponibilidades y la presunta reducción de los costos marginales que entrañaría la extracción de minerales de los fondos marinos beneficiaría directamente a los consumidores de tales minerales, que son, en general, las industrias que utilizan minerales en los países desarrollados. Como es característico de la producción primaria, el aumento de productividad resultante, en este caso, de los progresos tecnológicos que permitan extraer minerales de los fondos marinos a un costo menor, se traspasaría en gran parte a los consumidores, en forma de precios más bajos, siempre que no se adoptaran medidas para contrarrestar este fenómeno 43/.

---

43/ Véanse las observaciones de Nicholas Kaldor de que "siendo los beneficios del adelanto técnico en la manufactura retenidos en gran parte por los productores - en forma de salarios reales y utilidades mayores -, los de la producción primaria se traspasan en gran parte a los consumidores, a través de unos precios más bajos, sin que los productores obtengan gran ventaja en lo que toca a la elevación de su ingreso real. Las excepciones pueden encontrarse en aquellos casos - como el del petróleo, por ejemplo - en que la distribución del producto está controlada por grandes firmas internacionales". "La estabilización de la relación de precios del intercambio en los países poco desarrollados", Boletín Económico de América Latina, vol. VIII, No. 1, marzo de 1963.

### C. Consecuencias para los productores en tierra

85. Como se dijo anteriormente (párrafo 83), la producción en los fondos marinos ejercería una presión negativa en los precios de mercado de los minerales de que se trate. Esto ocurriría particularmente en el caso de aquellos minerales, tales como el cobalto y el manganeso, que se explotaran conjuntamente con los minerales más valiosos, el níquel y el cobre, y que fueran recuperables a partir de los nódulos de manganeso en proporciones relativamente mayores que las de la demanda mundial de metales que entran en su composición 44/. La gran posibilidad de que la explotación de los fondos marinos tenga una fuerte repercusión en los precios de mercado de ciertos minerales se desprende de cálculos hechos a título de ejemplo que muestran que cinco operaciones de extracción en los fondos marinos, cada una de las cuales rinda 5.000 toneladas de nódulos por día, producirían anualmente cantidades de manganeso equivalentes a más de la mitad de la actual tasa anual de exportación de manganeso de los países en desarrollo tomados conjuntamente, y cantidades de cobalto equivalentes a la producción total anual de cobalto de los países en desarrollo 45/.

86. En segundo lugar, dado que la demanda global de muchos minerales no es muy sensible a la baja de los precios, la producción de los fondos marinos tendería a desplazar la producción marginal en tierra (o aquella producción en tierra que se comercializara previamente en el país donde se consumieran los nuevos suministros procedentes de los fondos marinos). A este efecto cuantitativo desfavorable se sumarían los efectos restrictivos de una rentabilidad menor en la producción en tierra y de la disminución correlativa de las inversiones.

87. La consecuencia general de los efectos en el precio y en el volumen de producción mencionados en los párrafos 85 y 86 estribaría en que las ganancias totales de los productores en tierra disminuirían o aumentarían menos rápidamente que en caso contrario y, de todas formas, serían menores que si no se extrajeran minerales de los fondos marinos. La gravedad de la repercusión variará de un país a otro y de una empresa productora a otra, en función de su eficacia relativa, de las características del comercio y de las estructuras del mercado.

88. Sin embargo, como se prevé que la demanda mundial de los referidos minerales seguirá aumentando, posiblemente a razón del 5% o más al año, la llegada de suministros de los fondos marinos no impediría necesariamente que los productores

---

44/ El costo marginal de recuperación de los minerales a partir de los nódulos, en relación con los precios prevalecientes en el mercado, sería otro factor importante.

45/ Documento A/AC.138/36, cuadros 1 y 17 y párrs. 155 a 160.

tradicionales en tierra aumentarían sus propias exportaciones y no acarrearía necesariamente una disminución de los precios de mercado por debajo de los niveles preexistentes <sup>46/</sup>. Por otra parte, no cabe presumir que la extracción de minerales de los fondos marinos tenga una repercusión tan moderada en los mercados mundiales de minerales, a menos que se comercialice a un ritmo estrictamente controlado por el organismo internacional que se proyecta establecer.

89. Aunque el efecto más importante de la extracción de minerales de los fondos marinos en los mercados mundiales se ejerza en la tendencia y en el nivel de los precios de los referidos productos, tal producción podría también acentuar las fluctuaciones de los precios a corto plazo. Ello podría ocurrir si la corriente de suministros de los fondos marinos fuera irregular; podría también suceder si la mayoría de la producción de los fondos marinos estuviera en manos de empresas comerciales verticalmente integradas, con el resultado concomitante de que el "mercado libre" mundial de cada mineral representaría una proporción cada vez menor del total de las transacciones reales, de suerte que se transformaría más en un mercado residual con mayor sensibilidad de los precios ante las variaciones de la oferta o la demanda.

90. La repercusión económica de la producción competidora de minerales de los fondos marinos, que podría ser adversa en diverso grado para los ingresos de exportación de todos los productores tradicionales (en relación con los ingresos que obtendrían en caso contrario), podría ser particularmente perjudicial para los países productores en desarrollo típicos. Ello podría ser así por diversas razones:

a) Los países productores en desarrollo dependen mucho más de los referidos minerales (tales como el cobre y el mineral de manganeso) para sus ingresos de exportación y fiscales que los países productores desarrollados.

b) La participación de los países en desarrollo en el comercio mundial de ciertos minerales (particularmente el mineral de manganeso) ha ido disminuyendo a causa de los progresos más rápidos de la producción de los países desarrollados destinada a la exportación.

c) Es probable que los países en desarrollo sólo tengan una participación directa reducida en la extracción de minerales de los fondos marinos pues no hay duda de que esa producción, dada sus complicaciones técnicas y los grandes capitales que exige, será emprendida principalmente por empresas de los países prósperos y técnicamente adelantados.

---

<sup>46/</sup> Cuanto más rápidamente crezca la demanda mundial de un mineral determinado, mayor será la posibilidad de que se produzcan incrementos simultáneos de los suministros procedentes de los fondos marinos y de las fuentes de tierra, sin que ello dé lugar a una disminución de los precios de mercado. Así pues, si se utilizara cada vez más el cobalto en vez del níquel, la demanda mundial de cobalto aumentaría mucho más rápidamente que en caso contrario, y la repercusión de un volumen determinado de producción marina de cobalto en los precios de mercado sería moderada. (En todo caso, sin embargo, un volumen dado de níquel recuperado a partir de los nódulos tendría una repercusión más importante en los precios de mercado del níquel que en caso contrario.)



d) Los países en desarrollo, que se dedican cada vez más al tratamiento de los minerales procedentes de minas en tierra, antes de proceder a su exportación, perderán posibles ingresos de exportación en la medida en que los minerales extraídos de los fondos marinos sean transformados en tierra en el país de la empresa productora. Además, el estímulo que la producción marina ejercerá sin duda alguna en la actual tendencia tecnológica hacia el tratamiento directo de concentrados de mineral, y la supresión de los procesos intermedios que hoy llevan a cabo parcialmente los países productores en desarrollo, agravará la pérdida de posibles ingresos de exportación en estos países.

e) La necesidad de cuantiosas inversiones de capital para la exploración y la explotación de los recursos de los fondos marinos podría repercutir negativamente en la corriente de inversiones privadas destinada a actividades análogas en los países en desarrollo.

f) Dado que los países en desarrollo cuentan con menos posibilidades de orientar de otro modo las inversiones y menos oportunidades de empleo que los países desarrollados, toda redistribución de recursos que pueda provocar la competencia de la producción marina se traducirá en costos sociales y económicos particularmente importantes.

#### D. Algunas consecuencias en la política aplicable

91. El problema esencial que plantearía la extracción de minerales de los fondos marinos sería, por lo tanto, el efecto adverso de tal extracción - de no tomarse disposiciones especiales - en el bienestar económico de los países productores en desarrollo afectados, y la consiguiente diferencia entre los costos y beneficios sociales de la producción de los fondos marinos y sus costos y beneficios si se juzga simplemente según criterios comerciales normales. La consecuencia de esta conclusión para la política internacional es que sería necesario tomar disposiciones firmes antes de emprender la extracción de minerales de los fondos marinos a fin de que esta actividad no repercuta de manera adversa en los intereses de los países productores en desarrollo o, mejor aún, que reporte beneficios positivos a ellos y a otros países en desarrollo.

92. Existen al parecer dos métodos posibles para enfocar el problema de la protección de los intereses comerciales de los países en desarrollo que son exportadores tradicionales de los minerales en referencia: a) un método encaminado a evitar o a reducir al mínimo cualquier efecto potencial adverso; y b) un método en virtud del cual los países afectados recibirían una compensación por el efecto adverso calculado sobre sus ingresos de exportación.

##### a) Método preventivo

93. El método preventivo consistiría esencialmente en tomar disposiciones para cuidar de que la producción de los fondos marinos no dé por resultado precios que no sean remuneradores para los países en desarrollo razonablemente eficaces que sean productores tradicionales de los minerales de que se trate (obtenidos de fuentes terrestres). A este efecto, sería necesario que el ritmo de producción

marina, el ritmo de ventas de tal producción o los precios de venta o condiciones conexas, fueran controlados estrictamente por el organismo internacional propuesto con el fin de que los precios de mercado de los minerales no caigan por debajo de los niveles que la comunidad internacional considere remuneradores y equitativos. Por consiguiente, una política de precios apropiada quizá implicase la fijación de precios de venta "mínimos" respecto de la producción marina, que en caso necesario sería suplementada por la imposición de gravámenes en los países importadores al objeto de prevenir que cualquier productor privado autorizado a actuar bajo el régimen internacional proceda a una reducción de precios 47/. Si se impusieran tales gravámenes de importación, es de suponer que las cantidades recaudadas se remitirían al organismo encargado de los fondos marinos.

94. Si se protegieran los intereses de los países productores tradicionales fijando precios mínimos de venta para los minerales extraídos de los fondos marinos a niveles que resulten remuneradores a los productores de minerales obtenidos de fuentes terrestres, el organismo de los fondos marinos dispondría de una mayor proporción de los ingresos netos para asistir al desarrollo económico de los países en desarrollo no productores, incluidos los países sin litoral, según prevé la Asamblea General en su resolución 2750 A (XXV).

b) Método compensatorio

95. En virtud del método compensatorio, que es el otro enfoque a que se hace referencia en el párrafo 92, se ofrecería una compensación a los países en desarrollo exportadores cuyos intereses se vieran afectados de manera adversa por la producción de minerales extraídos de los fondos marinos. Esta compensación se pagaría, en la medida de lo posible, con cargo a los ingresos netos que obtuviese el organismo internacional de la explotación de los fondos marinos, ya fuera en forma de regalías, derechos e impuestos (si el organismo internacional no se encarga de las actividades de producción), o en forma de beneficios (si dicho organismo se encarga directamente de la explotación). Utilizando este método, una proporción adecuada de las recaudaciones netas obtenidas por el organismo de los fondos marinos se utilizaría para indemnizar a los países en desarrollo productores.

---

47/ Las disposiciones debieran ser tan sencillas como fuera posible. Sin embargo, si fuera necesario concertar amplios acuerdos internacionales sobre estos minerales a fin de proteger eficazmente los intereses de los países en desarrollo productores, el establecimiento por parte del organismo internacional de existencias reguladoras internacionales de cada uno de esos minerales, como en el caso del Convenio Internacional del Estaño, podría respaldar útilmente otras medidas destinadas a mantener los precios dentro del margen acordado.

96. Sin embargo, la elaboración de un sistema de compensación viable plantearía cuestiones muy complejas. Una de ellas es la que se refiere a los criterios que habrían de emplearse para medir el "efecto adverso" en los países productores interesados: podría determinarse, por ejemplo, en qué medida los ingresos de exportación del mineral o minerales de que se trate son inferiores a los niveles obtenidos recientemente o a los niveles que pudieran preverse razonablemente en ausencia de producción de los fondos marinos; podrían tenerse o no en cuenta las pérdidas de beneficios obtenidos del tratamiento de mayores cantidades de mineral, debidas a la producción de los fondos marinos. También hay que decidir si el sistema debe referirse a cada producto en particular o si por el contrario debe abarcar colectivamente todos los minerales de que se trate; si el sistema debe regir por un tiempo determinado y con qué frecuencia habrá de revisarse. Respecto al prorrateo de los fondos de compensación, es de suponer que ésta habría de evaluarse con arreglo a la pérdida potencial de ingresos de exportación como resultado de la producción de los fondos marinos, teniendo también en cuenta la disponibilidad total de divisas, el grado de desarrollo del país afectado y otras posibilidades de empleo de la mano de obra y de otros recursos.

97. Una cuestión crítica relativa al método compensatorio es la de si los ingresos netos obtenidos por el organismo de los fondos marinos serían suficientes para llevar a la práctica un programa de pagos de compensación según se esboza anteriormente. Aun cuando es imposible precisar este punto, parecería que en los casos en que los países en desarrollo representen la mayor parte o una parte apreciable del comercio internacional de los minerales de que se trate, los ingresos netos que de la producción de fondos marinos se derivarían para el organismo internacional propuesto no alcanzarían, casi con certeza, la cantidad necesaria para indemnizar a los países productores en desarrollo por las pérdidas de ingresos de exportación debidas a la producción de los fondos marinos, si se incluyese entre las pérdidas el aumento que de lo contrario habrían experimentado las exportaciones. Esto se aplicaría al cobalto, al mineral de manganeso <sup>48/</sup> y al cobre, pero probablemente no se aplicaría al níquel, porque las exportaciones de este metal procedentes de los países en desarrollo representan únicamente una pequeña proporción del total mundial. Existen dos razones de que las pérdidas de ingresos de exportación superen probablemente los beneficios netos del organismo de los fondos marinos: en primer lugar, la demanda de la mayoría de minerales es tal que, en igualdad de condiciones, un aumento de la oferta disponible da lugar a menudo a una baja de precios más que proporcional, con la consiguiente disminución de los ingresos totales obtenidos; en segundo lugar, no cabría esperar realísticamente que los beneficios netos obtenidos por el organismo de los fondos marinos excedieran del 10% al 30% del producto

---

<sup>48/</sup> Por ejemplo, respecto del mineral de manganeso, se ha calculado que una operación de minería en los fondos marinos acarrearía una pérdida de posibles ingresos de exportación a los productores en tierra de mineral de manganeso que ascendería a unos 15 millones de dólares al año aproximadamente (documento A/AC.138/36, anexo II, párr. 36).

bruto de la venta de minerales de los fondos marinos, con la posible excepción del petróleo. En estas circunstancias, para aplicar el método compensatorio, sería necesario al parecer tomar disposiciones a fin de asegurar que la insuficiencia de la compensación financiera necesaria la supliesen los países consumidores o las instituciones financieras internacionales, o unos y otras.

98. Por otra parte, si los países en desarrollo exportadores hubieran de ser compensados sencillamente con miras a mantener sus ingresos que suelen obtener de la exportación de los minerales de que se trate, los beneficios netos del organismo de los fondos marinos podrían ser suficientes a este fin, aun cuando incluso en este caso cabría dudarlo respecto al cobalto, al mineral de manganeso y al cobre. En cualquier caso, este último método estático parecería incompatible con la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo que prevé una contribución positiva para hacer frente a las necesidades del comercio y desarrollo de los países en desarrollo mediante la formulación de una serie coherente de medidas internacionales para el desarrollo.

#### E. Otras consideraciones

99. Sea cual fuere el sistema que se adopte para proteger los intereses de los países productores en desarrollo, es de suponer que una condición fundamental para la producción de los fondos marinos debería ser la de que no se dé a tal producción un estímulo declarado o encubierto, puesto que ello redundaría en perjuicio de las industrias de minería en tierra, incluidas las de los países en desarrollo. Como corolario de esta condición, si de las actividades de producción se encargasen empresas nacionales, en vez del organismo internacional directamente, las disposiciones relativas a la tributación y a las condiciones por las que se rija la entrada del producto en el país en que esté radicada la empresa productora deberán ser tales que los suministros originarios de los fondos marinos no reciban trato preferencial en comparación con la producción en tierra. También habría que considerar la posibilidad de evitar la "preferencia" automática por la producción de los fondos marinos que se derivaría si de esta producción se encargasen empresas integradas con base en los países desarrollados.

100. Como es posible que el mercado sufra trastornos, parecería importante cuidar desde un principio de que determinados proyectos de extracción de mineral de los fondos marinos den por resultado una ganancia neta global para la comunidad internacional y, en especial, para los países en desarrollo. En su resolución 2750 C (XXV), la Asamblea General previó la transferencia a los países en desarrollo no productores, incluidos los países sin litoral, de una parte equitativa de los beneficios que se obtengan de la actuación del organismo de los fondos marinos, así como la protección de los intereses de los países en desarrollo productores. Este objetivo particular exigiría al parecer la imposición de regalías, impuestos y derechos hasta el máximo que pueda soportar el mercado, con respecto a la producción de los fondos marinos si el propio organismo internacional no se encarga de las actividades de producción. Los tributos combinados deberán tener, como mínimo, un efecto equivalente al promedio de los gravámenes nacionales aplicados a la producción en tierra de los minerales de que se trata.

## NOTA FINAL

101. Al presentar este informe, el Secretario General reconoce plenamente el hecho de que deberán realizarse trabajos adicionales muy considerables a fin de investigar los distintos criterios que podrían aplicarse a los problemas en estudio. De conformidad con la resolución 2750 A (XXV), la Secretaría se esforzará, en colaboración con la UNCTAD, por suministrar a la Comisión, cuando proceda, información e informes adicionales sobre la compleja y cambiante cuestión de los posibles efectos de la explotación minera de los fondos marinos sobre el mercado mundial de minerales.

### III. DOCUMENTOS ANEXOS A LA PARTE III

1. Lista de temas y cuestiones relacionadas con el derecho del mar que se presentarán a la Conferencia sobre el derecho del mar patrocinada por Argelia, Argentina, Brasil, Camerún, Colombia, Congo, Costa de Marfil, Chile, China, Chipre, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, Etiopía, Fiji, Filipinas, Gabón, Ghana, Guatemala, Guyana, India, Indonesia, Irak, Irán, Islandia, Jamaica, Kenia, Kuwait, Liberia, Madagascar, Malasia, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Panamá, Perú, República Árabe Libia, República Unida de Tanzania, Rumania, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Trinidad y Tabago, Túnez, Uruguay, Venezuela, Yemen, Yugoslavia y Zaire\*

#### Nota explicativa

Esta lista de temas y cuestiones relacionadas con el Derecho del Mar se ha preparado de conformidad con la resolución 2750 C (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La lista no es necesariamente completa y no establece el orden de prioridad para el examen de los diversos temas y cuestiones

Puesto que la lista ha sido preparada con arreglo a un enfoque amplio y trata de abarcar una amplia gama de posibilidades, el patrocinio o la aceptación de esta lista no prejuzga la posición de Estado alguno respecto de los temas que ella contiene, ni respecto del orden, forma o clasificación en que están presentados.

En consecuencia, la lista deberá servir como marco para las discusiones y redacción de los artículos necesarios hasta que se apruebe el programa de la Conferencia.

#### LISTA DE TEMAS Y CUESTIONES RELACIONADAS CON EL DERECHO DEL MAR

1. Régimen Internacional para los Fondos Marinos y Oceánicos fuera de la jurisdicción nacional
  - 1.1. Naturaleza y características
  - 1.2. Mecanismo Internacional: Estructura, Funciones, Facultades
  - 1.3. Repercusiones económicas
  - 1.4. Reparto equitativo de los beneficios teniendo en cuenta los intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo costeros o sin litoral
  - 1.5. Definición y límites de la zona a/

---

\* Publicada inicialmente con la signatura A/AC.138/66 y Corr.2.

a/ Se considerarán a la luz del acuerdo de procedimiento indicado en el párrafo 22 del Informe de la Comisión. (Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo sexto período de sesiones, Suplemento No. 21 (A/8421)).

2.       Mar Territorial
  - 2.1.      Naturaleza y características, incluyendo la cuestión de la unidad o pluralidad de regímenes en el Mar Territorial
  - 2.2.      Aguas históricas
  - 2.3.      Límites
    - 2.3.1.    Delimitación del Mar Territorial
    - 2.3.2.    Anchura del Mar Territorial: criterios globales o regionales
  - 2.4.      Paso inocente en el Mar Territorial
  - 2.5.      Libertad de navegación y sobrevuelo según resulta de la cuestión de la pluralidad de regímenes en el Mar Territorial
3.       Zona Contigua
  - 3.1.      Naturaleza y características
  - 3.2.      Límites
  - 3.3.      Derechos de los Estados ribereños con relación a la seguridad nacional, el control fiscal y aduanero, la reglamentación sanitaria y la inmigración
4.       Estrechos
  - 4.1.      Estrechos utilizados para la navegación internacional
  - 4.2.      Paso inocente
5.       Plataforma Continental
  - 5.1.      Naturaleza y alcances de los derechos soberanos de los Estados ribereños sobre la Plataforma Continental
  - 5.2.      Límite exterior de la Plataforma Continental. Criterios aplicables
  - 5.3.      Cuestión de la delimitación entre Estados
  - 5.4.      Recursos naturales de la Plataforma Continental
  - 5.5.      Régimen de las aguas suprayacentes a la Plataforma Continental
  - 5.6.      Investigación científica
6.       Zona económica exclusiva situada fuera del Mar Territorial
  - 6.1.      Naturaleza y características, incluyendo los derechos y la jurisdicción de los Estados costeros con relación a los recursos, la contaminación y la investigación científica en la zona
  - 6.2.      Recursos de la zona
  - 6.3.      Libertad de navegación y sobrevuelo
  - 6.4.      Acuerdos regionales
  - 6.5.      Límites. Criterios aplicables. Mares y océanos abiertos, mares cerrados y semicerrados
  - 6.6.      Pesquerías
    - 6.6.1.    Zona exclusiva de pesca
    - 6.6.2.    Derechos preferenciales del Estado costero
    - 6.6.3.    Administración y conservación

- 6.6.4. Protección de las pesquerías del Estado costero en mares y océanos abiertos y en mares cerrados y semicerrados
- 6.6.5. Régimen de islas bajo dominación o control extranjero en relación con las zonas de jurisdicción exclusiva de pesca
- 6.7. Fondos marinos dentro de la jurisdicción nacional
  - 6.7.1. Naturaleza y características
  - 6.7.2. Delimitación entre Estados adyacentes y opuestos
  - 6.7.3. Derechos soberanos de los Estados costeros sobre los recursos naturales
  - 6.7.4. Límites. Criterios aplicables
- 6.8. Prevención y control de la contaminación y otros peligros para el Medio Marino
  - 6.8.1. Derechos y deberes del Estado costero
- 6.9. Investigación científica
  
- 7. Alta Mar
  - 7.1. Naturaleza y características
  - 7.2. Libertad de navegación y sobrevuelo
  - 7.3. Derechos y deberes de los Estados
  - 7.4. Administración y conservación de los recursos vivos
  
- 8. Derechos e intereses de los países sin litoral
  - 8.1. Libre acceso al Alta Mar
  - 8.2. Libre acceso a la zona internacional de los fondos marinos fuera de la jurisdicción nacional de conformidad con el régimen que se establezca y otros arreglos relativos a dicho acceso
  - 8.3. Intereses de los países en desarrollo sin litoral en materia de pesquerías
  - 8.4. Participación de los países sin litoral en el régimen internacional
  - 8.5. Intereses y necesidades particulares de los países en desarrollo sin litoral en el régimen internacional
  
- 9. Intereses y necesidades de los países de plataforma encerrada, plataforma estrecha o costas pequeñas en relación con:
  - 9.1. Régimen internacional
  - 9.2. Pesquerías
  - 9.3. Intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo de plataforma encerrada, plataforma estrecha o costas pequeñas
  
- 10. Derechos e intereses de los Estados con plataformas amplias
  
- 11. Preservación del Medio Marino
  - 11.1. Fuentes de contaminación y otros peligros y medidas para combatirlos
  - 11.2. Medidas para preservar el equilibrio ecológico del Medio Marino
  - 11.3. Obligaciones y responsabilidad en relación con los daños al Medio Marino y al Estado ribereño
  - 11.4. Derechos del Estado ribereño



- 12. Investigación científica
  - 12.1. Naturaleza, características y objetivos de la investigación científica de los océanos
  - 12.2. Reglamentación de la investigación científica
  - 12.3. Cooperación internacional
- 13. Desarrollo y transferencia de tecnología
  - 13.1. Desarrollo de la capacidad tecnológica de los países en desarrollo
    - 13.1.1. Intercambio de conocimientos entre países desarrollados y en desarrollo
    - 13.1.2. Formación de personal de países en desarrollo
    - 13.1.3. Transmisión de tecnología a países en desarrollo
- 14. Acuerdos regionales
- 15. Archipiélagos
- 16. Mares cerrados y semi-cerrados
- 17. Islas artificiales e instalaciones
- 18. Régimen de las islas:
  - a) bajo la dependencia colonial o dominación o control extranjero;
  - b) bajo la soberanía de un Estado extranjero y situadas en la plataforma continental de otro Estado que se encuentra en un continente distinto
- 19. Obligaciones y responsabilidad en relación con los daños por el uso del Medio Marino
- 20. Arreglo de controversias
- 21. Utilización con fines pacíficos del espacio oceánico. Zonas de paz y seguridad
- 22. Tesoros arqueológicos e históricos de los fondos marinos y oceánicos fuera de los límites de la jurisdicción nacional
- 23. Transmisiones desde Alta Mar.

2. Enmiendas al documento A/AC.138/66 y Corr.2 presentadas por:

1) Malta\*

Tema 1.

Agréguese la siguiente cuestión:

- 1.6 Armonización de los usos de la zona

Tema 2.

Modifíquese la cuestión 2.3 de la manera siguiente:

- 2.3 Límites y líneas de base

Agruéguese otra cuestión:

- 2.6 Protección de los intereses internacionales

Tema 3.

Agreguése la cuestión siguiente:

- 3.4 Protección de los intereses internacionales

Tema 4.

Suprímense las cuestiones 4.1 y 4.2

Tema 5.

Modifíquense las cuestiones 5.1 y 5.2 de la manera siguiente:

- 5.1 Naturaleza y alcance de los derechos soberanos y de las responsabilidades de los Estados en relación con la plataforma continental
- 5.2 Límite exterior de la plataforma continental: criterios y límites aplicables

Tema 6.

Modifíquense las cuestiones 6.1 y 6.3 de la manera siguiente:

- 6.1 Naturaleza y características, incluyendo los derechos, las obligaciones y la jurisdicción de los Estados costeros en relación con los recursos, el control de la contaminación y la investigación científica en la zona
- 6.3 Protección de los intereses internacionales, inclusive la navegación y el sobrevuelo

---

\* Publicado inicialmente con la signatura A/AC.138/67.

Tema 7.

Agréguense las siguientes cuestiones:

- 7.5 Oleoductos y cables submarinos
- 7.6 Esclavitud, piratería, estupefacientes
- 7.7 Persecución encarnizada
- 7.8 Otras cuestiones

Tema 8.

Modifíquese el título de la manera siguiente:

- 8. Derechos, intereses y obligaciones de los países sin litoral

Tema 9.

Modifíquese el título de la manera siguiente:

- 9. Derechos, intereses y obligaciones de los Estados de plataforma encerrada y de los Estados de plataforma estrecha o costas pequeñas

Tema 10.

Modifíquese de la manera siguiente:

- 10. Derechos, intereses y obligaciones de los Estados con plataformas amplias

Tema 11.

Agréguense la cuestión siguiente:

- 11.5 Cooperación internacional

Tema 12.

Modifíquese la cuestión 12.2 de la manera siguiente:

- 12.2 Libertad de la investigación científica y sus limitaciones

Tema 15.

Modifíquese de la manera siguiente:

- 15. Archipiélagos e Islas

Tema 18.

Suprímase.

2) ESTADOS UNIDOS DE AMERICA\*

1. Tema 4

Agréguese un punto adicional:

4.3 Libre tránsito

2. Tema 6

1) Enmiéndese el título para que diga lo siguiente:

6. Zona económica exclusiva u otra jurisdicción económica u otros derechos económicos del Estado costero fuera del mar territorial

2) Enmiéndese el punto 6.3 para que diga lo siguiente:

6.3 Libertad de navegación y sobrevuelo y otros usos

3. Tema 7

Enmiéndese el punto 7.2 para que diga lo siguiente:

7.2 Libertad de navegación y sobrevuelo y otros usos

4. Tema 11

Enmiéndese el punto 11.4 para que diga lo siguiente:

11.4 Derechos y obligaciones del Estado ribereño

5. Tema 12

1) Insértese un nuevo punto 12.2 que diga lo siguiente:

12.2 Libertad de investigación y acceso a la información científica

2) Renúmérense los actuales puntos 12.2 y 12.3 como 12.3 y 12.4

6. Tema 21

Enmiéndese el título para que diga lo siguiente:

21. Utilización con fines pacíficos del espacio oceánico

7. Insértese un nuevo tema 22 que diga lo siguiente:

22. Zonas de paz y seguridad

8. Renúmérense los actuales temas 22 y 23 como temas 23 y 24 respectivamente

\* Publicados inicialmente con la signatura A/AC.138/68.

### 3) GRECIA E ITALIA\*

Enmiéndese el tema 18 para que diga lo siguiente:

18. Régimen de las islas.

### 4) JAPON\*\*

#### Tema 6

1. Enmiéndese el título de manera que diga:

6. Zona económica exclusiva o derechos preferentes del Estado ribereño fuera del mar territorial.

2. En el punto 6.1 suprímase "en la zona".

3. En el punto 6.2 suprímase "de la zona".

### 5) UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS\*\*\*

1. Agréguese al tema 1 otro punto del siguiente tenor:

1.6 Su utilización exclusivamente con fines pacíficos.

2. Enmiéndense los puntos 2.1, 2.3.2 y 2.5 de manera que digan:

2.1 Naturaleza y características.

2.3.2 Anchura del mar territorial.

2.5 Libertad de navegación y sobrevuelo en el espacio aéreo.

3. Enmiéndese el tema 4 de manera que diga: "Estrechos utilizados para la navegación internacional".

Suprímense los puntos 4.1 y 4.2.

4. Enmiéndese el tema 6 de manera que diga: "Derechos preferentes de los Estados ribereños fuera de los límites del mar territorial".

En el punto 6.1, suprímase "en la zona".

---

\* Publicada inicialmente con la signatura A/AC.138/69.

\*\* Publicada inicialmente con la signatura A/AC.138/70.

\*\*\* Publicadas inicialmente con la signatura A/AC.138/71.

En el punto 6.2, suprímase "de la zona".

Suprímense los puntos 6.6.1 y 6.6.2.

Dése al punto 6.9 la siguiente redacción:

La cooperación internacional en la esfera del estudio y la explotación racional de los recursos vivos del mar.

5. Dése al punto 7.2 la siguiente redacción:

Libertad de navegación y otras libertades.

6. Dése al punto 12.2 la siguiente redacción:

Coordinación de las investigaciones científicas.

7. Suprímase el tema 14, Acuerdos regionales.

8. Modifíquese el tema 21 de manera que diga:

21. Utilización con fines pacíficos.

9. Agréguese al proyecto de lista un nuevo tema con el siguiente contenido:

Medidas que deben adoptarse a fin de lograr la participación universal de los Estados en las convenciones multilaterales sobre el derecho del mar, incluso las convenciones de Ginebra de 1958.

6) AFGHANISTAN, AUSTRIA, BELGICA, BOLIVIA, CHECOSLOVAQUIA,  
HUNGRIA, MALI, NEPAL Y ZAMBIA\*

(Nota: Los números y palabras que figuran entre corchetes deben ser suprimidos, y los que están subrayados, deben ser agregados.)

6. Zona económica preferente o exclusiva situada fuera del Mar Territorial

6.1 Naturaleza y características, incluyendo los derechos /y la jurisdicción/ de los Estados costeros, así como de los Estados sin litoral y de plataforma encerrada, con relación a los recursos, la lucha contra la contaminación y la investigación científica en la zona

.....

6.6.1 Zona preferente o exclusiva de pesca de los Estados ribereños

6.6.2 Derechos /preferenciales del Estado costero/ de los países sin litoral y de plataforma encerrada

---

\* Publicadas inicialmente con la signatura A/AC.138/72 y Corr.1.

.....

- 6.6.4 Protección de las pesquerías del Estado /costero/ en mares cerrados y semicerrados
- 6.6.5 Régimen de islas bajo dominación o control extranjero en relación con las /zonas de jurisdicción exclusiva de pesca/ zonas de pesca
- 6.7 Fondos marinos /dentro de la jurisdicción nacional/ situados fuera del Mar Territorial
- 6.7.3 Derechos /soberanos/ preferentes de los Estados costeros sobre los recursos naturales y participación de los países sin litoral y de plataforma encerrada en la explotación de los recursos naturales

.....

8. /Derechos e intereses de los/ países sin litoral

- 8.1 Principios generales del derecho del mar relativos a los países sin litoral
- 8.2 Derechos e intereses de los países sin litoral
  - /8.1/ 8.2.1 Libre acceso al /la alta mar/ mar y desde él
  - 8.2.2 Libre tránsito
  - 8.2.3 Transporte y comunicaciones: medios e instalaciones
  - 8.2.4 Igualdad de trato en los puertos de los Estados de tránsito
  - /8.2/ 8.2.5 Libre acceso a la zona internacional de los fondos marinos fuera de la jurisdicción nacional /de conformidad con el régimen que se establezca y otros arreglos relativos a dicho acceso/
  - /8.3 Intereses de los países en desarrollo sin litoral en materia de pesquerías/
  - /8.4/ 8.2.6 Participación /de los países sin litoral/ en el régimen internacional, incluido el mecanismo, y reparto equitativo de los beneficios de la zona
  - 8.2.7 Derechos e intereses especiales de los países sin litoral con respecto a los recursos vivos del mar
- /8.5/ 8.3 Intereses y necesidades particulares de los países en desarrollo sin litoral en el régimen internacional y con respecto a los recursos vivos del mar

9. /Derechos e intereses de los/ Estados de plataforma encerrada y de los Estados /de plataforma estrecha o/ de costas pequeñas
- 9.1 /Régimen internacional/ Derechos e intereses de los Estados de plataforma encerrada y de los Estados de litoral reducido
- 9.1.2 Libre acceso a la Alta Mar y de la Alta Mar
- 9.1.3. Libre acceso a la zona internacional de los fondos marinos fuera de la jurisdicción nacional
- 9.1.4 Participación en el régimen internacional, incluido el mecanismo, y reparto equitativo de los beneficios de la zona.
- 9.1.5 Derechos e intereses especiales de los Estados de plataforma encerrada y de los Estados de litoral reducido con respecto a los recursos vivos del mar.
- /9.2 Pesquerías/
- /9.3/ 9.2 Intereses y necesidades particulares /especiales de los Estados en desarrollo de plataforma encerrada y de los países en desarrollo /de plataforma estrecha o/ de costas pequeñas con respecto a los recursos vivos del mar

.....

11. Derechos e intereses de los Estados de plataforma estrecha

Renúmérese en consecuencia los temas siguientes en el documento A/AC.138/66.

7) TURQUIA\*

1. Tema 2

Agréguense los incisos siguientes:

2.6 Las islas

2.7 Delimitación del mar territorial entre Estados limítrofes o que se encuentran frente a frente, incluido el de las islas.

2. Tema 5

Reemplácese el texto actual del punto 5.3 por el siguiente:

5.3 Delimitación de la plataforma continental entre Estados limítrofes o que se encuentran frente a frente, incluida la de las islas.

---

\* Publicadas inicialmente con la signatura A/AC.138/74 y Corr.1.



3. Agréguese el tema siguiente:

24. Relaciones y efectos de los textos preparados conforme a la resolución 2750 C (XXV) con respecto a las Convenciones de 1958 sobre el Derecho del Mar (A/AC.138/48).

8) FRANCIA, PAISES BAJOS Y REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA  
E IRLANDA DEL NORTE\*

1. Tema 4

1) Modifíquese el título para que diga:

4. Estrechos usados para la navegación internacional.

2) Suprímense los puntos 1 y 2 del tema 4.

2. Tema 6

Modifíquese el título para que diga:

6. Zona económica exclusiva u otros derechos o jurisdicción económicos del Estado ribereño fuera del mar territorial.

3. Tema 12

1) Insértese un nuevo punto 2 que diga lo siguiente:

12.2 Libertad de investigación y acceso a la información científica.

2) Los actuales puntos 2 y 3 del tema 12 pasan a ser los puntos 3 y 4.

9) POLONIA\*\*

1. Tema 4

4.1 Añádanse las palabras siguientes al final del enunciado actual de este punto:

" , incluida la cuestión de la libertad de tránsito."

2. Tema 7

Redáctese de nuevo el punto 7.2 como sigue:

7.2 Libertad de navegación, sobrevuelo, pesca y tendido de cables y conductos submarinos.

---

\* Publicadas inicialmente con la signatura A/AC.138/76.

\*\* Publicadas inicialmente con la signatura A/AC.138/77.

Tema 6

En el título actual del tema 6, tal como ha sido enmendado por el Japón en el documento A/AC.138/70, añádanse después de "exclusiva" las palabras "o de otro tipo".

(El texto del título revisado será el siguiente:

6. Zona económica exclusiva o de otro tipo o derechos preferentes del Estado ribereño fuera del mar territorial.)

---

\* Publicada inicialmente con la signatura A/AC.138/78.

3. Lista de temas y cuestiones relacionadas con el derecho del mar que se ha de presentar a la Conferencia sobre el derecho del mar presentada por Malta\*

Nota explicativa

Se considera que la lista de temas agregada, cada uno de los cuales agrupa varios temas y cuestiones relacionadas con el derecho del mar, cumple prácticamente los propósitos de la resolución 2750 C (XXV). Esta lista es comprensiva y no compromete ni prejuzga la posición de Estado alguno respecto de ningún tema o cuestión que pueda ser examinado.

La lista está encaminada a: a) servir como marco útil para las discusiones y la redacción de artículos; b) sugerir un orden racional de prioridades para el examen de los grupos de temas y cuestiones interrelacionados y c) facilitar, si así se desea, una reasignación de los temas y cuestiones a las tres subcomisiones de la Comisión sobre la utilización con fines pacíficos de los fondos marinos y oceánicos fuera de los límites de la jurisdicción nacional, teniendo en cuenta el texto del acuerdo sobre la organización de los trabajos leído por el Presidente del Comité el 12 de marzo de 1971.

Aun cuando una reasignación de los temas y cuestiones podría no ser esencial, se cree que sería conveniente reasignar los temas y cuestiones en la forma siguiente:

- 1) Subcomisión I: temas y cuestiones comprendidos en el epígrafe 4;
- 2) Subcomisión II: temas y cuestiones comprendidos en los epígrafes 1, 2 y 3;
- 3) Subcomisión III: temas y cuestiones comprendidos en el epígrafe 5.

El epígrafe 6 será examinado en sesiones plenarias en el momento adecuado.

Si se aplicara la reasignación sugerida de tareas entre las subcomisiones, solamente surgirían cuestiones importantes de prioridad respecto de la labor de la Subcomisión II. Estas cuestiones podrían ser resueltas comenzando el examen de los temas y cuestiones comprendidos en el epígrafe 1 en la Subcomisión mientras que las deliberaciones sobre los temas y cuestiones comprendidos en los epígrafes 2 y 3 pueden realizarse simultáneamente en sesiones plenarias para preparar estas cuestiones para su examen por la Subcomisión cuando se haya terminado el estudio de las cuestiones comprendidas en el epígrafe 1.

Lista de epígrafes en que se agrupan temas y cuestiones relacionadas con el derecho del mar

1. Definiciones y principios generales relacionados con el derecho del mar

Bajo este epígrafe se examinarían todos los artículos contenidos en los Convenios de Ginebra sobre el derecho del mar y todos los temas y cuestiones contenidos en los proyectos de convenios, proyectos de tratados, documentos de trabajo y documentos de listas de temas y cuestiones (incluida especialmente la lista de

---

\* Publicada inicialmente con la signatura A/AC.138/75 y Corr.1.

temas y cuestiones contenida en el documento A/AC.138/66 y sus enmiendas) presentados a la Comisión, que interesan a la definición de los conceptos generales y la formulación de principios generales relativos al derecho del mar, al medio marino en su totalidad, su conservación, sus usos y los derechos y responsabilidades de los Estados respecto del mismo.

## 2. Jurisdicción de los Estados ribereños

Bajo este epígrafe se examinarían todos los artículos contenidos en los Convenios de Ginebra en 1958 sobre el derecho del mar y todos los temas y cuestiones contenidos en los proyectos de convenios, proyectos de tratados, documentos de trabajo y proyectos de listas de temas y cuestiones (incluida especialmente la lista de temas y cuestiones contenida en el documento A/AC.138/66 y sus enmiendas) presentados a la Comisión, que se refieren a los límites, la extensión y la forma de delimitación de la jurisdicción de los Estados ribereños para algunos o todos los propósitos en el medio marino.

## 3. El medio marino en la jurisdicción nacional

Bajo este epígrafe se examinarían todos los artículos contenidos en los Convenios de Ginebra de 1958 sobre el derecho del mar y todos los temas y cuestiones contenidos en los proyectos de convenios, proyectos de tratados, documentos de trabajo y proyectos de listas de temas y cuestiones (incluida especialmente la lista de temas y cuestiones contenida en el documento A/AC.138/66 y sus enmiendas) presentados a la Comisión, que se refieren a la naturaleza, características y al alcance de los derechos y responsabilidades de los Estados respecto de la explotación de los recursos vivientes y no vivientes, la navegación y otros usos del mar en las partes del medio marino bajo su jurisdicción; y arreglos regionales.

## 4. El medio marino fuera de la jurisdicción nacional

Bajo este epígrafe se examinarían todos los artículos contenidos en los Convenios de Ginebra de 1958 sobre el derecho del mar, que no se refieran a principios generales y todos los temas y cuestiones contenidos en los proyectos de convenios, proyectos de tratados, documentos de trabajo y proyectos de listas de temas (incluida especialmente la lista de temas y cuestiones contenida en el documento A/AC.138/66 y sus enmiendas) presentados a la Comisión, que se refieren a los principios básicos; los derechos y obligaciones de los Estados; las disposiciones institucionales (o mecanismos) para los fondos marinos y oceánicos y sus recursos, o para otros usos o partes del medio marino fuera de la jurisdicción nacional, incluidas las consecuencias económicas de la explotación de los recursos y el reparto equitativo de los beneficios; las necesidades y problemas de los países sin litoral; y las disposiciones para el arreglo de controversias.

## 5. Cooperación internacional en la investigación científica y en el desarrollo y la transmisión de tecnología

Bajo este epígrafe se examinarían todos los temas y cuestiones contenidos en los proyectos de convenios, proyectos de tratados, documentos de trabajo y proyectos de temas y cuestiones (incluida especialmente la lista de temas y cuestiones contenida en el documento A/AC.138/66 y las enmiendas a éste) presentados a la Comisión,

que se refieren a la cooperación internacional en la investigación científica y en el desarrollo de la tecnología y su transmisión a los países tecnológicamente menos desarrollados; la preservación del medio marino (incluida, entre otras cosas, la forma de impedir la contaminación).

6. Relación de los proyectos de artículos preparados con los Convenios de 1958 sobre el derecho del mar y sus efectos sobre los mismos

4. Proyecto de artículo sobre pesca (disposiciones fundamentales y nota explicativa) presentado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas\*

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

1. Todo Estado ribereño en desarrollo podrá reservarse anualmente en las zonas de la alta mar inmediatamente contiguas a su mar territorial o a su zona de pesca (que no excedan de 12 millas) el porcentaje de la pesca permisible que puedan capturar los buques que enarbolan el pabellón de ese Estado.

A medida que se amplíe la flota pesquera del Estado ribereño en desarrollo, éste podrá aumentar proporcionalmente el porcentaje reservado de la pesca permisible.

El Estado ribereño en desarrollo comunicará el porcentaje de la pesca que se haya reservado a la organización internacional encargada de los problemas de pesca, cuya competencia se extienda a dicha zona, y a los Estados que se dedican a la pesca en las zonas mencionadas anteriormente.

2. Todo Estado ribereño podrá reservarse anualmente en las zonas de la alta mar inmediatamente contiguas a su mar territorial o a su zona de pesca (que no excedan de 12 millas) el porcentaje de la pesca permisible de las especies anádromas que desoven en sus ríos y que puedan capturar los buques que enarbolan el pabellón de dicho Estado.

3. El porcentaje de la pesca permisible que no se haya reservado de conformidad con los párrafos 1 y 2 podrá ser explotado por los buques que enarbolan el pabellón de otros Estados, incluidos los Estados sin litoral, siempre que no se cause perjuicio a la conservación de los recursos haliéuticos.

4. En las zonas mencionadas anteriormente en las que las organizaciones internacionales correspondientes se encargan de la aplicación de las disposiciones para la regulación de la pesca, seguirá rigiendo en el futuro ese método de regulación.

El control de la aplicación de las medidas de regulación de la pesca en esas zonas seguirá rigiéndose por las disposiciones adoptadas en el ámbito de las respectivas organizaciones internacionales encargadas de los problemas de pesca.

5. En las zonas mencionadas en el presente artículo a las que no se aplique lo dispuesto en el párrafo 4, el propio Estado ribereño podrá adoptar, basándose en dictámenes científicos, medidas para regular la pesca. Esas medidas serán decididas por el Estado ribereño previo acuerdo con los Estados que también se dedican a la pesca en las citadas zonas.

---

\* Publicado inicialmente con la signatura A/AC.138/SC.II/L.6.

Las medidas regulatorias no discriminarán de hecho ni de derecho contra los pescadores de ninguno de esos Estados.

6. El propio Estado ribereño podrá controlar la observancia de las medidas regulatorias de la pesca adoptadas por él de conformidad con el párrafo 5.

Cuando las autoridades competentes del Estado ribereño tengan razones suficientes para suponer que un buque extranjero que se dedica a la pesca viola esas medidas, podrá proceder a la detención del buque o a su inspección y levantar acta de las violaciones cometidas. El examen de los casos que puedan plantearse en relación con la violación de las mencionadas medidas por un buque extranjero y el castigo de los miembros de la tripulación autores de la infracción corresponderán al Estado cuyo pabellón enarbole el buque que haya cometido la infracción. Ese Estado notificará al Estado ribereño los resultados de la investigación y las medidas adoptadas por él.

7. Las controversias entre los Estados en relación con la aplicación de las disposiciones del presente artículo podrán resolverse mediante arbitraje a petición de una de las partes, salvo que las partes convengan en resolverlas mediante otro medio de arreglo pacífico, de entre los previstos en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.

#### Nota explicativa

La Unión Soviética considera muy importante el decidir de común acuerdo los problemas de pesca en la alta mar que examina el Comité Preparatorio de las Naciones Unidas para la Conferencia sobre el Derecho del Mar. La Unión Soviética estima que la solución de esos problemas debe ofrecer a todos los países posibilidades reales de aprovechar los recursos pesqueros de la alta mar para satisfacer las necesidades de su población.

Comprendemos el interés de los países en desarrollo en un aprovechamiento racional de los recursos pesqueros de las zonas de la alta mar adyacentes a sus costas. Nos hacemos cargo de que, debido a la larga explotación colonial a que han estado sometidos, los países en desarrollo cuentan con medios económicos y técnicos para la pesca considerablemente inferiores a los de los países desarrollados que poseen buques pesqueros de altura.

Por ello, la Unión Soviética es partidaria de que se conceda a los países ribereños en desarrollo derechos especiales en materia de pesca que les permitan explotar ampliamente los recursos haliéuticos de las zonas contiguas a la alta mar y fomentar sus industrias pesqueras nacionales.

Estimamos que, en general, los problemas de la pesca en el plano internacional podrían resolverse teniendo debidamente en cuenta los intereses de los países ribereños en desarrollo y los intereses de los demás países, incluidos los países sin litoral.

Esta posición de la Unión Soviética fue expuesta en el Comité Preparatorio de la Conferencia sobre el Derecho del Mar y, en particular, en su tercer período de sesiones celebrado en Nueva York en marzo del año actual.

Esa posición ha quedado también reflejada en el proyecto de disposiciones fundamentales para el artículo sobre pesca que, junto con la presente nota, se transmite a los Estados miembros del Comité.

La disposición fundamental del proyecto es la que prevé que el Estado ribereño en desarrollo podrá reservarse anualmente en las zonas de la alta mar contiguas a su mar territorial o a su zona de pesca (cuya anchura no debe exceder de 12 millas) el porcentaje de los recursos haliéuticos que puedan explotar los buques que enarbolan su pabellón.

El proyecto estipula que a medida que se amplíe la flota pesquera de un Estado determinado éste podrá reservarse proporcionalmente un porcentaje mayor de los recursos haliéuticos.

Por consiguiente, el Estado ribereño en desarrollo tendría derecho a explotar todos los recursos haliéuticos de que fueran capaces sus buques pesqueros; además, ello permitiría el futuro desarrollo de la industria pesquera nacional y el aumento de las capturas.

Desde luego, al resolver los problemas de la pesca no deben pasarse por alto los intereses legítimos de los pueblos de otros Estados en la utilización de los recursos pesqueros de los océanos mundiales. A nuestro juicio, si perdiesen los recursos haliéuticos no explotados por el Estado ribereño, sin que esos recursos fuesen aprovechados por otros Estados, ello constituiría un derroche injustificado de alimentos valiosos tan necesarios para la humanidad. En las disposiciones fundamentales del proyecto soviético de artículo sobre pesca se prevé que el porcentaje de los recursos haliéuticos que no se reserve el Estado ribereño en desarrollo, podrá ser explotado por otros Estados, siempre que no se cause perjuicio a la conservación de los recursos haliéuticos.

En el proyecto soviético se presta la debida atención a las cuestiones relacionadas con la reglamentación de la pesca y la conservación de los recursos haliéuticos.

En él se tiene en cuenta que en algunas zonas de la alta mar existe y se perfecciona un sistema viable de normas para la regulación y el control de la pesca; esas normas se basan en dictámenes científicos y son aplicados por las respectivas organizaciones internacionales de pesca.

Como no existe un sistema de regulación y control aplicable a todas las zonas de la alta mar, estimamos conveniente que se reconozca el derecho del Estado ribereño a adoptar, basándose en dictámenes científicos, medidas para regular la pesca en las zonas de la alta mar contiguas a sus costas a las que no se extienda la competencia de las organizaciones internacionales de pesca.

El Estado ribereño estará facultado en las mencionadas zonas para controlar la observancia de las normas de pesca establecidas, incluido el derecho de detener e inspeccionar a los buques que hayan violado esas normas. Se sobreentiende que, al establecer esas normas, los Estados ribereños consultarán con los países que se dedican a la pesca en dichas zonas.

El proyecto soviético también contiene una disposición relativa a la solución de las controversias que puedan surgir en relación con la aplicación del artículo sobre pesca.

A nuestro juicio, el proyecto soviético de disposiciones fundamentales para el artículo sobre pesca - que, en lo referente al reconocimiento de los derechos especiales de pesca de los países en desarrollo va más allá que las propuestas presentadas por otros Estados al Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar - podría servir de base para preparar de común acuerdo en el Comité normas sobre los problemas de la pesca.

Como es sabido, la cuestión de la pesca se examina en el citado Comité junto con otros problemas del derecho del mar. La Unión Soviética está también dispuesta, con un espíritu de cooperación, a tener en cuenta las aspiraciones de los países en desarrollo con respecto a esas cuestiones y, en particular, con respecto al establecimiento de un régimen aplicable a los fondos marinos.

El anteproyecto de artículos de un tratado sobre la utilización de los fondos marinos con fines pacíficos, presentado por la Unión Soviética al Comité, prevé que la explotación de sus recursos se llevará a cabo "en beneficio de toda la humanidad, cualquiera que sea la situación geográfica de los Estados, independientemente de que sean ribereños o de que carezcan de litoral y teniendo particularmente en cuenta los intereses y necesidades de los países en desarrollo". La Unión Soviética está dispuesta a incluir en el tratado sobre los fondos marinos un artículo sobre la distribución equitativa de los beneficios obtenidos de la explotación de los recursos de esos fondos, a condición de que se prevea una solución decidida de común acuerdo para los problemas de pesca y para cuestiones tales como la fijación del límite de 12 millas de la anchura del mar territorial y la salvaguardia de la libertad de tránsito por los estrechos utilizados para la navegación internacional.

La Unión Soviética se ha mostrado invariablemente dispuesta a colaborar en la solución de las cuestiones relacionadas con el derecho del mar y seguirá tratando de encontrar una solución a esas cuestiones aceptable para todos.



5. Proyecto de artículos sobre los estrechos utilizados para la navegación internacional, presentado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas\*

Artículo ...

1. En los estrechos utilizados para la navegación internacional entre una parte de la alta mar y otra parte de la alta mar, todos los buques en tránsito gozarán, a los efectos del tránsito por esos estrechos, de la misma libertad de navegación que en la alta mar. Los Estados ribereños podrán establecer en los estrechos angostos corredores apropiados para el tránsito de todos los buques por esos estrechos. En el caso de estrechos en que los buques en tránsito utilicen habitualmente determinados canales de navegación, los corredores comprenderán esos canales.

2. A los efectos del tránsito por los estrechos, la libertad de navegación prevista en el presente artículo se ejercerá de conformidad con las disposiciones siguientes:

a) Los buques en tránsito por los estrechos deberán adoptar todas las medidas necesarias para impedir toda amenaza a la seguridad de los Estados contiguos a los estrechos. En particular, los buques de guerra en tránsito por los estrechos no deberán realizar en dicha zona ejercicios o prácticas de tiro de ninguna clase, utilizar armas de ningún tipo, hacer despegar sus aeronaves, realizar trabajos hidrográficos ni llevar a cabo ninguna otra actividad análoga que no guarde relación con el tránsito;

b) Los buques en tránsito por los estrechos deberán respetar escrupulosamente los reglamentos internacionales destinados a impedir el abordaje de los buques u otros accidentes; en los estrechos en que se haya previsto un tráfico en ambos sentidos, los buques deberán respetar asimismo la línea divisoria del tráfico. También deberán evitar las maniobras injustificadas;

c) Los buques en tránsito por los estrechos deberán adoptar las medidas de precaución necesarias para impedir la contaminación de las aguas y el litoral de los estrechos o causar cualquier otro perjuicio a los Estados contiguos a los estrechos;

d) Los daños ocasionados a los Estados contiguos a los estrechos como consecuencia del tránsito de buques deberán ser reparados por el Estado del pabellón del buque que los haya causado o por las personas jurídicas sometidas a su jurisdicción o que actúen en su nombre;

e) Ningún Estado estará facultado para interrumpir o detener el tránsito de los buques por los estrechos, emprender ninguna acción que entorpezca el tránsito de los buques o exigir que los buques en tránsito se detengan o suministren cualquier tipo de información.

3. Las disposiciones del presente artículo:

---

\* Publicado inicialmente con la signatura A/AC.138/SC.II/L.7.

a) Serán aplicables a los estrechos bañados por las aguas territoriales de uno o de varios Estados ribereños;

b) No afectarán a los derechos soberanos de los Estados ribereños sobre el fondo, el subsuelo o los recursos vivos y minerales de los estrechos;

c) No afectarán al régimen jurídico de los estrechos cuyo tránsito se rige por acuerdos internacionales que se refieren especialmente a esos estrechos.

#### Artículo ...

1. En los estrechos cuyo espacio aéreo sea utilizado para el sobrevuelo de aeronaves extranjeras entre una parte de la alta mar y otra parte de la alta mar, todas las aeronaves gozarán de la misma libertad de vuelo sobre esos estrechos que en el espacio aéreo sobre la alta mar. Los Estados ribereños podrán establecer corredores aéreos especiales apropiados para el sobrevuelo de las aeronaves y la altura de vuelo en las distintas direcciones, así como determinar los procedimientos de enlace por radio con esas aeronaves.

2. La libertad de sobrevuelo de las aeronaves sobre los estrechos, prevista en el presente artículo, se ejercerá de conformidad con las disposiciones siguientes:

a) Las aeronaves en sobrevuelo adoptarán las medidas necesarias para no violar los límites de los corredores ni la altura de vuelo sobre los estrechos establecidos por los Estados ribereños e impedir los vuelos sobre el territorio del Estado ribereño, siempre que el corredor establecido por ese Estado no prevea tal sobrevuelo;

b) Las aeronaves en sobrevuelo deberán adoptar todas las medidas necesarias para impedir cualquier amenaza a la seguridad de los Estados ribereños. En particular, los aviones militares no deberán realizar en la zona de los estrechos cualesquiera ejercicios o prácticas de tiro de ninguna clase, utilizar armas de ningún tipo, filmar ni tomar fotografías, sobrevolar los buques, realizar vuelos en picado, repostar ni llevar a cabo ninguna otra actividad análoga que no guarden relación con el sobrevuelo;

c) Los daños ocasionados a los Estados ribereños como consecuencia del sobrevuelo de aeronaves deberán ser preparados por el Estado al que pertenezca la aeronave que los haya causado o por las personas jurídicas sometidas a su jurisdicción o que actúen en su nombre;

d) Ningún Estado estará facultado para interrumpir o detener el sobrevuelo por aeronaves extranjeras, efectuado de acuerdo con el presente artículo, del espacio aéreo que se extiende sobre los estrechos.

3. Las disposiciones del presente artículo:

a) Serán aplicables a los vuelos de las aeronaves sobre los estrechos bañados por las aguas territoriales de uno de varios Estados ribereños;

b) No afectarán al régimen jurídico de los estrechos cuyo sobrevuelo se rige por acuerdos internacionales que se refieren especialmente a esos estrechos.

6. Documento de trabajo sobre la ordenación de los recursos vivos del mar presentado por el Canadá\*

I. INTRODUCCION

La Delegación del Canadá presenta este documento de trabajo con objeto de que sirva de base de discusión, sin que refleje forzosamente la opinión definitiva y final del Gobierno canadiense.

La delegación del Canadá opina que el método funcional sería la base más sólida para un sistema racional de ordenación de los recursos vivos del mar. Con ese método se reconocería que pueden necesitarse diferentes regímenes de ordenación para diferentes especies. Hay, sin embargo, ciertos principios básicos en los que debería fundarse todo régimen de ordenación de los recursos vivos del mar. El presente documento de trabajo tiene por objeto esbozar los elementos esenciales de ese método funcional para la ordenación de tales recursos y ampliar los principios subyacentes con miras a su posible incorporación en futuros artículos de un tratado.

---

\* Publicado inicialmente con la signatura A/AC.138/SC.II/L.8.

## II. EL METODO FUNCIONAL DE ORDENACION DE LOS RECURSOS VIVOS DEL MAR

### Relación con la ordenación del medio marino en su conjunto

Con arreglo al método funcional, se considera que la ordenación de pesquerías forma parte del concepto más vasto de la ordenación del medio marino en su conjunto. En el segundo período de sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Contaminación de los Mares, celebrado en Ottawa en noviembre de 1971, se insistió en la importancia de ese concepto más vasto y en su relación con la ordenación de pesquerías. La declaración de objetivos adoptada en el informe de dicho Grupo de Trabajo fue adoptada después por la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano y se puede considerar como la base para el establecimiento de sólidos principios de ordenación de pesquerías. He aquí el texto de dicha declaración:

"El medio marino y todos los organismos vivos que mantiene son de vital importancia para la humanidad, e interesa a la humanidad entera administrar dicho medio de modo que no queden perjudicados ni su calidad ni sus recursos. Así puede decirse especialmente de las naciones ribereñas, a quienes interesa particularmente la administración de los recursos de sus litorales. La capacidad de los mares para asimilar desechos y tornarlos inocuos y sus posibilidades de regeneración de recursos naturales no son ilimitadas. Se necesita una adecuada administración, y las medidas encaminadas a evitar la contaminación de los mares deben considerarse un elemento esencial en esta administración de los mares y océanos y de sus recursos naturales."

### Diferenciación de las especies

Al elaborar en más detalle el método funcional de ordenación de pesquerías hay que diferenciar diversos grupos de especies a fin de determinar el tipo de régimen que pueda ser más apropiado para cada caso. Así, los recursos vivos del mar se pueden clasificar convenientemente en cuatro grandes grupos ecológicos, sobre la base de su distribución y su comportamiento migratorio: a) especies sedentarias; b) especies costeras; c) especies anadrómicas; d) especies de amplio habitat.

a) Con arreglo a la Convención sobre la Plataforma Continental, de 1958, el Estado ribereño ejerce derechos exclusivos de soberanía sobre los organismos vivos definidos como especies sedentarias, esto es, aquellos que en el período de explotación están inmóviles en el lecho del mar sobre el fondo o en su subsuelo, sólo pueden moverse en constante contacto físico con dichos lecho y subsuelo. En opinión del Canadá, este criterio para la ordenación de las especies sedentarias es razonable y adecuado, ya que reconoce la relación que existe entre la ordenación de los recursos vivos y de los recursos minerales y concede al Estado ribereño una autoridad completa y unitaria sobre todos los recursos de su plataforma continental.

b) La siguiente categoría general de recursos vivos del mar está constituida por las especies costeras. Se trata de especies no sedentarias, que nadan libremente y habitan zonas ricas en nutrientes y adyacentes a la costa. Algunas especies de peces y de mariscos viven en estrecha asociación con el lecho del mar, pero no en contacto físico constante con él en el período de explotación. Otras especies habitan las aguas situadas inmediatamente encima del lecho del mar; otras

son verdaderamente pelágicas, puesto que habitan en aguas superficiales o pelágicas; otras, en fin, son pelágicas durante la mayor parte de su vida, pero vuelven al lecho del mar o a zonas costeras de aguas poco profundas para reproducirse. Como la productividad de estas especies suele depender en gran parte de factores relacionados con la tierra, el Estado ribereño tiene una responsabilidad especial, así como un interés especial, en mantener su productividad, lo cual, en opinión del Canadá, debería reconocerse debidamente con la asignación al Estado ribereño de autoridad en cuanto a la ordenación de esas especies y de una posición preferencial en cuanto a su utilización.

c) Las especies anadrómicas constituyen un componente especial de las especies costeras. Se crían y pasan la primera parte de su vida en los ríos del Estado de origen. Aun cuando se adentren en el mar, alejándose de sus ríos de origen, vuelven a ellos para reproducirse. Si el Estado de origen no tomara medidas especiales para mantener esos ríos en las debidas condiciones desaparecerían muy pronto las poblaciones más importantes de especies anadrómicas. El mantenimiento de los ríos en buenas condiciones es una empresa costosa cuya responsabilidad recae exclusivamente en el Estado de origen. En los últimos años muchas naciones han estado gastando sumas cada vez mayores para acrecentar la producción de especies anadrómicas por medios artificiales, agregándose esos gastos al costo de mantenimiento de los bancos de peces. La mejor época para la ordenación de los bancos desde el punto de vista de la población piscícola es cuando los peces van acercándose a sus ríos de origen, cuando han llegado a su peso máximo y cuando se hallan en óptimas condiciones en las aguas de origen.

Por consiguiente, en el caso de las especies anadrómicas, más aún que en el de las demás especies, el Estado de origen tiene virtualmente la responsabilidad exclusiva en cuanto al mantenimiento de las poblaciones de peces y debe hacer grandes gastos para asegurar la no desaparición de los bancos. Estas gravosas y únicas funciones y lo mucho que cuesta desempeñarlas sólo estarán justificadas, en opinión del Canadá, si la autoridad en cuanto a la ordenación corresponde al Estado de origen y si, en principio, dicho Estado tiene el derecho exclusivo de explotar las especies anadrómicas que se crían en sus propios ríos. Como un paso en esa dirección, las autoridades canadienses han propuesto que no se proceda a la pesca de esas especies en la alta mar.

d) Por último, hay un grupo de especies de amplio habitat que comprende la mayor parte de los grandes peces pelágicos, como los atunes y la mayoría de los mamíferos marinos. También podría pensarse en la posibilidad de elaborar un régimen de ordenación común para los peces que habitan las aguas que yacen sobre las partes más profundas de los océanos, o sea las especies "batipelágicas", y las especies de amplio habitat. Dada la distribución de estas especies sobre amplias zonas oceánicas, así como también su presencia temporal, en ciertas estaciones, en las aguas costeras de diversos Estados, parecería que el mecanismo más apropiado para su ordenación sería un órgano internacional compuesto por los Estados interesados. Habida cuenta del grado en que determinadas especies dependen de las aguas costeras, debería pensarse en la posibilidad de tomar en consideración los intereses de los Estados ribereños en esas especies durante el período en que habitan las aguas costeras.

### III. INTERES ESPECIAL DEL ESTADO RIBEREÑO

El Estado ribereño tiene interés especial y responsabilidad en cuanto a la conservación de los recursos vivos del mar adyacente a sus costas y debe tener la autoridad necesaria para ordenar esos recursos de forma compatible con su interés especial y responsabilidad, así como derechos preferenciales en la explotación de esos recursos

Este principio se aplica especialmente a la administración de las especies costeras y anadrómicas (se le ha dado ya la máxima aplicación con respecto a las especies sedentarias). El limitado reconocimiento del interés especial de los Estados ribereños en la Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta Mar de 1958 no da una base suficiente para que un Estado ribereño pueda aplicar un sistema efectivo de ordenación de los recursos pesqueros de sus costas. Ese interés especial se deriva de la responsabilidad del Estado ribereño con respecto a la productividad de los recursos vivos adyacentes a sus costas, así como de la antigua dependencia socioeconómica de las comunidades ribereñas de las poblaciones de peces próximas.

La relación existente entre tierra y mar en las zonas costeras impone determinadas responsabilidades al Estado ribereño. Hay que proteger el medio costero, en el que se concentran los recursos vivos y que es de importancia decisiva para la reproducción, las primeras etapas de desarrollo o la alimentación de muchas especies. Las aguas que bañan los continentes son mucho más productivas que el mar abierto. Esa productividad puede disminuir a causa de los efectos perjudiciales para el medio marino de la entrada de contaminantes procedentes de los ríos o del aire, la descarga de desperdicios y desechos industriales, y las alteraciones del litoral como consecuencia de proyectos como los de recuperación de tierras. Las responsabilidades que el Estado ribereño debe asumir para mantener la productividad y la calidad de los recursos, y los costos que entraña hacer frente a esa responsabilidad deben compensarse con la autoridad para ordenar y el derecho preferencial a utilizar los recursos marinos vivos adyacentes, sin perjuicio de los principios internacionalmente convenidos (que se examinan más adelante).

Los habitantes de zonas costeras alejadas de las regiones industriales dependen normalmente de alguna forma de industria primaria para mantener un nivel de vida satisfactorio. En muchos casos, la pesca es la única forma de empleo de que dispone la mayoría de la población. Esta suele estar dispersa en pequeñas comunidades, cada una de las cuales mantiene un equilibrio, a veces precario, entre el número de sus habitantes y la abundancia de las especies de peces de que depende. Toda comunidad tiende a explotar los recursos pesqueros situados en su vecindad inmediata. A menudo, esas poblaciones ribereñas no son capaces de operaciones pesqueras de gran alcance. La explotación excesiva de los recursos vivos costeros tiene graves consecuencias socioeconómicas para el Estado ribereño, cuya dependencia de esos recursos debe tenerse presente. Con respecto a algunas especies, el Estado ribereño podría tener derechos de explotación exclusiva; en cuanto a otras, sería suficiente una participación preferente en su aprovechamiento. También podría preverse que el Estado ribereño recibiera una parte de los beneficios obtenidos de los recursos costeros sin dedicarse a la pesca; por ejemplo, mediante acuerdos de arrendamiento con otros Estados.

Por lo que se refiere a los límites de la zona sometida a la autoridad del Estado ribereño, esos límites podrían ser de carácter biológico o geográfico. En el primer caso, la autoridad funcional del Estado ribereño se ejercería de conformidad con la distribución y los límites zoogeográficos conocidos de las poblaciones de peces que se administrasen, dejando a salvo las aguas territoriales o jurisdiccionales de otros Estados. No obstante, quizá se considere conveniente o necesaria, a efectos administrativos prácticos, alguna forma de delimitación geográfica de la autoridad, relacionada con los límites biológicos permanentes.

#### IV. PRINCIPIOS BASICOS PARA LA GESTION POR EL ESTADO RIBEREÑO

Los principios que a continuación se enuncian serían aplicables a todo sistema de gestión racional de los recursos vivos del mar. Aquí, no obstante, conciernen particularmente a la gestión de las especies costeras por el Estado ribereño, cuya autoridad y derechos preferenciales estarían regidos por esos principios, que gobernarían también la participación de otros Estados en determinadas pesquerías sometidas a la ordenación del Estado ribereño.

Debe reconocerse que el interés especial del Estado ribereño en los recursos pesqueros adyacentes a sus costas es un principio dominante en el sentido de que ciertas circunstancias sociales y económicas del Estado ribereño pueden imponer la necesidad de modificar esos principios en determinadas pesquerías. La consideración esencial es que los recursos pesqueros de la costa deben utilizarse de modo que produzca el máximo beneficio a la población del Estado ribereño desde el punto de vista de la eficacia económica, la contribución a la economía y el mejoramiento de la situación social.

- 1) El producto de una pesquería debe distribuirse entre los participantes sobre la base de una fórmula apropiada, de modo que cada uno reciba su parte en las condiciones más ventajosas

Mediante una reglamentación de la pesca que fije las capturas anuales adecuadas es posible proteger las poblaciones de peces contra la pesca excesiva y obtener rendimiento máximo a la larga. Si esa reglamentación no comprende también un sistema de distribución de las capturas entre los participantes, éstos competirán entre sí para obtener la mayor parte posible de la pesca disponible, para lo cual se derrocharán inevitablemente considerables insumos de capital y trabajo. En tales circunstancias, algunos participantes podrán competir más efectivamente que otros y, en situaciones extremas, uno o dos de los participantes podrán apoderarse de la mayor parte de la captura, aunque a un costo que puede ser superior al valor de la pesca obtenida. En un espíritu de equidad para todos los participantes, el producto de la pesca debería repartirse entre los participantes sin discriminación por su capacidad relativa de pesca. Hasta la fecha ese tipo de reparto es muy raro en las pesquerías internacionales y concretamente sólo se aplicó por primera vez a principios del año en curso en el caso del reparto de capturas de arenques y peces de fondo en la Comisión Internacional de Pesquerías del Atlántico Noroeste. (Las cuestiones relativas al método de asignación de las partes se estudian en relación con el principio que sigue a continuación.)

- 2) El acceso a una pesquería debe controlarse, sobre la base de alguna fórmula apropiada, de modo que no se pesque más que el rendimiento biológico máximo y de que ello se haga sin inversiones innecesarias de capital y de trabajo

El control del acceso es, naturalmente, una consecuencia evidente de todo sistema de reparto. El objetivo de una ordenación pesquera racional debe ser limitar la capacidad productiva de una pesquería controlando el acceso, de modo que se consiga la captura sin más esfuerzo del necesario, tomando en consideración sin embargo los factores sociales pertinentes. Ese concepto puede ampliarse y cabe prever que la racionalización económica de las pesquerías incluya el objetivo



de obtener el máximo rendimiento económico de los recursos disponibles. Ello significaría que las pesquerías se explotarían de modo que la diferencia entre el valor de la pesca obtenida y el costo de obtenerla fuera máxima. Este objetivo puede por lo general alcanzarse pescando hasta un punto ligeramente inferior a la captura máxima permisible. En realidad hay algunos casos en que el esfuerzo requerido para obtener la captura máxima permisible no estaría en proporción con el aumento del volumen de la captura así conseguido.

La aplicación de una política de esa naturaleza es especialmente difícil en el caso de poblaciones explotadas por flotas pesqueras de diferentes naciones, pero una solución razonablemente satisfactoria sería el establecimiento de un límite general de capturas, con asignación de partes a los distintos participantes. Teniendo la seguridad de obtener una parte fijada de antemano de la captura, todo país está en condiciones de utilizar esa parte del mejor modo posible desde el punto de vista de sus objetivos sociales concretos. A juicio de la delegación del Canadá, el Estado ribereño debería tener autoridad para fijar, de conformidad con los principios aquí enunciados y en consulta con las comisiones asesoras regionales, la captura permisible de las distintas poblaciones de especies costeras de cuya ordenación es responsable. Precisamente porque la experiencia internacional ha demostrado la dificultad de llegar a un consenso sobre medidas concretas necesarias con arreglo a los datos científicos, se propone que el Estado ribereño tenga autoridad para imponer una decisión cuando no se pueda llegar a tal consenso.

En cuanto a la fórmula que se emplearía para determinar las partes correspondientes a otros Estados participantes en una pesquería sometida a la ordenación de un Estado ribereño, el factor esencial sería reconocer el principio de que el Estado ribereño puede reservarse una parte proporcionada a sus necesidades y a su capacidad de explotar la población de que se trate respetando unos criterios convenidos de conservación. Una vez establecido este principio, la cuestión de la distribución de las partes entre los otros participantes se simplificaría muchísimo y podría encomendarse a las comisiones asesoras regionales (que podrían tomar como base la experiencia de órganos como la CIPAN a ese respecto). Lo mismo podría ocurrir en el caso de la entrada de nuevos participantes en una determinada pesquería.

3) La ordenación debe basarse en criterios científicos y socioeconómicos ampliamente reconocidos e internacionalmente aceptables

Esto es esencial tanto desde el punto de vista de la eficacia como de la equidad. Si no se llega a un acuerdo sobre esos criterios, no habrá orientaciones objetivas para el ejercicio de la autoridad ordenadora ni para evitar controversias o resolver las que puedan surgir. Por lo tanto, para todo régimen de ordenación, incluida la ordenación por el Estado ribereño, es esencial contar con criterios internacionalmente convenidos.

4) La ordenación debe hacer posible el control del ritmo de expansión de las pesquerías

Muchos de los actuales problemas de la ordenación de pesquerías internacionales son resultado de un aumento rápido y no controlado de la pesca; en muchas ocasiones las consecuencias de esos aumentos no son visibles hasta después de causado el daño. Hay muchos ejemplos de disminución de capturas que se consideran, al menos en parte, debidos a aumentos repentinos y oportunistas de la actividad pesquera con

los que se consiguen temporalmente capturas que las poblaciones no pueden soportar a la larga y que en casos extremos pueden hacer que peligre seriamente la capacidad de las poblaciones para reproducirse. En esas condiciones la recuperación de las poblaciones puede ser muy lenta y tener como resultado unas capturas mínimas durante un período de muchos años y posiblemente desequilibrios a largo plazo en los grupos biológicos marinos con consecuencias que son por el momento imprevisibles.

5) Deben registrarse y utilizarse todos los peces capturados

No se debe organizar la pesca de tal modo que se vuelvan a arrojar al mar cantidades importantes de las especies deseadas o de especies capturadas incidentalmente con aquéllas. Por desgracia, esta práctica está ahora demasiado extendida en los casos en que se intenta pescar especies de alto precio y se capturan cantidades considerables de otras especies, que se vuelven a arrojar al mar pese a que esas otras especies son valiosas para otros participantes y están quizá sujetas a normas de conservación.

6) La pesca para el consumo humano debe tener en principio prioridad respecto de la pesca para la preparación de harina de pescado

Los océanos ganan importancia como fuente de proteínas. El modo más eficiente de utilizar esas proteínas es consumirlas directamente como alimento, en vez de utilizarlas como alimento para otros animales para producir una cantidad menor de proteínas. Cuando quiera que exista la posibilidad de utilizar especies directamente para el consumo humano, se dará prioridad a la pesca con ese fin. Habrá que tener presentes determinadas circunstancias especiales, como las formas tradicionales de pesca y las necesidades socioeconómicas de los Estados que organizan la pesca. La elaboración de desechos de pescado y de especies no directamente utilizables para el consumo humano a fin de producir concentrados de proteínas aceptables que puedan utilizarse como aditivos alimentarios para consumo humano puede llegar en su día a ser más importante que la producción de harina de pescado.

7) Todo régimen de ordenación de una pesquería internacionalmente explotada debe estar dispuesto a informar a la comunidad internacional acerca del ejercicio de su autoridad; deben existir procedimientos adecuados para la solución de controversias

La responsabilidad por la ordenación de los recursos debe llevar consigo la autoridad suficiente para desempeñar esa responsabilidad. Si bien el ejercicio de la autoridad debe estar sujeto a revisión, la autoridad misma no debe ser discutida. Entender al Estado ribereño encargado de la ordenación de las especies costeras como "custodio" en representación de la comunidad internacional no debe significar que dicho Estado quede sujeto a forma alguna de supervisión estricta en el ejercicio de su autoridad y en el cumplimiento de sus responsabilidades, sino más bien que el ejercicio de esos poderes de conformidad con criterios internacionalmente convenidos debe estar sujeto a procedimientos adecuados de solución de controversias.

En cuanto a si debe exigirse al Estado ribereño que se someta a procedimientos de solución de controversias cuando se reserva una población entera para atender

sus necesidades especiales, la opinión de la delegación del Canadá es que en ese caso los procedimientos de solución de controversias sólo deben aplicarse cuando la controversia gire en torno a si se ha hecho pleno uso de esa población o de una población de otra especie dependiente, dentro de los límites de los requisitos de conservación convenidos.

En lo relativo a si un Estado ribereño debe responder del ejercicio de su autoridad sobre la totalidad de la zona ocupada por una población, incluidos el mar territorial y la zona exclusiva de pesca, podría considerarse inadecuado tratar de disminuir los derechos del Estado ribereño respecto de las pescas efectuadas dentro del mar territorial y de la zona exclusiva de pesca. Debe reconocerse, sin embargo, que sería anómalo que un sistema sólido de ordenación de pesquerías aplicase una serie de principios de conservación dentro de la zona territorial y la zona exclusiva de pesca y otra serie de principios contradictorios en las zonas inmediatamente adyacentes a la misma.

8) Todos los países que participan en una pesquería internacionalmente explotada deben cooperar con la autoridad ordenadora designada

Los participantes deben sufragar una parte equitativa de los costos de ordenación de los recursos en proporción a los beneficios que obtienen de ellos y deben facilitar la información necesaria para los fines de la ordenación (capturas, esfuerzo, estadísticas biológicas, etc.). Las contribuciones de los participantes podrían consistir por ejemplo en programas de investigación. No debería esperarse que unos pocos participantes asuman esa carga en nombre de todos los demás, si bien la responsabilidad primordial será la del Estado ribereño.

9) Debe mantenerse la calidad de las aguas oceánicas

Según se expone en la sección II, se ha aceptado el principio de que la ordenación de los recursos pesqueros no puede separarse de la ordenación del medio marino en conjunto. Mantener la calidad del medio es necesario por dos razones; en primer lugar, para hacer que la capacidad reproductiva y otros procesos biológicos de las especies no se vean en peligro a causa de la degradación del medio, y, segundo, conseguir que los contaminantes peligrosos para la vida y la salud del hombre no se concentren en la cadena de alimentación marina hasta el punto de que una especie no se pueda usar para el consumo humano. También en este caso el Estado ribereño tiene un interés y una responsabilidad especiales, según se reconoció en la Conferencia de Estocolmo.

## V. PRINCIPIOS CIENTIFICOS

Como se ha observado anteriormente (Sección IV, Principio 3), todos los sistemas de ordenación de pesquerías deben basarse en determinados principios científicos básicos a fin de mantener la productividad del recurso y el valor de las capturas. A continuación se mencionan ejemplos de tales principios. Esos ejemplos no se proponen ser exhaustivos ni detallados, sino ilustrativos de la importancia de los factores científicos para una ordenación racional. El estado dinámico de la ciencia de las pesquerías requiere una revisión frecuente sobre una base mundial. Dicha revisión y la ulterior elaboración de principios científicos pueden llevarse a cabo muy adecuadamente por conducto de organismos técnicos especializados.

### 1) Las poblaciones deben explotarse como unidades separadas

Pocas especies forman mezclas homogéneas de individuos en todas las variedades de la especie. Por el contrario, dichos individuos tienden a agruparse en poblaciones separadas, asociadas con frecuencia a determinadas características oceanográficas, como sistemas de corrientes o distintas zonas de la plataforma, con escaso intercambio entre los diferentes grupos. Cada grupo tiene una serie particular de características biológicas, como la tasa de crecimiento o la tasa de mortalidad, según su constitución genética y el medio en que vive. Cada grupo responde a la presión de la pesca de modo diferente, según el volumen de la población de que se trate y sus características propias. Deben idearse procedimientos de ordenación que tomen en cuenta las diversas características de cada población.

Las zonas habitadas por dichas poblaciones varían de tamaño, pero en lo que respecta a las especies costeras suelen estar bien delimitadas. Algunas poblaciones pueden ocupar las aguas costeras de diversos Estados adyacentes; otras se limitan a las aguas adyacentes de un solo Estado. En cualquier caso, la población debe explotarse como un todo para que esa explotación sea eficaz. Esto no quiere decir que cada población deba explotarse aisladamente de otras poblaciones de la misma especie, o de otras especies. El sistema debe ser eficaz respecto de especies explotadas a lo largo de amplias zonas costeras; de otro modo, el esfuerzo de pesca se desvía simplemente hacia especies o poblaciones que no están sometidas a reglamentación.

### 2) La explotación de poblaciones unitarias debe controlarse de modo que la producción de nuevos grupos de edad sea máxima

Si el nivel de explotación es muy bajo, tal vez no se aproveche toda la productividad posible de la población y las capturas anuales sean inferiores a las posibilidades. Lo mismo ocurre cuando el nivel de explotación es muy elevado, por cuanto el volumen de la población tal vez se reduzca hasta el punto en que la producción anual de nuevos individuos sea inferior a la que la especie puede mantener. En condiciones extremas de pesca excesiva, tal vez se reduzca la población hasta el punto en que no sea posible la pesca comercial. Por lo tanto, es preciso que escapen peces suficientes para garantizar la presencia constante de una población desovadora suficiente.

3) Cada grupo de edades de una especie que llega a la fase en que puede pescarse debe ser pescado en el momento en que las capturas puedan ser más elevadas

A medida que un grupo de edad envejece, adquiere peso en conjunto debido al crecimiento de los individuos, y lo pierde a causa de la mortalidad natural. En un principio, el crecimiento es rápido y los aumentos superan a las pérdidas. En el momento en que dichos aumentos y pérdidas están en equilibrio, el grupo de edad alcanza su peso máximo, y es en este momento cuando pueden lograrse las capturas más elevadas, teniendo en cuenta, sin embargo, consideraciones económicas y sociales pertinentes. Cuando existe una fuerte explotación, se tiende a capturar peces demasiado pequeños y las capturas son inferiores a lo que pudieran ser si se dejase que crecieran los individuos.

La densidad de los distintos grupos de edad varía con frecuencia de un año a otro, pero, en general, puede preverse, en ocasiones con varios años de antelación, el momento en que las capturas de un determinado grupo de edad serán más fructíferas. Esto permite planear las operaciones de pesca de modo que se aprovechen al máximo las poblaciones.

## VI. FUNCION DE LAS COMISIONES INTERNACIONALES

En opinión de la delegación del Canadá, únicamente el Estado ribereño puede aplicar eficazmente los anteriores principios para la ordenación de las especies costeras. El Estado ribereño es el que más tiene que perder si no se aprovechan las poblaciones adyacentes de modo racional. Sólo el Estado ribereño se encuentra en condiciones de adoptar rápidamente medidas en respuesta a necesidades urgentes de conservación. Por razones geográficas, el Estado ribereño se encuentra en las mejores condiciones para asumir y ejercer la autoridad. Dicha autoridad sería la consecuencia natural de las responsabilidades que el Estado ribereño deberá afrontar con respecto a las especies costeras.

Sin embargo, el sistema de ordenación de las especies costeras por parte del Estado ribereño previsto por la delegación del Canadá no impediría que las comisiones internacionales de pesca desempeñaran una función dentro del sistema. En opinión de la delegación del Canadá, dichas comisiones podrían desempeñar una importante función asesora con respecto al Estado ribereño en el cumplimiento de sus funciones de ordenación. Se han examinado ya determinados alimentos concretos de dicha función asesora en relación con algunos de los principios anteriormente bosquejados. En términos más generales, las comisiones internacionales de pesca, establecidas sobre una base regional e integradas tanto por Estados ribereños como por Estados que pescasen en aguas distantes, podrían constituir un foro de cooperación y consulta y, en particular, un mecanismo sumamente útil para la obtención, presentación y análisis de los datos estadísticos y biológicos necesarios a los fines de la ordenación. Análogamente, podrían instituirse formas particulares de consulta y cooperación, estableciéndose o no una comisión oficial, en los casos en que determinadas poblaciones de especies costeras quedaran bajo la autoridad de dos o más Estados ribereños vecinos. En lo que respecta a los casos en que especies migratorias de habitat muy amplio se encuentran temporalmente en aguas cuya ordenación está sometida a la autoridad de un Estado ribereño, dicho Estado debería ser miembro de la comisión competente que estuviera encargada de la ordenación de esa especie migratoria.

7. Estados Unidos de América: proyecto revisado de artículo  
sobre las pesquerías\*

I. AUTORIDAD REGULADORA

La autoridad para reglamentar los recursos vivos de la alta mar se determinará según las características biológicas de éstos y se ejercerá de manera que asegure su conservación, máxima utilización y equitativa distribución.

II. RECURSOS COSTEROS Y ANADROMOS

El Estado ribereño reglamentará todos los recursos vivos costeros frente a su litoral más allá del mar territorial y hasta los límites de su ámbito migratorio y tendrá derechos preferenciales a ellos. El Estado ribereño en cuyas aguas dulces y estuarios desoven especies anadrómicas (por ejemplo, el salmón) tendrá autoridad para reglamentar esos recursos más allá del mar territorial en todo su ámbito migratorio en la alta mar y tendrá derechos preferenciales a tales recursos (independientemente de que se hallen o no frente al litoral de dicho Estado).

A. Se entiende por "recursos costeros" todos los recursos vivos frente al litoral de un Estado ribereño, excepción hecha de las especies de carácter muy migratorio enumeradas en el anexo A a/ y de los recursos anádromos.

B. El Estado ribereño podrá reservar anualmente a los buques de su pabellón, de conformidad con las disposiciones del presente artículo, la parte de esos recursos costeros y anádromos que tales buques puedan capturar.

C. Los recursos costeros y anádromos situados en aguas adyacentes a más de un Estado ribereño, o que migren a través de esas aguas, se regularán mediante acuerdo entre tales Estados.

III. RECURSOS OCEANICOS DE CARACTER MUY MIGRATORIO

Los recursos oceánicos de carácter muy migratorio enumerados en el anexo A serán reglamentados por las organizaciones competentes internacionales de pesca.

A. Cualquier Estado parte ribereño o cualquier otro Estado parte cuyo pabellón enarbolan los buques que capturen o pretendan capturar una especie reglamentada tendrá derecho a participar en tales organizaciones en condiciones de igualdad.

B. Ningún Estado parte cuyo pabellón enarbolan los buques que capturen recursos reglamentados podrá negarse a cooperar con tales organizaciones. Los reglamentos dictados por esas organizaciones de conformidad con el presente artículo se aplicarán a todos los buques que pesquen los recursos reglamentados, cualquiera que sea su nacionalidad.

C. Cuando los Estados interesados no puedan constituir una organización internacional, o lo consideren innecesario, los recursos se reglamentarán mediante acuerdos o consultas entre tales Estados.

---

\* Publicado inicialmente con la signatura A/AC.138/SC.II/L.9.

a/ No se adjunta el anexo A.

#### IV. PRINCIPIOS RELATIVOS A LA CONSERVACION

A fin de asegurar la conservación de los recursos vivos del mar, el Estado ribereño, o la organización internacional competente, aplicará los siguientes principios:

A. Dictará disposiciones sobre la pesca permisible y otras medidas de conservación a base de los datos más fidedignos de que disponga, con miras a mantener o restablecer el máximo rendimiento sostenible, teniendo en cuenta los factores ambientales y económicos pertinentes.

B. Para ello aportará e intercambiará regularmente datos científicos, estadísticas de pesca y pesquerías y toda la demás información pertinente.

C. En las medidas de conservación y en su aplicación no discriminará de hecho ni de derecho contra ningún pescador. Las medidas de conservación permanecerán en vigor hasta que se resuelva, de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente artículo, cualquier diferencia sobre su validez.

#### V. UTILIZACION Y DISTRIBUCION

Con miras a asegurar la máxima utilización y equitativa distribución de los recursos costeros y anádromos, los Estados ribereños aplicarán los siguientes principios:

A. El Estado ribereño podrá reservar a los buques que enarbolan su pabellón la parte de la pesca anual permisible que esos buques puedan capturar.

B. El Estado ribereño permitirá a otros Estados, en condiciones razonables, el acceso a la parte de los recursos que no aprovechen enteramente sus buques, según el siguiente orden de prioridad:

1) Los Estados que hayan pescado tradicionalmente una especie, con sujeción a las condiciones del apartado C;

2) Otros Estados de la región, en particular los Estados sin litoral y otros Estados con acceso limitado a los recursos pesqueros, con los que se hayan concertado acuerdos de explotación en común o de reciprocidad; y

3) Todos los Estados sin discriminación.

C. Cuando sea necesario ajustar las porciones asignadas a los Estados ribereños, la pesca tradicional podrá reducirse de modo que no se haga discriminación entre los Estados que hayan pescado tradicionalmente una especie determinada, de la manera siguiente:

(Se negociará en la Subcomisión II una fórmula que tenga en cuenta los intereses de los Estados pesqueros tradicionales.)

Podrá requerirse a los Estados cuyos pescadores capturen una especie reglamentada por un Estado ribereño a que, sin discriminación, paguen una suma razonable para sufragar la parte que le corresponda en los gastos de tal reglamentación.



## VI. NOTIFICACION Y CONSULTAS

El Estado ribereño notificará oportunamente a todos los Estados afectados cualesquiera reglamentos sobre conservación, utilización y distribución antes de ponerlos en práctica, y celebrará consultas con los demás Estados interesados.

## VII. ASISTENCIA TECNICA

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación establecerá y llevará un registro internacional de expertos independientes en pesquerías\*. Todo Estado en desarrollo que sea parte en la presente Convención que solicite asistencia podrá seleccionar un número apropiado de esos expertos para que le presten servicios constituyendo un grupo asesor en ordenación de pesquerías.

## VIII. APLICACION

Las medidas que se adopten en virtud del presente párrafo lo serán de tal modo que interfieran lo menos posible las actividades pesqueras y otras actividades en el medio marino.

A. Estado ribereño: El Estado ribereño podrá inspeccionar los buques de pesca y aprehender los que infrinjan sus reglamentos. El Estado ribereño podrá enjuiciar e imponer sanciones a los buques que efectúen operaciones de pesca con infracción de sus reglamentos; no obstante, cuando el Estado de nacionalidad de un buque tenga establecido un procedimiento para enjuiciar y castigar las infracciones de los reglamentos de pesca del Estado ribereño adoptados de conformidad con el presente artículo, el buque aprehendido será sin tardanza entregado, para su enjuiciamiento y sanción, a las autoridades debidamente autorizadas del Estado de su nacionalidad, el cual notificará en un plazo de seis meses al Estado ribereño la decisión dictada en el asunto.

B. Organizaciones de pesca internacionales: Todo Estado parte en una organización internacional dispondrá lo necesario para calificar de delito todo acto cometido por los buques de su pabellón en infracción de los reglamentos adoptados por tal organización de conformidad con el presente artículo. Los funcionarios autorizados de la organización internacional competente o de cualquier Estado facultado para ello por la organización, podrán inspeccionar los buques y aprehender los que infrinjan los reglamentos de pesca adoptados por tal organización. El buque aprehendido será entregado sin tardanza a las autoridades debidamente autorizadas del Estado de su pabellón. Solamente el Estado del pabellón del buque infractor tendrá competencia para juzgar el asunto o imponer cualquier sanción por infracción de los reglamentos de pesca adoptados por las organizaciones internacionales con arreglo al presente artículo. Tal Estado estará obligado a notificar en un plazo de seis meses a la organización encargada de la aplicación de los reglamentos la decisión dictada en el asunto.

---

\* De conformidad con el párrafo 13 de la resolución 2750 C (XXV) de la Asamblea General, la Subcomisión tal vez estime oportuno invitar al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación a que formule observaciones acerca de las posibilidades de esa organización para hacerse cargo de tales funciones.

## IX. SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja entre los Estados en relación con el presente artículo será resuelta, a petición de cualquiera de las partes en la controversia, por una comisión especial compuesta de cinco miembros, salvo que las partes convengan en resolverla por otro de los medios de arreglo pacífico previstos en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. La Comisión procederá de conformidad con las siguientes disposiciones:

A. Los miembros de la comisión, uno de los cuales será nombrado presidente, serán designados de común acuerdo por los Estados partes en la controversia dentro de los dos meses siguientes a la petición de arbitraje, conforme a las disposiciones del presente artículo. Si no se llega a un acuerdo, serán nombrados, a petición de cualquiera de las partes en la controversia y dentro de los dos meses siguientes, por el Secretario General de las Naciones Unidas, previa consulta con los Estados interesados y con el Presidente de la Corte Internacional de Justicia y el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de entre personas competentes que sean nacionales de Estados no envueltos en la controversia y especialistas en cuestiones jurídicas, administrativas o científicas de las pesquerías, según la naturaleza de la controversia que ha de resolverse. Las vacantes se cubrirán por el procedimiento seguido para los primeros nombramientos.

B. Todo Estado parte en el procedimiento en virtud del presente artículo podrá designar a uno de sus nacionales para que forme parte de la comisión especial, con derecho a intervenir plenamente en las actuaciones en igualdad de condiciones con los miembros de la comisión, pero sin derecho a votar ni a participar en la redacción de la decisión de la comisión.

C. La comisión estatuirá su propio reglamento, el que garantizará a cada una de las partes en el procedimiento, la posibilidad plena de ser oída y de exponer sus argumentos. También decidirá cómo han de ser distribuidos las costas y los gastos entre las partes en la controversia si éstas no llegan a ponerse de acuerdo al respecto.

D. En espera del fallo definitivo de la comisión especial, se aplicarán las medidas objeto de la controversia que se refieran a la conservación; la comisión podrá decidir si han de aplicarse otras medidas, y en qué grado, en espera de su fallo definitivo.

E. La comisión deberá dictar su fallo, que será obligatorio para las partes, dentro de los cinco meses siguientes a la fecha de su designación, a menos que decida, en caso necesario, prorrogar este término dos meses más como máximo.

F. Al dictar su fallo, la comisión especial deberá observar lo dispuesto en el presente artículo y en todo acuerdo entre las partes en la controversia convenido en ejecución del presente artículo.

## X. OTRAS UTILIZACIONES

La explotación de los recursos vivos se realizará teniendo debidamente en cuenta otras actividades en el medio marino.

## XI. CONVENCIONES EXISTENTES

Las disposiciones del presente artículo se podrán aplicar a las convenciones sobre pesca y a otros acuerdos internacionales sobre pesca que se encuentren ya en vigor.

8. Proyecto de artículos sobre el concepto de zona económica exclusiva  
presentado por Kenia\*

Artículo I

Todos los Estados tienen derecho a determinar los límites de su jurisdicción sobre los mares adyacentes a sus costas fuera de un mar territorial de 12 millas, conforme a criterios que tengan en cuenta sus factores geográficos, geológicos, biológicos, ecológicos, económicos y de seguridad nacional.

Artículo II

De conformidad con el artículo anterior, todos los Estados tienen derecho a establecer fuera del mar territorial una zona económica en beneficio de sus pueblos y de sus economías respectivas, en la cual ejercerán derechos soberanos sobre los recursos naturales para su exploración y explotación. Dentro de esa zona tendrán jurisdicción exclusiva a efectos del control, regulación y explotación y preservación de los recursos orgánicos e inorgánicos de la zona y de la prevención y control de la contaminación.

El Estado ribereño ejercerá su jurisdicción sobre su zona económica y los terceros Estados o sus nacionales serán responsables de los daños que originen sus actividades en la misma.

Artículo III

El establecimiento de esta zona no menoscabará el ejercicio de las libertades de navegación, sobrevuelo y tendido de cables y conductos submarinos reconocidas en el derecho internacional.

Artículo IV

El ejercicio de la jurisdicción sobre la zona comprenderá todos los recursos orgánicos e inorgánicos de la misma, se hallen en la superficie, en la columna de agua o en el suelo o el subsuelo de los fondos marinos y oceánicos.

Artículo V

Sin perjuicio de la competencia jurisdiccional general que le confiere el Artículo II, el Estado ribereño podrá promulgar normas especiales aplicables en su zona económica para los siguientes fines:

- a) Exploración y explotación exclusivas de los recursos marinos no renovables;
- b) Explotación con carácter exclusivo o preferente de los recursos renovables;

---

\* Publicado inicialmente con la signatura A/AC.138/SC.II/L.10.

- c) Protección y conservación de los recursos renovables;
- d) Control, prevención y eliminación de la contaminación en el medio marino;
- e) Investigación científica.

Todo Estado podrá solicitar autorización del Estado ribereño para explotar los recursos de la zona en las condiciones que se establezcan y de conformidad con las leyes y reglamentos del Estado ribereño.

#### Artículo VI

El Estado ribereño autorizará a los países vecinos sin litoral, de litoral reducido y de plataforma pequeña a explotar los recursos vivos dentro de su zona, siempre que las empresas de los Estados que deseen explotar esos recursos se hallen eficazmente controladas por el capital y el personal de aquel Estado.

Para darles efectividad, los derechos de los Estados sin litoral o de litoral reducido se complementarán con el derecho de acceso al mar y el derecho de tránsito. Estos derechos se enunciarán en acuerdos multilaterales, regionales o bilaterales.

#### Artículo VII

Los límites de la zona económica se fijarán en millas náuticas de conformidad con los criterios de cada región, tomando en consideración los recursos de la misma y los derechos e intereses de los Estados en desarrollo sin litoral, de litoral reducido o de plataforma pequeña y sin perjuicio de los límites adoptados por cualquier Estado comprendido en la región. La zona económica no excederá en ningún caso de las 200 millas náuticas, medidas a partir de las líneas de base trazadas para delimitar el mar territorial.

#### Artículo VIII

La delimitación de la zona económica entre Estados adyacentes u opuestos se llevará a cabo de conformidad con el derecho internacional. Las controversias que origine se resolverán de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y cualesquiera otros acuerdos regionales pertinentes.

#### Artículo IX

Los Estados en desarrollo vecinos se reconocerán recíprocamente sus derechos históricos. Se otorgarán asimismo un trato preferencial recíproco en la explotación de los recursos vivos de sus respectivas zonas económicas.

#### Artículo X

Todo Estado cuidará de que la exploración o explotación de recursos dentro de su zona económica se lleve a cabo con fines pacíficos exclusivamente, y de manera que no vulnere los intereses legítimos de otros Estados de la región o los de la comunidad internacional.

Los territorios sometidos a dominación y control extranjero, no tendrán derecho a establecer una zona económica.

9. Documento de trabajo presentado por Australia y Nueva Zelanda\*

PRINCIPIOS DE UN REGIMEN DE LA PESCA

Australia y Nueva Zelanda presentan a la Subcomisión este documento de trabajo para que lo examine junto con los documentos de otras delegaciones referentes a los problemas de la jurisdicción sobre los recursos vivos del mar o de su utilización.

El documento no representa forzosamente la opinión definitiva de los Gobiernos de Australia o de Nueva Zelanda. Con todo, a juicio de las delegaciones que lo patrocinan, parece útil formular unos principios que puedan servir de base a un nuevo régimen de los recursos vivos del mar.

El objetivo general de todo régimen debe ser señalar condiciones que permitan la explotación racional de cada población de peces. Además, hay que tener en cuenta las características especiales de los recursos pesqueros, en el sentido de que, aunque con capaces de renovarse, pueden muy bien agotarse con una explotación excesiva. Tales características son una de las razones del interés especial que tienen los Estados ribereños en los recursos pesqueros adyacentes a sus costas, interés que ya fue reconocido de forma limitada en la Convención de 1958 sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta Mar. Este interés comprende dos ámbitos de responsabilidad con miras a asegurar:

- a) la utilización racional de los recursos, incluida su ordenación para preservar las poblaciones de peces, y
- b) la máxima producción posible de alimentos a partir de los recursos disponibles.

Otra observación inicial es que una zona de recursos pesqueros ribereños, como la que se propone más adelante, podría fácilmente incorporarse en un concepto de zona económica que abarque todos los recursos, tanto vivos como no vivos.

Se mencionan más adelante diferentes estipulaciones según los diversos grupos de especies de peces. A este efecto, se pueden distinguir cuatro grupos principales: a) especies sedentarias; b) especies costeras; c) especies anadrómicas; y d) especies de amplio hábitat. A este respecto cabe remitirse a las páginas 2 y 3 del documento de trabajo del Canadá titulado "Ordenación de los recursos vivos del mar" (A/AC.138/SC.III/L.8).

En cuanto a las especies sedentarias, la posición actual es que estos recursos quedan comprendidos en la jurisdicción que sobre el fondo del mar tiene el Estado ribereño según la Convención de Ginebra de 1958 sobre la Plataforma Continental. No se propone ningún cambio en la jurisdicción del Estado ribereño a ese respecto. Además, en la zona situada fuera de esa jurisdicción sería conveniente que el organismo internacional de los fondos marinos cuya creación se proyecta, o cualquier otro órgano internacional, reglamentara los recursos vivos sedentarios. Por ello, los siguientes principios se basan, en la actual fase, en la hipótesis de que estas últimas especies sedentarias van a reglamentarse en otra parte.

---

\*Publicado inicialmente con la signatura A/AC.138/SC.II/L.11.

I. De conformidad con los Principios aquí enunciados, el Estado ribereño tendrá jurisdicción exclusiva sobre los recursos vivos del mar en una zona lo suficientemente amplia de la alta mar adyacente a su mar territorial.

(Comentario. Habrá que fijar unos límites concretos a la zona pesquera comprendido en la jurisdicción del Estado ribereño. El Concepto básico sería establecer la responsabilidad y el control del Estado ribereño sobre las especies costeras. Se trata de las especies no sedentarias que nadan libremente y que habitan zonas ricas en nutrientes adyacentes a la costa.)

II. El Estado ribereño será responsable de la debida ordenación y utilización de los recursos vivos situados en la zona de su jurisdicción exclusiva y en particular:

- a) del mantenimiento de las poblaciones a un nivel que permita el máximo rendimiento sostenible;
- b) de la utilización racional de los recursos y la promoción de la estabilidad económica, combinadas con la máxima producción posible de alimentos, y
- c) cuando los recursos se necesiten para el consumo humano directo en el Estado ribereño, de la asignación de la máxima prioridad posible a la producción de pescado para ese consumo.

(Comentario: En el desempeño de estas funciones, el Estado recurriría a las medidas mencionadas en el principio III.)

III. El Estado ribereño podrá adoptar entre otras, las siguientes medidas:

- a) exigir que se solicite su permiso para utilizar barcos y aparejos de pesca en la zona;
- b) limitar el número de barcos y de unidades de aparejos utilizables;
- c) especificar los aparejos de utilización permitida;
- d) fijar el período durante el cual se puede pescar o se pueden capturar peces de una especie o clase dada;
- e) fijar el tamaño de los peces que se pueden capturar;
- f) especificar el método de pesca que puede utilizarse en una determinada zona o en la pesca de una especie o clase dada de peces, y prohibir cualquier otro método.

IV. En virtud de su jurisdicción exclusiva, incumbirá al Estado ribereño determinar la captura permisible de una especie dada y reservarse la porción de esa captura permisible hasta en un 100%, que esté en condiciones de pescar.

(Comentario: La jurisdicción exclusiva significa que el Estado ribereño sería el que tomaría las decisiones preliminares y finales sobre los problemas que surgieran en relación con cualquier recurso. La jurisdicción

exclusiva no sería incompatible, sin embargo, con la existencia de procedimientos de asesoramiento o consulta para resolver los problemas básicos que otros Estados interesados pudieran plantear en relación con la administración por el Estado ribereño de su jurisdicción sobre los recursos costeros.)

V. El Estado ribereño, cuando no pueda pescar el 100% de la captura permisible de una especie dada según lo previsto en estos Principios, permitirá la entrada de barcos de pesca extranjeros con miras a mantener el máximo surtido posible de alimentos.

Tal acceso se conceuerá hasta el nivel de la captura permisible, sobre bases equitativas, sin imponer condiciones excesivas y sin hacer distinciones entre los nacionales de otros Estados salvo cuando se disponga otra cosa en virtud de acuerdos de reducción gradual de las capturas concertados de conformidad con estos Principios.

(Comentario: Se debe estudiar el problema de la percepción de derechos de pesca. Aun cuando, en vista de los impuestos y demás gravámenes pagaderos por los pescadores locales y del costo de proporcionar servicios de vigilancia e instalaciones, el Estado ribereño tal vez considere oportuno cobrar derechos de pesca más elevados a los barcos extranjeros, esos derechos no deberían ser excesivos.)

VI. Las medidas adoptadas por el Estado ribereño tendrán en cuenta la pesca tradicional de subsistencia que se efectúe en cualquier parte de la zona de pesca.

(Comentario: Quizá habrá que definir el concepto de "pesca tradicional de subsistencia" a fin de identificar claramente el alcance limitado de la pesca a que se refiere este Principio. Es posible que en la práctica la mejor manera de resolver el problema sea que los países interesados celebren acuerdos regionales.)

VII. El Estado ribereño, cuando se proponga reservarse toda la captura permisible de una especie de conformidad con estos Principios, celebrará consultas con cualquier otro Estado que lo solicite y que pueda demostrar que sus barcos se han dedicado a la pesca en la zona de recursos pesqueros en una escala apreciable durante un período no inferior a /diez/ años. La finalidad de tales consultas será:

- a) analizar las estadísticas de capturas y actividades del otro Estado con objeto de establecer el nivel de las operaciones pesqueras efectuadas en la zona por el otro Estado;
- b) negociar acuerdos especiales con el otro Estado en virtud de los cuales los barcos de pesca de este último irían reduciendo gradualmente sus actividades a medida que aumentara la capacidad de pesca del Estado ribereño; y
- c) en caso de no llegarse a un acuerdo en las consultas, el plazo de reducción gradual de las actividades pesqueras será de /cinco/ años.



VIII. El Estado ribereño, en el ejercicio de su jurisdicción sobre los recursos de la zona, tendrá facultades para abordar, aprehender y retener a los barcos pesqueros. Toda infracción de las condiciones en que se conceda un permiso o que se prescriban en una ley o un reglamento aplicable a la zona en virtud de estos Principios podrá ser juzgada por los tribunales del Estado ribereño interesado.

IX. En el caso de las especies de peces de "amplio hábitat" que se exploten dentro de la zona, el Estado ribereño participará en la formulación y aplicación de acuerdos internacionales relativos a la ordenación de la especie.

(Comentario: A tal respecto se tendrían en consideración los intereses particulares del Estado ribereño en esas especies.)

X. El Estado ribereño habrá de efectuar la investigación de los recursos de la zona a fin de estar en condiciones de desempeñar su cometido de ordenar debidamente y utilizar racionalmente esos recursos. Publicará los resultados de esa investigación dentro de un plazo razonable. Otros Estados que realicen operaciones pesqueras en la zona cooperarán en los programas de investigación y facilitarán a intervalos razonables, los datos completos sobre las capturas, las actividades y los recursos vivos que se les soliciten.

XI. En lo que respecta a las especies anadrómicas, se reconoce que el Estado ribereño de que se trate habrá de efectuar funciones onerosas y extraordinarias. En vista de ello, ese Estado ribereño debería tener el derecho exclusivo de ordenar las poblaciones de especies anadrómicas que se críen en sus aguas.

(Comentario: En lo relativo a las especies anadrómicas, cabe remitirse al documento de trabajo presentado por la delegación del Canadá.)

XII. Cuando un Estado alegue:

- a) que los recursos vivos de la zona distan mucho de estar suficientemente explotados, o
- b) que el Estado ribereño interesado deja de cumplir en grado considerable sus deberes en lo que se refiere a los principios de conservación generalmente convenidos,

podrá pedir al Estado ribereño que revise las medidas por él adoptadas. El Estado autor del alegato podrá solicitar que éste sea remitido a un órgano asesor de expertos, el que estaría facultado para hacer llegar sus conclusiones a los Estados interesados y, si lo estima oportuno, para hacer recomendaciones con miras a resolver la cuestión.

(Comentario: Debería preverse la designación del órgano asesor de expertos, bien por acuerdo de los Estados interesados o, en defecto de acuerdo, por otro procedimiento. Se podría recurrir a las organizaciones internacionales, incluidas las organizaciones regionales, que pudieran acceder a facilitar servicios al respecto. Si bien el ejercicio por el Estado ribereño de su jurisdicción estaría sujeto a investigación en lo relativo a las cuestiones mencionadas, el órgano de expertos tendría únicamente funciones de asesoramiento. La responsabilidad de la ordenación de los recursos debe entrañar la facultad de adoptar las decisiones finales necesarias para cumplir tal cometido.)

XIII. Se instituirán acuerdos internacionales, y en particular, cuando se estime oportuno, se crearán comisiones internacionales de pesca, con miras a la ordenación de las especies de "amplio hábitat" y, en su caso, de las especies "batipelágicas" y otras especies que habitan aguas situadas fuera de los límites de la jurisdicción nacional sobre recursos pesqueros. Todos los Estados tendrán el mismo derecho a participar en tales organizaciones.

(Comentario: En lo relativo a las especies de "amplio hábitat" véase también el Principio IX.)

XIV. /La función de los órganos internacionales./

(Comentario: Según se indica en el documento de trabajo del Canadá, el concepto de la responsabilidad del Estado ribereño no impide que desempeñen un papel las comisiones internacionales de pesca. Tales comisiones pueden ser de carácter universal o regional y prestar importantes servicios de asesoramiento al Estado ribereño en el cumplimiento por este último de sus funciones.)

XV. El Estado ribereño habrá de velar por que las operaciones de pesca en la zona pesquera se lleven a cabo teniendo debidamente en cuenta otras actividades en el medio marino.

Esas otras actividades se llevarán a cabo teniendo debidamente en cuenta las operaciones de pesca que se realicen en la zona.

(Comentario: En particular, habría que evitar todo daño a los aparejos de pesca. Convendría que todo litigio sobre la manera de conciliar las utilidades en pugna de la zona se solventen mediante un procedimiento obligatorio, a menos que las partes se pongan de acuerdo sobre otro medio de arreglo, dentro de un plazo razonable.)

10. Propuestas sobre un régimen de la pesca en  
alta mar presentadas por el Japón\*

Resumen de las propuestas

El presente documento, que contiene entre otras cosas una serie de propuestas sobre los derechos preferenciales de los Estados ribereños en cuanto a la pesca en la alta mar, tiene por objeto formular un ajuste amplio y equitativo de los intereses de los Estados en la explotación y utilización de los recursos vivos de la alta mar, teniendo en cuenta el grado en que los Estados tanto ribereños como no ribereños dependen de la pesca. Si bien conceden a los Estados ribereños en desarrollo un derecho de pesca preferencial correspondiente a sus respectivas capacidades de pesca y derecho preferencial diferenciado a los Estados ribereños desarrollados, las propuestas también toman en consideración los legítimos intereses de otros Estados. Así, tratan de asegurar la posibilidad de llegar a un ajuste gradual de intereses en relación con la explotación y utilización crecientes de los recursos pesqueros de la alta mar, sin provocar ningún cambio brusco en la actual situación de las pesquerías que pudiera traducirse en una perturbación de las estructuras económicas y sociales de los Estados. Las propuestas pueden resumirse del modo siguiente:

- i) Las normas generales propuestas acerca de los derechos preferenciales de los Estados ribereños tienen por objeto asegurar una protección suficiente a las pesquerías costeras de los Estados, particularmente los Estados ribereños en desarrollo, en relación con las actividades de pesca en aguas distantes que llevan a cabo otros Estados en aguas adyacentes al límite de 12 millas;
- ii) En virtud de esos derechos preferenciales un Estado ribereño en desarrollo podrá disfrutar anualmente de una asignación de recursos correspondiente a su capacidad de pesca; la tasa de crecimiento de la capacidad de pesca de ese Estado ribereño en desarrollo se tomará debidamente en cuenta hasta que tal Estado pueda capturar una proporción importante de la pesca permisible. En virtud de esos derechos un Estado ribereño desarrollado podrá disfrutar de la asignación de recursos que sea necesaria para el mantenimiento de las pesquerías costeras cuyas actividades se desarrollen localmente en pequeña escala; los intereses de las pesquerías establecidas tradicionalmente de otros Estados se tomarán debidamente en cuenta al determinar la parte de la pesca permisible así reservada.
- iii) Dado que las situaciones difieren considerablemente según las zonas del mar, las normas generales para la protección de los intereses de los Estados ribereños deberán ser suficientemente flexibles en lo que respecta a los métodos que han de utilizarse para proteger esos intereses, a fin de que las partes puedan adoptar cualesquier medidas que resulten eficaces y adecuadas a los distintos casos. Los puntos esenciales de la protección, es decir, las medidas concretas aplicables para poner en práctica los derechos preferenciales de los Estados ribereños, serán objeto de negociaciones entre los Estados ribereños y no ribereños interesados y deberán fijarse de común acuerdo;

---

\* Publicadas inicialmente con la signatura A/AC.138/SC.II/L.12.

- iv) De fracasar las negociaciones, la controversia se someterá a un órgano de expertos cuya decisión tendrá fuerza obligatoria, a menos que la controversia se resuelva por cualquier otro medio que convengan las partes interesadas. Mientras dure la controversia, los Estados que pesquen en aguas distantes contraerán obligaciones para restringir sus actividades pesqueras con arreglo a planes concretos previstos en las medidas temporales (6.1 de la propuesta).
- v) Al celebrar un acuerdo sobre el derecho preferencial de un Estado ribereño en desarrollo, deberá existir una cooperación internacional en la esfera de las pesquerías y otras industrias conexas entre el Estado ribereño en desarrollo y otros Estados pesqueros interesados, a fin de hacer más efectiva la protección de los intereses de ese Estado ribereño en desarrollo.
- vi) No se reconocerá a los Estados ribereños ningún estatuto especial en lo que respecta a la conservación ni derechos preferenciales de pesca en lo que respecta a la captura de poblaciones de peces de carácter muy migratorio, incluidas las especies anadrómicas. La conservación y reglamentación de esas poblaciones se llevará a cabo mediante consultas o acuerdos internacionales o regionales o, en su caso, por conducto de las comisiones pesqueras regionales existentes a/.
- vii) En la aplicación de las normas, los Estados retendrán la jurisdicción sobre las embarcaciones de su pabellón, aun cuando se reconocerá el derecho de los Estados ribereños a inspeccionar las embarcaciones extranjeras para determinar las infracciones y a aprehender las embarcaciones infractoras, que serán entregadas sin tardanza a los Estados de pabellón.

#### DISPOSICIONES GENERALES

1.1 El régimen propuesto se aplica a las pesquerías en la alta mar en las zonas adyacentes al límite de 12 millas desde la costa de un Estado, medidas de conformidad con las normas pertinentes del derecho internacional (en adelante esas zonas se llamarán "aguas adyacentes").

1.2 Todos los Estados tienen el derecho de que sus nacionales se dediquen a la pesca en alta mar, con sujeción al presente régimen y a sus obligaciones convencionales.

---

a/ El problema de la conservación y reglamentación de las poblaciones anadrómicas (por ejemplo, el salmón) es un problema limitado que afecta a unos pocos países en ciertas regiones y, como tal, ya se ocupan de él los organismos pesqueros existentes, tales como la Comisión Pesquera Japón-URSS para el Pacífico Nordoccidental, la Comisión Pesquera Internacional del Pacífico Septentrional (INPFC), la Comisión Internacional para las Pesquerías del Atlántico Nordoccidental, la Comisión Pesquera del Atlántico Nordoriental (NEAFC) y la Comisión Internacional Estados Unidos-Canadá para la Pesca del Salmón en el Pacífico.

1.3 El régimen propuesto no afectará a los derechos y obligaciones que correspondan a los Estados en virtud de los acuerdos internacionales vigentes en relación con determinadas pesquerías en la alta mar.

## CONSERVACION DE LOS RECURSOS PESQUEROS

### 2.1 Objetivo de las medidas de conservación

El objetivo de las medidas de conservación es obtener un rendimiento máximo constante de los recursos pesqueros y de este modo asegurar y mantener un abastecimiento máximo de alimentos y de otros productos marinos.

### 2.2 Obligación de adoptar medidas de conservación

1) En los casos en que los nacionales de un Estado se dediquen exclusivamente a la pesca de una determinada población de peces, tal Estado adoptará cuando sea necesario medidas de conservación apropiadas.

En los casos en que los nacionales de dos o más Estados se dediquen a la pesca de una determinada población de peces, esos Estados, a petición de cualquiera de ellos, negociarán y celebrarán acuerdos con miras a la adopción de medidas de conservación apropiadas.

Esas medidas de conservación deberán ser compatibles con el objetivo de la conservación a que se hace referencia en el párrafo 2.1 supra, y se adoptarán teniendo en cuenta los principios a que se hace referencia en el párrafo 2.3 infra.

2) En los casos en que los Estados ya hayan adoptado medidas de conservación con respecto a una determinada población de peces que sea explotada por sus nacionales, un Estado que, no habiéndolo hecho antes, empiece a pescar esa población adoptará sus propias medidas de conservación, que han de ser tan restrictivas como las medidas vigentes, hasta que todos los Estados interesados celebren nuevos acuerdos. Si las medidas de conservación vigentes comprenden una limitación de las capturas o alguna otra reglamentación que no permita dedicarse a la pesca de la población de peces de que se trata, a los nacionales del Estado que antes no participaba en esa pesca, los Estados que apliquen las medidas de conservación vigentes entablarán inmediatamente negociaciones con ese Estado a fin de celebrar nuevos acuerdos. Mientras no se celebren esos acuerdos, los nacionales de ese Estado deberán abstenerse de dedicarse a la pesca de la población de que se trate.

3) Los Estados recurrirán en todo lo posible a las organizaciones pesqueras internacionales o regionales para la adopción de medidas de conservación apropiadas.

### 2.3 Principios básicos relativos a las medidas de conservación

1) Las medidas de conservación deberán adoptarse sobre la base de los datos científicos más exactos de que se disponga. Si los Estados interesados no pueden llegar a un acuerdo en lo que respecta a la evaluación de las condiciones de la población de peces a la que han de aplicarse medidas de conservación, pedirán a un órgano internacional apropiado o a otro tercero imparcial que lleve a cabo esa evaluación.

A fin de obtener la evaluación más justa posible de las condiciones de la población, los Estados interesados cooperarán en el establecimiento de instituciones regionales para el estudio y la investigación de los recursos pesqueros.

2) En las medidas de conservación no se discriminará de hecho ni de derecho entre los pescadores de un Estado y los de otros Estados.

3) Las medidas de conservación se determinarán, en todo lo posible, sobre la base de la pesca permisible calculada con respecto a las distintas poblaciones de peces. Sin embargo, el principio que antecede no impedirá que las medidas de conservación se determinen partiendo de otras bases en los casos en que, por falta de datos suficientes, no sea posible calcular la pesca permisible con un grado razonable de precisión.

4) Ningún Estado podrá eximirse de la obligación de adoptar medidas de conservación alegando la falta de datos científicos suficientes.

5) Las medidas de conservación que se adopten se elaborarán de modo tal que se reduzca al mínimo toda interferencia en las actividades pesqueras relativas a poblaciones de peces, caso de haberlas, que no sean objeto de esas medidas.

6) Las medidas de conservación y los datos sobre la base de los cuales se adopten tales medidas serán objeto de revisión a intervalos apropiados.

#### 2.4 Estatuto especial de los Estados ribereños en materia de conservación de recursos

Se reconocerá un estatuto especial al Estado ribereño en lo que respecta a la conservación de los recursos pesqueros en sus aguas adyacentes. Así, el Estado ribereño tendrá derecho a participar en condiciones de igualdad en cualquier estudio sobre los recursos pesqueros que se efectúe en sus aguas adyacentes a efectos de la conservación, independientemente de que los nacionales de ese Estado ribereño participen o no efectivamente en la pesca de las poblaciones de que se trate. A petición del Estado ribereño, los Estados no ribereños que efectúen el estudio deberán poner a su disposición las conclusiones de sus estudios e investigaciones sobre esas poblaciones de peces.

Asimismo, excepto en lo que se refiere a las medidas temporales (6.1 infra), no podrá adoptarse ninguna medida de conservación en lo que respecta a ninguna población de peces sin el consentimiento del Estado ribereño cuyos nacionales se dediquen a la pesca de la población de que se trate (o de la mayoría de los Estados ribereños en los casos en que haya tres o más de esos Estados ribereños).

Un Estado ribereño tendrá, al mismo tiempo, la obligación de adoptar, en cooperación con otros Estados, las medidas que sean necesarias para mantener la productividad de los recursos pesqueros en sus aguas adyacentes a un nivel que permita una utilización eficaz y racional de dichos recursos.

### DERECHOS PREFERENCIALES DE LOS ESTADOS RIBEREÑOS

#### 3.1 Derechos preferenciales

En la medida compatible con el objetivo de la conservación, el Estado ribereño tendrá un derecho preferencial a velar por la adecuada protección de la pesca costera que efectúa en sus aguas adyacentes.

i) En el caso de un Estado ribereño en desarrollo:

El Estado ribereño tiene derecho a reservar anualmente para las embarcaciones de su pabellón la porción de la pesca permisible de la población de peces que pueda recoger de sus pesquerías costeras sobre la base de su capacidad pesquera. Al determinar la parte de la pesca permisible que ha de reservarse para el Estado ribereño en desarrollo, se tendrá en cuenta la tasa de crecimiento de la capacidad pesquera de ese Estado hasta que haya desarrollado esa capacidad en una medida que le permita pescar una proporción importante b/ de la pesca permisible de la población de peces.

ii) En el caso de un Estado ribereño desarrollado:

El Estado ribereño tiene derecho a reservar anualmente para las embarcaciones de su pabellón la porción de la pesca permisible de una población de peces que sea necesaria para el mantenimiento de las pesquerías costeras cuyas actividades se desarrollen localmente en pequeña escala. Los intereses de las pesquerías tradicionalmente establecidas de otros Estados se tomarán debidamente en cuenta al determinar la captura que ha de reservarse para tales pesquerías costeras en pequeña escala.

### 3.2 Aplicación de los derechos preferenciales

1) Las medidas para poner en práctica los derechos preferenciales se determinarán mediante acuerdo entre los Estados ribereños y no ribereños interesados, sobre la base de propuestas hechas por el Estado ribereño. Para los efectos de tales propuestas, el Estado ribereño podrá solicitar la asistencia técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación o de cualesquiera otros órganos competentes.

2) El alcance del derecho preferencial de un Estado ribereño se fijará dentro del límite de la pesca permisible de la población de peces sujeta a distribución cuando la pesca permisible respecto de esa población esté ya calculada para fines de conservación. En los casos en que no se disponga de ningún cálculo sobre la pesca permisible, los Estados ribereños y no ribereños interesados se pondrán de acuerdo sobre las medidas necesarias de tal modo que el Estado ribereño se encuentre en la mejor posición para beneficiarse plenamente de su derecho preferencial.

3) Las medidas de reglamentación adoptadas para poner en práctica el derecho preferencial del Estado ribereño podrán incluir la distribución de la captura (cuotas por países) u otras medidas complementarias que sean aplicables a embarcaciones de Estados no ribereños dedicados a la pesca en las aguas adyacentes del Estado ribereño, entre otras:

a) La fijación de temporadas de peces y de veda, durante las cuales se podrá o no pescar,

b) el cierre de determinadas zonas a la pesca,

---

b/ Por ejemplo, aproximadamente un 50%.



c la reglamentación de los aparejos o equipos de pesca que puedan utilizarse,

d la limitación de la captura de una población determinada de peces que se pueda recoger.

4) Las medidas de reglamentación que se adopten se elaborarán de modo tal que se reduzca al mínimo toda interferencia en la pesca por Estados no ribereños de poblaciones de peces, caso de haberlas, que no queden comprendidas en tales medidas.

5) Los Estados no ribereños cooperarán con los Estados ribereños intercambiando la información científica disponible, las estadísticas sobre capturas y actividades y los demás datos pertinentes.

6) En los casos en que nacionales de dos o más Estados ribereños que tengan derechos preferenciales se dediquen a la pesca de una misma población de peces, ningún Estado ribereño podrá invocar su derecho preferencial con respecto a tal población sin el consentimiento del otro Estado o los otros Estados interesados. En tal caso, esos Estados ribereños celebrarán consultas regionales con los demás Estados interesados a fin de poner en práctica sus derechos preferenciales.

7) Las medidas adoptadas en virtud de este párrafo estarán sujetas a revisión al transcurrir los períodos que se convengan por los Estados interesados.

### 3.3 Cooperación internacional

Para contribuir al desarrollo de la capacidad pesquera del Estado ribereño en desarrollo y facilitar de ese modo el pleno goce de su derecho preferencial, se establecerá una cooperación internacional en materia de pesca e industrias afines entre el Estado ribereño en desarrollo y otros Estados pesqueros al llegar a un acuerdo sobre el derecho preferencial del Estado ribereño en desarrollo.

## REGLAMENTACION DE LAS POBLACIONES DE PECES DE CARACTER MUY MIGRATORIO

4.1 No se reconocerá al Estado ribereño ningún estatuto especial en materia de conservación de recursos (2.4) ni ningún derecho preferencial (3.1) con respecto a las poblaciones de peces de carácter muy migratorio, incluidas las especies anadrómicas. La conservación y reglamentación de tales poblaciones se efectuará conforme a consultas o acuerdos internacionales en que participarán todos los Estados interesados o, en su caso, por conducto de las organizaciones internacionales o regionales de pesca existentes.

## APLICACION

### 5.1 Derecho de control de los Estados ribereños

Por lo que respecta a las medidas de reglamentación adoptadas de conformidad con el presente régimen, los Estados ribereños que tengan derechos preferenciales o un estatuto especial en materia de conservación, tienen derecho a controlar las actividades de pesca en sus aguas adyacentes respectivas. En ejercicio de ese derecho, los Estados ribereños podrán inspeccionar las embarcaciones de otros



Estados y aprehender las que infrinjan las medidas de reglamentación adoptadas. No obstante, las embarcaciones aprehendidas serán entregadas sin tardanza a los Estados de su pabellón. Los Estados ribereños no podrán negarse a que otros Estados participen en el control de la operación, inclusive mediante la presencia a bordo de los guardapescas de los Estados ribereños de inspectores de los otros Estados a petición de éstos. Los detalles de las medidas de control se determinarán de común acuerdo entre las partes interesadas.

## 5.2 Jurisdicción

a) Todos los Estados calificarán de delito todo acto cometido por sus nacionales en infracción de cualquier medida de reglamentación adoptada de conformidad con el presente régimen.

b) El Estado de pabellón de una embarcación que infrinja las medidas de reglamentación en vigor incoará el debido procedimiento contra sus nacionales presentes a bordo de la misma.

c) Los informes preparados por las autoridades de un Estado ribereño sobre el delito cometido por una embarcación de un Estado no ribereño serán aceptados sin reserva por este último Estado, que notificará lo antes posible al Estado ribereño la decisión dictada en el asunto.

## MEDIDAS TEMPORALES Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

### 6.1 Medidas temporales

Si los Estados no interesados no llegan a un acuerdo al cabo de seis meses de negociaciones sobre las medidas relativas a los derechos preferenciales, de conformidad con el párrafo 3.1, o sobre las disposiciones relativas a las medidas de conservación, según lo dispuesto en el párrafo 2.2, cualquiera de esos Estados podrá iniciar el procedimiento para la solución de controversias. Los Estados interesados adoptarán medidas temporales hasta que se resuelva el litigio. Tales medidas no menoscabarán en modo alguno la posición respectiva de los Estados interesados con respecto a la controversia de que se trate.

a) Cuando el objeto de la controversia sea la limitación de las capturas, todos los Estados partes en la controversia adoptarán las medidas necesarias para que sus capturas anuales de la población de peces de que se trate no excedan de su promedio anual de capturas durante los /cinco/ años anteriores.

b) Cuando sean objeto de la controversia otros factores, como por ejemplo, bancos pesqueros, aparejos de pesca o temporadas de pesca, relacionados con medidas de aplicación del derecho preferencial de un Estado ribereño o con disposiciones relativas a medidas de conservación, los otros Estados interesados adoptarán las últimas propuestas formuladas por el Estado ribereño con respecto a la cuestión litigiosa. No obstante, los otros Estados quedarán exentos de tal obligación si la adopción de la propuesta del Estado ribereño afectare gravemente sus capturas permisibles de conformidad con el precedente apartado a) o sus capturas de alguna otra población de peces que estén explotando apreciablemente y que no estén relacionadas con el derecho preferencial de un Estado ribereño. En tal caso, los otros Estados adoptarán todas las medidas posibles que consideren apropiadas para la protección de las pesquerías costeras de que se trate.

c) Cualquiera de las partes en la controversia podrá pedir a la Comisión Especial que acuerde medidas provisionales respecto de la cuestión controvertida.

d) Cada uno de los Estados informará a la Comisión Especial establecida conforme al párrafo 6.2, así como a todos los demás Estados interesados, acerca de las medidas temporales específicas que haya tomado conforme a cualquiera de las disposiciones precedentes.

## 6.2 Procedimiento para la solución de controversias (Comisión Especial)

Cualquier controversia que pueda surgir entre Estados dentro del presente régimen será sometida por cualquiera de los Estados interesados a una Comisión Especial competente de cinco miembros conforme al procedimiento siguiente, salvo que las partes interesadas convengan en dirimir la controversia por alguna otra de las medidas previstas en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.

a) Entre los nacionales de las partes podrá nombrarse a dos miembros como máximo, de los cuales uno será nacional del Estado ribereño y otro del Estado no ribereño.

b) Las decisiones de la Comisión Especial se adoptarán por mayoría de votos y obligarán a las partes.

c) La Comisión Especial decidirá dentro de los seis meses siguientes a la fecha de su constitución.

d) No obstante las medidas temporales adoptadas por las partes conforme al párrafo 6.1, la Comisión Especial cuando lo estime necesario, podrá acordar la aplicación de medidas provisionales a petición de cualquiera de las partes o por propia iniciativa. La Comisión adoptará su decisión final dentro de los seis meses siguientes a su decisión sobre tales medidas provisionales.

## OTRAS DISPOSICIONES

### 7.1 Cooperación con los Estados en desarrollo

A los efectos de promover el fomento de las industrias pesqueras y el consumo interno y las exportaciones de productos pesqueros de los Estados en desarrollo, incluidos los Estados sin litoral, los Estados desarrollados no ribereños cooperarán con los Estados en desarrollo por todos los medios posibles en esferas tales como el estudio de los recursos pesqueros, la expansión de la capacidad pesquera, la construcción de instalaciones de almacenamiento y elaboración y el mejoramiento de los sistemas de comercialización.

### 7.2 Cooperación dentro de las comisiones regionales de pesca

La cooperación entre Estados ribereños y no ribereños dentro del presente régimen se efectuará, en todo lo posible, por conducto de comisiones regionales de pesca. A tal fin, los Estados interesados tratarán de reforzar las comisiones existentes y cooperarán para crear nuevas comisiones siempre que sea conveniente y factible.

11. Propuestas para la futura organización de los trabajos de la Subcomisión II presentadas por Australia y Canadá\*

1. Una vez convenida la lista de temas y cuestiones, la organización de los futuros trabajos de la Subcomisión II debería ser objeto de consultas con miras a llegar a un acuerdo que adelante la labor de la Comisión.
2. Seguidamente se esboza en líneas generales un método posible para ello. Incluye dos fases principales.
3. La primera fase sería separar de la lista los asuntos que incumben a las Subcomisiones I y III y que éstas ya están examinando o han de examinar.
4. La segunda fase consistiría en agrupar en distintas secciones los restantes temas y cuestiones, es decir los asuntos comprendidos en el mandato de la Subcomisión II, a fin de facilitar su examen más detallado por ésta.
5. Evidentemente habrá cierta duplicación y superposición en el examen de los temas por las tres Subcomisiones y también entre las cuestiones que incumben a la propia Subcomisión II. En vista, sin embargo, de que la Subcomisión habrá de coordinar las actividades de sus grupos de trabajo y de que la Comisión coordinará la labor de las Subcomisiones, será posible reducir a un mínimo esa duplicación de trabajos y hacer los ajustes necesarios a medida que progrese la labor. Lo que se necesita principalmente en la actual etapa es un método flexible.

Distribución sugerida de los temas entre las Subcomisiones<sup>a/</sup>

Subcomisión I

Tema 1, secciones pertinentes de los temas 9 y 10, temas 14 y 15 (en la medida en que guardan relación con la materia que examina la Subcomisión I), temas 20 y 21 (en la medida en que guardan relación con la materia que examina la Subcomisión I), tema 23.

Subcomisión II

Temas 2 a 8, secciones pertinentes de los temas 9 y 10, tema 11, tema 15 (en la medida en que guarda relación con la materia que examina la Subcomisión II), temas 16 a 19, temas 20 a 21 (en la medida en que guardan relación con la materia que examina la Subcomisión II), tema 24.

---

\* Publicadas inicialmente con la signatura A/AC.138/SC.II/L.14.

<sup>a/</sup> La numeración de los temas en este documento se hace sobre la base de que el tema 6 bis pasa a ser tema 7 y que los temas siguientes se renumeran en consecuencia.

### Subcomisión III

Temas 12 y 13, tema 14 (en la medida en que guarda relación con la materia que examina la Subcomisión III), temas 20 y 21 (en la medida en que guardan relación con la materia que examina la Subcomisión III).

La Comisión quizás estime oportuno examinar directamente los temas 22 y 25.

### Programa de trabajo sugerido para la Subcomisión II

Sección 1: temas 5 a 7, 9 (cuestiones pertinentes), 10 (cuestiones pertinentes) y 11.

Sección 2: temas 2 a 4, 16 y 17.

Sección 3: temas 8 y 24.

Sección 4: tema 15.

Sección 5: temas 18 y 19.

Sección 6: temas 20 y 21.

#### IV. DOCUMENTOS ANEXOS A LA PARTE IV

##### 1. Programa de trabajo de la Subcomisión III, aprobado en su 19a. sesión, celebrada el 27 de marzo de 1972\*

- A. Preservación del medio marino (incluidos los fondos marinos)
  - 1. Debate General
  - 2. Relación con la preservación de los recursos vivos de la alta mar (sin perjuicio de las atribuciones de la Subcomisión II)
  - 3. Conferencia Técnica de la FAO sobre la contaminación de las aguas del mar y sus efectos sobre los recursos vivos y la pesca, Roma, diciembre de 1970:
    - a) Informe sobre la Conferencia
    - b) Examen del informe
    - c) Comunicación de los resultados del examen a la Conferencia de Estocolmo
  - 4. Reunión del Comité de Pesca de la FAO en abril de 1972 (sin perjuicio de las atribuciones de la Subcomisión II):
    - a) Informe sobre la reunión
    - b) Examen del informe
  - 5.
    - a) Requisitos de la investigación científica
    - b) Libertad de acceso a la información científica
    - c) Participación de los Estados ribereños en la investigación científica y en los resultados y beneficios que de ella se deriven
  - 6. Elaboración de principios jurídicos y de proyectos de artículos de tratado
  - 7. Otros asuntos
- B. Eliminación y prevención de la contaminación del medio marino (incluidos los fondos marinos)
  - 1. Debate general
  - 2. Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano - Principios en materia de contaminación de los mares:
    - a) Informes del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre contaminación de los mares, Londres, junio de 1971, y Ottawa, noviembre de 1971

---

\* Publicado inicialmente con la signatura A/AC.138/SC.III/L.14.

- b) Examen de los informes
  - c) Comunicación de los resultados del examen a la Conferencia de Estocolmo
  - d) Informe de la Conferencia de Estocolmo
  - e) Medidas de la Comisión de los Fondos Marinos
3. Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano - Proyectos de artículos sobre el vertimiento de desechos en el océano:
- a) Informes del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre contaminación de los mares, Londres, junio de 1971, y Ottawa, noviembre de 1971
  - b) Examen de los informes
  - c) Comunicación de los resultados del examen a la reunión de Reykjavik y a la Conferencia de Estocolmo
  - d) Informe de la Conferencia de Estocolmo
  - e) Medidas de la Comisión de los Fondos Marinos
4. Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano - Aspectos de la propuesta Declaración sobre el Medio Humano relacionados con la contaminación de los mares:
- a) Informe del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la Declaración sobre el Medio Humano
  - b) Examen del informe
  - c) Comunicación de los resultados del examen a la Conferencia de Estocolmo
  - d) Informe de la Conferencia de Estocolmo
  - e) Medidas de la Comisión de los Fondos Marinos
5. Conferencia de la OCMI sobre la eliminación de la contaminación originada por buques y embarcaciones:
- i) Reunión preparatoria de febrero y marzo de 1972
    - a) Informe sobre la reunión
    - b) Examen del informe
    - c) Comunicación de los resultados del examen a la OCMI
  - ii) Reunión preparatoria de junio de 1972
    - a) Informe sobre la reunión
    - b) Examen del informe

c) Comunicación de los resultados del examen a la OCMI

6. Convenio regional de Oslo sobre vertidos:

a) Informe sobre el Convenio

b) Examen del informe

7. Proyecto de resolución de Noruega y el Canadá sobre las medidas preliminares para prevenir y controlar la contaminación de los mares (A/AC.138/SC.III/L.5 y Add.1):

a) Examen del proyecto de resolución

b) Comunicación de los resultados del examen a la Conferencia de Estocolmo

8. Examen de las convenciones existentes relativas a la contaminación de los mares

9. a) Requisitos de la investigación científica

b) Libertad de acceso a la información científica

c) Participación de los Estados ribereños en la investigación científica y en los resultados y beneficios que de ella se deriven

10. Elaboración de principios jurídicos y de proyectos de artículos de Tratado, incluidos los proyectos de artículos que se pueden considerar como medidas complementarias de la Conferencia de Estocolmo

11. Otros asuntos

C. Investigación científica sobre el medio marino (incluidos los fondos marinos)

1. Debate general sobre la naturaleza, las características y los objetivos de la investigación científica

2. Examen de los principios enunciados en la resolución 2749 (XXV) sobre investigación científica

3. Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI): Grupo de Trabajo sobre problemas jurídicos relacionados con la investigación científica de los océanos (Nueva York, febrero de 1970):

a) Informe del Grupo de Trabajo de la COI

b) Examen del informe

c) Comunicación de los resultados del examen a la COI

4. Conferencia preliminar de expertos gubernamentales para formular un proyecto de convención sobre la condición jurídica de los Sistemas de Adquisición de Datos Oceánicos (SADO), París, 31 de enero a 12 de febrero de 1972:

- a) Informe de la Conferencia preliminar
  - b) Examen del informe
  - c) Comunicación de los resultados del examen a la UNESCO/COI y la OCMI
- 5. Examen de las disposiciones convencionales existentes relativas a la investigación científica de los mares
  - 6. Libertad de acceso a la información científica
  - 7. Elaboración de principios jurídicos y de proyectos de artículos de tratado
  - 8. Otros asuntos
- D. Desarrollo y transmisión de tecnología
- 1. Desarrollo de la capacidad tecnológica de los países en desarrollo
  - 2. Coparticipación de los países desarrollados y en desarrollo en los conocimientos y la tecnología
  - 3. Formación de personal de los países en desarrollo
  - 4. Transmisión de tecnología a los países en desarrollo
- E. Otros asuntos.

---

Nota: El orden de presentación de los temas en el programa no establece el orden de prioridad que seguirá la Subcomisión en su examen.



## 2. Documento de trabajo presentado por Canadá\*

### PRINCIPIOS RELATIVOS A LA INVESTIGACION CIENTIFICA DE LOS MARES

Para la Tercera Conferencia sobre el Derecho del Mar

#### PREAMBULO

1. Interesa a toda la humanidad facilitar la investigación científica de los mares y la publicación de sus resultados.
2. Se entiende por investigación científica de los mares todo estudio, de carácter fundamental o aplicado, encaminado a aumentar los conocimientos relativos al medio marino, incluidos todos sus recursos y organismos vivos, y abarca todas las actividades científicas afines.
3. Los objetivos de la investigación científica de los mares comprenden el logro de un nivel de conocimientos que permita la evaluación y previsión exactas de los procesos oceánicos y sirva de base para la elaboración de una política de gestión que garantice que la calidad y los recursos del medio marino no sufren menoscabo, así como para el uso racional de ese medio, al servicio del bienestar de la humanidad, de la equidad internacional y del progreso económico y en aras de la paz y la cooperación internacional entre los Estados.

#### PRINCIPIOS

1. Los conocimientos obtenidos en la investigación científica de los mares forman parte del patrimonio común de toda la humanidad y tales conocimientos y datos de carácter no exclusivo ni militar deben intercambiarse y ponerse a disposición de todo el mundo.
2. La investigación científica de los mares constituye una actividad legítima en el medio marino. Todo Estado, sea o no ribereño, y toda organización internacional competente tienen derecho a realizar, o a autorizar que se realicen, investigaciones científicas en el medio marino, de conformidad con las normas y los principios reconocidos de derecho internacional y con sujeción a lo dispuesto en los presentes principios.
3. La investigación científica de los mares no constituirá de por sí el fundamento jurídico para reivindicar derechos de explotación o cualesquiera otros derechos en las zonas situadas fuera de los límites de la jurisdicción nacional.
4. La investigación científica de los mares se llevará a cabo de manera razonable y no deberá interferir injustificadamente otros usos del medio marino; por su parte, los otros usos del medio marino no deberán interferir injustificadamente la investigación científica de los mares.
5. La investigación científica de los mares no entrañará una recolección excesiva de especímenes y muestras, ni deberá ocasionar la contaminación o cualquier otra perturbación indebida del medio marino.

---

\* Publicados inicialmente con la signatura A/AC.138/SC.III/L.18.

6. El acceso de todos los Estados a los datos y conocimientos resultantes de la investigación científica de los mares se facilitará mediante la notificación internacional efectiva de los principales programas proyectados y de sus objetivos así como mediante la publicidad y la divulgación de los resultados haciendo uso de los conductos internacionales.

7. Los Estados adoptarán medidas para promover el desarrollo y la expansión de la investigación científica de los mares y para obviar todo obstáculo en su progreso y cooperarán en la elaboración de normas internacionales para facilitar tal investigación. Los Estados, en cooperación con otros Estados y con organizaciones internacionales, gubernamentales o no gubernamentales, favorecerán las medidas y los acuerdos encaminados a promover la investigación científica de los mares y el intercambio de datos e información sobre una base regional y mundial.

8. Los Estados, individualmente y en cooperación con otros Estados y con las organizaciones internacionales competentes, promoverán la corriente de información y datos científicos y la transmisión de experiencias resultantes de la investigación científica de los mares hacia los países en desarrollo así como medidas encaminadas a reforzar la capacidad de investigación oceanográfica de esos países hasta un nivel que responda a sus necesidades y recursos, con inclusión de programas destinados a facilitar una formación adecuada del personal técnico y científico de tales países.

9. La investigación científica de los mares en las zonas situadas dentro de la jurisdicción de un Estado ribereño sólo se realizará con el consentimiento de tal Estado. Si otorga tal consentimiento, el Estado ribereño tendrá derecho a participar o a hacerse representar en esa investigación y a utilizar muestras, a obtener el acceso a los datos y resultados y a exigir la publicación de éstos.

10. El Estado ribereño, antes de acceder a dar su consentimiento para la investigación científica de los mares en zonas situadas dentro de su jurisdicción, podrá solicitar información acerca de la duración, localización, naturaleza y finalidad de las investigaciones proyectadas, las observaciones que van a realizarse, el destino que se tenga el propósito de dar a toda la información que se reúna, los medios que van a emplearse y, en su caso, el nombre del buque y su descripción completa, incluidos el tonelaje, el tipo y la clase, el nombre del organismo que patrocine las investigaciones y los nombres del capitán del buque, de los directores y miembros del grupo científico previsto y detalles de toda entrada proyectada en un puerto del Estado ribereño. Se informará al Estado ribereño de todo cambio en la información mencionada.

11. El Estado ribereño atenderá prontamente toda petición acompañada de la información que haya solicitado de conformidad con lo dispuesto en el principio 10. El Estado ribereño facilitará la realización de la investigación científica de los mares que goce de su consentimiento dando, siempre que sea posible, facilidades a los buques y los hombres de ciencia que actúen en zonas situadas dentro de su jurisdicción.

12. La investigación científica de los mares, cuando se realice en zonas situadas dentro de la jurisdicción del Estado ribereño, respetará todas las leyes y todos los reglamentos de éste, incluidos los reglamentos y las directrices de administración de recursos en las zonas en que el Estado ribereño ejerce el dominio

sobre los recursos pertenecientes a su plataforma continental, los reglamentos relativos a la protección del medio en las zonas en que tal responsabilidad incumbe principalmente al Estado ribereño, los reglamentos de administración en las zonas en que la pesca esté reglamentada, en las que además se facilitará a la autoridad administradora de la zona todos los datos resultantes de la investigación, y los reglamentos y directrices necesarios para proteger la seguridad del Estado ribereño.

13. La investigación científica relativa a los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional respetará cualesquiera normas que se elaboren por una organización internacional competente para reducir al mínimo las perturbaciones e impedir la contaminación del medio marino y la interferencia en las actividades de exploración y explotación.

14. Los Estados adoptarán disposiciones para determinar la responsabilidad de los Estados o las organizaciones internacionales que, durante la investigación científica de los mares, ocasionen daños en el medio marino o a cualquier otro Estado o a sus nacionales, o cuando tales daños hayan sido ocasionados por las actividades de personas sometidas a su jurisdicción.

3. Documento de trabajo presentado por Bulgaria, la República Socialista Soviética de Ucrania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas\*

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES RELATIVAS A LA COOPERACION INTERNACIONAL  
EN LA INVESTIGACION CIENTIFICA DE LOS OCEANOS DEL MUNDO

En el preámbulo podría señalarse que:

- Existe un interés común de toda la humanidad por el desarrollo de la investigación científica de los océanos del mundo con fines pacíficos;
- Revisten gran importancia los conocimientos detallados sobre los procesos y fenómenos naturales de los océanos del mundo, incluidos los fondos marinos y su subsuelo;
- La investigación científica de los océanos del mundo contribuye a la utilización práctica del medio marino y de los recursos del mar y facilita la lucha contra los desastres naturales;
- La investigación de los océanos del mundo deberá redundar en beneficio de todos los países, cualquiera que sea su nivel de desarrollo económico, científico y técnico;
- La asistencia para la investigación científica de los océanos del mundo promovería el bienestar de los pueblos, en particular, de los países en desarrollo;
- Sólo se podrá lograr un verdadero conocimiento detallado de los océanos del mundo si los Estados desarrollan esfuerzos conjuntos y aúnan sus posibilidades científicas;
- Es necesario promover la cooperación internacional en la investigación científica de los océanos del mundo y la creación de condiciones más favorables para realizar tal investigación.

Las disposiciones fundamentales podrían ser las siguientes:

1. La cooperación entre los Estados en el fomento de la investigación científica de los océanos del mundo y la actuación conjunta de los científicos para comprender la esencia y las interacciones de los fenómenos y procesos de los océanos del mundo constituyen una condición indispensable del aprovechamiento eficaz y racional de todas las ventajas y recursos de los mares y océanos en beneficio de todos los países.

2. La cooperación internacional en la investigación científica de los océanos del mundo deberá realizarse con fines pacíficos y contribuir a un mayor bienestar de los pueblos de todos los países.

---

\* Publicado inicialmente con la signatura A/AC.138/SC.III/L.23.

3. La investigación científica de los océanos del mundo se llevará a cabo de conformidad con las normas y los principios generalmente reconocidos del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas.

La alta mar estará abierta a todos los Estados para que realicen libremente investigaciones científicas en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna.

4. Los Estados colaborarán entre sí a fin de crear condiciones favorables para realizar investigaciones científicas en los océanos del mundo y eliminar los obstáculos a tales investigaciones. En particular, los Estados tratarán, con miras a la cooperación internacional y de conformidad con sus leyes y disposiciones nacionales, de simplificar las formalidades de entrada, en sus puertos, de los buques que realicen investigaciones en los océanos del mundo.

5. Los Estados cooperarán en la aplicación de medidas destinadas a ampliar las posibilidades de investigación de los países en desarrollo y de los países sin litoral, incluidas la participación de los nacionales de estos países en las investigaciones científicas, la formación de personal científico de tales países y la transmisión de experiencias resultantes de la investigación científica.

6. Todos los Estados podrán participar en los programas internacionales de investigación científica de los océanos del mundo y fomentarán la participación de los científicos de sus países en la ejecución de las medidas previstas en esos programas.

7. La cooperación internacional entre los Estados y las organizaciones internacionales en la investigación científica de los océanos del mundo con miras a ejecutar el Programa Ampliado y a Largo Plazo de Investigación Oceanográfica se llevará a cabo bajo la dirección de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO.

8. Los Estados promoverán por todos los medios el intercambio de datos científicos, incluido el suministro de tales datos a los países en desarrollo a título de asistencia científica y técnica.

9. Los Estados adoptarán y fomentarán medidas destinadas a dar amplia publicidad y difusión a los resultados de la investigación científica de los océanos del mundo, en particular mediante el actual sistema de centros mundiales y regionales de datos.

10. Todos los Estados cooperarán entre sí para impedir que se pongan obstáculos al funcionamiento normal y a la conservación de las construcciones e instalaciones estacionarias y móviles, habitadas o inhabitadas, en la alta mar, que contengan instrumentos científicos y que sirvan para efectuar mediciones y experimentos científicos.

11. La investigación científica de los océanos del mundo se llevará a cabo sin causar al medio perjuicios que puedan provocar en él la ruptura del equilibrio ecológico.

12. La investigación científica se llevará a cabo sin perjuicio para la seguridad de la navegación y sin crear obstáculos injustificados a la pesca. De ser necesario, se notificarán con la debida antelación la fecha y la zona en que se realicen las investigaciones.

13. Los Estados serán internacionalmente responsables de las actividades nacionales relacionadas con la investigación científica de los océanos del mundo, independientemente de que esas actividades sean realizadas por órganos gubernamentales o por personas jurídicas o físicas que se encuentren bajo su jurisdicción.

14. Ninguna actividad de esa clase constituirá de por sí fundamento jurídico para presentar reivindicaciones en lo referente a cualquier parte de esa zona o de sus recursos.

15. Estas disposiciones se aplicarán también a las investigaciones científicas que se realicen en los fondos marinos o en su subsuelo fuera de los límites de la plataforma continental.

4. Australia, Canadá, Colombia, Chile, Fiji, Filipinas, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Tailandia:  
proyecto de resolución\*

La Comisión sobre la Utilización con Fines Pacíficos de los Fondos Marinos y Océánicos fuera de los Límites de la Jurisdicción Nacional,

Recordando la propuesta de declaración presentada a la Subcomisión III en la octava sesión de esta última a/,

Recordando además, la resolución aprobada acerca del tema de los ensayos nucleares por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, así como el Principio 26 de la Declaración sobre el Medio Humano aprobada por la misma Conferencia,

Actuando en aplicación de los principios del Tratado de prohibición parcial de los ensayos nucleares,

Observando la preocupación de las naciones y los pueblos del Pacífico ante la realización de ensayos de armas nucleares en esa región, y su oposición a dichos ensayos,

Teniendo presente su obligación de proponer la adopción de normas jurídicas para preservar el medio marino y prevenir la contaminación de los mares,

1. Declara que no deben llevarse a cabo nuevos ensayos de armas nucleares que puedan contribuir a la contaminación del medio marino;

2. Pide a su Presidente que transmita la presente resolución al Secretario General de las Naciones Unidas para que sea remitida a los órganos competentes de las Naciones Unidas, incluida la Conferencia del Comité de Desarme.

---

\* Publicado inicialmente con la signatura A/AC.138/SC.III/L.22.

a/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo sexto período de sesiones, Suplemento No. 21 (A/8421, anexo V).

5. Proyecto de resolución sobre medidas preliminares para impedir y combatir la contaminación de los mares presentado por Australia, Bulgaria, Canadá, Grecia, Islandia, Noruega, Países Bajos, República Socialista Soviética de Ucrania, Suecia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

La Asamblea General,

Afirmando que el medio marino y todos los organismos que en él habitan son de vital importancia para la humanidad,

Reconociendo la intensificación del uso de las zonas marinas y la creciente importancia de esas zonas para la humanidad,

Consciente de la grave y creciente amenaza que la contaminación supone para el medio marino poniendo en peligro la vida en el mar, la ecología de los océanos y la humanidad entera,

Considerando que la investigación y los adelantos científicos y tecnológicos modernos permiten resolver los problemas que entraña mantener y mejorar el grado de pureza del medio marino,

Teniendo en cuenta la importancia de la investigación amplia y continua sobre los procesos de la contaminación del medio marino y sobre los métodos de prevenirla,

Teniendo presente la valiosa labor y las resoluciones de los órganos, las conferencias y los organismos especializados de las Naciones Unidas, así como de otros organismos,

Tomando nota de que el problema de impedir la contaminación de los mares sólo se puede resolver de manera eficaz mediante una cooperación internacional de alcance mundial,

Reconociendo además que el problema de impedir y combatir la contaminación de los mares sólo puede resolverse mediante la acción concertada de los Estados en el plano internacional, regional y nacional,

1. Insta a los Estados a que, en espera de la preparación y aplicación de instrumentos internacionales, adopten las medidas preliminares adecuadas para impedir y combatir, en la medida de lo posible, la contaminación de los mares, cualquiera que sea su fuente, dentro de su jurisdicción, incluido especialmente el vertimiento incontrolado en el océano de sustancias o materiales tóxicos o peligrosos procedentes de los diversos medios de transporte y de los ríos, lagos o estuarios que desembocan en el mar;

---

\* Publicado inicialmente con la signatura A/AC.138/SC.III/L.25.



2. Encarece a los Estados que adopten las medidas adecuadas para impedir y combatir, en la medida de lo posible, los peligros de la contaminación de los mares derivada de la exploración y explotación de recursos minerales en sus plataformas continentales:

3. Acoge con beneplácito la formulación por los Estados de normas para la protección del medio marino:

4. Exhorta a los Estados a cooperar con miras a crear y fortalecer, en los órganos internacionales competentes o en el marco de la cooperación regional, sistemas eficaces de reglamentación y vigilancia para impedir y combatir la contaminación del medio marino;

5. Subraya que las medidas que se adopten en cumplimiento de la presente resolución no prejuzgarán en modo alguno la preparación y aplicación de instrumentos internacionales de carácter general o regional o la creación de instituciones internacionales para la prevención y el control de la contaminación de los mares.

6. Enmiendas al documento A/AC.138/SC.III/L.25 presentadas por:

1) Kenia

1. Añádase al preámbulo el siguiente nuevo párrafo:

Convencida de que a los Estados primordialmente responsables de la contaminación de los mares debe corresponderles la obligación principal de su eliminación,

2. Añádase a la parte dispositiva el siguiente nuevo párrafo:

6. Subraya que los países desarrollados deben proporcionar a los países en desarrollo la asistencia necesaria para eliminar totalmente la contaminación acumulada en sus mares.

2) Perú

1. Suprímase el quinto párrafo del preámbulo.

2. Al final del párrafo 5 de la parte dispositiva, suprímase el punto final y añádase:

, o las medidas que los Estados en desarrollo pongan en práctica para elevar el nivel de vida de sus poblaciones.

3) Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

En el párrafo 3 de la parte dispositiva, después de la palabra "normas", insértese las palabras "a los fines mencionados supra".

4) República Unida de Tanzania

1. En el octavo párrafo del preámbulo, suprímase la palabra "sólo".

2. Añádase al preámbulo el siguiente nuevo párrafo:

Tomando nota además de las responsabilidades de los Estados ribereños en la lucha contra la contaminación de los mares,

3. Insértese en la parte dispositiva el siguiente nuevo párrafo 4 y numérense como corresponda los párrafos siguientes:

4. Exhorta además a los Estados ribereños a adoptar las medidas necesarias para impedir y combatir la contaminación del medio marino en las zonas bajo su jurisdicción nacional y las adyacentes a las mismas.

5) Estados Unidos de América

En el párrafo 3 de la parte dispositiva, después de la palabra "normas", insértese las palabras "para el mencionado fin".

---

7. CANADA: DOCUMENTO DE TRABAJO SOBRE LA  
PRESERVACION DEL MEDIO MARINO\*

---

\* Publicado inicialmente con la signatura A/AC.138/SC.III/L.26.

## I. FINALIDAD DEL DOCUMENTO DE TRABAJO

- Concentrar la labor del grupo de trabajo en la cuestión de la contaminación del medio marino;
- Indicar los lineamientos generales de un enfoque global de la preservación del medio marino y la prevención y el control de la contaminación de los mares y otras medidas conexas;
- Esbozar principios básicos para los proyectos de artículos de tratado que se han de someter a la consideración de la Conferencia sobre el derecho del mar.

## II. ELEMENTOS DE UN ENFOQUE GLOBAL

### 1. Definición del enfoque global

Un enfoque global respecto de la preservación del medio marino entrañaría un ataque concertado contra todas las fuentes terrestres y marinas de contaminación de los mares. Para ello sería necesario:

- Adoptar una amplia gama de medidas en el plano nacional e internacional (en el plano nacional, respecto de problemas tales como los de las fuentes terrestres de contaminación de los mares y los riesgos de contaminación que supone la explotación de los recursos de la plataforma continental), adecuadas a los problemas por resolver y basadas en un enfoque interdisciplinario que tuviese en cuenta todas las consideraciones que fuesen pertinentes - científicas, económicas, jurídicas y de otra índole;
- Armonizar esas medidas nacionales e internacionales teniendo presente la indivisibilidad del medio marino y su relación con la biosfera en su totalidad;
- Asignar funciones a instituciones nacionales e internacionales y coordinarlas a fin de asegurar la aplicación eficaz de las medidas mencionadas.

### 2. Aplicación del enfoque global

La aplicación de un enfoque global de la preservación del medio marino por la Conferencia sobre el derecho del mar no supone necesariamente la elaboración de un tratado único que se refiera a todos los aspectos de la contaminación de los mares. Tampoco significa que los organismos especializados tales como la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI) no tengan un papel importante que desempeñar en la formulación de normas y medidas de orden técnico para prevenir la contaminación de los mares. Lo primordial, cualquiera que sea el número de instrumentos que se elaboren, es que tales instrumentos constituyan en conjunto un sistema de tratados coherente, uniforme y exhaustivo.

La Conferencia sobre el derecho del mar podría sentar las bases de ese sistema elaborando un tratado "maestro" o "global", consistente en principios jurídicos básicos, en el cual:

- Se definiesen las metas generales y los derechos y obligaciones generales de los Estados en lo que respecta a la preservación del medio marino;
- Se afirmase un compromiso general en el sentido de elaborar tratados especializados, y de adherirse a ellos, con el fin de alcanzar esas metas generales;
- Se impusiese una orientación común y se diese impulso al ulterior desarrollo de medidas en el plano nacional e internacional para la preservación del medio marino, y se estableciese un vínculo orgánico, en cuanto al contenido y la aplicación, entre esas medidas (vigentes o previstas).
- Se estableciesen normas uniformes sobre ciertos elementos comunes a tales instrumentos, como, por ejemplo, la ejecución, las indemnizaciones, etc.

### 3. Enfoque global: fuentes terrestres de contaminación

Si bien en el enfoque global de la preservación del medio marino forzosamente han de preverse medidas relativas a las fuentes terrestres de contaminación de los mares (sobre todo aquellas que afectan al mar a través de la atmósfera), la Comisión sobre la Utilización con Fines Pacíficos de los Fondos Marinos y Oceánicos fuera de los Límites de la Jurisdicción Nacional y la Conferencia sobre el derecho del mar no son necesariamente las tribunas más apropiadas para elaborar esas medidas. El derecho del mar regula las actividades en el mar y las relaciones entre los Estados con respecto a esas actividades. La reglamentación de las actividades en tierra, aun cuando éstas pueden tener repercusiones importantes en el medio marino (y por cierto representan con mucho la fuente más importante de contaminación marina) evidentemente plantea problemas de otra índole, especialmente desde el punto de vista jurisdiccional. Todo intento de hacer extensivo a la tierra firme el derecho del mar en estos momentos no haría más que abultar la ya extensa serie de problemas que deben negociarse y, por ende, limitar las posibilidades de que se resuelvan satisfactoriamente. La iniciativa en cuanto a la armonización de las medidas nacionales y la formulación de medidas internacionales encaminadas a reducir las fuentes terrestres de contaminación de los mares quizá deba partir de la secretaría del medio humano establecida en Estocolmo. No obstante, el derecho del mar puede y debe enunciar principios que tengan repercusiones inmediatas en la reglamentación de las fuentes terrestres de contaminación de los mares (por ejemplo, la obligación de preservar el medio marino y tomar medidas para impedir su contaminación).

### 4. Enfoque global: fuentes marinas de contaminación

Las principales fuentes marinas de contaminación de los mares, ya sea accidental o deliberada, son las embarcaciones, las plataformas fijas y la explotación de los recursos minerales de los fondos marinos y otros usos de los fondos marinos y oceánicos. Estas categorías generales, aunque podrían subdividirse aún más,

representan los problemas esenciales de la contaminación de los mares que debería abordar la Conferencia sobre el derecho del mar, conjuntamente con otros organismos especializados. Existen ya varios tratados internacionales - multilaterales, regionales y bilaterales - que tratan directa o indirectamente distintos aspectos de estos problemas, al igual que la legislación nacional de varios países. Este documento no trata en forma exhaustiva las medidas nacionales o los arreglos bilaterales y regionales, sino que se concentra en los acuerdos multilaterales de carácter más general. Los problemas más difíciles que se han planteado con respecto a esta gran variedad de disposiciones se relacionan con la autoridad jurisdiccional para dictar medidas y a la autoridad jurisdiccional para ejecutarlas. En el presente documento se propone, tomando en consideración los últimos acontecimientos y tendencias, un nuevo criterio para abordar estos problemas básicos por el que se procura resolver el antiguo conflicto entre la jurisdicción del Estado ribereño y la del Estado del pabellón haciendo hincapié en la posibilidad de compartir la autoridad sobre la base de principios mutuamente convenidos, en lugar de mantener las antiguas categorías mutuamente excluyentes. Este criterio se expone en detalle en secciones posteriores del presente documento. En las secciones inmediatamente a continuación se reseñan brevemente las medidas nacionales e internacionales ya adoptadas en relación con la contaminación de los mares, las que se están adoptando y las que aún quedan por adoptar.

#### A. Medidas ya adoptadas

##### i) Convención de Ginebra sobre la Alta Mar (1958)

El artículo 24 de esta Convención dispone lo siguiente:

"Todo Estado está obligado a dictar disposiciones para evitar la contaminación de las aguas por los hidrocarburos vertidos de los buques, desprendidos de las tuberías submarinas o producidos por la explotación y exploración del suelo y del subsuelo submarinos, teniendo en cuenta las disposiciones de los convenios existentes en la materia."

El artículo 25 dispone lo siguiente:

"1. Todo Estado está obligado a tomar medidas para evitar la contaminación del mar debida a la inmersión de desperdicios radiactivos, teniendo en cuenta las normas y reglamentaciones que puedan dictar los organismos internacionales competentes.

"2. Todos los Estados están obligados a colaborar con los organismos internacionales competentes en la adopción de medidas para evitar la contaminación del mar y del espacio aéreo superyacente resultante de cualesquiera actividades realizadas con sustancias radiactivas o con otros agentes nocivos."

Estos dos artículos constituyen un punto de partida útil por cuanto enuncian en términos generales las obligaciones de los Estados en relación con la contaminación de los mares resultante del vertimiento de hidrocarburos, la explotación de los fondos marinos y la descarga de desechos radiactivos. Sin embargo, no se prevé

en forma detallada o precisa cómo se han de cumplir estas obligaciones. (El artículo 24 se redactó teniendo presente la Convención para la prevención de la contaminación de las aguas del mar por los hidrocarburos, de 1954, pero no obliga a los Estados a adherirse a esa Convención ni a promulgar disposiciones análogas a las establecidas en virtud de ella.) Por último, en ninguno de los artículos citados se intenta abordar cuestiones tales como la de la jurisdicción de ejecución o la de las indemnizaciones.

ii) Convención de Ginebra sobre la Plataforma Continental (1958):

Esta Convención dispone, en el párrafo 7 de su artículo 5, lo siguiente:

"El Estado ribereño está obligado a adoptar, en las zonas de seguridad, todas las medidas adecuadas para proteger los recursos vivos del mar contra agentes nocivos."

Este artículo enuncia un importante principio, pero es incompleto porque se refiere únicamente a las medidas que deben adoptarse en las zonas de seguridad establecidas con el fin de explotar la plataforma continental, alude exclusivamente a los recursos vivos del mar (y no a la categoría más amplia de "organismos marinos") y no contiene ninguna disposición sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado ribereño. Al igual que en la Convención sobre la Alta Mar, tampoco trata la cuestión de la indemnización por los daños causados a otros Estados o a sus nacionales. Y, por último, se refiere únicamente a la plataforma continental y no a la contaminación resultante de la explotación de los fondos marinos más allá de los límites de la jurisdicción nacional.

iii) Convención internacional para la prevención de la contaminación de las aguas del mar por los hidrocarburos, 1954 (enmendada en 1962 y 1969)

En esta Convención, en su forma enmendada, se prohíbe el vertimiento intencional de hidrocarburos o de mezclas de hidrocarburos por embarcaciones que exceda un límite admisible insignificante, en relación con ciertos tipos de embarcaciones y ciertas zonas. Sin embargo, con esta Convención aún no se ha logrado la total eliminación de las descargas intencionales de hidrocarburos. El enjuiciamiento por las infracciones queda librado exclusivamente a la discreción del Estado del pabellón, y no se prevé indemnización alguna por los daños sufridos.

iv) Convención internacional sobre la limitación de la responsabilidad de propietarios de buques de mar, 1957

Esta Convención limita la responsabilidad de los propietarios de barcos por los daños causados por dichos barcos, a falta de culpa efectiva o connivencia de su parte, a un máximo de siete millones de dólares, aproximadamente. La Convención no se refiere a la cuestión de la responsabilidad de los Estados, ni es su finalidad ocuparse concretamente de los daños por contaminación.

v) Convención de 1962 sobre la responsabilidad de los explotadores de buques nucleares

En esta Convención (que aún no ha entrado en vigor) se prevé un régimen de responsabilidad estricta de los explotadores de buques nucleares y fija el límite de esa responsabilidad en 100 millones de dólares. No se prevén medidas preventivas, aunque implícitamente se reconoce el derecho del Estado ribereño a excluir a los barcos nucleares de sus aguas y puertos.

vi) Tratado por el que se prohíben los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, en el espacio ultraterrestre y debajo del agua, 1963

Aunque comúnmente se lo considera una medida de desarme, este Tratado también representa, por los términos concretos en que está redactado, un importante acuerdo para la protección del medio. En él se prohíbe a los Estados partes que efectúen explosiones nucleares en cualquier parte del medio si tales explosiones dan lugar a la presencia de desechos radiactivos más allá de los límites territoriales del Estado bajo cuya jurisdicción o control se efectúan esas explosiones.

vii) Convenio internacional relativo a la intervención en alta mar en los casos de accidente de contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, 1969

En este Convenio (que aún no ha entrado en vigor) se prevé el derecho del Estado ribereño de adoptar en la alta mar (sin ninguna limitación en cuanto a la distancia) las medidas que sean necesarias para proteger su litoral o intereses conexos contra la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos resultante de un accidente marítimo al que sea razonable atribuir consecuencias desastrosas de gran magnitud. En el Convenio no se prevé un derecho análogo de intervención en casos de accidentes de contaminación en los que no intervengan barcos petroleros. Está encaminado fundamentalmente a la adopción de medidas correctivas y no preventivas, es decir, a medidas que se puedan adoptar una vez ocurrido el accidente y no a medidas que deberían adoptarse para prevenirlo.

viii) Convenio internacional de responsabilidad civil por daños causados por contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, 1969

Este Convenio (que aún no ha entrado en vigor) impone una estricta responsabilidad (salvo en el caso de actos de guerra o de desastres naturales, actos intencionales de terceros, o negligencia por parte de los responsables del mantenimiento de los instrumentos de navegación) al propietario de todo buque petrolero que haya dejado escapar hidrocarburos a raíz de un accidente en alta mar y que haya causado daños en el territorio o las aguas territoriales de un Estado contratante. (No se prevé ninguna indemnización por los daños ocasionados a los recursos costeros u otros intereses litorales en ninguna "zona económica" situada más allá del mar territorial.) El límite de esa responsabilidad se fija en aproximadamente 14 millones de dólares por accidente. Además de estar limitado a un solo tipo de contaminación marina, el Convenio no trata la cuestión de la responsabilidad de los Estados,



ni allana las dificultades de procedimiento en lo que respecta a satisfacer reclamaciones relativas a la contaminación.

ix) Convenio internacional de constitución de un fondo internacional de indemnización de daños causados por la contaminación de hidrocarburos, 1971

Este Convenio (que aún no ha entrado en vigor) exime a los propietarios de barcos de la responsabilidad financiera adicional impuesta por el Convenio internacional de 1969 sobre responsabilidad civil y prevé el pago de una indemnización adicional a las víctimas de la contaminación por hidrocarburos (hasta un límite de 30 millones de dólares). Representa, pues, un régimen especial de indemnizaciones por los daños ocasionados por un determinado tipo de barcos (buques-cisterna), pero aún en este sentido es incompleto por cuanto no prevé indemnización alguna por los daños resultantes de los derrames intencionales de hidrocarburos que no sean consecuencia de un accidente marítimo, y excluye la indemnización por los daños resultantes de un acto de guerra o causados por hidrocarburos que escapen de un buque de guerra o de otros barcos utilizados por gobiernos para fines no comerciales. Por último, no prevé ninguna indemnización por los daños que cause la contaminación a los recursos del litoral u otros intereses conexos en una "zona económica" situada más allá del mar territorial, ni contribuye a resolver las dificultades de procedimiento en lo que respecta a satisfacer reclamaciones que sobrepasen el límite de 30 millones de dólares.

x) Convenio para la prevención de la contaminación marina provocada por vertidos desde buques y aeronaves, 1972 (Oslo)

En este Convenio se prohíbe de manera absoluta el vertimiento de ciertas sustancias sumamente tóxicas y se reglamenta la descarga de toda otra sustancia en la zona del Mar del Norte y del Atlántico del Norte.

B. Medidas en vías de adopción

i) Declaración de principios que regulan los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional (Resolución 2749 (XXV) de la Asamblea General):

Los principios 11 y 13 b) se refieren a la cuestión de la contaminación resultante de la explotación de los recursos de los fondos marinos fuera de los límites de la jurisdicción nacional.

ii) Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano 1/

La declaración de Estocolmo es una declaración de principios de aceptación general que, según puede estimarse, sienta las bases del futuro desarrollo del

---

1/ A/CONF.48/14.

derecho internacional sobre el medio. Los principios de esta Declaración que tienen particular pertinencia para la contaminación de los mares son: el Principio 7, que impone a los Estados la obligación de impedir la contaminación de los mares; el Principio 21, que refleja la responsabilidad de los Estados de asegurarse de que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional; y el Principio 22, en que se pide a los Estados que cooperen para seguir desarrollando el derecho internacional en lo que se refiere a la responsabilidad y a la indemnización a las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales.

### iii) Declaración de objetivos sobre el medio marino

En esta declaración (elaborada por el Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Contaminación de los Mares (CTICM) en su período de sesiones de Ottawa y refrendada por la Conferencia de Estocolmo) se reconocen los intereses particulares de los Estados ribereños con respecto a la administración de los recursos de la zona litoral; se reconoce que la capacidad de asimilación y regeneración del mar tiene límites; y se afirma la importante conclusión de que es necesario aplicar conceptos de administración al medio marino, a los recursos marinos y a la prevención de la contaminación de los mares.

### iv) Principios sobre la contaminación de los mares

Los 23 principios sobre la contaminación de los mares, elaborados en el período de sesiones de Ottawa del GTICM y refrendados por la Conferencia de Estocolmo, suministran las directrices y la estructura general para un enfoque global e interdisciplinario de todos los aspectos del problema de la contaminación de los mares, incluidas las fuentes terrestres. Estos principios constituyen el primer paso hacia la aplicación de conceptos de administración, por medio de medidas nacionales e internacionales, a la preservación del medio marino. En ellos se indican con algún detalle las obligaciones de los Estados (y particularmente de los Estados ribereños) a este respecto, pero no se tratan en forma completa los consiguientes derechos de los Estados.

### v) Principios sobre los derechos de los Estados ribereños

En el período de sesiones de Ottawa del GTICM se examinaron tres principios sobre los derechos de los Estados ribereños (presentados por la delegación del Canadá), pero el grupo no los refrendó ni los rechazó. La Conferencia de Estocolmo tomó nota de estos tres principios y los remitió a la Conferencia de la OCMI de 1973 para su información y a la Conferencia sobre el derecho del mar para la adopción de las medidas del caso. Estos principios se refieren respectivamente al derecho del Estado ribereño a ejercer autoridad especial en materia de preservación del medio en zonas del mar adyacentes a sus aguas territoriales, al derecho del Estado ribereño a prohibir la entrada de embarcaciones a aguas sometidas a su autoridad en materia de protección del medio, y a la necesidad de que estos derechos del Estado ribereño se ejerciten sobre la base de normas y criterios convenidos internacionalmente y con sujeción a procedimientos adecuados de arreglo de controversias.

vi) Proyecto de artículos y anexos sobre vertimiento de desechos en el océano

El proyecto de artículos y los anexos contenidos en los informes de las reuniones intergubernamentales celebradas en Reykjavik y en Londres este año (que se han remitido a la Comisión sobre la Utilización con Fines Pacíficos de los Fondos Marinos y Oceánicos fuera de los Límites de la Jurisdicción Nacional para que se informe y formule observaciones al respecto, y a la conferencia intergubernamental que ha de convocarse antes de noviembre de 1972 para que los vuelva a examinar y los apruebe definitivamente) constituye un intento de abordar en escala mundial el problema del vertimiento en los mares. En ellos se recurre al método de una lista negra y una lista gris adoptado por los redactores del Convenio de Oslo de 1972 (examinado más arriba), por el cual se prohíbe el vertimiento de ciertas sustancias muy tóxicas y se restringe el de otras sustancias dentro de un sistema regulado. En cuanto a la jurisdicción de ejecución, el proyecto de artículos deja la decisión definitiva en manos de la Conferencia sobre el derecho del mar sin excluir ninguna de las posibilidades.

vii) Convenio de la OCMI sobre la contaminación de los mares, 1973

El proyecto de convenio que se está preparando con el auspicio de la OCMI (que ha de examinarse en una conferencia que la OCMI convocará en el otoño de 1973) tiene por objeto lograr la eliminación completa de la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos y otras sustancias nocivas y la reducción al mínimo de los derrames accidentales. En otras palabras, tiene por objeto establecer disposiciones para la prevención de todas las formas de contaminación originada por buques, sean accidentales o deliberadas. Según un informe presentado por la OCMI a la Comisión sobre la Utilización con Fines Pacíficos de los Fondos Marinos y Oceánicos fuera de los Límites de la Jurisdicción Nacional (A/AC.138/SC.III/L.15):

"El proyecto de convenio consta de una serie de artículos que abarcan todos los aspectos de la prevención de la contaminación del mar originada por buques, con excepción del vertimiento en el océano de desechos generados en tierra, así como de unos anexos técnicos sobre las siguientes cuestiones:

- La prevención de la contaminación por hidrocarburos vertidos desde buques.
- La prevención de la contaminación por sustancias nocivas líquidas o secas objeto de transporte marítimo a granel distintas de los hidrocarburos vertidas desde buques, con exclusión del vertimiento en el mar de desechos que tengan su origen en tierra.
- La prevención de la contaminación que tenga su origen en el diseño, la construcción y el aparejamiento de los buques que transportan hidrocarburos.
- La prevención de la contaminación que tenga su origen en el diseño, la construcción y el aparejamiento de los buques que transportan sustancias nocivas a granel.

- La prevención de la contaminación por sustancias nocivas transportadas en envases o en contenedores.
- La prevención de la contaminación por las aguas cloacales de los buques.
- La prevención de la contaminación por las basuras de los buques."

El proyecto de convenio de la OCMI en su forma actual no se refiere a la contaminación que resulta directamente de operaciones realizadas en los fondos marinos ni a las cuestiones generales de la responsabilidad de los Estados o la indemnización por daños. En cuanto a las medidas de ejecución, en este proyecto se mantiene la jurisdicción tradicional del Estado del pabellón y todavía no se establecen derechos efectivos del Estado ribereño a este respecto.

#### viii) Otras novedades

Varias novedades importantes con consecuencias para la preservación del medio marino se han reflejado en documentos presentados a la Comisión sobre la Utilización con Fines Pacíficos de los Fondos Marinos y Oceánicos fuera de los Límites de la Jurisdicción Nacional en sus períodos de sesiones de julio y agosto de 1972, a saber:

El documento A/AC.138/80 de 26 de julio de 1972 (en que se da el texto de la Declaración de Santo Domingo, aprobada en la Reunión de Ministros de la Conferencia Especializada de los Países del Caribe sobre los Problemas del Mar celebrada el 7 de junio de 1972); el documento A/AC.138/79 de 21 de julio de 1972 (en que se da el texto de las conclusiones formuladas en el informe general del Seminario regional de los Estados africanos sobre el derecho del mar celebrado en Yaoundé del 20 al 30 de junio de 1972); y la propuesta de Kenia relativa a una zona económica, presentada en el documento A/AC.138/SC.II/L.10 de fecha 7 de agosto de 1972.

Estos documentos revelan una tendencia cada vez mayor hacia una posible transacción con respecto a los problemas del derecho del mar, basada en dos elementos:

Por una parte, la aceptación por los Estados ribereños de un mar territorial relativamente estrecho, más allá del cual dichos Estados harían valer sólo ciertas formas de jurisdicción limitada y especializada, distinta de la soberanía completa y más restringida que ésta, que permitiría, por ejemplo, la libertad de paso y la libertad de sobrevuelo en la zona más amplia sometida a su jurisdicción; y, por otra parte, la aceptación por las grandes Potencias marítimas de estas afirmaciones de jurisdicción limitada por los Estados ribereños.

En este momento parece aceptarse generalmente que existe una relación íntima entre la administración del medio y la administración de los recursos minerales y los recursos vivos. La jurisdicción funcional de los Estados ribereños ya incluye, en muchos casos, una forma de jurisdicción contra la contaminación en zonas adyacentes al mar territorial. Todos los Estados ribereños ejercen autoridad sobre

los peligros de contaminación resultantes de la explotación de los recursos de la plataforma continental; muchos Estados han promulgado reglas para la protección de los recursos vivos del medio marino en sus zonas de pesca. Para citar otros dos ejemplos de la práctica de los Estados, el Canadá ha promulgado leyes especiales para la preservación del medio marino en el Ártico y en ciertas zonas semicerradas, y el Reino Unido ha promulgado leyes que le permiten intervenir más allá de los límites del mar territorial en casos de daños por contaminación por hidrocarburos en la alta mar. Esto no debe entenderse necesariamente como un conflicto con la jurisdicción del Estado del pabellón sobre sus barcos en zonas costeras. Como ya se ha indicado, la base más probable de una transacción parece residir en el reemplazo del concepto antiguo de la jurisdicción exclusiva del Estado del pabellón por una nueva forma de jurisdicción compartida o concurrente por la cual tanto el Estado del pabellón como el Estado ribereño puedan cumplir sus obligaciones con respecto a la protección del medio marino sobre la base de normas y procedimientos convenidos internacionalmente

### C. Medidas por adoptar

El examen precedente de lo que se ha hecho con respecto a la prevención de la contaminación de los mares demuestra claramente que las convenciones internacionales existentes, aún si se consideran juntas, no configuran un enfoque global para la preservación del medio marino. Estas convenciones se refieren sólo a unas pocas formas determinadas de contaminación de los mares, y ni siquiera con respecto a estas formas resuelven plenamente cuestiones importantes como la jurisdicción de ejecución, la responsabilidad de los Estados y la indemnización por daños. La Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, la Declaración de objetivos y los 23 Principios sobre la contaminación de los mares elaborados en Ottawa y refrendados por la Conferencia de Estocolmo, y los tres principios sobre los derechos de los Estados ribereños examinados en el período de sesiones de Ottawa del GTICM y remitidos a la Comisión sobre la Utilización con Fines Pacíficos de los Fondos Marinos y Oceánicos fuera de los Límites de la Jurisdicción Nacional y a la Conferencia sobre el derecho del mar para que adopten las medidas del caso proporcionan directrices para un enfoque global que llenaría estas lagunas. El proyecto de convención sobre el vertimiento constituye otro paso hacia la realización efectiva de un enfoque global al tratar el problema general del vertimiento en el mar; el proyecto de convenio de la OCMI de 1973 completaría la serie de medidas necesarias para eliminar la contaminación originada por barcos, siempre que ofreciese una solución eficaz para los problemas jurisdiccionales o por lo menos no perjudicase la elaboración de tal solución. La transacción con respecto a estos problemas jurisdiccionales sigue siendo la clave del acuerdo sobre medidas globales para la preservación del medio marino. Fuera de los límites de la jurisdicción nacional, comoquiera que ésta se determine, quedará también la mayor parte de la alta mar del mundo, con respecto a la cual el orden jurídico tradicional deberá reformularse sobre la base de consideraciones ambientales, con todos los arreglos institucionales nuevos que esto implique. Más específicamente, se necesitan medidas en relación con las siguientes cuestiones:

- i) Establecimiento por tratado de la obligación jurídica fundamental de todos los Estados de preservar el medio marino y protegerlo de la contaminación.
- ii) Aplicación de conceptos de administración a la preservación del medio marino.
- iii) Elaboración de un sistema eficaz de vigilancia de los cambios del medio marino y de los efectos de diversas actividades dentro de ese medio.
- iv) Adopción y mejora de criterios, reglas técnicas y normas internacionalmente convenidos para asegurar la prevención de la contaminación (por ejemplo, con respecto a las rutas internacionales de navegación, las ayudas a la navegación, la capacitación del personal de los buques, y las normas para el diseño, la construcción y el aparejamiento de los buques).
- v) Solución de las cuestiones jurisdiccionales que se plantean en relación con la preservación del medio marino en zonas costeras y en la alta mar, incluyendo en particular la elaboración de disposiciones eficaces para la aplicación de convenciones internacionales.
- vi) Ulterior elaboración de un régimen sobre indemnización a las víctimas de la contaminación de los mares, con aclaración de la responsabilidad de los Estados a este respecto.
- vii) Elaboración de medidas convenidas internacionalmente para la prevención y el control de la contaminación resultante de la exploración y explotación de los recursos minerales de los fondos marinos dentro y fuera de los límites de la jurisdicción nacional.
- viii) Prestación de asistencia a los países en desarrollo para fortalecer su capacidad para cumplir sus obligaciones en cuanto a la preservación del medio marino.

### III. PRINCIPIOS BASICOS PARA LOS PROYECTOS DE ARTICULOS DE TRATADO QUE SE HAN DE SOMETER A LA CONSIDERACION DE LA CONFERENCIA SOBRE EL DERECHO DEL MAR

Contra el fondo del análisis precedente de lo que aún queda por hacer para proteger al medio marino de las fuentes marinas de contaminación de los mares, en la presente sección se pretende esbozar los principios básicos que deberían reflejarse en los artículos de tratado que ha de elaborar la Conferencia sobre el derecho del mar. Como ya se ha indicado, no se propone que la Conferencia intente establecer un régimen para el control de las fuentes terrestres de contaminación de los mares; pero algunos de los principios que a continuación se examinan tendrían consecuencias obvias para tales fuentes y, con el tiempo, llevarían al establecimiento de nuevas convenciones.

#### i) Obligación de preservar el medio marino

No existe ninguna disposición de tratado que establezca explícitamente la obligación general de los Estados de preservar el medio marino y de evitar su contaminación de cualquier fuente, si bien los artículos 24 y 25 de la Convención sobre la Alta Mar y el párrafo 7 del artículo 5 de la Convención sobre la Plataforma Continental constituyen aplicaciones específicas de este principio fundamental. Aunque en un contexto limitado, la primera expresión de una formulación más general se encuentra en el artículo 1 del proyecto de convención sobre el vertimiento de desechos. Es difícil exagerar la importancia que revestiría tal formulación general en un tratado general o maestro sobre la preservación del medio marino; tal formulación constituiría el elemento de unión o el nexo orgánico entre el tratado general y los tratados particulares o las medidas nacionales referentes a aspectos individuales de la contaminación de los mares y ayudaría a establecer un compromiso general respecto de la elaboración de tales tratados particulares y la adhesión a los mismos. Además, facilitaría una nueva base, de orientación ambiental, para los trabajos en esta esfera de organismos especializados, tales como la OCMI. Los Principios 7 y 21 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano y los Principios sobre el medio marino refrendados en Estocolmo (Principios 1, 2, 3, 5 y 17) establecen directrices para la formulación de la obligación general de los Estados de preservar el medio marino. A continuación se da el texto de cada uno de estos principios, junto con un comentario al mismo. Sin duda alguna, para poder convertirlos en proyectos de artículos de tratado para su consideración por la Conferencia sobre el derecho del mar, estos principios tendrían que ser consolidados en alguna medida.

- El Principio 7 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano dice lo siguiente:

"Los Estados deberán tomar todas las medidas posibles para impedir la contaminación de los mares por sustancias que puedan poner en peligro la salud del hombre, dañar los recursos vivos y la vida marina, menoscabar las posibilidades de esparcimiento o entorpecer otras utilidades legítimas del mar."



Este principio refleja no sólo el deber de los Estados de proteger el medio marino, sino también una definición de la contaminación de los mares basada en la adoptada por el Grupo Mixto de Expertos sobre los Aspectos Científicos de la Contaminación del Mar (GESAMP). Se aproxima mucho al artículo 1 del Convenio de Oslo sobre el vertido de desechos (aunque está enunciado en términos más preceptivos) y también se parece a la definición de la contaminación de los mares convenida en el período de sesiones de Ottawa del GTICM.

- El Principio 21 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano dice lo siguiente:

"De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurarse de que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional."

El primer elemento de este principio, relativo al derecho de los Estados a explotar sus propios recursos, quizás no resulte estrictamente pertinente a un proyecto de tratado que se refiera únicamente a la preservación del medio marino. En cambio, el segundo elemento, concerniente a la obligación de evitar cualquier perjuicio al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional, reviste importancia fundamental en lo que se refiere a asegurar la protección de los intereses costeros y de los recursos compartidos de la alta mar. La obligación de no perjudicar al medio de otros Estados ha sido reconocida en la decisión sobre el caso de la Trail Smelter, que constituye un hito en la materia. Además el tratado de prohibición de ensayos nucleares de 1963 incluye un interdicto todavía más amplio contra los perjuicios extraterritoriales (aunque conviene señalar que a este instrumentos no se han adherido a los los Estados que realizan ensayos y que, en consecuencia, la Conferencia sobre el derecho del mar quizás desee examinar este problema). Esta norma vigente del derecho internacional consuetudinario debería ser el punto de partida para los trabajos de la Comisión sobre la Utilización con Fines Pacíficos de los Fondos Marinos y Oceánicos fuera de los Límites de la Jurisdicción Nacional encaminados a establecer un régimen para la protección del medio marino, incluidas, en especial, las regiones costeras y las "zonas económicas". La cuestión tiene, desde luego, consecuencias importantes para la amplia gama de asuntos del derecho del mar, pues afecta necesariamente a los derechos de los Estados ribereños y de los Estados de pabellón en las aguas territoriales y las zonas pesqueras, en los estrechos internacionales, en la plataforma continental y, quizás sobre todo, en la alta mar (donde las limitaciones a los derechos de los Estados por consideraciones ambientales deben aplicarse aún más estrictamente que dentro del territorio de los Estados y donde la cuestión de una autoridad reguladora internacional resulta particularmente pertinente).



- El Principio 1 de los Principios sobre el medio marino dice lo siguiente:

"Todos los Estados tienen el deber de proteger y preservar el medio marino, y particularmente de evitar la contaminación que pueda afectar a zonas en que esté situado un recurso internacionalmente compartido."

Este principio representa una aplicación particular al medio marino del Principio 21 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. El énfasis que pone en el deber de no contaminar las zonas en que esté situado un recurso internacionalmente compartido hace resaltar claramente la necesidad de que el derecho del mar, además de considerar los intereses nacionales, proteja los intereses de la comunidad. El mandato de que se protejan tales recursos va dirigido, naturalmente, tanto a los Estados ribereños como a los Estados de pabellón y los Estados que pescan en aguas lejanas.

- El Principio 2 sobre el medio marino dice lo siguiente:

"Todos los Estados deberían adoptar medidas para evitar la contaminación de los mares, actuando bien individualmente, bien junto con otros Estados conforme a acuerdos internacionales."

Este principio reconoce la necesidad de que se adopten medidas tanto nacionales como internacionales para evitar la contaminación de los mares en cumplimiento del deber que tiene cada Estado de proteger y preservar el medio marino. Naturalmente, las medidas nacionales no suponen necesariamente una "acción unilateral" en el sentido en que a veces se entiende este término. Lo que entraña el principio es que tanto los Estados ribereños como los Estados de pabellón deben adoptar medidas, individualmente o junto con otros Estados, según convenga, para cumplir con su obligación de preservar el medio marino. En otras palabras, este principio no prejuzga las cuestiones jurisdiccionales.

- El Principio 3 sobre el medio marino dice lo siguiente:

"Los Estados deberían utilizar los mejores medios practicables para reducir al mínimo la descarga en los mares de sustancias potencialmente peligrosas por cualquier clase de vías, incluidas las que vienen de tierra, como los ríos, las cloacas (outfalls) y tuberías que se hallen dentro de la jurisdicción nacional, así como los vertimientos por buques, aeronaves y plataformas o desde ellos."

Este principio reconoce que los problemas de contaminación de los mares forman parte de un conjunto sumamente complejo de problemas superpuestos relacionados con el medio humano en su totalidad. Los problemas de la contaminación de los mares poseen sus características peculiares y la mejor manera de tratarlos es en el contexto del derecho del mar, sin dejar, no obstante, de tener en cuenta la totalidad de los problemas del medio. En cuanto a qué ha de caracterizarse como problema de contaminación de los mares, a los efectos de seleccionar el foro adecuado para tratarlo, el criterio más apropiado podría ser el grado en que esa forma

particular de contaminación es originada directamente por alguna utilización directa del mar. Cuando la contaminación del mar sea ocasionada por substancias que llegan a él a través de la atmósfera o de los escurrimientos continentales como resultado de actividades que se realizan en tierra, la mejor manera de tratar el problema tal vez sea mediante una combinación de medidas nacionales y cooperación internacional en otros foros.

- El Principio 5 sobre el medio marino dice lo siguiente:

"Los Estados deberían asumir una responsabilidad conjunta en lo que atañe a la preservación del medio marino fuera de los límites de la jurisdicción nacional."

Este principio afirma la responsabilidad compartida de todos los Estados (además de su responsabilidad individual indicada más arriba) en relación con la preservación del medio marino más allá de los límites de la jurisdicción nacional, sin especificar cuáles son esos límites en lo que se refiere a la contaminación de los mares, ni prejuzgar en forma alguna esta cuestión. Con respecto a la aplicación de este principio, habrá que considerar los problemas que plantea la falta actual de toda autoridad institucional capaz de ocuparse en forma efectiva y global de las cuestiones de la preservación del medio y la ejecución de medidas de protección en alta mar más allá de los límites de la jurisdicción nacional, cualquiera que sea la forma en que éstos se describan.

- El Principio 17 sobre el medio marino dice lo siguiente:

"Además de su responsabilidad en cuanto a la protección del medio dentro de los límites de sus aguas territoriales, los Estados ribereños tienen también la responsabilidad de proteger las zonas adyacentes del medio contra los daños que puedan resultar de actividades realizadas dentro de su territorio."

Este principio representa una aplicación particular de la norma contra daños extra-territoriales resultantes de actividades realizadas dentro del territorio de un Estado. Además, refleja el interés particular de los Estados ribereños en la administración de los recursos de la zona costera conforme a lo enunciado en la Declaración de objetivos. Aunque el Principio 17 está limitado a las responsabilidades de los Estados ribereños, la prohibición de ocasionar cualquier daño extra-territorial se debe aplicar con igual o mayor firmeza a los barcos de Estados de pabellón que operen en alta mar o dentro de aguas territoriales o de zonas cuyos recursos están bajo la jurisdicción de otros Estados.

## ii) Aplicación de conceptos de administración

La aceptación de la obligación jurídica fundamental de preservar el medio marino representa un cambio importante con respecto a la libertad tradicional de la alta mar. Tal obligación entraña necesariamente un sistema para regular la zona de la alta mar a los fines de proteger el medio. Un sistema regulador de este

carácter habrá de basarse en conceptos de administración fundados en principios científicos. Este enfoque fue reconocido en la Declaración de objetivos elaborada en Ottawa y refrendada por la Conferencia de Estocolmo.

- La Declaración de objetivos dice lo siguiente:

"El medio marino y todos los organismos vivos que mantiene son de vital importancia para la humanidad, e interesa a la humanidad entera administrar dicho medio de modo que no queden perjudicados ni su calidad ni sus recursos. Así puede decirse especialmente de las naciones ribereñas, a quienes interesa particularmente la administración de los recursos de sus litorales. La capacidad de los mares para asimilar desechos y tornarlos inocuos y sus posibilidades de regeneración de recursos naturales no son ilimitadas. Se necesita una adecuada administración, y las medidas encaminadas a evitar la contaminación de los mares deben considerarse un elemento esencial en esta administración de los mares y océanos y de sus recursos naturales."

Es difícil exagerar la importancia de esta declaración. En lo que se refiere a la contaminación de los mares, las leyes existentes se basan en los conceptos del laissez-faire y no reconocen la necesidad de una regulación basada en principios científicos. La Declaración de objetivos, en cambio, reconoce que la capacidad de asimilación y de regeneración de los mares es limitada y que es inevitable llegar a la conclusión de que es necesario aplicar conceptos de administración al medio marino, a los recursos del mar y a la preservación del medio marino.

- El Principio 10 sobre el medio marino dice lo siguiente:

"Tanto por parte de los gobiernos nacionales como por intermedio de organismos intergubernamentales deberían elaborarse directrices y criterios internacionales que constituyesen un marco de política para las medidas de control. Todo plan global para la protección del medio marino debería abarcar la determinación de los contaminantes más peligrosos y sus vías y fuentes, la definición de los grados de exposición a esos contaminantes y la evaluación de los riesgos que entrañan, la detección a tiempo de tendencias inconvenientes y la implantación de sistemas de detección y vigilancia."

Este principio hace hincapié en que la elaboración de directrices y criterios internacionales incumbe tanto a las naciones individuales como a los organismos internacionales. Aunque la responsabilidad primordial de facilitar el marco de política o el marco jurídico global para las medidas de control de la contaminación de los mares a nivel internacional recae en la Comisión sobre la Utilización con Fines Pacíficos de los Fondos Marinos y Oceánicos fuera de los Límites de la Jurisdicción Nacional y a la Conferencia sobre el derecho del mar, el principio reconoce también que todo plan global para la protección del medio marino requiere un enfoque multidisciplinario en el que intervengan diversos organismos. Así, por ejemplo, la determinación de los contaminantes más peligrosos y sus vías y fuentes

requerirá la cooperación de los gobiernos nacionales y de organismos tales como la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la OCMI y otros, incluida de modo especial la secretaría del medio humano recientemente establecida.

- El Principio 13 sobre el medio marino dice lo siguiente:

"En la acción destinada a evitar y controlar la contaminación de los mares (particularmente al establecer prohibiciones directas y límites concretos de descarga) debe cuidarse mucho de no limitarse a transferir los daños o los riesgos de una a otra parte del medio."

Este principio refleja el interés que tienen muchos Estados en que se adopten disposiciones eficaces de salvaguardia contra lo que podría llamarse la exportación de problemas de contaminación. El principio señala la importancia que tiene asegurar que las medidas nacionales y regionales para la prevención de la contaminación de los mares se vean complementadas por medidas mundiales y sean consistentes con éstas. Así, un arreglo regional sobre vertimiento que requiriese la descarga de sustancias cerca de los límites de la región no sería satisfactorio en un sentido mundial. Esta armonización de las medidas resulta básica naturalmente, para el criterio de administración.

- El Principio 22 sobre el medio marino dice lo siguiente:

"Cuando fuera necesario que los organismos internacionales emprendiesen una acción o que ésta se emprendiese por su intermedio para evitar, controlar o estudiar la contaminación de los mares, deberían utilizarse en todo lo posible los organismos existentes tanto dentro del sistema de las Naciones Unidas como fuera de él."

Este principio refleja simplemente la preocupación, ampliamente difundida, porque se evite una proliferación innecesaria de organismos internacionales y se asegure que los organismos existentes sean utilizados al máximo rendimiento en relación con los problemas de la preservación del medio marino. Desde luego, constituye un ejemplo obvio de la teoría de una administración sana. Una destacada excepción a este principio la constituye la nueva secretaría del medio humano, refrendada en la Conferencia de Estocolmo, pues es una institución sumamente valiosa que se necesitaba con urgencia para abordar con eficacia los problemas del medio. Este principio resultará particularmente pertinente cuando se considere la posible necesidad de una autoridad internacional que se ocupe de las cuestiones de preservación del medio en la alta mar fuera de los límites de la jurisdicción nacional.

### iii) Creación de un sistema de vigilancia

Como ya se ha indicado, los conceptos de administración para la preservación del medio marino descansan sobre principios científicos. Por eso, se necesitan conocimientos científicos y sistemas de investigación y de vigilancia para sentar

las bases para la elaboración de políticas de administración que garanticen que no se verán perjudicados ni la calidad ni los recursos del medio marino. Esto se reconoció en los siguientes principios elaborados en Ottawa y referendados por la Conferencia de Estocolmo:

- El Principio 15 sobre el medio marino que dice lo que sigue:

"Los Estados deberían cooperar con otros Estados y con las organizaciones internacionales competentes a fin de establecer programas de investigación y exploración del medio marino y medios y sistemas para descubrir alteraciones de este medio, incluida la realización de estudios del estado actual de los océanos y de las tendencias de los efectos de la contaminación, así como también el intercambio de datos e información científica sobre el medio marino. Debería existir una cooperación análoga para el intercambio de información tecnológica sobre procedimientos para evitar la contaminación de los mares, incluida la que pueda emanar de la exploración y explotación de los recursos de la alta mar."

Este principio reconoce que los problemas de la contaminación de los mares no pueden ser resueltos simplemente mediante la elaboración del derecho internacional, sino que hace falta que los Estados y las organizaciones internacionales, en cooperación adopten medidas en las esferas científica y tecnológica. Al ocuparse de la preservación del medio marino, resulta esencial tener en cuenta la necesidad de un enfoque disciplinario y de los conocimientos extrajurídicos especiales que pueden aportar otros organismos a la consideración de ciertos problemas del derecho del mar, tales como los de la contaminación de los mares, la investigación científica y las pesquerías. Aunque es esencial, la estrategia jurídica no basta por sí sola para resolver todas las cuestiones que se plantean en esta esfera nueva y compleja. Quizás sea necesario que la Conferencia sobre el derecho del mar considere un artículo sobre arreglos internacionales para la vigilancia; también es posible que haga falta considerar qué organismo se ha de responsabilizar de las cuestiones de vigilancia a escala mundial.

- El Principio 16 sobre el medio marino, que dice lo siguiente:

"También deberían establecerse directrices internacionales para facilitar la comparabilidad de los métodos de detección y medición de los contaminantes y sus efectos."

Este principio constituye una mayor elaboración del Principio 15. También destaca la importancia que tiene la coordinación de las medidas nacionales.

#### iv) Mejora de las normas y los reglamentos técnicos

Todo sistema global de administración para la preservación del medio marino basado en medidas nacionales e internacionales requiere que se adopten criterios y normas y reglamentos técnicos, internacionalmente convenidos, como los que se

incorporaron al proyecto de convención sobre el vertimiento de desechos y ahora se están elaborando para el convenio de la OCMI de 1973 con respecto al diseño, la construcción, el aparejamiento y la tripulación de buques. Tales medidas de carácter técnico resultan necesarias como etapas concretas en el cumplimiento de la obligación de proteger al medio marino; para lograr un enfoque mundial efectivo que tenga en cuenta las variaciones locales y regionales es necesario que tales medidas sean acordadas internacionalmente. Este acuerdo también resulta crucial para resolver las cuestiones de jurisdicción y de ejecución, como se indica más adelante en el presente documento. Los siguientes principios resultan pertinentes en esta esfera:

- El Principio 8 sobre el medio marino, que dice lo siguiente:

"Todos los Estados deberían cooperar con otros Estados y con las organizaciones internacionales competentes en lo que atañe a la elaboración y aplicación de reglamentos, normas y procedimientos internacionalmente acordados para la prevención de la contaminación de los mares en los planos mundial, regional y nacional."

La elaboración de normas y reglamentos internacionalmente acordados es fundamental no sólo para la prevención de la contaminación de los mares, sino también para la amplia gama de asuntos que abarca el derecho del mar, y va de la mano con la cuestión de los derechos e intereses de los Estados ribereños. La contaminación de los mares sólo puede ser atacada en forma eficaz mediante una combinación de normas y reglamentos mundiales, regionales y nacionales, en que los primeros fijen por lo menos las medidas mínimas que se han de adoptar para la preservación del medio marino, y los otros establezcan las disposiciones particulares y, quizás, más estrictas que se requieran para hacer frente a las situaciones especiales que se den en ciertas zonas, tales como el Artico o ciertas masas de agua semicerradas.

- El Principio 9 sobre el medio marino, que dice lo siguiente:

"Los Estados deberían unirse regionalmente para concertar políticas y adoptar en común medidas encaminadas a impedir la contaminación de las zonas que, por razones geográficas o ecológicas, constituyen una entidad natural e integrada."

Este principio constituye una mayor elaboración del Principio 8 y reconoce realidades geográficas y ecológicas importantes sin menoscabar en forma alguna el enfoque global de los problemas de la contaminación de los mares.

- El Principio 11 sobre el medio marino, que dice lo siguiente:

"En los criterios y normas internacionalmente acordados deberían tenerse en cuenta las variaciones regionales y locales de los efectos de la contaminación y de la evaluación de esos efectos. Entre esas variables deberían asimismo incluirse la ecología de las zonas marítimas, las condiciones económicas y sociales, los atractivos de la zona, los medios de esparcimiento y otras formas de utilización del mar."

Este principio está íntimamente relacionado con los Principios 8 y 9 que se acaban de examinar. Este enfoque resulta especialmente importante para los países en desarrollo que no puedan establecer las mismas normas que los Estados altamente desarrollados.

- El Principio 12 sobre el medio marino, que dice lo siguiente:

"Convendría establecer en el plano nacional, y en algunos casos sobre una base regional o global, normas básicas de protección y criterios de trabajo derivados de ellas, especialmente códigos de prácticas y normas relativas a las emanaciones."

Este principio constituye igualmente una mayor elaboración de los Principios 8 y 9 desde un punto de vista científico y técnico. También él puede resultar especialmente pertinente a las necesidades de los países en desarrollo.

- El Principio 14 sobre el medio marino, que dice lo siguiente:

"El establecimiento y la aplicación del control deben tener la flexibilidad suficiente para reflejar el conocimiento creciente del ecosistema marino y de los efectos de la contaminación, así como las mejoras de los medios tecnológicos de lucha contra la contaminación, y en ellos debe tenerse en cuenta la posibilidad de que se descubran algunos contaminantes nuevos y hasta ahora insospechados."

Este principio refleja la importancia que reviste el establecimiento de mecanismos de examen a nivel nacional, regional y mundial, que permitan identificar prontamente cualquier nueva amenaza al medio marino y hagan posible enmendar conveniente y rápidamente (por ejemplo, mediante el uso de anexos) las leyes nacionales y los acuerdos multilaterales a fin de hacer frente a los nuevos peligros. Estos mecanismos de examen resultan particularmente importantes en el caso de acuerdos tales como la Convención para la prevención de la contaminación de las aguas del mar por los hidrocarburos, de 1954, y los proyectos de artículos sobre vertimiento de desechos.



v) Resolución de cuestiones jurisdiccionales y de ejecución

Las dos cuestiones más importantes y difíciles que se han planteado en relación con los esfuerzos por promover la cooperación internacional para la preservación del medio marino han sido:

- i) La determinación de la autoridad jurisdiccional adecuada para prescribir las medidas necesarias;
- ii) La determinación de la autoridad adecuada para ejecutar dichas medidas.

Sin embargo, si se llega a un acuerdo sobre la obligación de todos los Estados de preservar el medio marino y sobre la necesidad de contar con criterios, reglamentos técnicos y normas internacionalmente convenidos para el cumplimiento de esa obligación, estas cuestiones jurisdiccionales podrán visualizarse dentro de una nueva perspectiva. Respecto de la jurisdicción para prescribir medidas, la adopción de criterios, reglamentos técnicos y normas internacionalmente convenidos hará que la cuestión se limite simplemente a determinar el margen que habrá que dejar para variaciones regionales y locales de las disposiciones internacionalmente convenidas. Respecto de la jurisdicción de ejecución, la adopción de criterios, reglamentos técnicos y normas internacionalmente convenidos neutralizará a su vez una fuente importante de posibles conflictos. En otras palabras, se hará más fácil adoptar una actitud más flexible respecto de la elección de la autoridad encargada de la ejecución cuando se haya llegado a un acuerdo respecto de las medidas que se habrán de aplicar.

Estas cuestiones jurisdiccionales y de ejecución se plantean respecto de todas las convenciones existentes relacionadas con la preservación del medio marino. Es imprescindible que queden resueltas en el "tratado maestro" que ha de aprobar la Conferencia sobre el derecho del mar. A este respecto, parece evidente que será preciso tener más en cuenta los derechos de los Estados ribereños. Al mismo tiempo, parece también evidente que habrá que evitar la injerencia indebida en la responsabilidad del Estado del pabellón respecto de sus buques, y que, por el contrario, dicha responsabilidad deberá reforzarse en ciertos aspectos. En cuanto a la jurisdicción para prescribir medidas, el Estado ribereño deberá conservar una autoridad residual para promulgar reglas cuando todavía no existan reglas internacionales o se planteen circunstancias especiales. Respecto de la jurisdicción de ejecución, el Estado ribereño también deberá conservar una autoridad residual para hacer cumplir los reglamentos internacionalmente convenidos por los buques extranjeros más allá de los límites de su mar territorial o para hacer cumplir sus propios reglamentos por tales buques en dichas zonas en los casos en que aún no haya reglamentos internacionales en que el Estado ribereño haya promulgado reglamentos especiales para atender a circunstancias especiales.

Este concepto de la autoridad residual del Estado ribereño sería análogo al principio inherente al derecho de intervención en la alta mar, según se reconoce en el Convenio de Bruselas de 1969 de la OCMI, y debería considerarse como una extensión lógica de este principio. Un concepto similar se refleja también en el proyecto de artículos sobre el vertimiento de desechos en el océano. Este proyecto



de artículos no toma partido respecto de las cuestiones de jurisdicción, y, sin descartar ninguna de las posibilidades, deja la decisión definitiva en manos de la Conferencia sobre el derecho del mar. Sin embargo, el proyecto de artículos en su forma actual echa las bases para que se tomen en consideración intereses que pueden tener consecuencias que vayan mucho más allá de la cuestión del vertimiento de desechos en el océano. Esos artículos, si bien no dejan de lado el concepto de la jurisdicción del Estado del pabellón, no serían aplicables exclusivamente por el Estado del pabellón a sus propios buques. En virtud de sus términos, también podrían aplicarlos los Estados ribereños respecto de buques "sometidos a su jurisdicción". Esto refleja el tipo de arreglo por el cual los problemas jurisdiccionales podrían resolverse conforme a un criterio en cierta medida análogo al criterio de jurisdicción universal aceptado por todos los Estados respecto de la esclavitud y la piratería, esto es, el de la ejecución tanto por los Estados ribereños como por los Estados de pabellón sobre la base de reglamentos internacionalmente convenidos. El ámbito de este criterio de doble ejecución en cuanto a los artículos sobre el vertimiento de desechos fue posteriormente ampliado cuando se incluyó en la propuesta de acción de Estocolmo una referencia a la ejecución por los Estados respecto de buques en zonas bajo su jurisdicción (además de buques sometidos a su jurisdicción).

La Declaración de objetivos y los Principios sobre el medio marino preparados en Ottawa y aprobados por la Conferencia de Estocolmo proporcionan alguna orientación para el desarrollo del derecho en lo tocante a las cuestiones de jurisdicción y la ejecución. A este respecto, se dan formulaciones más elaboradas en los tres principios sobre los derechos de los Estados ribereños, que se examinaron en el período de sesiones de Ottawa del GTICM sin que dicho grupo los refrendara ni rechazara y que ahora se han remitido a la OCMI para su información y a la Comisión sobre la Utilización con Fines Pacíficos de los Fondos Marinos y Oceánicos fuera de los Límites de la Jurisdicción Nacional para que tome las medidas del caso. La Declaración de objetivos ya se ha analizado más arriba. Los otros principios pertinentes figuran a continuación:

- El Principio 20 sobre el medio marino dice lo siguiente:

"Todos los Estados deberían lograr el cumplimiento, por parte de los buques de su bandera, de los reglamentos y las normas internacionalmente acordados relativos al diseño y construcción de buques, a los procedimientos de funcionamiento y a otros factores pertinentes. Los Estados deberían cooperar en la elaboración de tales reglamentos, normas y procedimientos en los organismos internacionales adecuados."

Al ocuparse de las responsabilidades de los Estados de pabellón respecto del funcionamiento de sus buques en la alta mar y en otras partes, este principio representa un primer paso esencial para atemperar la tradicional libertad de navegación con consideraciones de protección del medio marino en general y del medio ribereño en particular. Si bien este principio debe reflejarse en el tratado que se ha de aprobar en la Conferencia sobre el derecho del mar, la elaboración efectiva de reglamentos y normas internacionalmente convenidos respecto del diseño y la construcción de buques y los procedimientos de funcionamiento (incluso las rutas de tráfico) corresponde más a la competencia de la OCMI, que de hecho se está ocupando ya de desarrollar dichos reglamentos y normas, especialmente en relación con la conferencia que ha de convocar en 1973.

- El Principio 4 sobre el medio marino dice lo siguiente:

"Los Estados deberían asegurar que sus legislaciones nacionales dispusieran sanciones adecuadas para quienes infringiesen las reglamentaciones sobre la contaminación de los mares."

Aunque los Estados tienden naturalmente a hacer cumplir sus propias reglamentaciones nacionales, no siempre demuestran necesariamente el mismo rigor para hacer cumplir reglamentaciones internacionalmente convenidas, según lo indica la experiencia de los Estados en relación con acuerdos tales como la Convención internacional de 1954 para la prevención de la contaminación de las aguas del mar por los hidrocarburos. Este principio subraya el deber de hacer cumplir igualmente todos los reglamentos, y si bien su sentido es evidente de por sí, no por ello carece de importancia, y será necesario desarrollarlo en cualquier tratado elaborado en la Conferencia sobre el derecho del mar, en lo relativo a las responsabilidades de los Estados de pabellón y de los Estados ribereños.

- El Principio 21 sobre el medio marino dice lo siguiente:

"Después de un accidente en alta mar que pueda tener importantes consecuencias perniciosas dimanadas de la contaminación o un riesgo de contaminación del mar, los Estados ribereños que se enfrenten con un peligro grave e inminente para sus costas e intereses conexos podrán tomar las medidas necesarias para evitar, mitigar o eliminar ese peligro, de conformidad con los reglamentos y las normas internacionalmente acordados."

El Convenio de Bruselas de 1969 de la OCMI prevé este derecho de intervención, pero solamente respecto de accidentes de contaminación por hidrocarburos. Corresponderá a la Conferencia sobre el derecho del mar incorporar una formulación más general de este derecho concebida en términos adecuados para un tratado. Sin embargo, si bien este derecho de intervención es sumamente importante, su valor se ve desde luego limitado por el hecho de que solamente se prevean medidas que el Estado ribereño puede tomar una vez ocurrido un incidente marítimo. Pese a ello, representa una manifestación particular de la autoridad residual más general prevista para el Estado ribereño en zonas adyacentes a su mar territorial, si bien el principio no incorpora ninguna limitación de distancia. Un concepto análogo se refleja en el Principio 13 b) de la Declaración de principios que regulan los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional, y en la relación entre dicho principio y el Principio 21 sobre el medio marino.

- El primero de los tres principios examinados en el período de sesiones de Ottawa del GTICM dice lo siguiente:

"Un Estado podrá ejercer autoridad especial en zonas del mar adyacentes a sus aguas territoriales cuando se necesiten controles técnicos de carácter continuo para la prevención eficaz de la contaminación que pueda causar daños o perjuicios al medio terrestre o marino que se halla bajo su autoridad exclusiva o soberana."

Este principio representa la extensión lógica de los intereses particulares del Estado ribereño, reconocidos en la Declaración de objetivos analizada anteriormente en el presente documento. Al postular la autoridad del Estado ribereño, constituye el corolario lógico de la especial importancia que se ha dado a las obligaciones de los Estados ribereños, reflejada en la mayor parte de los 23 principios acordados sobre la contaminación de los mares. Si se admite que los derechos deben estar equilibrados por responsabilidades, habrá que reconocer indudablemente que las responsabilidades deben estar equilibradas por los derechos y facultades necesarios. En términos prácticos, este principio significa que los Estados ribereños tienen derecho a ejercer una jurisdicción especializada en zonas adyacentes a su mar territorial para la prevención de la contaminación del medio ribereño y del medio marino en general. Si bien este principio entrañaría una atenuación limitada de la autoridad exclusiva del Estado del pabellón sobre sus buques en estas zonas, de ninguna manera trae aparejado un renunciamento de la autoridad general del Estado del pabellón. Se trata, en realidad, de un ejercicio concreto y limitado de autoridad residual por parte del Estado ribereño para asegurar el cumplimiento de normas internacionalmente convenidas o de normas locales especiales.

- El segundo de los principios examinados en Ottawa dice lo siguiente:

"Un Estado ribereño podrá prohibir la entrada en aguas que estén bajo su autoridad para la protección del medio a todo buque que no satisfaga los reglamentos y normas internacionalmente acordados o, a falta de ellos, los reglamentos y normas nacionales razonables del Estado ribereño."

Como ya se ha señalado, uno de los principios refrendados por la Conferencia de Estocolmo estipula que todos los Estados deben asegurar que sus buques cumplan los reglamentos y las normas internacionalmente acordados relativos al diseño y construcción de buques, a los procedimientos de funcionamiento y a otros factores pertinentes. Para dar efecto práctico a este principio convenido, parece imprescindible que el Estado ribereño tenga el derecho de prohibir la entrada a las zonas donde ejerce jurisdicción para la protección del medio a buques que no cumplan los reglamentos y las normas internacionalmente acordados. Desde luego, habrá que elaborar medidas para resolver los problemas de inspección, pero éstas se simplificarían considerablemente mediante un sistema de certificados internacionales de navegabilidad, desarrollado en el foro correspondiente. Análogamente, cuando no haya reglamentos o normas internacionalmente acordados, el Estado ribereño debe tener el derecho de hacer cumplir sus propios reglamentos y normas nacionales razonables por todos los buques en las zonas del caso. Sin embargo, queda en pie la posible necesidad de una autoridad internacional que asegure el cumplimiento de los reglamentos y las normas internacionalmente acordados en la alta mar más allá de los límites de la jurisdicción nacional. De este asunto tendría que ocuparse la Conferencia sobre el derecho del mar.

- El tercer principio examinado en Ottawa dice lo siguiente:

"Los derechos o facultades que un Estado debería ejercer, además de sus derechos o facultades soberanos, en virtud de su autoridad especial en zonas adyacentes a sus aguas territoriales, deberían considerarse delegados en ese Estado por la comunidad mundial en representación de toda la humanidad. Los derechos y facultades ejercidos deben estar en consonancia con la responsabilidad primordial del Estado de proteger el medio marino en esas zonas; deben estar sujetos a reglamentos y normas internacionales y ser susceptibles de revisión ante un tribunal internacional competente."

Desde luego, este principio refleja el enfoque general del Canadá respecto de todos los problemas del derecho del mar y de la contaminación de los mares en particular. Sin embargo, no hay que dar especial importancia a la terminología en sí. Los términos tales como "delegación de poderes" no deben considerarse como expresiones adecuadas para un proyecto de artículos de tratado, sino más bien como ilustraciones de un enfoque conceptual en virtud del cual los Estados de pabellón delegarían en los Estados ribereños, por un tratado multilateral, el derecho a hacer cumplir por sus buques los reglamentos y las normas internacionalmente acordados. El necesario reconocimiento de los derechos de los Estados ribereños también deberá tener en cuenta adecuadamente los intereses de todos los Estados y de la comunidad internacional en conjunto y, con tal objeto, esos derechos deberán ejercerse sobre la base de reglamentos y las normas internacionalmente acordados y con sujeción a los procedimientos apropiados de arreglo de controversias.

vi) Régimen de indemnización y aclaración de la responsabilidad de los Estados

Del principio de que los Estados deben asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional (Principio 2 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano) resulta, como consecuencia necesaria que se debe indemnizar a las víctimas de los perjuicios de la contaminación en estas circunstancias. Si bien el desarrollo de un sistema eficaz de prevención de la contaminación debe ser el elemento más importante de los arreglos internacionales destinados a preservar el medio marino, también reviste fundamental importancia la elaboración de un régimen adecuado de indemnización. La necesidad de desarrollar un régimen de este tipo ha quedado reconocida en los siguientes principios de Estocolmo:

- El Principio 22 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que dice lo siguiente:

"Los Estados deben cooperar para continuar desarrollando el derecho internacional en lo que se refiere a la responsabilidad y a la indemnización a las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales que las actividades realizadas dentro de la jurisdicción o bajo el control de tales Estados causen a zonas situadas fuera de su jurisdicción."

- El Principio 7 de los Principios sobre el medio marino, dice lo siguiente:

"Los Estados, de conformidad con los principios del derecho internacional, deberían cumplir sus obligaciones para con otros Estados cuando la contaminación derivada de sus propias actividades o de las de organizaciones o personas que estén bajo su jurisdicción ocasionara daños, y deberían cooperar entre ellos a fin de elaborar procedimientos para hacer frente a tales daños y solucionar controversias."

Si bien el derecho a la indemnización por daños de contaminación existe sin lugar a dudas, se plantean cuestiones espinosas en relación con la satisfacción de dicho derecho, especialmente en lo relativo a la indemnización por daños sufridos en zonas cuyos recursos están bajo la jurisdicción del Estado ribereño y en zonas situadas más allá de los límites de la jurisdicción nacional. Podrían idearse diversos medios para asegurar el pago de indemnización, desde la creación de fondos internacionales de indemnización o planes de seguros hasta el reconocimiento de derechos privados de acción establecidos por las leyes de cada Estado de conformidad con las obligaciones internacionalmente acordadas, e incluso, en las circunstancias adecuadas, el pago directo de indemnización por el Estado responsable. Lo importante es que la indemnización se pague rápidamente y sea suficiente para cubrir el daño sufrido. Es alentador que algunas importantes Potencias marítimas hayan manifestado estar dispuestas a aceptar responsabilidades rigurosas por daños causados al medio por buques de su pabellón al pasar por estrechos internacionales. Al parecer, no hay motivo para limitar este principio al mar territorial en los estrechos internacionales y no aplicarlo al mar territorial en general. Además, habrá que considerar la indemnización que deberá pagarse por daños causados a los recursos ribereños situados más allá de los límites del mar territorial, y la indemnización por daños ocasionados por fuentes que no sean buques (por ejemplo, la explotación de los fondos marinos). La función de la Conferencia sobre el derecho del mar en el desarrollo de arreglos globales sobre indemnización deberá limitarse indudablemente a la enunciación de principios jurídicos generales. Habrá que pedir a otros foros, tales como la OCMI, que desarrollen sistemas para la aplicación práctica de estos principios y para el establecimiento de procedimientos destinados a arreglar los casos en disputa. Evidentemente, el desarrollo de disposiciones de este tipo exigirá también la cooperación bilateral y regional.

#### vii) Exploración y explotación de los fondos marinos

El derecho internacional no se ha ocupado extensamente de las cuestiones ambientales que se plantean a raíz de la exploración y explotación de los recursos de los fondos marinos en zonas situadas dentro o fuera de los límites de la jurisdicción nacional, si bien se han elaborado reglamentaciones nacionales respecto de actividades que se realizan dentro de la jurisdicción nacional. La orientación para el ulterior desarrollo del derecho en esta esfera puede hallarse en los siguientes principios:

Principio 18 sobre el medio marino, que dice lo siguiente:

"Los Estados ribereños deberían procurar que se dispusiera de recursos suficientes y apropiados para hacer frente a los casos de contaminación resultante de la exploración y explotación de los recursos del lecho marino en zonas situadas dentro de los límites de su jurisdicción nacional."

Teniendo en cuenta la obligación fundamental de todos los Estados de preservar el medio marino, será necesario establecer normas internacionalmente acordadas respecto de las medidas contra la contaminación que los Estados ribereños estarían obligados a adoptar en relación con la explotación de recursos de los fondos marinos aún dentro de los límites de su jurisdicción nacional. Varios Estados ya han adoptado medidas nacionales de este tipo, las cuales podrían ser útiles para la preparación de un acuerdo sobre medidas de seguridad para la explotación de los recursos de los fondos marinos más allá de los límites de la jurisdicción nacional. En lo que concierne a la Conferencia sobre el derecho del mar, su función en el desarrollo del derecho en esta esfera deberá restringirse a la enunciación de principios generales. Las medidas de índole técnica más detalladas requerirán acuerdos bilaterales y regionales, en que se tengan en cuenta las medidas que habrá que formular para la zona internacional de los fondos marinos, según se tratan más abajo.

- El Principio 19 sobre el medio marino dice lo siguiente:

"Los Estados deberían cooperar en el organismo internacional apropiado para que las actividades relacionadas con la exploración y explotación del lecho marino y de los fondos oceánicos fuera de los límites de su jurisdicción nacional no dieran por resultado la contaminación del medio marino."

- El Principio 11 de la Declaración de principios que regulan los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional (resolución 2749 (XXV) de la Asamblea General) dice lo siguiente:

"Con respecto a las actividades en la zona y actuando de conformidad con el régimen internacional que se establezca, los Estados tomarán las medidas apropiadas para la adopción y aplicación de normas, reglas y procedimientos internacionales y colaborarán al efecto, a fin de procurar, entre otras cosas:

a) Impedir la contaminación, impurificación y otros peligros para el medio marino, incluidas las costas, y la perturbación del equilibrio ecológico del medio marino;

b) Proteger y conservar los recursos naturales de la zona y prevenir daños a la flora y fauna del medio marino."

- El Principio 13 b) de la Declaración dice lo siguiente:

"Ninguna de las disposiciones de la presente Declaración afectará:

...

b) Los derechos de los Estados ribereños relacionados con la adopción de medidas para prevenir, mitigar o eliminar un peligro grave e inminente para sus costas o intereses conexos derivado de la contaminación, la amenaza de contaminación u otras contingencias azarosas resultantes de cualesquiera actividades en la zona o causadas por tales actividades, con sujeción al régimen internacional que se establezca."

Como ya se ha señalado anteriormente, el desarrollo de medidas contra la contaminación en lo relacionado con la explotación de los recursos de los fondos marinos podría y debería efectuarse de manera coordinada respecto de las zonas situadas dentro de los límites de la jurisdicción nacional y las situadas fuera de estos límites. Las medidas previstas para la zona internacional de los fondos marinos deberían representar las medidas mínimas que adopten los Estados en las zonas situadas dentro de su jurisdicción nacional. El tratado internacional sobre los fondos marinos que habrá de negociarse en la Conferencia sobre el derecho del mar deberá establecer principios generales respecto de la protección del medio marino en relación con la explotación de los recursos internacionales de los fondos marinos, en tanto que quizás convenga dejar para el futuro mecanismo internacional sobre los fondos marinos la tarea de formular medidas técnicas más detalladas en consulta con los Estados ribereños y otros organismos que cuenten con la experiencia necesaria en esta esfera.

#### viii) Asistencia técnica

Un método importante para asegurar que todos los Estados puedan cumplir su obligación de preservar el medio marino es proporcionar asistencia técnica a los países en desarrollo. En el Principio 6 sobre el medio marino se reconoce la necesidad de este tipo de asistencia.

- El Principio 6 relativo al medio marino dice lo siguiente:

"Los Estados que se hallan en niveles superiores de desarrollo tecnológico y científico deberían prestar asistencia a las naciones que la solicitasen, por ejemplo, emprendiendo directamente o a través de organismos competentes programas encaminados a dar formación al personal técnico y científico de esos países, así como proporcionando el equipo y las facilidades necesarios en esferas tales como la investigación, la administración, la vigilancia o control, la información, la eliminación de desechos, etc., lo cual daría a los países solicitantes mayor capacidad para desempeñar sus obligaciones en lo tocante a la protección del medio marino."



El derecho del mar puede proporcionar una orientación útil en materia de política respecto de la aplicación de este principio, pero parece evidente que será necesario adoptar medidas adicionales en otros foros para su pleno desarrollo y aplicación. Si bien la asistencia técnica reviste importancia especial para los países en desarrollo, también se plantean situaciones en que los Estados en cualquier nivel de desarrollo requieren asistencia para hacer frente a problemas que afectan al medio marino. Esto se tomó en cuenta en el Principio 23 sobre el medio marino, que dice lo siguiente:

"Los Estados deberían ayudarse mutuamente en todo lo posible en la acción contra la contaminación de los mares, sea cual fuere su origen."

Este principio general deberá reflejarse en el tratado que se apruebe en la Conferencia sobre el derecho del mar. Sin embargo, su aplicación práctica requerirá la preparación de arreglos bilaterales y regionales, tales como planes conjuntos de contingencia para zonas marítimas de interés común.

#### IV. OTRAS MEDIDAS RESPECTO DE LAS FUENTES TERRESTRES DE CONTAMINACION DE LOS MARES QUE DEBEN EXAMINARSE EN LA CONFERENCIA SOBRE EL DERECHO DEL MAR

Las fuentes marinas constituyen bastante menos de la mitad del total de las fuentes de contaminación del medio marino. En consecuencia, las medidas que se someterán a la aprobación de la Conferencia sobre el derecho del mar no pueden ni deben considerarse como garantía de la preservación del medio marino, sino más bien como un primer paso hacia tal garantía. Cada vez se torna más urgente la necesidad de adoptar medidas internacionalmente convenidas respecto de problemas tales como el escurrimiento continental, el escurrimiento fluvial, la contaminación causada por las tuberías y la contaminación de la atmósfera. Sin embargo, como se señaló anteriormente, todos estos problemas exceden el alcance de lo que podría lograrse en una Conferencia inicial sobre el derecho del mar. No obstante, son problemas de importancia fundamental en cualquier enfoque global y a largo plazo de la protección del medio marino.



V. INDICES DE LAS ACTAS RESUMIDAS

1. Indice de las actas resumidas de la Comisión

Sesiones celebradas del 28 de febrero al 30 de marzo de 1972  
(A/AC.138/SR.71 a 76)

71a. sesión:

Apertura del período de sesiones:

Declaración del Presidente

Organización de los trabajos:

Declaraciones del Presidente y de Perú

72a. sesión:

Declaraciones generales:

Finlandia, China

Declaraciones del Ecuador, Perú, Chile, China, Estados Unidos de América, Japón y Brasil

73a. sesión:

Declaraciones generales (continuación)

Nicaragua, Fiji, Zambia

Cuestión de la denuncia de dos convenciones por Senegal: Senegal

Derecho a contestar:

China, Japón, Filipinas, Estados Unidos de América

74a. sesión:

Declaración del Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano

Declaración del Representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

Declaraciones de Bélgica, Sri Lanka y Chile

Cuestión de la denuncia de dos convenciones por Senegal:

Declaraciones de Bélgica, Malta, Senegal y México

75a. sesión:

Declaración del Secretario General

Organización de los trabajos (continuación):

Declaraciones del Presidente, Malta y Chile

Cuestión de la denuncia de dos convenciones por Senegal:  
Declaración del Asesor Jurídico

76a. sesión:

Proyecto de decisión:

Declaraciones de Kuwait, Chile, India, Sri Lanka, Perú, Camerún, China, Nigeria, Kenia, Irak, Mauritania, Argelia, Yemen, Pakistán y la República Árabe Libia

Informes de los Presidentes de las Subcomisiones:

Informe del Presidente de la Subcomisión I

Informe del Presidente de la Subcomisión II

Declaraciones de Senegal, Mauritania, Túnez, Irán, Nigeria, Guyana, Fiji, Filipinas, Canadá, Camerún, Ecuador, Brasil, El Salvador, Noruega y Singapur

Informe del Presidente de la Subcomisión III

Declaración de Chile

Clausura del período de sesiones:

Declaración del Presidente

Sesiones celebradas del 17 de julio al 18 de agosto de 1972  
(A/AC.138/SR.77 a 89)

77a. sesión:

Apertura del período de sesiones:

Declaración del Presidente

Organización de los trabajos:

Declaraciones del Presidente y de Malta, Canadá, Chile, Perú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Turquía, México y Ecuador

78a. sesión:

Declaraciones sobre reuniones regionales:

Declaraciones del Presidente, Venezuela, Colombia, Kenia, Canadá, Australia y Camerún

Declaraciones de los Presidentes de las Subcomisiones I, II y III

79a. sesión:

Declaraciones de Chile, Uruguay y Jamaica

Declaraciones de los Presidentes de las Subcomisiones I, II y III

80a. sesión:

Declaración del Ecuador

Declaraciones de los Presidentes de las Subcomisiones I, II y III

Declaración del Asesor Jurídico

81a. sesión:

Declaraciones generales (continuación):

México

Declaraciones de los Presidentes de las Subcomisiones I, II y III

Declaración del Presidente y de Filipinas

82a. sesión:

Reunión de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar

Declaraciones de Chile, Noruega, Austria, Kenia, El Salvador, México, Bulgaria, Argentina, Egipto, Trinidad y Tabago, India, Perú, Uruguay, Yugoslavia, Marruecos, Filipinas, España, Australia, Ecuador, Nigeria, Cuba, Francia y Colombia

Declaraciones de Colombia y Venezuela

83a. sesión:

Declaraciones de Malta, Singapur, Canadá, Estados Unidos de América, Trinidad y Tabago, Islandia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Turquía, China y República Unida de Tanzania

84a. sesión:

Declaraciones de India, México, Kuwait, Argentina, Reino Unido y Perú

85a. sesión:

Declaraciones de Afganistán, Nepal, Zaire, Sri Lanka, Zambia, Estados Unidos de América, Sudán, Irak, Chile, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Francia, Perú, Japón y Argelia

86a. sesión:

Declaraciones de Polonia, Filipinas, Singapur, China y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Aprobación del informe de la Subcomisión I (A/AC.138/82)

Aprobación de la Introducción al informe de la Comisión (A/AC.138/L.12)

87a. sesión:

Declaración del Presidente de la Subcomisión I

Declaraciones de Etiopía, Colombia, Filipinas, Francia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estados Unidos de América y el Presidente

Aprobación del informe de la Subcomisión III (A/AC.138/84)

Examen de la parte I del informe de la Comisión (A/AC.138/L.12/Add.1)

88a. sesión:

Aprobación del informe de la Subcomisión II (A/AC.138/83)

Examen de la parte I del informe de la Comisión (continuación)

89a. sesión:

Aprobación de la parte I del informe de la Comisión

2. Índice de las actas resumidas de la Subcomisión I

Sesiones celebradas del 29 de febrero al 23 de marzo de 1972  
(A/AC.138/SC.I/SR.32 a 47)

32a. sesión:

Apertura del período de sesiones por el Presidente interino

Elección de la Mesa

Declaraciones de Tanzania y los Países Bajos

Organización de los trabajos

Declaración del Presidente

33a. sesión:

1. Organización de los trabajos (continuación)

Declaraciones del Presidente, Perú, Turquía, Noruega, Malta, Canadá, Sri Lanka, Kuwait, Australia

2. Estatuto jurídico, alcance y disposiciones básicas del régimen sobre la base de declaración de principios que figura en la resolución 2749 (XXV).  
Declaraciones de los Estados Unidos de América y Canadá

34a. sesión:

1. Declaración del Asesor Jurídico sobre el cuadro comparativo contenido en el documento A/AC.138/L.10
2. "Estatuto jurídico, alcance y disposiciones básicas ..." (continuación)  
Declaración de Australia

35a. sesión:

1. "Estatuto jurídico, alcance y disposiciones básicas ..." (continuación)  
Declaraciones de Grecia, Polonia, Sri Lanka, Chile y Perú
2. Nota del Secretario General de 11 de mayo de 1971:  
Declaración del Canadá

36a. sesión:

1. "Estatuto jurídico, alcance y disposiciones básicas ..." (continuación)  
Declaraciones de Malta, Perú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Argelia, Turquía, Rumania e Irak
2. Nota del Secretario General de 11 de mayo de 1971:  
Declaración del Asesor Jurídico

37a. sesión:

"Estatuto jurídico, alcance y disposiciones básicas ...\*  
(continuación)  
Declaraciones de Bulgaria, Checoslovaquia, República Socialista Soviética de Bielorrusia, Singapur, Afganistán, Australia, Italia, Estados Unidos de América y Chile

38a. sesión:

"Estatuto jurídico, alcance y disposiciones básicas ..." (continuación)  
Declaraciones de la República Socialista Soviética de Ucrania, Kuwait, Japón, Canadá y el Presidente

39a. sesión:

1. "Estatuto jurídico, alcance y disposiciones básicas ..." (continuación)  
Declaraciones de Yugoslavia, Colombia, Madagascar, Brasil, Bélgica, Irán, India y Argentina
2. Organización de los trabajos:  
Declaración del Presidente

40a. sesión:

1. "Estatuto jurídico, alcance y disposiciones básicas ..." (continuación)  
Declaración del Presidente
2. Organización de los trabajos:  
Declaraciones del Presidente, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Turquía, Italia, Costa de Marfil, Francia, Chile, India, Nigeria y Jamaica
3. Estatuto jurídico, alcance, funciones y facultades del mecanismo internacional:  
Declaraciones del Presidente, México y la República Unida de Tanzania

41a. sesión:

- "Estatuto jurídico, alcance, funciones y facultades ..." (continuación)  
Declaraciones de los Países Bajos, Estados Unidos de América, Reino Unido, Canadá y México

42a. sesión:

1. Organización de los trabajos:  
  
Declaraciones del Presidente y de la República Socialista Soviética de Ucrania
2. "Estatuto jurídico, alcance, funciones y facultades ..." (continuación)  
Declaraciones de Finlandia, Australia, Bélgica, República Unida de Tanzania, Países Bajos, Estados Unidos de América y Perú

43a. sesión:

1. "Estatuto jurídico, alcance, funciones y facultades ..." (continuación)  
Declaraciones de Canadá, Chile, el Presidente, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Sri Lanka, Suecia, Kuwait y Francia
2. Organización de los trabajos:  
Declaración del Presidente

44a. sesión:

1. Organización de los trabajos:  
Declaración del Presidente y de Perú
2. "Estatuto jurídico, alcance, funciones y facultades ..." (continuación)  
Declaraciones de Malta, Jamaica, Bélgica, Trinidad y Tabago, España, Perú y Singapur

45a. sesión:

1. "Estatuto jurídico, alcance, funciones y facultades ..." (continuación)  
Declaraciones de Polonia, Colombia, Irak, Grecia, Zaire, Pakistán y Bulgaria

46a. sesión:

- "Estatuto jurídico, alcance, funciones y facultades ..." (continuación)  
Declaraciones del Japón, República Socialista Soviética de Ucrania, Argentina, Francia, República Socialista Soviética de Bielorrusia, Afganistán, Turquía, Nueva Zelandia, Mauritania y Uruguay

47a. sesión:

1. "Estatuto jurídico, alcance, funciones y facultades ..." (continuación)  
Declaraciones del Reino Unido, Brasil y Kenia
2. Organización de los trabajos:  
Declaraciones del Presidente, Reino Unido, Singapur, Afganistán, Brasil, Ecuador, Estados Unidos de América, Australia y el Asesor Jurídico

Sesiones celebradas del 19 de julio al 15 de agosto de 1972  
(A/AC.138/SC.I/SR.48 a 61)

48a. sesión:

Apertura del período de sesiones  
Declaración del Presidente

Declaración del Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales  
Declaración del Secretario General de la UNCTAD  
Declaraciones de Francia, Chile, el Presidente y el Reino Unido

49a. sesión:

1. Declaración del Presidente del Grupo de Trabajo I
2. "Notas adicionales sobre las posibles consecuencias económicas de la extracción de minerales de la zona internacional de los fondos marinos" (A/AC.138/73)  
Declaraciones de Chile, Japón, Estados Unidos de América, Perú y Kuwait

50a. sesión:

"Notas adicionales sobre las posibles consecuencias económicas de la extracción de minerales de la zona internacional de los fondos marinos" (A/AC.138/73)  
(continuación)  
Declaraciones del Presidente, Reino Unido, Dinamarca, Estados Unidos de América, Chile, Francia, Perú, Jamaica, Canadá, Brasil y el Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales

51a. sesión:

1. Estatuto jurídico, alcance, funciones y poderes del mecanismo internacional  
Declaración de China
2. Organización de los trabajos  
Declaración del Presidente

52a. sesión:

"Estatuto jurídico, alcance, funciones y poderes ..." (continuación)  
Declaraciones de Uruguay y Madagascar

53a. sesión:

"Estatuto jurídico, alcance, funciones y poderes ..." (continuación)  
Declaración de Dinamarca

54a. sesión:

"Estatuto jurídico, alcance, funciones y poderes ..." (continuación)  
Declaraciones de Nepal, Países Bajos, Italia, Checoslovaquia y Grecia

55a. sesión:

"Estatuto jurídico, alcance, funciones y poderes ..." (continuación)  
Declaraciones de Yugoslavia, Reino Unido y el Vicepresidente  
Observaciones de Chile, Perú, Bulgaria, el Relator, Unión de Repúblicas  
Socialistas Soviéticas y Malta sobre la declaración del Vicepresidente

56a. sesión:

1. Aprobación del proyecto de informe
2. Declaración explicativa en respuesta a observaciones de Colombia  
formuladas en una sesión anterior

57a. sesión:

Aprobación del proyecto de informe (continuación)

58a. sesión:

Aprobación del proyecto de informe (continuación)

59a. sesión:

Aprobación del proyecto de informe (continuación)



60a. sesión:

Aprobación del proyecto de informe (continuación)

61a. sesión:

1. Aprobación del proyecto de informe (continuación)
2. Organización de los trabajos:  
Declaración del Vicepresidente

### 3. Índice de las actas resumidas de la Subcomisión II

Sesiones celebradas del 1.º al 30 de marzo de 1972 (A/AC.138/SC.II/SR.24 a 32)

#### 24a. sesión

Organización de los trabajos:

Declaración del Presidente, Canadá, Polonia, Filipinas, Perú,  
Estados Unidos de América y Turquía

#### 25a. sesión

Examen de las cuestiones remitidas por la Comisión a la Subcomisión de conformidad con el "Acuerdo alcanzado sobre la organización de los trabajos" a cuyo texto dio lectura el Presidente en la 45a. sesión de la Comisión, celebrada el 12 de marzo de 1971:

Declaración del Canadá

Organización de los trabajos (continuación):

Declaraciones de Filipinas, Estados Unidos, Turquía, Perú, Bulgaria, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Bélgica, Kuwait, Países Bajos, Canadá, México, Japón, Camerún, Singapur, Australia, Malta, Nigeria, Costa de Marfil y el Presidente

#### 26a. sesión

Organización de los trabajos (continuación):

Declaraciones de Turquía, Camerún, República Socialista Soviética de Ucrania, México, Malta, Estados Unidos de América, Rumania, Mauritania, Canadá, Perú, Francia, Liberia, Singapur, Nigeria y el Presidente

#### 27a. sesión

Examen de las cuestiones remitidas por la Comisión ... (continuación):

Declaraciones de Polonia, Reino Unido, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Francia, Islandia, Canadá, Perú y Ecuador

#### 28a. sesión

Examen de las cuestiones remitidas por la Comisión ... (continuación):

Declaraciones de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, República Unida de Tanzania, India, China, Grecia, España, Indonesia, Filipinas, Australia, Estados Unidos de América, Malasia y Canadá

Organización de los trabajos (continuación):

Declaraciones de Perú, Brasil, Islandia, Marruecos, Somalia, Mauritania, Bolivia y el Presidente

29a. sesión

Examen de las cuestiones remitidas por la Comisión ... (continuación):

Declaraciones del Presidente, Mauritania, Filipinas, Kuwait, Kenia, Perú, Islandia, China, Ecuador, Malta, España, Estados Unidos de América, Yugoslavia, Grecia, Chile, Australia, Japón, Austria, República Árabe Libia, Irak y Bolivia

30a. sesión

Examen de las cuestiones remitidas por la Comisión ... (continuación):

Declaraciones de Guyana y México

31a. sesión

Examen de las cuestiones remitidas por la Comisión ... (continuación):

Declaraciones de Gabón, Japón, Kenia, Estados Unidos de América, Indonesia, Canadá, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Chile, Ecuador, Turquía, Filipinas, Senegal, Australia y Camerún

32a. sesión

Examen de las cuestiones remitidas por la Comisión ... (continuación):

Declaraciones de Mauritania, Turquía, Argentina, Italia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Bolivia, Perú, Estados Unidos de América, Afganistán, Kenia, Hungría, Países Bajos, Brasil, Canadá, Ecuador y el Presidente

Sesiones celebradas del 17 de julio al 17 de agosto de 1972 (A/AC.138/SC.II/SR.33 a 47)

33a. sesión

Elección del Presidente

Organización de los trabajos

Declaraciones de Perú, Canadá, Ecuador, México, Filipinas, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Australia, Estados Unidos de América y República Socialista Soviética de Ucrania

#### 34a. sesión

Examen de las cuestiones remitidas por la Comisión a la Subcomisión de conformidad con el "Acuerdo alcanzado sobre la organización de los trabajos" a cuyo texto dio lectura el Presidente en la 45a. sesión de la Comisión celebrada el 12 de marzo de 1971:

Declaraciones de Checoslovaquia, el Presidente, Reino Unido, Filipinas, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Perú, Francia, Ecuador y Estados Unidos de América

#### 35a. sesión

Examen de las cuestiones remitidas por la Comisión ... (continuación):

Declaraciones de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, China, Perú, Marruecos y los Estados Unidos de América

#### 36a. sesión

Examen de las cuestiones remitidas por la Comisión ... (continuación):

Declaraciones de China, Estados Unidos de América y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

#### 37a. sesión

Examen de las cuestiones remitidas por la Comisión ... (continuación):

Declaraciones de Estados Unidos de América y Canadá

#### 38a. sesión

Examen de las cuestiones remitidas por la Comisión ... (continuación):

Declaración del Presidente

#### 39a. sesión

Examen de las cuestiones remitidas por la Comisión ... (continuación):

Declaraciones de Dinamarca, Uruguay, Suecia, Estados Unidos de América, Jamaica, Chile, Noruega, Filipinas, Perú, Australia y el Presidente

#### 40a. sesión

Examen de las cuestiones remitidas por la Comisión ... (continuación):

Declaraciones de Estados Unidos de América, Noruega, República Unida de Tanzania, República Árabe Unida, Perú, Marruecos, Chile y el Presidente

#### 41a. sesión

Examen de las cuestiones remitidas por la Comisión ... (continuación):

Declaración de Turquía

#### 42a. sesión

Examen de las cuestiones remitidas por la Comisión ...

Declaraciones de España, Kenia, México, Turquía e India

#### 43a. sesión

Examen de las cuestiones remitidas por la Comisión ... (continuación):

Declaraciones de Japón, Francia, Australia, Nueva Zelandia, Estados Unidos de América, República Socialista Soviética de Bielorrusia, el representante de la FAO, República Unida de Tanzania y España

#### 44a. sesión

Examen de las cuestiones remitidas a la Comisión ... (continuación):

Declaraciones de Filipinas, Turquía, Estados Unidos de América, Austria, Bolivia, Malta, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, República Socialista Soviética de Bielorrusia, Japón, Australia, Argentina, Francia, Canadá, Chile y el Presidente

#### 45a. sesión

Examen de las cuestiones remitidas por la Comisión ... (conclusión):

Declaraciones de Bulgaria, Italia, Malasia, Polonia, Grecia, Túnez, Etiopía, Argelia, Kenia, Jamaica, Francia y el Presidente

Aprobación de la lista de temas y cuestiones

Aprobación del proyecto de informe de la Subcomisión

#### 46a. sesión

Aprobación del proyecto de informe (continuación):

#### 47a. sesión

Aprobación del proyecto de informe (conclusión):

#### 4. Índice de las actas resumidas de la Subcomisión III

Sesiones celebradas del 1.<sup>o</sup> al 27 de marzo de 1972 (A/AC.138/SC.III/SR.15 a 19)

##### 15a. sesión

Organización de los trabajos:

Declaraciones del Presidente, Chile, Noruega, Canadá, Perú, Malta, México, el Director Adjunto del Servicio de Cuestiones Económicas y Técnicas del Mar y el representante de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI)

##### 16a. sesión

Declaración del Presidente de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO; Canadá presentó un informe a la Subcomisión sobre la Conferencia Técnica de la FAO sobre la contaminación de las aguas del mar y sus efectos sobre los recursos vivos y la pesca; Noruega presentó un informe a la Subcomisión sobre el Convenio de Oslo para la prevención de la contaminación marina provocada por vertidos desde buques y aeronaves; declaración de Nueva Zelandia

Debate general - la contaminación de los mares:

Declaración de Grecia

Organización de los trabajos:

Declaraciones de Canadá, Sri Lanka, Malta, Perú, España, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Francia, Chile, México y Argentina

##### 17a. sesión

Debate general - la contaminación de los mares:

Declaraciones del representante de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI), el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Islandia, Canadá, Perú, Argelia, Malta, Sri Lanka, Estados Unidos de América, Chile, Bélgica, España, Liberia, Noruega, Guyana y el Presidente

##### 18a. sesión

Organización de los trabajos:

Declaraciones del Canadá, Japón, República Socialista Soviética de Ucrania, Estados Unidos de América, Jamaica, Malta, Chile, Australia y el Presidente

Debate general - la contaminación de los mares:

Declaraciones de Noruega y Sri Lanka

### 19a. sesión

Debate general - la contaminación de los mares:

Declaraciones del Director Adjunto del Servicio de Cuestiones Económicas y Técnicas del Mar, Argentina, Australia, España, República Socialista Soviética de Ucrania, República Unida de Tanzania, Dinamarca, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Chile, Colombia y Canadá

Organización de los trabajos:

Declaraciones de Canadá, Bélgica, Yugoslavia, el Presidente, Polonia, Estados Unidos de América y Chile

Sesiones celebradas del 17 de julio al 18 de agosto de 1972  
(A/AC.138/SC.III/SR.20 a 32)

### 20a. sesión

Declaraciones del Presidente y el Director Adjunto del Servicio de Cuestiones Económicas y Técnicas del Mar, OCMI

Organización de los trabajos:

Declaraciones de Canadá, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Chile, Chipre, India, el Presidente y el Director Adjunto del Servicio de Cuestiones Económicas y Técnicas del Mar, OCMI

### 21a. sesión

Debate general - contaminación de los mares:

Declaraciones del Presidente, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Líbano, Chipre, India y Canadá

### 22a. sesión

Debate general - contaminación de los mares:

Declaraciones del Presidente, el representante de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI), Irán, Grecia, Chile, el Presidente, Estados Unidos de América, Perú, Argentina, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Líbano

### 23a. sesión

Debate general - contaminación de los mares:

Declaraciones del Presidente, el representante de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI), el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y su Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), Trinidad y Tabago, Chile, Japón, Reino Unido, Malta, Líbano y Perú

#### 24a. sesión

Debate general - contaminación de los mares:

Declaraciones de Perú, India, Islandia y México

#### 25a. sesión

Debate general - contaminación de los mares:

Declaración de los Estados Unidos de América

Proyecto de resolución

A/AC.138/SC.III/L.22 de Nueva Zelandia

Debate general - contaminación de los mares:

Declaraciones de Ecuador, Australia, Colombia, Francia, China, Trinidad y Tabago

#### 26a. sesión

Debate general - contaminación de los mares:

Declaraciones de Canadá, Fiji, Perú, Japón, Nueva Zelandia, Francia, Perú y el Presidente

Investigación científica

Declaraciones de Japón y los Estados Unidos de América

#### 27a. sesión

Debate general - investigación científica:

Declaraciones de Canadá y Perú

#### 28a. sesión

Debate general - investigación científica:

Declaraciones de México, Brasil, Ecuador, Trinidad y Tabago, Japón, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Bulgaria y Canadá

#### 29a. sesión

Debate general - investigación científica:

Declaraciones de la República Socialista Soviética de Ucrania, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Colombia, Yugoslavia, República Unida de Tanzania, Filipinas, Estados Unidos de América y Francia



Derecho de respuesta:

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Japón

Organización de los trabajos:

Declaraciones de Japón, Canadá y el Presidente

30a. sesión

Proyecto de resolución sobre las medidas preliminares para impedir y combatir la contaminación de los mares (A/AC.138/SC.III/L.25) presentado por Noruega

Debate general - contaminación de los mares:

Declaraciones de Canadá, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estados Unidos de América, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Perú y China

Examen del proyecto de informe (A/AC.138/SC.III/L.24 y Add.1)

31a. sesión

1. Proyecto de resolución sobre las medidas preliminares para impedir y combatir la contaminación de los mares (A/AC.138/SC.III/L.25): declaraciones de Noruega, Grecia, República Unida de Tanzania, el Presidente, Kenia, China, Francia y Perú
2. Examen del proyecto de informe (A/AC.138/SC.III/L.24 y Add.1)

32a. sesión

Examen y aprobación del proyecto de informe (A/AC.138/SC.III/L.24 y Add.1)

---

---

#### **HOW TO OBTAIN UNITED NATIONS PUBLICATIONS**

United Nations publications may be obtained from bookstores and distributors throughout the world. Consult your bookstore or write to: United Nations, Sales Section, New York or Geneva.

#### **COMMENT SE PROCURER LES PUBLICATIONS DES NATIONS UNIES**

Les publications des Nations Unies sont en vente dans les librairies et les agences dépositaires du monde entier. Informez-vous auprès de votre librairie ou adressez-vous à: Nations Unies, Section des ventes, New York ou Genève.

#### **КАК ПОЛУЧИТЬ ИЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ**

Издания Организации Объединенных Наций можно купить в книжных магазинах и агентствах во всех районах мира. Наводите справки об изданиях в вашем книжном магазине или пишите по адресу: Организация Объединенных Наций, Секция по продаже изданий, Нью-Йорк или Женева.

#### **COMO CONSEGUIR PUBLICACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS**

Las publicaciones de las Naciones Unidas están en venta en librerías y casas distribuidoras en todas partes del mundo. Consulte a su librero o diríjase a: Naciones Unidas, Sección de Ventas, Nueva York o Ginebra.

---